

**ALEJANDRO
GRIMSON**

coordinador

DESQUICIADOS

Los vertiginosos cambios
que impulsa la extrema derecha



**ALEJANDRO
GRIMSON**

coordinador

DESQUICIADOS

Los vertiginosos cambios
que impulsa la extrema derecha



Índice

Cubierta

Índice

Portada

Copyright

Introducción. La extrema derecha y los desafíos para la democracia
(Alejandro Grimson)

1. La Argentina en perspectiva histórica. El siglo XX y la última dictadura
como punto de inflexión (Marina Franco, Daniel Lvovich)

2. Las derechas políticas y la democracia en la Argentina (Gabriel
Vommaro)

3. 100% blanco y villero Conservadurismo rebelde, libremercado y derechas
populares (Ulises Ferro, Pablo Semán)

4. La extrema derecha y los dilemas de la batalla cultural. Moral, individualismo y sentido de pertenencia (Sergio Caggiano)

5. Derecha en movimiento. Dinámicas de la conflictividad en la Argentina del siglo XXI (Julián Rebón, Agustina Súnico)

6. La reacción cultural y la cuestión de género (Andrea Torricella)

7. Milei y los horizontes de lo político. Crisis de régimen y anhelo de clausura de la incertidumbre democrática (Tomás Borovinsky, Martín Plot, Daniela Slipak)

8. De la posconvertibilidad a la pospandemia. La economía política y la derechización de la agenda económica (Leandro Sowter)

9. El final del “pacto del Nunca Más”, nuestro mito contemporáneo (Marina Franco)

10. Las derechas radicales y las políticas de la crueldad (Ezequiel Ipar)

Epílogo. “Inundar la zona de mierda” (Alejandro Grimson)

Acerca de las y los autores

Alejandro Grimson

coordinador

DESQUICIADOS

Los vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha

Autores:

Tomás Borovinsky

Sergio Caggiano

Ulises Ferro

Marina Franco

Ezequiel Ipar

Daniel Lvovich

Martín Plot

Julián Rebón

Andrea Torricella

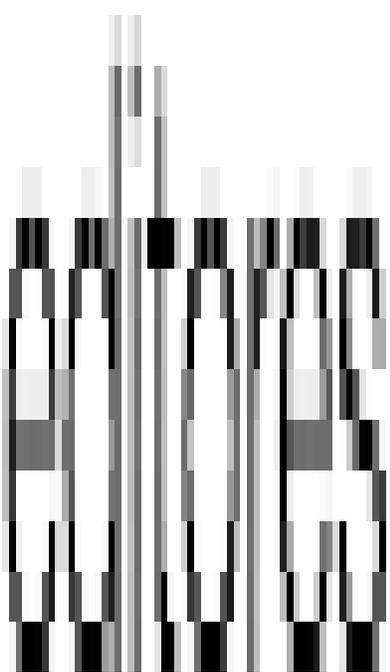
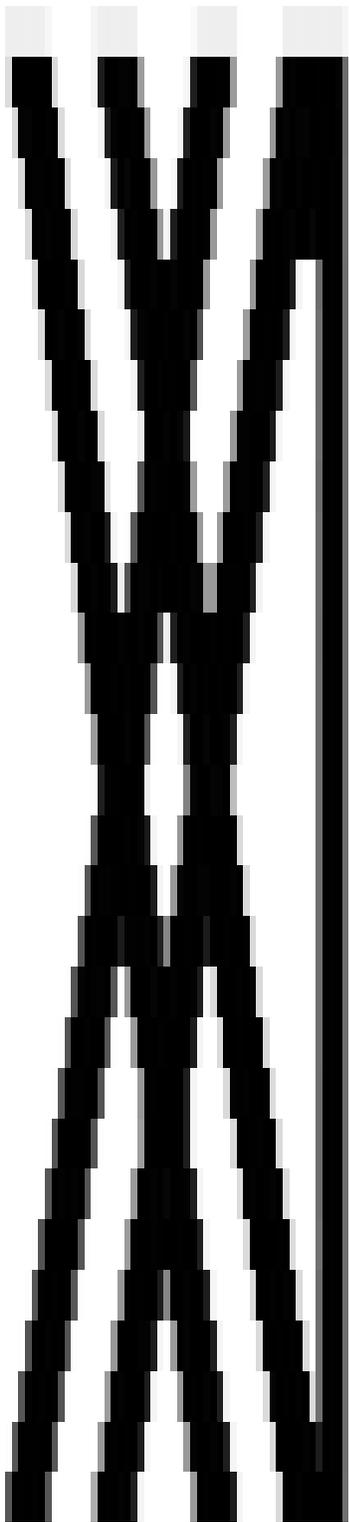
Pablo Semán

Daniela Slipak

Leandro Sowter

Agustina Súnico

Gabriel Vommaro



■

Grimson, Alejandro

Desquiciados / Alejandro Grimson.- 1ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Siglo Veintiuno Editores, 2024.

Libro digital, EPUB.- (Singular)

Archivo Digital: descarga y online

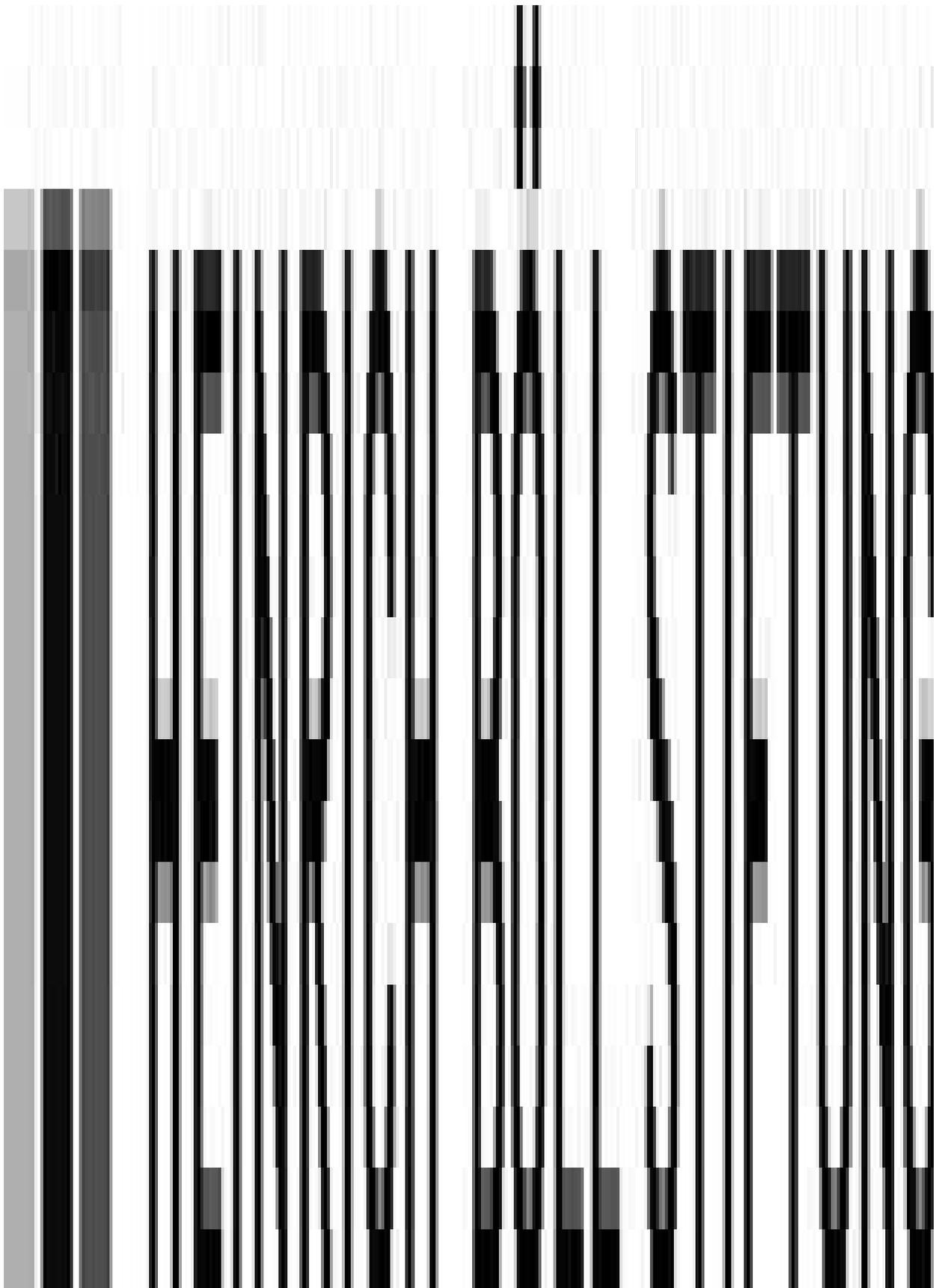
ISBN 978-987-801-365-7

1. Política. 2. Política Internacional. 3. Derecha Política. I. Título.

CDD 320

■

*Agradecemos el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Buenos Aires a la
publicación de este libro*



© 2024, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.

www.sigloxxieditores.com.ar

Diseño de portada: Emmanuel Prado / <manuprado.com>

Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina

Primera edición en formato digital: julio de 2024

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-365-7

Introducción

La extrema derecha y los desafíos para la democracia

Alejandro Grimson

¿El desquiciado es el otro? Todos estamos atravesados por el desquicio de una crisis muy prolongada y extensa, en la que se suceden y se acumulan los efectos de la alta inflación, la pospandemia, el cambio climático, la desaparición del Estado ante la epidemia de dengue, el dólar alto o el dólar bajo, la recesión, los insultos. “¡El mundo está fuera de quicio!”, sentenciaba Hamlet hace más de cuatro siglos. ¿Se sale de quicio cada tanto? El mundo, desde ya; y la Argentina, por cierto, no es la excepción. Lo sentimos porque es imposible terminar de acostumbrarse a que “algo está podrido en Dinamarca”. La mitad del país no está de acuerdo con la otra mitad en la definición misma de qué está podrido y desde cuándo. Este libro es un aporte colectivo para una reflexión necesaria.

El 10 de diciembre de 2023, ocurrió un hecho insólito en la Argentina. El mismo día en que se celebraban cuarenta años de democracia, un récord para el país, asumía un gobierno de extrema derecha. La Argentina, capital americana de los derechos humanos, se convertía en capital americana de la derecha radical. Javier Milei derrotó en las urnas al peronismo con más del 55% de los votos.

Este acontecimiento plantea numerosos interrogantes. Responderlos será clave para entender el futuro de la democracia en nuestro país. ¿Cuáles son las causas de este triunfo? ¿Se trata de un fenómeno global? ¿Se debe a los déficits económicos y políticos del gobierno anterior? ¿Cuáles son las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que pueden generar una crisis de la democracia? ¿Por qué hablamos de derecha extrema o derecha radical? ¿Son autoritarios? ¿Son neoliberales? ¿Está realmente en riesgo la democracia?

En el mundo, estamos viviendo un período similar al de entreguerras, ese lapso de altísima inestabilidad marcado por el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda. ¿Puede en este caso terminar diferente?

Si observamos Europa, los Estados Unidos y América Latina, se destacan dos fenómenos de crecimiento vertiginoso de la derecha extrema. En ciertos casos, surgen nuevas fuerzas y, en otros, se radicalizan partidos de derecha preexistentes. En la Argentina, sucedieron ambas cosas a la vez, personificadas en la elección de 2023 por Javier Milei, Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Finalmente, todos confluyeron en el gobierno.

Sin dudas, para que triunfara Milei, algo del cristal del pacto democrático del “Nunca Más”, forjado desde los años ochenta con esa escena inaugural que fue el Juicio a las Juntas Militares y el repudio a la violencia política, se quebró. Sin embargo, esto tiene matices y el “Nunca Más” –aun debilitado– sigue interviniendo, porque el respeto a la convivencia plural no es un fenómeno de “todo o nada”, sino algo más complejo, tanto en el plano del sentido común, como en el de la dinámica política.

¿Cuáles son los desafíos del campo democrático ante el crecimiento de las derechas extremas? Empecemos por una cuestión básica: es necesario comprender el fenómeno para poder enfrentarlo. Por eso publicamos este libro.

Hay una máxima de la antropología que este volumen interdisciplinario intenta poner en práctica: “Necesitamos comprender aquello que no podemos compartir”. Todos los autores involucrados son personas fuertemente comprometidas con la democracia. Por eso han destinado tiempo y esfuerzo a entender algunas de las facetas de este fenómeno que llegó para quedarse entre nosotros. Más allá de liderazgos individuales, de éxitos o fracasos coyunturales, esa corriente social, cultural y política será parte del panorama argentino y global durante varios años. Es mejor entenderla.

El presente volumen no es una compilación de textos que cada persona escribió en soledad. Es el resultado de haber intercambiado ideas e hipótesis de trabajo como colectivo de investigación durante un año, con reuniones periódicas y algunas muy intensivas. Así, en ese diálogo, fueron tomando forma los temas y los abordajes de cada texto, que le deben tanto a cada autor como al diálogo compartido.

¿Libertario o neoliberal?

Hay una serie de sutilezas en las formas de designación y autopercepción que es importante considerar para entender el caso Milei. ¿Por qué Javier Milei no se llama a sí mismo liberal a secas? Históricamente, la filosofía política liberal ha estado atravesada, en la Argentina, por una contradicción entre el pluralismo que dice defender y la estigmatización desenfadada de la alteridad social o política. “Civilización o barbarie” no es una dicotomía entre iguales. Unos deben prevalecer y exterminar a los otros. No se acepta la libertad para aquello considerado “barbarie” (que, obviamente, siempre está encarnada en el “otro”).

Así y todo, figuras como Alberdi, Sarmiento o Roca, de maneras muy distintas, crearon y construyeron Estado: leyes, impuestos, moneda, escuelas gratuitas y laicas. Los desvelaba forjar “una nación en el desierto” en un país con escasa población originaria. Así organizaron la Argentina liberal sin pluralismo político, pero con un Estado laico que encabezó la alfabetización y la educación gratuita. “Demasiado Estado”, para Milei, el de fines del siglo XIX.

Sumemos a esto que en el siglo XX hubo una corriente de liberalismo social, entendida como alternativa y oposición a los conservadores. Los liberales son aquellos que están a favor de que nadie dicte cómo hay que hablar, vestir o en qué dios creer, y rechazan que el Estado vigile a los ciudadanos. Por eso mismo, hasta hoy, en los Estados Unidos liberal (pronunciado con acento en la “i”) equivale a progresista, de centroizquierda.

Pero ¿libertarios? Los verdaderos libertarios eran los anarquistas. Los anarquistas de la República Española o del movimiento obrero argentino buscaban la emancipación frente al capitalismo o cualquier otra forma de explotación. Libertad, para ellos, era romper las cadenas del yugo, encarnado tanto en los “patrones” como en el Estado.

¿De dónde viene la palabra “neoliberal”? En 1938 el término “neoliberalismo” se utilizó en un coloquio en París al que asistieron las dos grandes referencias de la escuela austríaca, Friedrich Hayek y Ludwig von Mises, y otras diez personalidades. Buscaban así distinguirse del liberalismo político, al que

consideraban desacreditado y responsable de la situación crítica que padecía Europa. Puestos a elegir, preferían una dictadura que garantizara el libre mercado a una democracia que estableciera firmes regulaciones al capital. Por eso el apoyo de Hayek a Pinochet.

Después de décadas de un Estado que generaba leyes y regulaciones, la ofensiva neoliberal iniciada en los años setenta buscó debilitar el poder estatal. Y lo logró con contundencia. Además, coincidió con una etapa de la globalización que facilitaba la erosión de las soberanías estatales. Por ejemplo, se incrementó la cantidad de millonarios que se mudan de un país a otro para pagar menos impuestos, algo impensable cincuenta años atrás. Relocalizan sus residencias legales, sus empresas y chantajejan con hacer lo mismos con sus inversiones: domesticar a los Estados, luchan por su libertad. La libertad que grita Milei es la del capital frente a los ciudadanos organizados y al Estado.

Milei no encabeza una fuerza liberal. De hecho, en el mundo se los conoce como “iliberales”. Se trata de una corriente global que, cuando puede, encarcela a sus opositores (como en Brasil), incentiva la ocupación del Capitolio (como en los Estados Unidos), restringe las libertades civiles y guarda silencio cómplice si intentan asesinar a sus contrincantes políticos (como en la Argentina). Si la entrevista que el comentarista político conservador Tucker Carlson le realizó a Javier Milei alcanzó millones de visualizaciones, es porque hay un relevante apoyo internacional para que la Argentina sea el experimento “libertario” de nuevo tipo. El objeto del experimento somos nosotros.

Las palabras y especialmente las formas de identificarse o de identificar a los otros son un capítulo crucial de la lucha política. Hay términos, como “populista”, que han sido aplicados a fenómenos tan contrapuestos que pierden cualquier utilidad (véase Ardití, 2023). En el caso de Milei, su discurso contra la “casta” durante la campaña electoral remite con claridad a lo que se considera una retórica “populista” clásica. Pero una vez llegado al gobierno, es evidente que contra la “casta” solamente habla, porque las medidas afectan gravemente a todos los habitantes de un país que puede batir un nuevo récord de población bajo la línea de pobreza.

Creo que es importante clarificar el término “anarcocapitalismo”. No existe el capitalismo sin ley de propiedad privada y sin fuerzas de seguridad que garanticen el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, nunca hubo ni habrá capitalismo sin Estado. De modo literal, no habrá “anarcocapitalismo”. Lo que

hacen los neoliberales cuando gobiernan un Estado es impulsar la total libertad para el gran capital. En el Tercer Mundo, libertad para endeudar a los países y llevarse decenas de miles de millones de dólares. ¿O acaso el gobierno actual respetó la libertad de las paritarias entre empresarios y sindicatos? ¿Vieron a algún funcionario defender la libertad de quienes piensan distinto de ellos?

Los libertarios están en contra de la libertad de cátedra en la universidad y la llaman “adoctrinamiento”. ¿Dónde empieza el adoctrinamiento al enseñar historia argentina? ¿Cuando se dice que las Malvinas son argentinas? ¿Que San Martín soñó con la Patria Grande? ¿Que hubo un genocidio? ¿Que hubo mujeres que protagonizaron la historia y que por eso sus retratos adornaban un salón de la Casa Rosada, que el gobierno decidió dismantelar y rebautizar Salón de los Próceres? A los periodistas que los critican los llaman “imbéciles ensobrados”, celebran la crisis de un diario en vez de celebrar la pluralidad de voces. Creo que habría que hacer una lista de qué libertades se celebran con esa frase que termina en “carajo”. Muchas de las fundamentales quedarían fuera.

El fenómeno global

Hoy las democracias tambalean –sin morir– en varios países de América y Europa. El consenso de los años noventa, que consistía en aplicar el ajuste neoliberal bajo el paraguas de democracias liberales, se quebró a partir de 2016 con los triunfos de Trump y Bolsonaro. El neoliberalismo se impone de otra manera. Este crecimiento global de las derechas extremas comenzó tras la crisis económica de Lehman Brothers en 2008, la dificultad de muchos países para mantener las pocas certidumbres del Estado de bienestar, la crisis de la pandemia y la inflación de los años posteriores, lo que generó un crecimiento exponencial de la desigualdad. A estos síntomas globales de un cambio de época, agreguemos el triunfo del Brexit en 2019 y la ratificación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2020. En la Argentina, el fenómeno llegó más tarde, posiblemente por la relevancia histórica del pacto del “Nunca Más” y el rechazo a la violencia política. Al mismo tiempo, la crisis estructural, producto de la deuda, la sequía de 2023 y los errores de política económica, agravó el escenario más que en otros países.

La narrativa global que se impuso tras la caída del Muro de Berlín, con sus promesas de globalización y unión entre capitalismo y democracia, había llegado a un punto de quiebre. Por supuesto que en los veinticinco años que van desde 1990 hasta 2015 ocurrieron hechos decisivos, como el atentado a las Torres Gemelas en septiembre de 2001. Por otra parte, la crisis del neoliberalismo había estallado en algunos países sudamericanos y se expresó en el llamado “giro a la izquierda” en esa región. Sin embargo, el punto de inflexión de 2016 tenía otro alcance. La narrativa nacida en 1990 había muerto. Los avances civiles –como el matrimonio igualitario, el derecho al aborto legal y gratuito o las políticas de reconocimiento a sectores étnico-raciales oprimidos– recrudecerían la reacción conservadora. En muchos países, la propia democracia entró en una creciente zona de riesgo, con un futuro hoy imposible de prever.

En aquellos veinticinco años, la hegemonía económica de las políticas neoliberales se combinó a veces con fuerzas más conservadoras, y otras, con corrientes más progresistas en términos de derechos civiles. Esto último es lo que Nancy Fraser (2017) llamó críticamente “neoliberalismo progresista”, o lo que también se designó como “multiculturalismo neoliberal” (Hall, 2014: 633); es decir, avances efectivos en derechos civiles que coexistían con políticas económicas altamente regresivas. La hegemonía cedía u otorgaba en el plano del reconocimiento mientras quitaba en el de la redistribución económica.

Si nos guiamos por los dos gobiernos de Trump y Bolsonaro, la ofensiva conservadora buscó restringir derechos civiles y derechos de los grupos minoritarios. En ambos casos, hubo misoginia, racismo, clasismo y homofobia, así como negacionismo de la pandemia y del cambio climático. En ambos casos, se apeló a fake news y a discursos del odio. En ambos casos, con gestos y acciones antipluralistas. Y como corolario, ambos casos culminaron en ataques (al Capitolio y a la Plaza de los Tres Poderes).

Estamos ante tres fenómenos complementarios. Allí donde hubo mejoras económicas para grandes sectores, también se produjo una corriente de resentimiento como reacción a la reducción de jerarquías o distancias naturalizadas (Grimson, Guizardi y Merenson, 2023). En segundo lugar, en todo el mundo crece la reacción conservadora contra los avances de género o de reconocimiento cultural. En tercer lugar, hay una tesis potente de que amplios sectores de la economía informal incorporan el modelo subjetivo de la economía de plataforma, en el sentido del self made man (Pinheiro-Machado y Vargas-Maia, 2023). Al combinar estos elementos, resulta claro que hay una nueva

subjetividad que indica un cambio de época.

A lo largo de estas páginas aludimos a estos fenómenos como “extrema derecha” o “derecha radical” para utilizar las categorías más abarcativas.[1] Es importante detectar similitudes y diferencias entre países: sus liderazgos, su carácter “antipolítico” o “anti statu quo”, su identificación con “el pueblo”, sus discursos y prácticas de fobia a la diferencia. En este aspecto, inciden de modo estructurante las historias y configuraciones nacionales.

Los viejos problemas del análisis que universaliza procesos estadounidenses o europeos vuelven a plantearse aquí. ¿Acaso vamos a explicar las condiciones del surgimiento de la derecha extrema como una réplica de lo sucedido en 2016 en los Estados Unidos o en cualquier otro país?

Otras preguntas de investigación giran en torno a cuáles son los marcos interpretativos de los votantes y cómo significan los discursos de los líderes. No va de suyo que la calificación de extrema derecha que aplicamos a un líder político deba ser aplicable a sus adherentes. Nuestra hipótesis es que, si nos interrogamos por la carga ideológica del votante, hay como mínimo dos grandes respuestas. Por un lado, es factible que los adherentes compartan partes del discurso o de la visión ideológica del líder. Por otro, en diferentes países hay movimientos anti statu quo, o “antipolíticos” en general, que se canalizan a través de un líder ultraderechista. Está claro que al menos así son los inicios del caso argentino. Javier Milei era un outsider radicalizado. No formaba parte de ninguna coalición o fuerza. Cuando se abre la crisis de representación y se erosionan sostenidamente los apoyos a las dos principales coaliciones, Milei surge como liderazgo carismático, como hombre providencial. En la campaña electoral utilizaba dos palabras para ordenar su mensaje. Todo el hartazgo y la bronca fueron dirigidos contra la casta, y toda la ilusión y la esperanza se encauzaron en la dolarización. Después, durante su gobierno, cada uno de estos términos adquirió vida propia.

Entre las corrientes más ideológicas y los líderes que canalizan un malestar social y superan el 50% de los votos, pueden existir diversas combinaciones.

El contraste entre las campañas de Macri en 2015 y Milei en 2023 no podría ser mayor. Aunque su distancia ideológica sea más estrecha, en 2015 Macri se instalaba sobre la base de un sentido común asociado a la justicia social, la inclusión y los derechos humanos. Jamás hubiese ganado prometiendo destruir la

justicia social. Pero ocho años después muchas cosas cambiaron, entre otras razones porque los argentinos tienen cada vez menos ingresos. El punto clave del voto fue contra la inflación, como drama y también como metáfora de lo indeseable. Las certezas de otras épocas se habían vuelto sospechosas.

Otro tema relevante a considerar es hasta qué punto hay sectores de los adherentes que son militantes o activistas. Y, eventualmente, con disposición a qué tipo de acciones directas.

Liminaridad democrática

Las extremas derechas están presentes en todos los parlamentos europeos y gobiernan países poderosos. ¿Pueden terminar con la democracia?

Dada la complejidad de la época que atravesamos, necesitamos un concepto que aluda a regímenes híbridos, a situaciones de frontera. Por eso, hablamos de “liminaridad democrática”. Las situaciones-borde se multiplican, se replican. Las tendencias en favor y en contra de la vigencia del Estado de derecho se cruzan en ambas direcciones. Es mejor proponer una categoría para entender lo que sucede, que ceñirse exclusivamente a describir esos desplazamientos.

¿Qué es la democracia? Aquí estamos hablando de las democracias realmente existentes en Europa y en América. Es decir, democracias liberales, con sus virtudes y defectos. Lo “otro” de esas democracias fueron básicamente el fascismo y el nazismo en Europa, los golpes de Estado en América Latina y los regímenes comunistas.

Por un lado, existe una extensa tradición social para pensar la democracia. El pensamiento crítico puede afirmar que allí donde no hay igualdades sociales básicas es cuestionable hablar stricto sensu de democracia. También hay una producción teórica y política sobre una democracia participativa, radical, igualitaria. Todo esto será parte del debate futuro.

La democracia que hoy está en crisis puede encajar en la definición minimalista que propone Adam Przeworski: “La democracia es un acuerdo político en el cual

las personas deciden su gobierno mediante elecciones y cuentan con una razonable posibilidad de destituir a los gobiernos en funciones que no sean de su agrado” (2022: 28). En nuestra visión, hay una conexión inexorable entre democracia y buen gobierno. Pero los casos que analizamos implican que esa definición minimalista está en crisis o en riesgo. Larry Diamond ya había señalado en 2015 que nos hemos internado en un período de recesión democrática.

En una democracia estable, la población apoya claramente al régimen de gobierno, la representación política funciona, las tensiones entre poderes no ponen en riesgo dimensiones constitucionales y el antagonismo político se mantiene dentro de ciertos límites (por ejemplo, que no impulsan a la violencia política). En cambio, en una situación de liminaridad democrática puede haber crisis de representación parcial o coyunturalmente paliada con un liderazgo carismático, las tensiones entre poderes pueden escalar hasta llevar al límite el régimen vigente y el antagonismo político es creciente, lo cual impide prever si se mantendrá una convivencia pacífica y plural.

Además de haber contextos democráticos y de liminaridad, existen los colapsos democráticos. Entendemos el colapso como la muerte de un régimen democrático, como fue la Alemania de 1933, la Argentina de 1976, el Chile de 1973 o tantos otros. En estos casos, es bastante sencillo decir que un día había democracia (con sus crisis) y que un mes después, ya no. No hubo liminaridad.

Ahora bien, en la actualidad es frecuente que no haya un día final de la democracia, sino procesos que a veces llevan varios años. En *Cómo mueren las democracias*, Levitsky y Ziblatt argumentan en ese sentido acerca de regímenes como los de Trump, Bolsonaro, Orbán y otros. En algunos casos, hubo elecciones competitivas y ellos mismos fueron derrotados, lo cual no significa que no fueran un fenómeno de masas, sino que la regla de Przeworski (el oficialismo puede perder elecciones) sigue vigente. Estos períodos de indefinición, donde existen restricciones democráticas y gobiernan fuerzas antidemocráticas, pero todavía no puede saberse si habrá o no un colapso, son los que definimos como “liminaridad democrática”.

Mientras que durante la Guerra Fría tres de cada cuatro democracias cayeron por golpes de Estado, las democracias hoy mueren no por esa razón –cada vez más infrecuente–, sino porque los propios gobernantes producen daños graves (Levitsky y Ziblatt, 2018). En estos nuevos procesos prolongados, la muerte de

la democracia puede resultar imperceptible y, agregamos nosotros, la historia no camina en una sola dirección: pueden debilitarse y también fortalecerse.

Cuando surge una fuerza de derecha extrema, las democracias, sus ciudadanos, sus jueces, sus líderes políticos se plantean una serie de preguntas: ¿puede haber convivencia pacífica con grupos que la rechazan? ¿Cómo mantener el indiscutible respeto por las ideas del otro sin aceptar que crucen límites que dañan la vida plural? ¿Hasta qué punto una campaña de denuncia del carácter antidemocrático de un grupo puede favorecer los intereses de ese mismo grupo? ¿Se puede permanecer en silencio cuando líderes autoritarios y antidemocráticos acceden al poder?

Hay mucho para evaluar en cada contexto específico. La experiencia histórica muestra que un outsider ocupa el centro del poder sin que medie un golpe de Estado, si hubo sectores del establishment que tuvieron gestos o complicidades con ese espacio extremista. Por eso, de la lectura de Levitsky y Ziblatt se deriva que las fuerzas democráticas deben hacer un cordón sanitario. Lo contrario de lo que hicieron el rey de Italia con Mussolini o el presidente alemán Von Hindenburg con Hitler. Jamás aliarse en ningún punto, jamás hablar bien de los extremistas, jamás participar en ningún nivel de sus gobiernos. Marcar una frontera clara y contundente, justamente la que ellos intentan borrar. No alabarlos ni como rebeldes, simpáticos o patriotas; no hacer chistes en actos públicos con ellos; expulsar de las fuerzas democráticas a todos los dirigentes o militantes que acepten ser ministros o funcionarios de gobiernos de extrema derecha.

Pero si ganaron elecciones, ¿son gobiernos antidemocráticos? Si ganaron elecciones, tienen un origen democrático. Hitler accedió al poder por la vía electoral y una vez allí prohibió al resto de los partidos, cerró el Parlamento e inició la represión. Para que los gobiernos sigan siendo democráticos deben actuar en el marco de la Constitución y de la ley. Esto ha llevado a innumerables debates, dado que esos gobiernos han cruzado una y otra vez la frontera que separa lo democrático de lo autoritario. Al mismo tiempo, dos casos icónicos, como son Trump y Bolsonaro, decidieron ir por la reelección y perdieron. Que el oficialismo sea derrotado constituye un dato crucial para saber en qué lugar preciso de la liminaridad se encuentra. Por supuesto que después de perder actuaron de forma antidemocrática, violenta e insólita con la invasión al Capitolio y a la Plaza de los Tres Poderes.

Crisis de representación

El ascenso de la extrema derecha plantea enormes desafíos a la democracia argentina. En la letra de la Constitución, nuestra democracia es un sistema en el que “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”.

¿Cómo es posible volver a presentar al pueblo, re-presentarlo? La noción de “legitimidad política” está asociada a esa representación, que jamás podrá ser literal, sino que es una metáfora en la cual se asientan todas las democracias. Por eso, hay decenas o centenares de modelos jurídicos de representación y, sin embargo, la legitimidad depende del origen del gobierno y de su eficacia en el ejercicio.

¿Qué sucede cuando los representantes pierden eficacia de metaforización? ¿Qué pasa si la sociedad siente que sus líderes ya no la re-presentan? Se abre una crisis de representación, un proceso de erosión de la forma de organización de la disputa política. Así, surgen nuevas fuerzas o nuevos liderazgos que buscarán sustituir la distribución de los capitales políticos.

Estamos hablando de una sutura, de una articulación entre dos fenómenos de órdenes diferentes. De una parte, liderazgos y fuerzas políticas. De otra, sectores sociales. Stuart Hall reivindicaba la “fragilidad” conceptual del término “sutura”, ya que no hay una cicatrización definitiva. Ambas partes –líderes y sociedad– no se funden del todo.

Por supuesto que una democracia puede ser derribada por la fuerza sin que haya habido una crisis de legitimidad previa, como sucedió con muchos golpes de Estado del siglo XX. Pero incluso en la Argentina, Chile o Brasil, pese a contar con el poder de los tanques y el apoyo geopolítico, los militares buscaron generar una crisis de legitimidad para “justificar” sus golpes.

¿Cuánto de la crisis se debe a las maniobras de esos sectores y cuánto a errores de los propios demócratas? Casi siempre se dan combinaciones complejas, pero la respuesta es caso por caso. En la Argentina, la lista de errores de los gobiernos democráticos es conocida. Lo que se discute es la ponderación: la deuda e

inflación que dejó Macri, la pandemia, la guerra, la inflación global, la peor sequía en décadas, los errores de la política económica del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

La irrupción de Javier Milei modificó el mapa político. Es necesario estudiarlo, entender sus significados, comprender su alineamiento nacional e internacional, el trastocamiento de “la grieta” entre peronismos y antiperonismo, sus implicancias en relación con la historia argentina. La derecha extrema, que ya había llegado al gobierno en Brasil y en los Estados Unidos y que recién apareció en la Argentina en las legislativas de 2021, ¿se explica por las características del pacto democrático? ¿Qué pasó en estos últimos años?

¿Qué hay de nuevo?

Ahora bien, el análisis que afirma que las derechas extremas crecen porque también lo hacen los discursos de odio y porque el poder concentra la propiedad de los medios de significación pierde de vista la cuestión crucial: no responde nada acerca del porqué. Eso siempre fue así, con particularidades en cada contexto. La pregunta es ¿qué cambió en el mundo y en la Argentina? Ahí encontramos una diversidad de razones, que solo mencionaremos esquemáticamente:

En el plano global, hay un cambio estructural en las relaciones de trabajo o, como las llamaba Marx, en las relaciones de producción. Hay un descenso del trabajo asalariado registrado y un crecimiento del precariado y las economías de plataforma.

A nivel global, hay una revolución de la comunicación debido a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el papel del smartphone y las redes sociales, que impacta enormemente en las relaciones sociales.

El microemprededurismo, las TIC y la estructura individualizante de estas formas económicas promueven una nueva subjetividad. Es el individualismo autoritario (Adamovsky, 2023) o neoindividualismo.

Hoy no hay un solo país que sea un modelo a seguir para los sectores progresistas. Si tomamos el caso de Noruega como posible referencia, entre sus reservas petroleras, su cultura peculiar y su escasa población, nadie en el Sur está siguiendo ese modelo de desarrollo. Si tomamos los logros de Pedro Sánchez en España u otros ejemplos similares, no destacamos un modelo de desarrollo sino gobiernos que actuaron con decisión ante las vicisitudes y obtuvieron el reconocimiento de la población. Antes bien, lo que hay es lo contrario. Venimos de fracasos importantes de gobiernos progresistas o de centroizquierda porque actualmente no existe un proyecto económico y político de ese universo a nivel nacional o global. Su crisis es un capítulo de la crisis global y no una alternativa para una solución. Los niveles de desarticulación intelectual y política son impactantes.

El caso argentino

El crecimiento de la extrema derecha es un proceso global con especificidades locales. Estudiar una configuración nacional es analizar e interpretar esa intersección.

La Argentina estuvo entre los países de América Latina con mayor inestabilidad institucional entre 1930 y 1983. Hace cuarenta años hay una democracia liberal en el país. Es el período más extenso de su historia. El primer presidente de estos cuarenta años, Raúl Alfonsín, hizo su campaña con una conocida frase: “Con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa”. Esa promesa no se cumplió. Existe desánimo, frustración y enojo en la población. Al respecto, el capítulo de Marina Franco y Daniel Lvovich analiza en detalle los devenires del “Nunca Más”.

Nuestra hipótesis es que, en el caso argentino, hay una peculiaridad en el funcionamiento de esas emociones. Desde 1975 hasta hoy, el país ha tenido uno de los peores desempeños macroeconómicos de América Latina. Todavía tiene el segundo PBI per cápita más alto de la región, pero no solo ha sido superado por Chile, sino que ha acortado la distancia que lo separaba del resto de los países. Esto torna verosímil una idea de “decadencia nacional” y provoca una exacerbada frustración. Sin embargo, resulta una falacia afirmar que el retroceso comenzó hace un siglo. En efecto, comenzó hace medio siglo, con las políticas neoliberales.

No obstante, a partir de 1983 (en particular 1985 y 2003) la sociedad argentina fue construyendo un gran acuerdo democrático que implica un “Nunca Más” al terrorismo de Estado y a la violencia política.

Desde entonces y hasta la pandemia, no había surgido un exponente similar a Bolsonaro en Brasil, a Camacho en Bolivia, a Kast en Chile. Y si bien las agendas punitivistas, securitistas, clasistas con componentes racistas estaban presentes y eran relevantes, durante el gobierno de Macri (2015-2019) convivieron con los feminismos y la “marea verde” que se inició antes de su presidencia.

En los años siguientes, esas movilizaciones multitudinarias, entre las más grandes de este siglo, no dejaron de crecer. De la misma manera, cuando la Corte Suprema tomó una resolución para reducir los años de prisión a un condenado por crímenes de lesa humanidad, se produjo una movilización espontánea y masiva que revirtió la medida e impidió que avanzara la impunidad. Es decir, en la misma sociedad que había votado a la derecha se gestó una movilización callejera que instaló una agenda de derechos civiles y una defensa de los derechos humanos. A su vez, hubo movilizaciones contra la reforma previsional y los ajustes neoliberales.

En aquel entonces, proliferaron los discursos punitivistas contra los pueblos originarios y la protesta. Aunque aún no se cristalizaban en una formación de derecha extrema, Daniel Feierstein ya alertaba en 2019 que habían surgido las condiciones de posibilidad para una deriva política como la que encarna el gobierno de Milei (Feierstein, 2023).

Después de una gran crisis económica generada por las políticas neoliberales, en 2019 el Frente de Todos ganó las elecciones. Así como gran parte de la sociedad

se había entusiasmado en 2015 con el “fin del peronismo”, en 2019 otra gran parte se ilusionó con el “fin del neoliberalismo”.

No se puede negar que el contexto fue complejo: además de los serios problemas económicos heredados, el nuevo gobierno debió atravesar la pandemia, la guerra en Ucrania y el aumento de la inflación, y una sequía desastrosa a raíz de la cual el país perdió casi el 25% de sus exportaciones en 2023. Pero no se puede negar que el gobierno terminó errando en su política económica, con enormes implicancias sociales. La pobreza aumentó, el dólar se disparó y la inflación alcanzó niveles récords.

Es clave comprender que en la Argentina hubo una doble desilusión. La ilusión de la mayoría del país, no peronista o antiperonista, fue inmensa en 2015; pero el gobierno entonces electo fracasó en materia de inflación, dólar y pobreza, y perdió las elecciones de 2019. Lo mismo le ocurrió a la mayoría del país, peronista y no peronista, en 2019. El nuevo gobierno fracasó en los mismos frentes y perdió los comicios de 2023. La desilusión es un fenómeno emotivo y político profundo que puede generar grandes transformaciones.

Así es como llegamos, entonces, al triunfo de la extrema derecha. ¿Qué condicionantes y variables intervinieron? El clima emocional (dolor, hartazgo, ira, desánimo, necesidad de un nuevo horizonte) fue configurando la necesidad de un cambio categórico.

En la Argentina no hubo cordón sanitario. El expresidente Macri y la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich dieron todo su apoyo a Milei para el balotaje. El fracaso económico del peronismo y el rencor hacia amplios sectores de la población hicieron que, para la minoría de la centroderecha, fuera inviable explorar un frente democrático.

Como consecuencia de este proceso, “está entre nosotros”, como plantean en su libro Semán, Vázquez, Morresi y otros (Semán, 2023). Entiéndase bien: ese libro tenía mucho sentido aun si Milei perdía el balotaje, porque la primera novedad es que, en gran parte de los países de América y Europa, la derecha extrema “está entre nosotros”. En la Argentina, en este momento, gobierna.

El libro

Estas páginas son parte de un proyecto cultural de mayor alcance. Desde inicios de 2023, pusimos todos nuestros esfuerzos personales y colectivos en actividades académicas, culturales y políticas contra la ultraderecha. Se veía venir. Realizamos investigación académica y también un podcast llamado Pecados capitales, en la radio Futurock (grabado íntegramente antes de las PASO); elaboramos una base de datos bibliográfica sobre crisis y colapso de la democracia, de acceso libre; y en septiembre de 2023, publicamos un suplemento en Le Monde diplomatique con algunas de las primeras contribuciones sobre el ascenso de la extrema derecha en la Argentina dentro del contexto global.

Este libro propone estudiar las dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales en torno al fenómeno. Se analizan variables clásicas de la economía política, la polarización, la legitimidad, el grado de organización social y de conflictividad, las transformaciones en el sentido común y en la subjetividad, la dinámica de la reacción conservadora contra los cambios progresistas.

Los textos aquí incluidos se organizan en diez capítulos y una conclusión. Buscamos aproximarnos a cuáles fueron en el pasado y cuáles son en la actualidad las condiciones necesarias para que se produzca una crisis de la democracia y una situación de liminaridad.

El primer capítulo propone una relectura de los estudios más relevantes sobre el golpe de Estado de 1976. ¿Por qué incluimos este tema en una obra sobre la derecha extrema? Porque de esa forma podemos ver similitudes y diferencias. El año 1976 fue el de la inauguración del discurso neoliberal, sobre la base de un golpe clásico y la instauración de un régimen de terrorismo de Estado. Hoy, una nueva oleada neoliberal, acompañada por dos apellidos claves de expresidentes como Macri y Menem, llega a través de las urnas pero con un discurso mucho más radicalizado y, además, con claros componentes autoritarios. Por eso, la comparación permite establecer dónde hay similitudes –en el enfoque económico y la perspectiva conservadora– y dónde no: esta ultraderecha llega al poder por mecanismos legales y electorales. En algunas partes del mundo, viola procesos, pero hasta ahora nunca sale por completo del sistema.

Después de este recorrido histórico bajo la pluma de Franco y Lvovich, los capítulos siguientes analizan las derechas en la Argentina y las transformaciones

recientes en la oferta político-electoral. Vommaro escruta el crecimiento de los votantes identificados con la derecha, la consolidación de su competitividad electoral a partir de la permanencia de la coalición Juntos por el Cambio, la diversificación con el ascenso de La Libertad Avanza y el triunfo de la derecha extrema con el aval de los principales liderazgos de la derecha anterior.

¿Por qué Milei? Semán examina los motivos que llevaron a algunos sectores a converger en el apoyo a Milei. Con distintos abordajes, la pregunta es cómo se interpretaron aquí vertientes globales de la radicalización y cómo se fortalecieron los procesos culturales locales que derivaron en operaciones de composición ideológica y política. El antiintelectualismo, el masculinismo, el libremercadismo como supervivencia darwiniana, el antiestatismo como antipaternalismo son marcas de época.

¿Es un cambio cultural, una transformación de las subjetividades? La derecha extrema propuso terminar con la situación económica crítica y prometió un cambio de raíz con fuerza, coraje, ley y orden, y desplegó imágenes de violencia y destrucción de las instituciones del Estado. Caggiano postula que se trata de la construcción simbólica de individuos que se asumen independientes y autosuficientes, rechazan a los grupos que piden o reclaman, y suscriben formas jerárquicas y prácticas de exclusión etnoraciales. Algunos trabajos actuales exploran la idea de “individualismo autoritario” para explicar las adhesiones a las nuevas derechas (Adamovsky, 2023). En la conformación del imaginario hegemónico de la Argentina moderna, Caggiano busca trazos históricos que permitan comprender la pregnancia de este individualismo autoritario y excluyente.

¿Estamos ante una derecha movimientista? ¿Cuál es el rol de la movilización en su radicalización y ascenso? Rebón y Súnico, por su parte, analizan el proceso de acumulación de fuerzas de las derechas extremas desde el campo de la protesta social en la Argentina reciente y lo sitúan en el contexto histórico local e internacional. Este ascenso se desarrolla en el marco de la reacción a procesos de igualación promovidos desde el Estado y la sociedad civil, y tiene sus antecedentes en términos de acción colectiva en las movilizaciones antikirchneristas y contra el derecho al aborto legal y gratuito. La pandemia de covid-19 y sus restricciones representaron una oportunidad clave para su desarrollo. A través de la desobediencia civil, algunos sectores de derecha ganaron protagonismo y radicalizaron posiciones, en ocasiones nutriendo acciones violentas y extendiendo su base de adhesión y legitimidad social. Este

avance no supone la derrota de las fuerzas populares, pero se desarrolla sobre su debilitamiento. Si bien no se trata de una derecha movimientista, el rol que la acción colectiva ha jugado en su expansión lleva a interrogarnos sobre sus posibilidades en su nueva etapa desde el gobierno, así como sobre la promoción de formas de violencia colectiva en la sociedad civil.

Un punto crítico es la agenda de género. La marea verde, con su programa transversal y la inmensa participación juvenil, fue central en las movilizaciones recientes en la Argentina y en otros países. Una reacción conservadora contra el feminismo recorre el mundo. Hayek le daba centralidad a la defensa de los valores, nosotros diríamos de una tradición hegemónica, y señalaba a la familia. Por eso, mientras los escasos liberales realmente existentes apoyan leyes como la IVE o el matrimonio igualitario, los neoliberales conservadores militan su derogación y llevan adelante defensas abiertas del poder patriarcal: exigen ley de paternidad opcional, derogación de la ESI, estigmatización del lenguaje inclusivo. Ninguna libertad allí.

Andrea Torricella analiza en su capítulo grupos que impiden la aplicación de leyes, partidos políticos que incorporan en sus plataformas propuestas de leyes antigénero, mayor violencia contra minorías sexuales, discursos antifeministas, biologización de los argumentos políticos en torno a la familia, la división sexual del trabajo y la sexualidad. Estamos ante un neoliberalismo vinculado al conservadurismo y la familia, y no al Estado proveedor de servicios. La contraofensiva conservadora incluye la politización reactiva del género (Vaggione, 2005): en efecto, el cultural backlash va en contra del cambio social en la jerarquía sexo-genérica y de la ampliación de la ciudadanía en materia de derechos sexuales que atienden la educación sexual y los derechos reproductivos y de la diversidad.

En el capítulo 7, Borovinsky, Plot y Slipak se interrogan, a la luz del pensamiento de Lefort, por las condiciones que actualmente erosionan la democracia argentina. Por un lado, las condiciones generales de un potencial colapso: una situación de crisis económica, bélica o de otro orden que haga de la incertidumbre democrática algo intolerable y delinee un anhelo de unidad plena. Por otro lado, su observación más reciente acerca de que el sueño de un mercado global autorregulado podría ofrecer esa unidad. En este marco, señalan seis condiciones que pueden despertar ese anhelo.

Asistimos desde hace al menos quince años (desde el llamado conflicto entre el

“campo” y el gobierno en 2008) a una intensa polarización con picos en distintos momentos. Aparecen miradas que reivindican la violencia física o simbólica como manera de gestionar el vínculo con los adversarios políticos u otros ciudadanos de la comunidad política. En la Argentina, la redefinición excluyente del demos no alcanzó aún la gravedad ni los niveles que sí caracterizaron a otros casos. Pero hay indicadores que deben alertarnos, como los intentos por parte de legislaturas provinciales de definir si determinados pueblos originarios son o no son argentinos. Los partidos políticos radicalizados ejercen la crítica pública al régimen nacido en 1983. Si bien es cierto que, como dice Lefort, “la democracia es ese régimen en el que se disuelven los referentes últimos de certeza”, la sobresaturación de incertezas devenida anomia puede generar una reacción autoritaria. Por último, la oligarquización de las élites políticas, económicas y culturales es un hecho. Esto se percibe en dirigencias políticas que no solo son o se hacen más ricas desde el poder, sino que además provienen de grupos sociales privilegiados sin importar el partido político. También en una situación en la que, grandes crisis económicas mediante, la tasa de pobreza baja para luego volver a subir y genera una olla a presión social.

¿El deterioro de la economía es un factor explicativo para el crecimiento de las extremas derechas? Hay un consenso académico acerca de su incidencia. En su capítulo, Sowter analiza la evolución económica argentina entre 2003 y 2023, a fin de poner de relieve el orden histórico de los problemas actuales. El autor busca profundizar en las condiciones materiales que permitieron un avance en la derechización de la agenda económica. Por un lado, postula que el estancamiento de largo plazo configura un cuadro de amenaza a la democracia, en la medida en que habilita apuestas electorales extremas. Por otro, muestra la raigambre estructural de los problemas económicos y el rol de la política económica. Sobre ese trasfondo, analiza la dinámica del crecimiento y la distribución del ingreso, dimensiones consideradas fundamentales por la bibliografía especializada a la hora de dar cuenta del anclaje objetivo que pueden tener los discursos económicos de las fuerzas políticas de extrema derecha.

Marina Franco, por su parte, analiza los devenires del pacto del “Nunca Más”. Observa los cambios históricos fundamentales que entrañó la transición democrática de 1983 y que van más allá del final de la última dictadura. También aborda las condiciones de esa transición y las características que explican su importancia, así como las razones por las cuales modificó el funcionamiento del sistema político para permitir cuarenta años de estabilidad institucional. Finalmente, llega al escenario actual, jaqueado por la crisis económica y el

recrudescimiento de la violencia política, y se pregunta por la vigencia y el impacto de las condiciones refundacionales de la democracia en 1983.

En el último capítulo, Ipar analiza el impacto de la extrema derecha sobre la democracia. En este sentido, propone el concepto de “democracia cruel”: un régimen en el que sigue vigente la formalidad de los derechos políticos, pero con un Estado en el que se deterioran los derechos individuales, se naturaliza el sadismo como forma de participación política y el horizonte cultural que nos habilita a imaginar el futuro queda monopolizado por una declinación violenta, antiigualitaria y excluyente de la idea de libertad. En estos regímenes políticos, el deterioro de la democracia es producto de una ideología de la crueldad que moviliza la sospecha contra la ciudadanía social y fomenta la persecución de quienes fueron tenidos en cuenta por el lado igualador del Estado como si se tratara de enemigos de la sociedad. Podríamos decir que la democracia cruel es la forma contemporánea de la liminaridad democrática.

Por último, en las conclusiones buscamos sistematizar y conceptualizar algunas de las pistas principales que deja un libro escrito para promover un debate de calidad. Al mismo tiempo, tratamos de abrir nuevas polémicas.

* * *

Queremos agradecer especialmente a la Escuela Idae de la Universidad Nacional de San Martín, al Conicet, a la Fundación Heinrich Böll en la Argentina, a Le Monde diplomatique en la Argentina y a Siglo XXI Editores. Sin su apoyo, este libro no hubiera sido posible.

Bibliografía

Adamovsky, E. (2023), Del antiperonismo al individualismo autoritario, Buenos Aires, Unsam Edita.

Aguiar, T. F. (2020), Demofobia e demofilha, San Pablo, Unifesp.

Arditi, B. (2024), “Three Provocations Concerning the Uses of Populism”, Populism, 7, pp. 1-20.

Brown, W. (2020), En las ruinas del neoliberalismo, Buenos Aires, Tinta Limón - Traficantes de Sueños.

Delle Donne, F. y A. Jerez (2019), Epidemia ULTRA, publicación independiente.

Dubet, F. (2020), La época de las pasiones tristes, Buenos Aires, Siglo XXI.

Feierstein, D. (2023), La construcción del enano fascista, Buenos Aires, Capital Intelectual.

Fraser, N. (2017), “The End of Progressive Neoliberalism”, Dissent, enero, disponible en <www.dissentmagazine.org>.

Forti, S. (2022), Extrema derecha 2.0, Madrid, Siglo XXI.

Grimson, A., M. Guizardi y S. Merenson (2023), Middle Class Identities and Social Crisis. Cultural and Political Perspectives on the “Global Rebellion”,

Londres y Nueva York, Routledge.

Hall, S. (2014), Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales, Popayán, Universidad del Cauca.

Levitsky, S. y D. Ziblatt (2018), Cómo mueren las democracias, Barcelona, Ariel.

Pinheiro-Machado, R. y T. Vargas-Maia (2023), The Rise of the Radical Right in the Global South, Nueva York, Routledge.

Traverso, E. (2021), Las nuevas caras de la derecha, Buenos Aires, Siglo XXI.

Przeworski, A. (2022), Las crisis de la democracia, Buenos Aires, Siglo XXI.

Semán, P. (coord., 2023), Está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?, Buenos Aires, Siglo XXI.

Vaggione, J. M. (2005), “Reactive Politicization and Religious Dissidence: The Political Mutations of the Religious”, Social Theory and Practice, 31(2), pp. 233-255.

■

[\[1\] Muchos de estos nuevos fenómenos políticos apelan a prácticas sociales con fuertes reminiscencias fascistas. Sin embargo, se ha debatido mucho acerca del](#)

salto epistemológico que supone catalogarlos como si solo fueran herederos de la Italia de Mussolini. Al respecto, se recomienda analizar el contrapunto entre los argumentos de Feierstein (2023) y Forti (2022). Diferentes estudiosos del tema utilizan términos como “fascismo”, “neofascismo”, “posfascismo”, “populismo”, “nacionalpopulismo” o “populismo de derecha” para referirse a estos fenómenos (Forti, 2022). Seguramente, la mayor parte de esos conceptos tiene una potencia interpretativa relevante para algunos casos de la derecha extrema (véase Traverso, 2021). Si son adecuados o no para aludir a todos, es algo que preferimos convertir en pregunta de investigación.

1. La Argentina en perspectiva histórica

El siglo XX y la última dictadura como punto de inflexión

Marina Franco, Daniel Lvovich

Introducción

La última dictadura (1976-1983) cerró un ciclo histórico iniciado en la década de 1930 y dio comienzo a otro ciclo, con una inédita continuidad democrática de cuarenta años. Sin embargo, esta profunda transformación política no mejoró ostensiblemente los parámetros de inclusión social, peor aún, se combinó con un empeoramiento de esas condiciones para buena parte de la población. En la actualidad, la emergencia de potentes extremas derechas, legitimadas en el juego político y con capacidad de vasta movilización social, parece poner en jaque algunos de los rasgos que se consideraban establecidos en la vida política de las últimas décadas. Los proyectos y las prácticas de esos nuevos sectores suponen la ruptura de los acuerdos, de las formas de la política y de las sensibilidades y subjetividades ancladas en el llamado “pacto democrático” iniciado después de la última dictadura.

Por ello, entender el escenario actual requiere una mirada histórica que permita pensar, por un lado, el impacto del terrorismo de Estado y de las transformaciones estructurales que generó y, por el otro, ese quiebre como el punto de partida del ciclo democrático más largo de nuestra historia. En efecto, la dictadura implicó un punto de inflexión, por el despliegue de un volumen y

modalidad de violencia estatal inédito hasta ese momento en nuestro país y por los profundos cambios sociales y económicos generados en ese período y cuyas consecuencias continúan hasta hoy. A ello se suma que la persistencia de sus huellas en las memorias sociales, como señaló Gabriela Águila (2023), afianzó su importancia social como un acontecimiento extraordinario de nuestro siglo XX.

Sin embargo, su carácter singular no puede entenderse como un paréntesis en la historia nacional, sino como el resultado de procesos de temporalidades diversas con efectos en los ámbitos de la política y las relaciones de fuerza, la conflictividad social, los usos de la violencia estatal, las tensiones económicas y las influencias internacionales.

El objetivo principal del golpe, ampliamente compartido entre las Fuerzas Armadas, fue desarrollar un profundo plan represivo concebido desde la cúspide castrense y descentralizado en su aplicación efectiva. En contraste, no es tan claro cuáles fueron sus objetivos económicos porque los elencos militares y parte de los actores civiles que los acompañaron tenían diversas miradas en torno al modelo al que aspiraban. A pesar de estas diferencias, lo que los unía era la voluntad de un proyecto refundacional que modificara radicalmente las formas de funcionamiento de la sociedad argentina. Los resultados económicos y sociales del régimen fueron efectivos para ello, porque reformularon la economía en términos de cambio del régimen de acumulación hacia un modelo financiero, con desindustrialización, concentración del ingreso, pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y endeudamiento externo.

Una historia en varios tiempos

¿Cómo fue posible la última dictadura y el terrorismo de Estado? La respuesta exige ponderar varios escenarios y temporalidades simultáneas. Debemos considerar, a la vez, la geopolítica mundial de la segunda mitad del siglo XX y múltiples procesos de la historia argentina durante varias décadas de transformaciones aceleradas.

El escenario de Guerra Fría inaugurado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial

se profundizó en América Latina con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. La opción por el socialismo del régimen que encabezaba Fidel Castro cambió los equilibrios regionales, y en la década de 1960 surgieron diversas iniciativas guerrilleras inspiradas en el ejemplo caribeño. Los Estados Unidos modificaron sus orientaciones estratégicas hacia la región, influyendo de modo decisivo sobre los ejércitos latinoamericanos, guiados ahora por las hipótesis de conflicto contra el “enemigo interno” marxista. La Doctrina de la Seguridad Nacional –alentada por Washington y adoptada con distintos ritmos por las Fuerzas Armadas latinoamericanas– otorgaba a los militares un rol preponderante en sus propios países en la supuesta lucha internacional entre los dos bloques de la Guerra Fría: el occidental y capitalista y el socialista.

En este marco, en los años setenta, se desató una oleada de golpes militares en la región, que instauraron dictaduras con un carácter represivo particularmente feroz. En esta fase se inscriben los golpes de 1973 en Chile y Uruguay, el golpe de 1976 en la Argentina, la larga sucesión de dictaduras en Bolivia (1971-1982) y el régimen militar peruano (1975-1980). A ello se agregan algunos regímenes dictatoriales que tuvieron una extraordinaria duración: la dictadura de Brasil (1964-1985) y la dictadura paraguaya liderada por Stroessner (1954-1989) –con otros rasgos en su origen, pero luego acompañada con el marco de la seguridad nacional–. Todas ellas, al igual que el régimen previo de la “Revolución Argentina” (1966-1973), estuvieron marcadas por un visceral anticomunismo y por la persecución de “enemigos internos”.

Este escenario global y regional contextualiza, pero no alcanza a explicar, el caso argentino, para el que debemos considerar elementos propios de nuestra historia, que involucran procesos de corto, mediano y largo plazo. Esto no significa que la dictadura pueda entenderse en un sentido teleológico, como si hubiera estado en germen desde inicios del siglo XX o desde 1955. Por el contrario, se trató de un proceso contingente que solo pudo ser posible por los factores que confluieron en los años setenta. Sin embargo, algunos procesos políticos, sociales y económicos de largo y mediano plazo son necesarios para entender por qué y cómo sucedió el golpe de Estado de 1976; sin ellos no pueden entenderse relaciones de fuerzas, conflictos y funcionamientos políticos y prácticas culturales muy arraigadas.[2]

Si se estudia la historia argentina desde fines del siglo XIX pueden identificarse algunas prácticas muy recurrentes que naturalizaron imaginarios y formas de intervención estatal y social. Una de las más notables fue el uso sistemático de la

violencia represiva por parte del Estado como mecanismo para resolver conflictos sociales y políticos. Este rasgo estuvo presente desde la constitución del Estado-nación moderno.[3]

La formación del territorio nacional y su incorporación productiva desde fines del siglo XIX implicaron la matanza sistemática de las poblaciones indígenas, sobre todo en el sur patagónico, y su sojuzgamiento para contar con mano de obra en ingenios y obrajes principalmente en el norte chaqueño. Poco después, las primeras décadas del nuevo siglo estuvieron marcadas por una creciente conflictividad obrera y social coincidente con el gran crecimiento económico agroexportador y la llegada masiva de inmigración europea. Esta conflictividad oscilaba según los ciclos económicos, las demandas laborales y el creciente peso de las ideologías de izquierda (el anarquismo, el sindicalismo revolucionario y luego el comunismo desde los años veinte). Ante esta creciente tensión social, las élites respondieron alternando intentos de reformas y una tibia legislación laboral con violentas formas de represión, a las que recurrían especialmente cuando las grandes huelgas frenaban el engranaje exportador, como sucedió en 1902, momento de la sanción de la Ley de Residencia, o en Santa Cruz en 1921 (Suriano, 2000).

El temor a la amenaza de los sectores populares u obreros movilizados, considerados “izquierdistas”, ha sido un motor poderoso de las violentas respuestas de las derechas intelectuales, políticas y sociales. Esto se hizo evidente a partir de 1919, cuando tomó forma el llamado “miedo rojo” frente al crecimiento de las organizaciones obreras y el impacto de la Revolución Rusa en América Latina. El componente anticomunista se acentuó en los decenios siguientes como manera de definir al enemigo, un “otro” peligroso, y se fue mezclando con variadas formas locales del conflicto político (Franco, 2019). En la segunda mitad del siglo XX, bajo la Guerra Fría y las tensiones suscitadas por el conflicto peronismo-antiperonismo, estos mismos temores adquirieron diversas modalidades.

Otro elemento clave para pensar los procesos de largo plazo es el rol de las Fuerzas Armadas. La presencia militar, en especial del Ejército como actor político y factor de poder, fue un rasgo constitutivo en la conformación del Estado nacional. El proceso de modernización militar a comienzos de siglo fue de la mano con una autorrepresentación castrense como garante de la construcción del país moderno, con una misión moral superior y civilizatoria sobre el resto de la sociedad civil (Avellaneda, 2019; Quintero, 2014). En la

expansión de este imaginario cumplió un rol crucial el servicio militar obligatorio, impuesto en 1901 y vigente hasta 1994, que permitió que la institución castrense modelara las concepciones de mundo de la población masculina e incluso de sus entornos familiares con su prédica nacionalista y conservadora. Además, el servicio militar impuso modalidades efectivas de violencia sobre el conjunto de la población masculina.

En la década de 1920 se consolidó en el seno del Ejército una percepción del conflicto social –en especial de las ideologías obreristas de izquierda– como amenazas al orden y, por ende, a la nación misma. Así, el disciplinamiento de algunos de esos actores se consideraba parte de la misión militar de defensa nacional. Esto muestra, además, que la intervención castrense en la seguridad interior no respondía a una mera influencia extranjera o una novedad de la Guerra Fría, sino a un imaginario local y una práctica de largo plazo (Franco, 2020). Esta concepción de la misión militar se plasmó en 1930 en el primer golpe de Estado moderno contra la supuesta “demagogia democrática” que encarnaba el radicalismo.

Ese golpe abrió el ciclo de intervenciones militares y de inestabilidad política que caracterizó a la segunda mitad del siglo XX. Desde luego, las Fuerzas Armadas actuaron en alianzas y acuerdos con distintos sectores civiles, pero el peso creciente de la institución militar en el juego político las transformó en un partido más, con sus propias concepciones y posiciones, disponible para ser convocado por distintos grupos. Podría pensarse que durante muchos años coexistieron dos polos antagónicos, el democrático y el autoritario, en el seno de un mismo sistema político, que toleró una alternancia del poder entre las fuerzas civiles y militares, que no siempre se enfrentaron y muchas veces se presentaron como aliadas (Quiroga, 1994).

Además de estos procesos de la historia argentina más larga, hay que observar otros elementos de mediano y corto plazo, desplegados de modo simultáneo y convergente desde la década de 1950 y con un peso explicativo directo para entender la última dictadura.

La segunda mitad del siglo XX argentino tuvo como característica principal una recurrente inestabilidad política, económica y social, que si bien se había iniciado en 1930, se aceleró profundamente y con otros rasgos desde 1955. Esto fue resultado de la imposibilidad del sistema político y de sus actores de procesar los conflictos, en especial el enfrentamiento recurrente entre el

peronismo y el antiperonismo. En este marco, las décadas de 1950 a 1970 estuvieron caracterizadas por la alternancia de gobiernos constitucionales y de facto, en una constante inestabilidad, y atravesadas por el problema de expulsar al peronismo de la escena política mediante la proscripción electoral durante casi veinte años y la represión de las protestas sociales y otras acciones de “resistencia” de los grupos peronistas. Esta imposibilidad e inestabilidad institucional fue vista como un “empate hegemónico”, según la célebre expresión de Juan Carlos Portantiero (1977), donde cada fuerza era capaz de vetar los proyectos de las otras pero no tenía recursos suficientes para imponer sus propios objetivos de manera durable.

En este escenario político-institucional, otros procesos sociales hicieron irrupción a finales de los años sesenta. Entre 1969 y 1972, una serie de estallidos populares en varias ciudades del país sacudió al gobierno dictatorial de la “Revolución Argentina” (1966-1973). El más recordado de ellos, el “Cordobazo”, en mayo de 1969, se convirtió en una acción política multitudinaria contra la dictadura militar y fue violentamente reprimido. Estos hechos marcaron el surgimiento de lo que se llamó la “nueva izquierda”, que dio lugar a una intensa activación política de diversos grupos sociales, en distintas zonas del país, con orientaciones y proyectos que desafiaban el orden autoritario y, en muchos casos, también el orden capitalista. Estos movimientos se superpusieron y articularon con el ciclo previo de protestas de sectores peronistas perseguidos, creando un creciente clima de movilización y activismo político y social.

Como parte de este contexto de radicalización, y bajo el signo de la Revolución Cubana y otras luchas del Tercer Mundo, tomaron forma varias organizaciones revolucionarias, en muchos casos partidarias de la vía armada. Las más importantes fueron el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) y las Fuerzas Armadas de la Liberación (FAL), de orientación marxista, y Montoneros dentro del peronismo. Estos grupos fueron la parte más visible de un conglomerado diverso de una nueva subjetividad revolucionaria.

En el seno de las derechas conservadoras y nacionalistas más virulentas se fue dando un proceso similar de radicalización en la opción por soluciones autoritarias y proclives a suprimir todo lo que era considerado el fermento “marxista” de la protesta social y juvenil. Este proceso tuvo particular impacto en la institución militar. Desde finales de los años cincuenta se fue afirmando un

enfoque doctrinario basado en la idea de la “guerra interna”, en detrimento del anterior énfasis en la guerra externa que caracteriza el principio de la defensa nacional. El Ejército incorporó en esos años la “doctrina francesa” de la “guerra revolucionaria”, según la cual la guerra contra el comunismo se libraba dentro de las fronteras nacionales en los países de Occidente. Esta doctrina proponía una serie de técnicas de vigilancia y combate, la división del territorio en jurisdicciones militares y la subordinación de las fuerzas de seguridad a las Fuerzas Armadas, e incluía el recurso de prácticas clandestinas como la tortura y los centros de detención. Hacia mediados de los años sesenta se adoptó además la “doctrina de la seguridad nacional”, que planteaba la necesidad de la represión interna del enemigo marxista en una “guerra integral” desplegada en los más diversos planos de la vida social (Pontoriero, 2022).

Estas doctrinas permitieron leer los conflictos locales como parte del contexto global de la Guerra Fría; así, la resistencia peronista fue vista como la vía de entrada del comunismo, que constituía el peligro mayor. A ello se agregó luego una lectura en clave de “subversión” para entender las protestas populares y la emergencia de las organizaciones revolucionarias armadas entre 1969 y 1970 como amenazas al orden social y a la identidad nacional.

Entre 1955 y 1976, la noción de guerra interna, propia de la doctrina militar, fue compartida y apropiada por los gobiernos constitucionales y civiles, lo cual significó su inclusión en políticas de defensa. En 1960, el gobierno del radical Arturo Frondizi (1958-1962) fue el primero en aplicar estas concepciones a través del plan Conintes (Comoción Interna del Estado), destinado a erradicar a los grupos de “resistencia peronista”.

Examinemos ahora las dimensiones de corto plazo. El proceso que lleva a la última dictadura solo es explicable si se toman en cuenta los acontecimientos del período 1972-1976. Si bien esta coyuntura se inscribe en los procesos abiertos desde 1955, cabe señalar que en un muy breve lapso se produjeron la aceleración y la expansión de ciertas lógicas claves.

En 1973, el deterioro de la situación económica, el desprestigio de la dictadura iniciada en 1966 y la necesidad de desarticular la presencia de las guerrillas llevaron al gobierno de Lanusse a convocar a elecciones y a levantar la proscripción del peronismo, que retornó al poder luego de dieciocho años. Sin embargo, ese regreso hizo estallar las diferencias entre los sectores contestatarios y los tradicionales dentro del peronismo. El motivo central del disenso era la

disputa por la hegemonía, ante un Perón a quien cada sector pretendía volcar en favor propio. El conflicto se canalizó en una violenta persecución interna y los intentos de “depurar” el movimiento de sus elementos “marxistas” infiltrados. Desde muy temprano comenzaron a actuar organizaciones paraestatales que reprimieron y asesinaron, clandestinamente y con anuencia del gobierno peronista, a todo lo que se consideraba “izquierdista” (Franco, 2012).

Desde mediados de 1973, y muy especialmente tras la muerte de Perón en julio de 1974, comenzó un acelerado proceso autoritario y represivo a través de instrumentos públicos y legales, más allá de la conocida acción de las organizaciones parapoliciales. Su justificación se excudaba en la continuidad de las acciones revolucionarias armadas, en el marco del virulento conflicto interno del peronismo y de la creciente incapacidad de conducir el gobierno. En pocos meses, una escalada rápida de decretos y leyes de seguridad que afectaron todas las esferas de la vida social, laboral y política instaló la idea de que el país estaba amenazado por la “subversión” tanto en las escuelas como en las fábricas. Esta escalada autoritaria, asentada en la supuesta necesidad de preservar el orden social, se plasmó en leyes de seguridad y medidas de excepción que condujeron a la suspensión progresiva del Estado de derecho, sobre todo desde mediados de 1974. Esto facilitó y dio espacio a la presión castrense mucho antes del golpe de Estado de 1976 (Franco, 2012).

En efecto, la percepción de estar en una “guerra” contra la “subversión marxista” era, hacia 1975, una idea socialmente instalada y compartida por las Fuerzas Armadas, el gobierno peronista y los más diversos sectores políticos y económicos. Frente a ello, la doctrina militar de “lucha antsubversiva” y “aniquilamiento” del enemigo era vista como la única salida posible. Desde febrero de 1975 y con autorización del poder constitucional, el “Operativo Independencia”, en la provincia de Tucumán, fue su primer espacio de implementación. Cuando se produjo el golpe de Estado en marzo de 1976, el Estado de derecho ya estaba socavado y la represión ilegal y clandestina estaba ya instalada; sin embargo, la dictadura significó un brutal salto cuantitativo y cualitativo en el proyecto represivo.

Mientras tanto, en el plano económico, el ministro de Economía Celestino Rodrigo impuso en junio de 1975 un ajuste violento a través de una serie de medidas de shock con una devaluación del peso, un freno a los aumentos salariales y un aumento de servicios y transportes del 180%. Como consecuencia la inflación se aceleró vertiginosamente y cayó el salario real. La reacción social

opositora fue masiva y generó la caída de Rodrigo y de López Rega, ministro de Bienestar Social y sostén del proyecto peronista. El “Rodrigazo”, como se lo recuerda, fue el primer gran shock de ajuste en un sentido neoliberal y abrió la senda de las políticas que vendrían a partir de la dictadura.

Sin embargo, el golpe no fue una simple consecuencia del sentimiento de crisis y caos de esos últimos tiempos, ya que la opción golpista venía siendo pensada desde 1973 por el llamado “Grupo Azcuénaga”. Por entonces, el abogado conservador Jaime Perriau, líder del grupo, reunía apoyos para un golpe militar cuyo radical objetivo sería reorganizar el país en sus estructuras básicas. En ese grupo participaban militares, banqueros, empresarios industriales y agropecuarios, intelectuales y profesionales, varios de los cuales serían luego funcionarios de la dictadura, como José Alfredo Martínez de Hoz (ministro de Economía de Videla). Fue la primera ocasión en que militares y civiles conservadores y defensores del libre mercado coincidían en la necesidad de destruir las bases del orden social. Un orden que se sustentaba en la fortaleza de los sectores populares, las organizaciones sindicales y la alianza social que defendía las políticas redistributivas y el mercado interno. En definitiva, se trataba de

modificar las bases económico-estructurales que habían hecho posible la irrupción de fenómenos políticos como el peronismo, pero también procesos sociales como el Cordobazo [...] y el sindicalismo clasista y combativo (Aspiazu y Schorr, 2010: 20-21).

A diferencia del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende en Chile, instrumentado de modo claro por el gobierno de los Estados Unidos, el golpe del 24 de marzo de 1976 contó con la aquiescencia estadounidense pero no fue directamente impulsado o digitado por ese país, en cuyo gobierno y Congreso coexistían posiciones muy diversas respecto a la relación que se debía tener con la Junta Militar.

Las interpretaciones

Desde hace décadas, las interpretaciones sobre la dictadura se basan en evaluaciones disímiles sobre los objetivos propuestos y los resultados conseguidos. Los analistas que enfatizan las dimensiones político-institucionales privilegian la importancia de los proyectos propugnados por los golpistas, mientras que quienes priorizan los aspectos socioeconómicos ponen su mirada en los resultados estructurales de las políticas dictatoriales y en una temporalidad que sobrepasa con creces el año 1983. En el mismo sentido, la respuesta a la pregunta de si el régimen consiguió sus objetivos difiere según la temporalidad considerada. Si se analiza en el corto plazo, a excepción de la “lucha contra la subversión”, la dictadura no logró cumplir la mayor parte de sus objetivos declarados, pero si se consideran tendencias de mediano o largo plazo, alcanzó sus metas y transformó radicalmente la sociedad argentina (Águila, 2023).

Una interesante vía de acceso a esta discusión es observar cómo ha sido nombrada la última dictadura, o más ampliamente los procesos autoritarios en la región, a lo largo del tiempo. En cada denominación subyacen explicaciones distintas sobre su naturaleza, sus proyectos fundacionales, sus motivaciones y actores relevantes.

En uno de los análisis más influyentes sobre las dictaduras del Cono Sur, construido desde fines de los años sesenta, Guillermo O'Donnell ([1982] 1996) afirmaba que antes de los golpes de Estado de esa década existían diversas y agudas manifestaciones de crisis económica y que los modos de activación política del sector popular generaron en las clases dominantes la percepción de que el orden social capitalista se encontraba en riesgo. Por ello, O'Donnell afirmaba que las dictaduras fueron una reacción drástica, a la altura de los intensos temores del período previo. El Estado Burocrático Autoritario, como llamó a estos regímenes con base social en la gran burguesía, fue un sistema de exclusión política de un sector popular previamente activado, que trajo aparejada la supresión de la ciudadanía y de la democracia política. También son sistemas de exclusión económica del sector popular, en tanto promueven una acumulación de capital en beneficio de las grandes unidades oligopólicas de capital privado y de algunas instituciones estatales, acrecentando las desigualdades preexistentes y promoviendo una mayor transnacionalización del capital. Este concepto fue criticado por otros científicos, entre otros Fernando Henrique Cardoso (1985), quien señalaba que la relación entre régimen y Estado es más compleja y que resulta muy dificultoso atribuir a estos regímenes un proyecto socioeconómico

unívoco.

Desde perspectivas teóricas diversas, pero con fuerte énfasis en el factor militar de las dictaduras, se ha destacado su férreo carácter autoritario y antipopular. Para el historiador Perry Anderson (1988), se trató de regímenes contrarrevolucionarios cuya misión fue recrear las condiciones para la perduración del capitalismo, con políticas preventivas destinadas a eliminar a la izquierda que combatía ese modelo. Para el sociólogo francés Alain Touraine resulta nodal el concepto de “Estado antipopular”, definido por el ejercicio autoritario del poder y el control puramente represivo de la población. Este autor postula que los regímenes dictatoriales “son más directamente antipopulares que procapitalistas” (Touraine, 1987: 76).

Vinculada con esta orientación que enfatiza la política y el actor militar, se ha denominado a estos regímenes como dictaduras de Seguridad Nacional. Esta doctrina, ya mencionada, legitimó la intervención de las Fuerzas Armadas a través de métodos militares contrainsurgentes que consideraban la seguridad interna como un campo de batalla contra un enemigo “subversivo” que actuaba a través de múltiples maneras, en nombre de la defensa de los valores de Occidente y la nación (Tapia Valdés, 1980).

En los años ochenta se difundió una nueva noción para referirse a la última dictadura argentina, que ponía el acento en la represión como su rasgo más visible. Se trata del concepto de terrorismo de Estado asociado a los desarrollos del jurista Eduardo Luis Duhalde en *El Estado terrorista argentino* (1983). La elaboración de este concepto se dio en el marco de la denuncia antidictatorial de varios abogados y militantes en el exilio y de la acción de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos. El corazón del concepto se centra en el desarrollo de una metodología represiva criminal, caracterizada por un Estado que actuaba con una faz pública y legal y una estructura paralela y clandestina. Este Estado empleó el terror de modo sistemático contra sus víctimas directas y contra el conjunto de la población a través de un efecto expansivo y con el objetivo de imponer comportamientos de obediencia y desarticular a la sociedad en su conjunto. A pesar de su gran circulación, este concepto ha sido criticado por prestarse a usos muy variados y hasta contradictorios, por ofrecer una imagen indiscriminada de la sociedad como víctima uniforme y por las dificultades que supone separar la violencia ejercida en el período iniciado en 1976 con respecto a la regularidad represiva del Estado argentino en el siglo XX (Jemio, 2021).

Al comenzar el siglo XXI también se ha instalado con fuerza la noción de genocidio, que se refiere, no al régimen político sino al tipo de crimen cometido y sus consecuencias. El sociólogo Daniel Feierstein (2007) afirma que las prácticas sociales genocidas buscan la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación, a través del aniquilamiento de una fracción relevante – por su número o por los efectos de sus prácticas– de dicha sociedad y del uso del terror para establecer nuevas relaciones sociales. Aunque sus planteos ejercen una importante influencia, también han provocado diversas objeciones, entre ellas que el uso propuesto del término “genocidio” no se ajusta a la definición aprobada por la ONU para dicho concepto. Además, Scatizza (2016) ha subrayado que el modelo propuesto posee una amplitud tal que permite pensar como genocidio cualquier experiencia histórica de reorganización social.

Por último, también en la década de 2000, se instaló en el espacio público argentino otra categoría importante: dictadura cívico-militar. Esta designación viene de la mano de una interpretación que busca subrayar que los procesos dictatoriales no fueron un resultado exclusivo de las Fuerzas Armadas, sino que deben entenderse como parte de los intereses de los sectores dominantes, con una fuerte participación de actores civiles en distintas instancias del poder, la gestión y la construcción de los apoyos necesarios. Esto supone considerar de manera definitoria la presencia y participación de los sectores empresariales, los medios de comunicación concentrados y las jerarquías de la Iglesia Católica y del Poder Judicial. Este argumento pone en evidencia el peso del gran capital en el bloque de intereses dictatoriales que participaron de la dictadura para imponer un proyecto económico propio, orientado a implantar un nuevo modo de acumulación y disciplinar a los trabajadores. Los resultados más perdurables de la dictadura en términos de sus efectos estructurales sobre la economía argentina confirmarían que ese era el proyecto central.

En una línea similar, se afirma que el proyecto refundacional de la dictadura estaba orientado a una transformación muy profunda entendida como una “revancha clasista”, porque reunió a todas las facciones del gran capital para imponer el disciplinamiento de los sectores populares y destruir las experiencias de lucha y organización de los trabajadores en pos de reforzar el poder capitalista (Aspiazú y Schorr, 2010; Basualdo, 2006). La complicidad empresarial en la represión representó, en este sentido, la expresión más acabada de esa revancha.

Estas interpretaciones han sido cuestionadas porque ponen el acento solo en los resultados perdurables del régimen más que en sus características y efectos

inmediatos. La historia de la dictadura muestra un proceso muy sujeto a los avatares de las internas militares, incluyendo la gestión económica, y una evolución sujeta a las necesidades castrenses. Al mismo tiempo, una de las marcas estructurales del régimen, la represión, fue de responsabilidad, ejecución y planeamiento fundamentalmente militar (Franco, 2018).

Algunas ideas finales

La última dictadura militar representa un punto de inflexión fundamental en la historia argentina del siglo XX. Se planteó como un proyecto refundacional, y aunque no logró sus objetivos en el sentido en que se lo propuso, pudo cambiar el escenario político y socioeconómico de manera permanente.

En su faz represiva, la violencia de Estado alcanzó una magnitud y unas características que provocaron, por un lado, un daño profundo en amplios segmentos sociales y un disciplinamiento general en cuanto a los desafíos al sistema y al orden de los años setenta. Por otro lado, el impacto del terror generó un movimiento social muy potente en procura de justicia, que ha logrado que la memoria de la represión y sus víctimas permanezcan en la esfera pública. Hasta nuestros días –en los que también esto peligró– el pacto democrático argentino se ha construido en torno a los derechos humanos y contra las aberraciones de la represión dictatorial.

Si tomamos en cuenta el impacto sobre el modelo económico y social, podemos afirmar que la dictadura generó una drástica reestructuración, muchos de cuyos efectos aún perduran. Ese cambio provocó la crisis de una sociedad articulada en torno a la industria y el mercado interno y la emergencia de un modelo de acumulación financiera y de un puñado de grandes grupos económicos. Como explican Azpiazu y Schorr (2010), las relaciones entre capital y trabajo se modificaron en detrimento del trabajo. Un reducido número de grupos económicos nacionales y extranjeros pasó a ocupar una posición de privilegio en el marco de un muy intenso proceso de centralización y concentración; incrementó su participación en el ingreso, afianzó su capacidad para disciplinar a otras fracciones del capital, subordinar al aparato estatal e influir de manera decisiva y creciente sobre el rumbo económico, político y social de los años

sucesivos. Según estos autores, este quiebre del modelo económico previo de sustitución de importaciones y de la dinámica social y económica que lo acompañaba no fue resultado de su agotamiento, ya que en la década previa había mostrado un crecimiento sostenido y sistemático. Si bien se trataba de un proceso con falencias y restricciones, sus rasgos virtuosos se hubieran podido potenciar para superar esos límites.

En cualquier caso, las transformaciones promovidas cambiaron la estructura socioeconómica argentina hasta el día de hoy. La pérdida de la capacidad estatal para orientar el proceso económico y disciplinar al gran capital, los múltiples condicionamientos que provocó el endeudamiento externo generado en el período dictatorial, el debilitamiento estructural de los sectores populares y el irreparable retroceso de la participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza impactaron de modo profundo y sistemático en la Argentina posterior a 1983. Además, la democracia no reemplazó buena parte de la legislación que produjo la dictadura, por ejemplo, la que regula la actividad financiera. Los intereses de las actuales derechas y extremas derechas se inscriben en continuidad con esos cambios que privilegiaron el poder del capital y del mercado y alentaron subjetividades individualistas propias del neoliberalismo.

En ese sentido, los cambios sociopolíticos generados por la dictadura afectaron también los lazos tradicionales de representación, el comportamiento de los actores de la sociedad civil y la constitución de identidades políticas, culturales e ideológicas. El poder dictatorial no actuó solamente en lo represivo: también tuvo impacto “productivo” al generar consensos y subjetividades nuevas. Más allá de la mayor o menor conciencia de los protagonistas y de los objetivos explícitamente formulados, la dictadura produjo un vasto proceso de reestructuración social “tendiente a fortalecer las bases de la dominación, a fragmentar a las clases subalternas, a individualizar las conductas sociales, a rearticular las formas constitutivas de la sociedad civil” (Villarreal, 1985: 202). Todo ello modificó en el largo plazo el terreno donde se desarrollan la economía y la política.

Otro resultado clave de la dictadura fue el abandono de los proyectos golpistas por parte de las derechas tradicionales y su incorporación a las reglas del juego democrático. Aunque el camino ha sido sinuoso, en los últimos años se hizo evidente el peso político y electoral de esos grupos: se han transformado en actores centrales de la escena pública, con capacidad de movilización popular y electoral. En la actualidad, a ese proceso de varias décadas se suma la

emergencia de extremas derechas que amenazan con quebrar las reglas de la democracia que habían aceptado sus antecesoras, las derechas liberales y conservadoras.

En definitiva, la lógica de la dictadura se resiste a morir y no encontró, en los muy distintos elencos gubernamentales que se sucedieron en cuarenta años de democracia, a quienes quisieran o pudieran liquidar definitivamente esa herencia.

Bibliografía

Águila, G. (2023), Historia de la última dictadura militar. Argentina, 1976-1983, Buenos Aires, Siglo XXI.

Anderson, P. (1988), “Democracia y dictadura en América Latina en la década del '70”, Cuadernos de Sociología, 2, UBA.

Avellaneda, A. (2019), “Distancia y compromiso (primera parte). El mundo militar y la cuestión política en Argentina a inicios del siglo XX”, Cuadernos de Marte, 10(17), pp. 217-257.

Azpiazu, D. y M. Schorr (2010), Hecho en Argentina. Industria y economía, 1976- 2007, Buenos Aires, Flacso - Siglo XXI.

Basualdo, E. (2006), Estudios de historia económica argentina, Buenos Aires, Siglo XXI.

Camarero, H. (2017), *Tiempos rojos*, Buenos Aires, Sudamericana.

Cardoso, F. H. (1985), “Sobre la caracterización de los regímenes autoritarios en América Latina”, en D. Collier (comp.), *El nuevo autoritarismo en América Latina*, México, FCE.

Duhalde, E. L. (1983), *El Estado terrorista argentino*, Buenos Aires, Argos Vergara.

Feierstein, D. (2007), *El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina*, Buenos Aires, FCE.

Franco, M. (2012), *Un enemigo para la nación*, Buenos Aires, FCE.

— (2019), “El estado de excepción a comienzos del siglo XX. De la cuestión obrera a la cuestión nacional”, *Avances del Cesor*, 16(20), pp. 29-51.

— (2020), “Ejército, conflicto social y orden interno en la década de 1920 en la Argentina”, *Revista Universitaria de Historia Militar*, 9(19), pp. 208-230.

Franco, M. y E. Pontoriero (2021), “El terror de Estado en la Argentina (1975-1983) como parte de una historia del siglo XX”, *Almanaque Histórico Latinoamericano*, 31, pp. 280-308 (en línea).

Jemio, A. S. (2021), “Una revisión crítica del concepto ‘Estado terrorista’”,

Sociohistórica, 48, La Plata.

O'Donnell, G. ([1982] 1996), *El Estado Burocrático autoritario. Triunfo, derrotas y crisis*, Buenos Aires, Editorial de Belgrano.

Lvovich, D. (2016), “La Semana Trágica en clave trasnacional. Influencias, repercusiones y circulaciones entre Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, 1918-1919”, en J. F. Bertonha y E. Bohoslavsky (comps.), *Circule por la derecha. Diálogos, redes y trayectorias entre las derechas sudamericanas, 1917-1973*, Buenos Aires, UNGS.

Pontoriero, E. D. (2022), *La represión militar en la Argentina: 1955-1976, Los Polvorines*, UNGS / Posadas, UNaM / La Plata, UNLP.

Portantiero, J. C. (1977), “Economía y política en la crisis argentina: 1958-1973”, *Revista Mexicana de Sociología*, 39(2).

Quinterno, H. (2014), *Fuego amigo. El ejército y el poder presidencial en Argentina (1880-1912)*, Buenos Aires, Teseo.

Quiroga, H. (1994), *El tiempo del proceso. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares, 1976-1983*, Rosario, Fundación Ross.

Scatizza, P. (2016), *Un Comahue violento*, Buenos Aires, Prometeo.

Suriano, J. (comp.) (2000), La cuestión social en Argentina. 1870-1916, Buenos Aires, La Colmena.

Tapia Valdés, J. (1980), La doctrina de la seguridad nacional en el Cono Sur. El Terrorismo de Estado, México, Nueva Imagen.

Touraine, A. (1987), Actores sociales y sistemas políticos en América Latina, Santiago, Preal-OIT.

Villarreal, J. (1985), “Los hilos sociales del poder”, en E. Jozami y otros, Crisis de la dictadura argentina. Política económica y cambio social (1976-1983), Buenos Aires, Siglo XXI.

▪

[\[2\] En este apartado seguimos lo planteado en Franco y Pontoriero \(2021\).](#)

[\[3\] Esto no significa que la violencia haya estado ausente antes de la formación del Estado-nación moderno o que sea distinta o mayor que en otros países con procesos de desarrollo y modernización similares.](#)

2. Las derechas políticas y la democracia en la Argentina

Gabriel Vommaro

La batalla electoral, la batalla cultural y los desafíos de las derechas políticas en la Argentina democrática

30 de octubre de 1983. En las primeras elecciones tras la dictadura militar iniciada en 1976, la Unión del Centro Democrático (Ucede), flamante fuerza política creada por Álvaro Alsogaray, obtenía el 0,17% de los votos para su fórmula presidencial. Sin embargo, el 8,7% alcanzado por sus candidatos a diputados nacionales en la Capital Federal le permitió hacerse de dos bancas en el Congreso. Alsogaray fue elegido diputado por primera vez en su extensa carrera política. Otra formación de derecha en competencia, la Alianza Federal, quedó apenas por encima de la Ucede (0,72%), pero su desempeño estuvo muy lejos de lo que había logrado en 1973, cuando Francisco Manrique, líder de esa fuerza, había obtenido el 14,9% de los votos. El panorama no parecía muy alentador para las derechas políticas.[4] La primavera alfonsinista impulsó la agenda progresista en materia cultural y de derechos humanos –sentando las bases del “consenso del Nunca Más” analizado por Marina Franco en este volumen–, así como intentó restablecer los programas distributivos y promotores del mercado interno que habían sufrido un revés histórico desde el ingreso de Celestino Rodrigo al Ministerio de Economía en 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.

Estos dos terrenos son cruciales para las derechas políticas argentinas (Vommaro, 2023). Por un lado, hacer pie en la competencia electoral. En la Argentina, a diferencia de otros países de la región como Chile, no existían

derechas partidarias competitivas (Gibson, 1996); el gobierno autoritario no había tenido éxito en estabilizar la situación económica y en concitar adhesiones de la población, por lo que no había dejado un legado político reivindicable. Con derechas históricamente débiles en términos electorales y una dictadura fallida tanto en el terreno económico como en el militar, las derechas tenían dificultades para crecer en la arena electoral. Por otro lado, la llamada “batalla cultural”, no en el sentido de la Kulturkampf estudiada por Sergio Caggiano en este volumen, sino del más vernáculo conflicto entre consensos pro-Estado y consensos prodesreguladores. En un país con actores sociales y corporativos fuertemente ligados al modelo de industrialización por sustitución de importaciones y a las instituciones de protección de la industria y del trabajo asociadas a ese modelo, el programa aperturista y desregulador encontraba obstáculos para construir apoyos sociales amplios. Desde luego, ambos terrenos se encuentran fuertemente conectados.[5] Las posibilidades de éxito electoral son mayores cuanto más amplios sean los consensos favorables a las ideas de las derechas políticas. A la inversa, las derechas competitivas en la arena electoral tienen más chances de empujar consensos promercado. Sin embargo, a lo largo de este capítulo veremos cómo la competencia electoral y la batalla cultural tuvieron puntos de encuentro y desencuentro hasta que se produjo un punto de inflexión fundamental, a mediados de la segunda década del siglo XXI, con la llegada al poder del primer partido competitivo de derecha de este ciclo democrático, que cambió las condiciones de la producción de discursos políticos de derecha al crear una oferta electoral que promovía programas aperturistas y cuestionaba abiertamente los consensos nacional-populares. Así, contribuyó a organizar y ampliar un electorado identificado con las ideas de derecha. Nos referimos al partido Propuesta Republicana (PRO) y su coalición con la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica (CC) y otros partidos menores, llamada Cambiemos entre 2015 y 2019, y rebautizada Juntos por el Cambio (JxC) a partir de ese año. Paradójicamente, los frutos de dicho cambio serían capitalizados en 2023 por una oferta de derecha aún más radical, La Libertad Avanza (LLA), encabezada por un outsider político, Javier Milei, quien llegaría a la presidencia justo cuando la Argentina cumplía cuarenta años de democracia ininterrumpida.

¿Cuál fue el recorrido de las derechas políticas en la Argentina en el actual ciclo democrático? ¿Cómo emprendió la competencia electoral y la batalla cultural en los diferentes momentos? Ahora que la derecha por primera vez se convirtió en una amplia mayoría electoral en la Argentina y borró los límites entre sectores mainstream y alternativos, ¿qué puede esperarse respecto de su futuro? A continuación, voy a ocuparme de estas cuestiones.

La derecha y los atajos para llegar al poder

En la segunda mitad de los años ochenta, las dificultades del programa económico del gobierno de Raúl Alfonsín y el deterioro de los servicios brindados por las empresas del Estado abrieron una brecha para la retórica modernizadora de la derecha política. La prédica en favor de la privatización de las empresas de servicios públicos ocupó un lugar central en el espacio de la comunicación política. En poco tiempo, el contexto se volvió favorable para las ideas económicas de derecha. La Ucede aprovechó los nuevos vientos y tuvo tanto un crecimiento organizativo –en buena parte por el empuje de su militancia universitaria y el ingreso de cuadros jóvenes con ambiciones de construir una opción competitiva para las derechas– como electoral: en las presidenciales de 1989, la Alianza de Centro dominada por la Ucede se convirtió en la tercera fuerza a nivel nacional (7,2% de los votos), con mejores resultados todavía en la ciudad de Buenos Aires. El debilitamiento del consenso mercadointernista abrió la puerta para producir un giro en el modelo económico que, a los ojos de los cuadros de derecha, había dominado la Argentina desde los años cuarenta. Así lo expresaba la plataforma electoral de la Ucede en 1989:

La Argentina ocupó un lugar entre las diez primeras naciones del mundo hasta la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los últimos cuarenta años fue retrocediendo en términos relativos hasta el septuagésimo u octogésimo puesto que ocupa ahora, para desembocar en la crisis presente. La causa de esa lamentable evolución debe encontrarse en el abandono del sistema liberal de la Constitución Nacional, y su reemplazo por otro sistema de naturaleza estatista, dirigista e inflacionaria que abarcó no solo el ámbito socioeconómico sino también el jurídico y el de la organización del Estado [...] Este sistema no admite correcciones parciales ni reformas a medias: debe ser definitivamente abandonado, reemplazándolo por otro sistema [...] que [...] recoja los avances de la ciencia económica y los nuevos criterios sociales de fines del siglo XX.

Sin embargo, justo cuando la Ucede se beneficiaba del impulso promercado en la arena electoral, el peronismo, a partir de la llegada de Carlos Menem al poder en 1989, dio un giro programático en un proceso de “neoliberalismo por sorpresa” (Stokes, 2001) que habilitaría las ideas promercado, daría espacio a los cuadros políticos y económicos de las diferentes formaciones y organizaciones de derecha y favorecería amplios consensos sociales en favor de esas ideas. Con la incorporación de buena parte de sus cuadros al nuevo gobierno, la Ucede entró en una crisis interna. Alsogaray y sus aliados lograrían llevar sus ideas a la práctica, pero a costa de herir severamente la construcción organizativa que había sido el gran sueño de buena parte de la nueva militancia incorporada a ese partido (Arriondo, 2015). Con ese atajo se terminaba el primer intento sólido de construir un partido de derecha competitivo en el actual ciclo democrático, pero se abría una década de consensos económicos afines con las ideas que pregonaba esa derecha política. Débil electoralmente, la derecha se hacía fuerte en el frente cultural.

Desde la cuasi disolución de la Ucede en el peronismo menemista, la oferta electoral de derecha tuvo en los años noventa un carácter disperso e inestable. Disperso, porque solo coyunturalmente se logró unificar a todas las fuerzas identificadas con las tradiciones liberales conservadoras. Inestable, porque estas fuerzas, incluso las más exitosas, terminaron por desaparecer u ocupar un lugar marginal en la competencia electoral. La crisis o la disolución de las marcas partidarias de la derecha provocó un problema de coordinación para las élites políticas –que abandonaron la vida partidaria o tuvieron que rehacer sus carreras en otras formaciones–, pero también un alejamiento del electorado de ese espectro (Lupu, 2016). Luego de la Ucede, la experiencia partidaria relativamente exitosa de centroderecha a nivel nacional fue Acción por la República (AR), creada por Domingo Cavallo en 1997. Se trató de un vehículo electoral atado a la suerte de su líder. Cavallo había sido ministro de Economía de Menem entre 1991 y 1996 y había logrado notoriedad pública por el éxito de su programa de estabilización de la moneda. Abandonó el gobierno peronista con críticas a la corrupción oficial y poco después fundó su propia agrupación con cuadros provenientes de las derechas liberal y conservadora (Vommaro y Morresi, 2014). En 1999, en alianza con retazos de los partidos conservadores provinciales, logró nuevamente que un partido de centroderecha fuese la tercera fuerza a nivel nacional. Al año siguiente, en la ciudad de Buenos Aires, estuvo muy cerca de llegar a un balotaje con el candidato de la Alianza entre la UCR y el Frente por un País Solidario (Frepaso). Sin embargo, poco después Cavallo aceptó volver a ser ministro de Economía, esta vez en el gobierno de la Alianza a

nivel nacional, y compartió los costos de la debacle social y económica que terminó en la caída de ese gobierno en diciembre de 2001. La pérdida de popularidad de Cavallo provocó la disolución del nuevo partido, a poco más de cuatro años de su creación.

La crisis económico-social que sobrevino socavaría el consenso neoliberal, pero crearía condiciones propicias para que un nuevo partido de centroderecha hiciera pie en la ciudad de Buenos Aires, y desde allí se construyera una opción electoral nacional.

El PRO y la promesa de unir las dos batallas

Los actores políticos de derecha interpretaron el derrumbe social y económico de la Argentina en 2001-2002 como una nueva oportunidad de construir una fuerza propia (Vommaro y Morresi, 2014). Surgieron entonces dos formaciones políticas. Una claramente no peronista –liderada por un economista ortodoxo que provenía del radicalismo, Ricardo López Murphy– y con fuerte carácter programático, que se llamó Recrear. Este partido logró atraer a la mayor parte de los partidos conservadores provinciales y se convirtió en poco tiempo en una fuerza de alcance nacional (Vommaro, 2017). El otro partido fue el PRO. Producto de un think tank y constituida en torno a Mauricio Macri, heredero de uno de los principales grupos empresariales del país y entonces presidente del popular club de fútbol Boca Juniors, la nueva fuerza nació con una impronta pragmática. Fue pensada desde sus orígenes como un vehículo de llegada al poder y eligió la vía local para construir una opción nacional. Su epicentro fue la ciudad de Buenos Aires, terreno propicio para el crecimiento de opciones electorales de centroderecha y a la vez el distrito donde los partidos tradicionales y las nuevas fuerzas surgidas en los años noventa –como el Frepaso– habían sufrido un mayor debilitamiento. El PRO acogió cuadros provenientes de diferentes orígenes que le permitieron organizar el partido en cinco grupos (Vommaro y Morresi, 2014): los tres primeros formados por políticos de larga data llegados del peronismo, el radicalismo y las fuerzas tradicionales de derecha; los otros dos integrados por nuevos políticos, algunos provenientes de ONG y fundaciones profesionalizadas e internacionalizadas, otros empresarios y cuadros gerenciales del mundo privado.

Cuadro 1. Las principales ofertas electorales de centroderecha en la Argentina y sus resultados (1983-2023)

	Etiqueta principal
1983	Partido Federal en la Alianza Federal
1989	Ucede en la Alianza de Centro
1995	Ucede
1999	Acción por la República
2003	Recrear en la Alianza Movimiento Federal para Recrear el Crecimie
2007	Recrear para el Crecimiento; Partido Popular de la Reconstrucción
2011	Sin oferta
2015-2019	PRO en la alianza Cambiemos, luego JxC
2023	PRO en JxC LLA

(*) Se muestran los resultados agregados obtenidos en elecciones presidenciales (primera vuelta) por las siguientes fuerzas: 1983: Pacto Autonomista Liberal; Movimiento Federalista Pampeano; Alianza Federal; Alianza Demócrata Socialista; Alianza Confederación Nacional de Centro. 1989: Alianza de Centro; Blanco de los Jubilados; Fuerza Republicana; Acción Chaqueña; Pacto Autonomista Liberal-Demócrata Progresista-Movimiento Liberación Popular; Partido Demócrata; Azul, Lealtad, Restauración; De la Independencia. 1995: Movimiento por la Dignidad y la Independencia; Alianza Frente para la Coincidencia Patriótica; Fuerza Republicana. 1999: Alianza Acción por la República. 2003: Alianza Movimiento Federal para Recrear el Crecimiento; Partido de la Reconstrucción; Movimiento por la Dignidad y la Independencia. 2007: Recrear para el Crecimiento; Partido Popular de la Reconstrucción. 2015: Alianza Cambiemos (primera vuelta). 2019: Alianza Juntos por el Cambio (primera vuelta). 2023: Alianza Juntos por el Cambio; La Libertad Avanza (primera vuelta).

Fuente: Elaboración propia. Datos electorales tomados de la Dirección Nacional Electoral.

La competencia entre las dos fuerzas concluyó en 2007, cuando el PRO llegó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y un conjunto de líderes de Recrear desafió a López Murphy y se impuso en las elecciones internas para luego fusionarse con el partido de Macri. Así, el PRO logró unificar la centroderecha y obtener cobertura nacional, aunque insuficiente para ser competitivo a ese nivel. Con los recursos organizativos del Estado subnacional más rico del país, y a partir de la construcción de una marca basada en los logros de gestión local, desarrolló un exitoso proceso de construcción partidaria que traería una novedad a la política argentina: por primera vez una formación política de derecha sería competitiva en la arena electoral. En coalición con la UCR, la CC y otros partidos menores, ganó las presidenciales de 2015.

En la arena de la batalla cultural, el éxito electoral del PRO debe ser matizado. Por un lado, su competitividad requirió una reformulación programática de las tradiciones ideológicas de la derecha argentina. La coalición dirigente del PRO produjo un giro pragmático en el discurso político-partidario que la llevó a

presentar el partido como una fuerza promercado pero con base en argumentos de “eficiencia” y de “gestión” antes que ideológicos –es decir, sin identificarse públicamente con las ideas de derecha–, una posición compatible con la estrategia de comenzar por un gobierno local para construir luego una opción nacional. A contrapelo de la historia de las derechas políticas en la Argentina, el PRO aparecía como un partido que buscaba competir por el poder antes que constituirse en una tribuna de propagación de ideas (Vommaro y Morresi, 2014).

Un elemento central de su construcción como opción electoral y su posicionamiento político contrapesaría ese rasgo postideológico: la importancia creciente que tuvo en la consolidación de los apoyos al PRO, y luego a la coalición JxC, la apelación a una “amenaza” (Vommaro, 2017, 2023). Sustentados en la creciente polarización política entre el peronismo kirchnerista y el antikirchnerismo, los líderes del PRO construyeron una imagen del otro como amenaza –a la democracia liberal, a la propiedad privada–, en un esquema binario que recuerda los tiempos de la Guerra Fría. Ciertamente, esta concepción binaria actuaba en espejo con el discurso polarizador del peronismo kirchnerista –asentado en la radicalización de una retórica nacional-popular pueblo versus antipueblo–, pero aquí el componente de amenaza agregaba elementos de miedo colectivo a lo que a fines del ciclo kirchnerista se llamó la “chavización” de la Argentina, incentivo para la movilización política de las élites económicas y elemento de cohesión de un partido nuevo que necesitaba hacer pie en la competencia electoral. El PRO se construyó así con esta doble cara: partido de renovación programática de la centroderecha y reedición de una mirada maniquea del otro, con alta dosis de identidad negativa.

El peso de esta mirada maniquea tuvo efectos durante el gobierno macrista: Macri y sus colaboradores atribuyeron las dificultades para llevar a cabo su programa reformista a la resiliencia de actores asociados al ciclo kirchnerista que debían ser “vencidos definitivamente” en un segundo intento de aplicar ese programa. En definitiva, paradójicamente, fue tras el fracaso del gobierno de Macri que creció entre buena parte de los líderes del PRO la idea de que el partido debía volcarse a posiciones más programáticas y definitivamente conservadoras (Gené y Vommaro, 2023). Esta perspectiva resultó muy popular entre las bases electorales de JxC, que apoyaron el rápido ascenso de Patricia Bullrich –presidenta del PRO– como opción a la línea moderada que representaba Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Larreta proponía volver a la promesa original: un partido pragmático que ofrece resolver problemas concretos a través de la “gestión”.

Bullrich, en cambio, prometió un gobierno más agresivo en las reformas promercado que, al mismo tiempo, buscaría “terminar con el kirchnerismo”. [6] En esta empresa, contó con el apoyo de Macri. La victoria de Bullrich en las primarias de 2023 confirmó la pregnancia de esa idea en la base electoral de JxC. El problema fue que, justo en el momento en que el PRO realizaba un giro conservador para dar la “batalla cultural”, una derecha alternativa crecía en la Argentina, desafiando al partido fundado por Macri, al que identificaba como parte del establishment político a derrotar.

El surgimiento de la derecha alternativa: llegar desde afuera ¿para romper todo?

Tras los años de consenso posneoliberal regresaron tiempos propicios para las ideas de derecha: creció la identificación de una parte del electorado con la derecha en un contexto de polarización política bastante alineada en términos programáticos, en el que los votantes de JxC comparten ideas críticas sobre el Estado, los programas sociales y los impuestos en materia distributiva y de mano dura en materia de seguridad (Kessler y Vommaro, 2023). Los años de crecimiento del PRO en la arena electoral dieron frutos en la arena cultural: los electores de JxC, heterogéneos en 2015 (Lupu, Oliveros y Schiumerini, 2019), tendían a parecerse cada vez más al programa de sus candidatos. A partir de 2019 Macri y Bullrich los orientaron más marcadamente hacia la derecha tanto en la agenda distributiva como en la de seguridad. Sin embargo, mientras el PRO y JxC vivían una intensa disputa entre duros y moderados, crecieron nuevas opciones a la derecha de la derecha que multiplicaron opciones ideológicas – moderados versus duros, mainstream versus alternativos, liberales versus conservadores– y movilizaron pasiones de una porción para nada despreciable de la sociedad. Entre estas nuevas fuerzas se destaca LLA, de Javier Milei. Como en otros países de la región, en la Argentina surgió un movimiento personalista con baja inversión organizativa pero con un fuerte trabajo en sus programas y discursos electorales. Este movimiento se apalancó en la crisis y el descrédito de los gobiernos progresistas y en discursos antiestablishment político. En un contexto de bronca y desencanto con las dos coaliciones que organizaban la competencia hasta 2021, Milei tuvo un meteórico ascenso a partir de su capacidad para representar el descontento, así como de atraer buena parte del

voto más ideológico organizado previamente por el PRO, pero enojado con el fracaso de ese partido en el gobierno y con la deriva internista que tuvo a partir de 2019. Esta vez con un vehículo organizativamente débil, la derecha volvió a combinar la competitividad electoral con la batalla cultural y llegó al poder en 2023 para realizar un nuevo experimento de gobierno.

¿Cuáles son los principales rasgos de esta nueva derecha política?

Milei es un caso híbrido de líder de ultraderecha con componentes populistas, en especial con una “performance populista” –en sentido retórico antes que sociológico–, es decir con una actuación pública que dramatiza y encarna la bronca y el descontento de buena parte de los y las votantes con la situación del país y con la clase dirigente, a la que Milei acusa, desde 2021, de ser una “casta política”: una “élite corrupta” a la que opone un “pueblo puro” al que se le roba el fruto de su esfuerzo. Este pueblo puro comenzó a ser nombrado como “los argentinos de bien”, [7] una categoría similar a lo que en otros tiempos los nuevos partidos llamaban, simplemente, la gente (Vommaro, 2008), pero que ahora alude de manera específica a quienes “viven de su trabajo”. El valor moral de la gente de bien se desplazó del terreno político –la gente era la sociedad en su conjunto, que enfrentaba a los políticos– al terreno económico –la gente de bien parece oponerse no solo a los políticos (“la casta”) sino al sector público en su conjunto–. [8]

Desde 2016, Milei se volvió asiduo participante en programas de variedades donde se debate sobre actualidad política. Allí solía presentarse como economista y hablaba en un lenguaje técnico; no obstante, su estética disruptiva –el pelo desordenado, las camperas de cuero pasadas de moda– y su vehemencia gestual y verbal lograron convertirlo en un personaje atractivo para la audiencia. La radicalidad de sus posiciones en materia económica, su histrionismo y agresividad y su conexión con públicos masivos se convirtieron en marcas de su comportamiento: una suerte de “performance populista” capaz de trasladar el discurso antiestablishment al nivel de una verdad corporal. Este lenguaje verbal y corporal agresivo hacia las élites políticas se plasmó en expresiones como “¡Políticos de mierda, váyanse a la concha de su madre!” [9] o “Podrás ver a las MIERDAS de los políticos pelear fuertemente pero siempre se pondrán de acuerdo en una sola cosa de modo instantáneo: subirnos impuestos. CHORROS DE MIERDA, BAJEN EL GASTO PÚBLICO LA CONCHA DE SUS PUTÍSIMAS MADRES. SON UNOS MALPARIDOS. ¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJO!” [10]

La crítica a la casta política se combina con una crítica al Estado de claro corte libertario, que radicaliza la naturalización de las desigualdades económicas defendida por las derechas (Luna y Rovira Kaltwasser, 2014). La radicalidad de su discurso en este aspecto constituye una relativa ruptura respecto de las derechas que lo precedieron. Ciertamente, en las opciones que precedieron al PRO se detecta un discurso fuertemente anclado en la economía –como en el caso de la Ucede– y en la moralidad pública –como en el caso de AR–, pero, como el propio Milei se encargó de subrayar, nunca antes un discurso libertario había sido tan competitivo. En 2021 la crítica al Estado encontró una imagen publicitaria acorde con la performance populista de Milei: la motosierra. En la campaña electoral para las legislativas de ese año presentó un programa compuesto por tres generaciones de reformas llamado “plan motosierra”, que luego sería la plataforma de su candidatura presidencial. Según sostenía allí, con ese plan la Argentina volvería a ser, en treinta y cinco años, una potencia –en un guiño al eslogan utilizado por Trump, “Make America Great Again”–, pero esta vez como ingrediente de un discurso basado en teorías económicas radicales del siglo XX y alejado del nacionalismo.

Asimismo, en ocasiones Milei coquetea con las posiciones ultraconservadoras en materia cultural y de seguridad, aunque las utiliza de manera oportunista, es decir en función del público y de coyunturas en las que considera que puede aprovecharlas sin integrarlas al núcleo de su discurso. Es su vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien representa a los grupos de LLA que proponen una ruptura más abierta con los consensos en materia de derechos humanos en la democracia argentina al cuestionar las políticas de memoria, verdad y justicia. [11]

LLA es una coalición formada por los nuevos partidos Libertario y Unite por la Libertad y la Dignidad, y por pequeños partidos conservadores de larga data como el Partido Demócrata y el Partido Renovador Federal. Hizo su aparición pública en las legislativas de 2021, cuando logró elegir dos diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires: el propio Milei y la activista conservadora Victoria Villarruel. Dos años más tarde, la fórmula Milei-Villarruel ganó las elecciones presidenciales. A pesar de estos resultados sorprendentes, la estructura política de LLA es débil y la escasa inversión organizativa que hizo Milei en su corta carrera política plantea un interrogante respecto de la resiliencia de su espacio en contextos más adversos. Milei mantuvo el control sobre su imagen pública, su discurso y su acción proselitista en manos de su hermana, un puñado de jóvenes especialistas en el manejo de redes sociales y

unos pocos armadores políticos de segunda línea que negociaron una cobertura nacional para LLA con líderes locales conservadores y dirigentes marginados por los partidos tradicionales. La debilidad de este armado quedó demostrada en el mal desempeño de esa fuerza en las elecciones de gobernadores provinciales durante la primera mitad de 2023. Al final de la ronda, pese a que Milei no cesaba de crecer en popularidad e intención de voto, LLA no obtuvo ninguna gobernación. A diferencia de Trump, un empresario consolidado que logró ser nominado por el Partido Republicano, y de Jair Bolsonaro, diputado federal por el estado de Río de Janeiro entre 1991 y 2018 que contaba con el apoyo de buena parte de las Fuerzas Armadas y las iglesias evangélicas, Milei es un líder personalista sin organización, sin estructura militante y sin cuadros políticos.[12] Y sin embargo llegó a la presidencia de la Argentina tras dejar afuera del balotaje a Juntos por el Cambio y luego de vencer al peronismo en esa instancia definitiva.

La reorganización de la oferta política de derecha en 2023. Algunas líneas para entender su futuro

Las elecciones de 2023 constituyeron un punto de inflexión para la derecha argentina. A diferencia de lo ocurrido en 2015, el PRO no logró ubicar a sus candidatos en la segunda vuelta electoral, ni tampoco llegó a erigirse como la principal alternativa al peronismo, como había sucedido en 2019. Su exclusión se relaciona con un significativo debilitamiento electoral de JxC frente a LLA, que si bien no logró hacer mella en el bastión del macrismo –la Ciudad de Buenos Aires y algunos distritos del conurbano–, disputó con llamativo éxito el corazón de la zona agraria (Córdoba, Santa Fe y las regiones más productivas de la provincia de Buenos Aires). El desplazamiento al tercer lugar de JxC en Córdoba ejemplifica este debilitamiento: esa provincia fue uno de los distritos de mayor peso en la competitividad de la coalición macrista a partir de 2015. El exit electoral de parte de sus votantes hacia LLA refleja el debilitamiento de la capacidad de representación del PRO y abre un interrogante respecto de la consistencia de su sociología electoral en el futuro.

Pero el triunfo de Milei también representa una novedad en las derechas en la Argentina en relación con sus apoyos populares. Las derechas partidarias suelen

tener dificultades para trascender su núcleo electoral, situado en las clases altas y las élites económicas, y cuando lo hacen, como en el caso del PRO, es porque consiguen atraer votos de las clases medias. A contrapelo, Milei logró también disputar parte del electorado popular asociado al peronismo,[13] y así lo reflejan sus victorias en algunas provincias de tradicional cuño peronista del noroeste, como Salta, Tucumán y La Rioja. El avance de la oferta de extrema derecha en estos grupos sociales y también entre los jóvenes, el segmento etario donde hasta hace unos años se imponía el kirchnerismo, da cuenta de la intensidad del descontento popular con el peronismo como parte de las élites políticas establecidas, así como del debilitamiento del discurso progresista en un contexto de penuria económica prolongada. La dimensión antiestablishment del discurso de Milei se dirigió a estos grupos. La promesa de que el ajuste económico que propone su gobierno lo pagarán “la casta” y sus aliados, y no “los argentinos de bien”, va en ese sentido.

La victoria de LLA es asimismo un punto de inflexión en cuanto a los efectos que puede tener en las derechas políticas la decisión de Macri –seguida por Bullrich– de apoyar a Milei en la segunda vuelta electoral. Esta decisión precipitó una crisis de la coalición que mantenía unidos a duros y moderados. El camino de moderación transitado por Macri desde 2003 hasta 2015 –que le permitió construir una centroderecha competitiva en tiempos de consensos estatistas y prodistributivos– comenzó a desandarse en 2019. Cuando los vientos cambiaron, Macri entendió que esa estrategia debía ser abiertamente desacreditada. Milei le ofreció una puerta de acceso a esa reorientación a la que parte de su coalición se resistía: un programa económico neoliberal extremo, esta vez con el apoyo de sectores populares que, desde 2003, formaban mayoritariamente parte de la coalición contraria a ese programa.

En los hechos, este acercamiento elimina la distancia que en otros países separa a las derechas mainstream de las derechas alternativas. En la Argentina, esa “barrera sanitaria” no existió. En cambio, Milei fue “normalizado” por la mayoría de los líderes del PRO y JxC –y también por buena parte del peronismo no kirchnerista–, que minimizan sus aristas autoritarias y lo empoderan en sus ambiciones reformistas en el terreno económico. La decisión de Macri corona un proceso de giro a la derecha tanto de la oferta como de la base electoral de JxC, pero también de las élites políticas que olfatean un cambio en el aire de los tiempos y prefieren estacionar sus soportes institucionales en un gobierno que nace débil e improvisado.

La jugada de Macri no es ajena a la historia de la derecha política argentina. Al contrario, puede decirse que otra vez la derecha tomó un atajo al poder, como lo hizo la Ucede en 1989. Muchos cuadros de aquel partido se afiliaron al peronismo, del que aún se proclaman parte. Esta vez, Macri debilita a su partido a cambio de una nueva oportunidad para llevar a cabo el programa que no logró desarrollar entre 2015 y 2019. Sostiene que es el tiempo histórico indicado. Si su gobierno tuvo un mandato de “cambio cultural”, ahora llegó el mandato del “cambio económico”. [14] En este sentido, en términos económicos, el proyecto de Milei puede leerse como el tercer intento neoliberal después de Menem y de Macri. Lejos de diluirse en un partido más grande y con anclajes sociales sólidos, como hizo la Ucede con el peronismo menemista, Macri intenta poner su partido, sus cuadros, sus activistas, sus gobiernos subnacionales y sus dispositivos organizativos al servicio de un grupo político aún más nuevo y más débil. A contrapelo de la historia reciente de la derecha política argentina, Macri ya había entendido que era necesario formar un partido para ser competitivo y resiliente en un contexto adverso como el del consenso posneoliberal y los años de predominio kirchnerista. Su apoyo a Milei en la segunda vuelta le ofrece un premio evidente –la posibilidad de un nuevo turno reformista–, pero lo obliga a pagar el precio de desorganizar a su partido, cuyo destino es ahora incierto. En lugar de incorporar a Milei a JxC, como había intentado sin éxito desde fines de 2022, empuja al PRO hacia LLA, el campamento desorganizado y novato de Milei.

¿Qué puede pasar con su partido? ¿Es posible la reabsorción del grueso de los líderes y activistas del PRO detrás de la nueva experiencia de poder, al calor de los recursos del Estado? Los gobiernos subnacionales controlados por ese partido, o aquellos en los que participa activamente, deberían actuar como argamasa de los distintos sectores. Allí conviven duros y moderados, en proporciones diversas según los casos. Al mismo tiempo, sin proyecto común pero con poder subnacional, el PRO podría correr el riesgo de parecerse demasiado al radicalismo, al cual se ufano de venir a superar. Su carácter joven difícilmente le proporcionaría la resiliencia identitaria que mostraron los radicales frente a la ausencia endémica de un programa capaz de anclar al partido en un electorado.

Estas coordenadas focalizan la mirada en el proceso político que se abre con la irrupción de Milei. Pero buena parte de las preguntas que este capítulo recoge solo podrán ser respondidas una vez que ese proceso empiece a mostrar una dirección clara, y que sus resultados se hagan evidentes para todos los actores,

incluidos los retazos dispersos de las derechas políticas que dejó tras de sí el convulsionado tiempo electoral de 2023.

Bibliografía

Arriondo, L. (2015), “De la Ucede al PRO. Un recorrido por la trayectoria de los militantes de centro derecha de la Ciudad de Buenos Aires”, en G. Vommaro y S. Morresi (comps.), “Hagamos equipo”. PRO y la construcción de la nueva derecha en Argentina, Los Polvorines, UNGS, pp. 203-230.

Gené, M., y G. Vommaro (2023), El sueño intacto de la centroderecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado, Buenos Aires, Siglo XXI.

Gibson, E. L. (1996), *Class and Conservative Parties*, Baltimore, John Hopkins University Press.

Kessler, G. y G. Vommaro (2021), “Polarización, consensos y política en la sociedad argentina reciente”, Documentos de trabajo Fundar.

— (2023), “Conflictos y consensos sociopolíticos en la Argentina pospandemia”, Documentos de trabajo Fundar.

Luna, J. P. y C. Rovira Kaltwasser (eds.) (2014), *The Resilience of the Latin American Right*, Baltimore, John Hopkins University Press.

Lupu, N. (2016), *Party Brands in Crisis: Partisanship, Brand Dilution, and the Breakdown of Political Parties in Latin America*, Nueva York, Cambridge University Press.

Lupu, N., V. Oliveros y L. Schiumerini (eds.) (2019), *Campaigns and Voters in Developing Democracies: Argentina in Comparative Perspective*, Ann Arbor, University of Michigan Press.

Stokes, S. C. (2001), *Mandates and Democracy: Neoliberalism by Surprise in Latin America*, Nueva York, Cambridge University Press.

Vázquez, M. (2023), “‘Ahora es nuestro tiempo’. Activismos juveniles en las nuevas derechas durante la pandemia (Argentina, 2020-2022)”, *Iberoamericana*, 23(82), pp. 117-137.

Vommaro, G. (2008), “Lo que quiere la gente”: los sondeos de opinión y el espacio de la comunicación política en Argentina (1983-1999), Buenos Aires, Prometeo.

— (2017), *La larga marcha de Cambiemos. La construcción silenciosa de un proyecto de poder*, Buenos Aires, Siglo XXI.

— (2023), *Conservatives against the Tide: The Rise of the Argentine PRO in Comparative Perspective*, Nueva York, Cambridge University Press.

Vommaro, G. y S. D. Morresi (2014), “Unidos y diversificados. La construcción

del partido PRO en la CABA”, Revista Saap, 8(2), pp. 375-417.

■

[4] En este capítulo nos referiremos a las derechas políticas en su alcance nacional, más allá de que se hayan conformado en un distrito subnacional. Esta delimitación deja fuera del alcance de nuestro análisis el surgimiento de las derechas asociadas al pasado autoritario, tanto las nacionalistas –en especial en la provincia de Buenos Aires– como las liberal-conservadoras –como el bussismo en Tucumán–.

[5] Tanto como lo están con una tercera arena fundamental: la de las políticas públicas. La batalla electoral y la batalla cultural son, en efecto, medios para llevar a cabo políticas orientadas al programa de las derechas políticas, relativamente coincidentes en el plano económico –un reformismo promercado con intensidades variables– y en el plano de la seguridad –“mano dura” en diferentes grados y variantes–, aunque divergentes en el plano cultural –en un continuum que va del liberalismo al conservadurismo–. Sin embargo, el análisis de las derechas en el gobierno escapa al alcance de este texto. Para un análisis del impacto de la dinámica de apoyos y bloqueos en el gobierno de Macri, véase Gené y Vommaro (2023).

[6] Véase “Entre promesas de terminar con el kirchnerismo, Patricia Bullrich presentó su nuevo libro con Macri y Larreta”, Infobae, 14 de septiembre de 2023.

[7] Esta categoría, que llamativamente ya había sido utilizada por Alberto Fernández durante la pandemia, ocupó un lugar creciente en el discurso de Milei, incluso en su discurso de victoria. Véase <www.elmundo.es/internacional/2023/11/20/655acb61e9cf4a69268b4575.html>.

[8] Probablemente esto está ligado a la pulsión “anti-AMBA” que anida en los apoyos electorales a Milei. La crítica al centralismo se agudizó con el kirchnerismo y el macrismo, dos fuerzas fuertemente ancladas en el AMBA. Según estas críticas, el Estado federal –y sus empleados y subsidiados– está en todas partes pero “atiende en Buenos Aires”.

[9] Véase <twitter.com/jmilei/status/1117139969095630848?>.

[10] Véase twitter.com/JMilei/status/1052563795049177088.

[11] Sobre este punto, véanse los capítulos de Marina Franco y de Tomás Borovinsky, Martín Plot y Daniela Slipak en este volumen.

[12] Sobre los grupos militantes libertarios surgidos en los últimos años, véase [Vázquez \(2023\)](#).

[13] Véase www.larazon.es/internacional/asi-votante-argentino-polemico-javier-milei_20231003651b62c8e0d7620001ed989f.html.

[14] Véase, por ejemplo, la entrevista en el programa periodístico [Desde el Llano](#) del 20 de noviembre de 2023.

3. 100% blanco y villero

Conservadurismo rebelde, libremercado y derechas populares

Ulises Ferro, Pablo Semán

En este trabajo abordaremos una dimensión específica del proceso político de radicalización, definida a su vez por el entrecruzamiento de un plano y un concepto: por un lado, el de la producción cultural que a veces acompaña y otras anticipa la dirección de la radicalización política y, por otro lado, la noción de “prosumidores” –entendida como la combinación de la recepción y la producción en determinadas industrias culturales–. Una Bandita Indie de La Plata es una agrupación musical punk receptora de las grandes vertientes globales de la radicalización y al mismo tiempo un agente de mediano rango de producción cultural en el que se aprecian las operaciones de composición ideológica disponibles en la Argentina contemporánea. Aquí la presentamos como un emergente, en la escena musical under, de expresiones de derecha gestadas en una dialéctica entre la apropiación de las tesis de ciertos intelectuales y las expresiones de los agitadores en redes sociales. Abordando algunos tópicos expresados en las letras de la banda, indagando de dónde se nutren, con quiénes dialogan y a quiénes se dirigen, exploraremos la subjetivación popular de derecha que, entre otras cosas, supone una transformación de las “sociologías espontáneas” de “antirricos” a “antipolíticos”.

Primero señalaremos el contexto de adopción, resignificación y difusión de las nuevas derechas analizando las condiciones de vida de los jóvenes de sectores populares, en particular, su vínculo con las nuevas modalidades de trabajo y con un Estado que, para ellos, resulta deficiente y en ocasiones perverso. En segundo

lugar, analizaremos la importancia de las redes sociales y los nuevos medios de comunicación para difundir las ideas de derecha, destacando cómo se gestó una sensibilidad política específica y cómo saltó de los foros digitales a las esferas más visibles, hasta erosionar los puntos de vista oficializados por las nuevas izquierdas del siglo XXI. Por último, nos enfocaremos en Una Bandita Indie... como emergente de estas condiciones y exploraremos cómo, en tanto consumidora y promotora de ideologías de derecha, devino en un nudo cultural que, mientras refleja las falencias del Estado y del progresismo, logra configurar un sujeto popular antipopulista.

La experiencia neoliberal o la ideología antes de la ideología

En la Argentina, las afinidades con la derecha libertaria se fundan en experiencias que se han generalizado desde hace una década debido al estancamiento inflacionario y al fracaso de gestión de las dos grandes coaliciones políticas post 2001 (véase el capítulo de Vommaro): su crecimiento actual recoge tanto el efecto de una prédica dogmática y el aumento de los cuadros que podrán dar estructura al movimiento, como las consecuencias de un proceso social que ya había permitido el triunfo de Macri y ahora viene a consolidar, ampliar y radicalizar el polo de la “derecha reforzada”. En estos años se ha fraguado una generación cuya experiencia común es haber atravesado el estancamiento y los malestares de la pandemia (véase el capítulo de Rebón y Súnico) y que ahora pretende impactar de lleno sobre el panorama político del país.

En los ya no tan nuevos trabajos, como la programación o el reparto de mercaderías, se valora no solo la flexibilidad de horarios y los ingresos complementarios, sino también la capacidad inmediata de ver cómo rinde el esfuerzo adicional, ese plus de energía y horas que cada uno añade al día por su propia voluntad. Los repartidores, por ejemplo, son conscientes de los riesgos asociados con su jornada laboral, desde caer en el ranking y perder oportunidades de ganar más hasta enfrentar accidentes sin un seguro que los respalde. Sin embargo, estos riesgos encuentran un contrapeso en la posibilidad de hacer rendir su esfuerzo en un entorno laboral “competitivo”.

En focus groups y en entrevistas con inversores en criptomonedas, trabajadores en aplicaciones de reparto y programadores, descubrimos la expansión de un lenguaje económico/monetario con el que los jóvenes describen su experiencia vital en casi todos los niveles. La adquisición de este código implica adoptar categorías y concepciones provenientes del léxico neoliberal y del marketing empresarial, que, si bien ganaron terreno en TikTok e Instagram, están presentes desde antes en una literatura masiva que para muchos de esta generación equivale a los clásicos.

Estos productos culturales valoran el tiempo como lo valora el mercado y promueven prácticas que permiten que los consumidores se organicen según las demandas actuales, entre ellas constancia, concentración y disponibilidad. La distinción tradicional entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio se desvanece ante una concepción en la cual el uso del tiempo fuera del trabajo se planifica y justifica en el marco de técnicas que fomentan la autoproducción de un “yo” como una unidad económica altamente eficiente. Esto se traduce en la búsqueda de motivación ante las constantes demandas que se autoimponen los emprendedores en su carrera hacia el éxito, incluso cuando este ya no signifique “ser tu propio jefe”, sino apenas ser más empleable y competitivo en el mercado laboral. Surge así una “optimización del yo”, una autooptimización continua (Nehring y Röcke, 2020) que abarca no solo el rendimiento laboral, sino también aspectos físicos, estéticos y emocionales. La noción de emprendedor pasa a ser una categoría no solo económica, sino fundamentalmente moral, que impulsa a lograr la superación personal mediante la autocreación y autoimposición constantes, con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos y habilidades para poder ganar más dinero y/o ser más empleable.

La internalización de estímulos que encarnan una versión del mercado y sus legitimaciones genera un temperamento: el de los combatientes dispuestos a hacer los sacrificios y pruebas que exige la economía, o cuando menos a reconocer que ese credo es el camino hacia el éxito. Desde este punto de vista, se valora moralmente un estilo de vida que, aunque no esté orientado hacia la guerra, implica habilidades de comando tales como disciplina, fuerza física y moral, inteligencia y mirada estratégica.

La perspectiva de valorizar a los individuos por su capacidad de sobrevivir a la intemperie contrasta con lo que se percibe como una renuncia moral en la “vieja vida” de contratos a largo plazo y protecciones laborales. Muchos jóvenes ven esto como un mérito superior, una capacidad de esfuerzo romantizada. La

acumulación de capital y posición se convierte así en un faro que guía su navegación, con la utopía de alcanzar el éxito antes de que sea demasiado tarde. Este modo de vida, organizado contra el miedo al fracaso, el desempleo y la miseria, configura a quienes lo practican como moralmente superiores. Es desde esta posición que se critica de manera despectiva el empleo estatal, no necesariamente porque se lo asocie al déficit fiscal sino porque su estabilidad no depende del mérito y está a resguardo de la competencia en el mercado.

El repartidor de PedidosYa que pedalea por las calles de tierra o acelera su moto en las zonas oscuras, el estudiante que abandona su carrera universitaria para aprender Python impulsado por el sueño del nomadismo digital, la joven que emprende por Mercado Libre vendiendo desde ropa hasta artesanías, los que dan clases por Zoom para el exterior y cobran en criptomonedas, todos ellos comparten algo en su proceso de politización: sus experiencias con lo público (lo que muchos en los grupos focales llaman “los tres pilares: educación, salud y seguridad”) los conducen a la crítica social del “estado del Estado”. Sus cuestionamientos se concentran en lo que perciben como una “mímica estatal” y los llevan a señalar las inconsistencias. Como dice Verónica Gago (2014), existe un neoliberalismo desde abajo que no solo no ha sucumbido ante la restitución del Estado de bienestar que ensayó, con limitado éxito, el kirchnerismo, sino que se caracteriza por “la proliferación de modos de vida que reorganizan las nociones de libertad, cálculo y obediencia, proyectando una nueva racionalidad y afectividad colectiva” (2014: 10).

Esta valoración de la autonomía conduce a un desprecio por la intervención estatal en sus actividades laborales. Dijo una entrevistada: “No me jodan con derechos que te empobrecen. ¿Por qué nos tienen que regularizar a nosotros y no a los manteros, a los que están cobrando sin trabajar en el Estado, a los que laburan cortando la calle?”. La noción de “derechos que empobrecen” refleja la preocupación de los repartidores de que la regularización de su situación laboral pueda reducir sus ingresos. Esto evidencia hasta qué punto están dispuestos a ser ellos mismos quienes encuentren soluciones en un mercado desregulado. Su postura se alinea con una economía informal que prospera gracias a la liberación de regulaciones estatales y sindicales para aquellos “que quieren trabajar”.

En los focus groups, las conversaciones sobre las injusticias del país se centran en tres ejes: el trabajo y la economía, la inseguridad y la discriminación/violencia de género. La participación del Estado en estos asuntos era mencionada en términos de deber (el Estado debería) y observada en su

ausencia o bien en su presencia aparente, impostada e impotente. Una interlocutora criticó la ineficacia del Estado para abordar lo que ella y sus amigos identificaban como la principal injusticia: “el tema del trabajo en negro”. Según ella, “el Estado presente no estaba”, una clara alusión a la disonancia entre los discursos oficiales y la realidad. Su crítica se centraba en la falta de control estatal sobre las condiciones y modalidades de contratación. Había experimentado en carne propia la dificultad de encontrar empleo formal, ya que, si bien la tomaban como “pasante” por su condición de estudiante, las empresas le exigían jornadas laborales extensas que le impedían continuar con sus estudios.

Como vemos, la idea de bien público no se cuestiona en abstracto. La crítica al desempeño estatal –que en los focus groups se extiende a la salud pública, el transporte y sobre todo la seguridad– está indisolublemente ligada a ese sentimiento de impotencia que pasa por el cuerpo. La lectura de la situación actual en clave decadentista, contrapuesta a las potencialidades del país, tiene su correlato en lo que llaman el estado calamitoso del Estado.

En un focus group realizado en la zona sur del Gran Buenos Aires antes de las elecciones nacionales de 2023, nos sorprendió que, pese a identificarse con el peronismo, un joven expresara con lágrimas en los ojos la necesidad de que el gobierno se fuera e insistiera en la preferencia por un cambio radical, aun ante la sospecha de consecuencias peores. Para él, no había otro camino que el cambio. La propaganda antiperonista no los convocaba solo por su insistencia, sino porque muchos jóvenes del grupo experimentaban frustración ante la difícil situación económica. Trabajaban largas horas sin poder satisfacer sus necesidades diarias ni independizarse. Además, nos resultaba llamativo que sus quejas estuvieran moldeadas por la crítica liberal y mostraran una visión ambivalente sobre los planes sociales, las élites dirigentes y el estancamiento económico, que no podían aceptar pero tampoco dejar de expresar.

Aunque catalizó tendencias ya existentes, la pandemia tuvo dinámicas propias y resulta crucial para entender el deterioro de los lazos entre los jóvenes y el Estado, lo que condujo a una “derechización” (Ferro, Semán y Welschinger, 2023). El presente económicamente ruinoso suscita un balance retroactivo que modifica la perspectiva sobre la gestión gubernamental de la crisis sanitaria. Muchos que apoyaron medidas de cuidado hoy se arrepienten o adoptan posiciones más críticas (“nos encerraron”). Las opiniones “negacionistas” crecieron en la pospandemia desde un presente oprobioso en diálogo con la

imagen de “la fiesta de Olivos”. Para muchos, la foto del festejo revela la hipocresía de la política de cuidados y certifica que los políticos llevan una vida de vicios que todos podían imaginar pero de la que no había imágenes. La confirmación de la perversión de aquellos que debían ser ejemplares en el cuidado erosionó la confianza en el Estado.

Pero hay un recorrido inverso y complementario que también fue iluminado por la pandemia: en su transcurso, las promesas acerca del Estado salvador, más allá de las virtudes y concreciones de las políticas públicas, se vieron contrastadas por la evidencia de que muchos tuvieron que intentar salvarse solos. La pandemia puso al Estado en un lugar imposible donde todo lo que hiciera estaría mal porque el virus, la vacuna y la dolencia eran discutibles y porque los medios para discutirlo estaban a disposición de todos. En ese contexto se agudizó la crisis de confianza en el Estado, que a su vez puso en crisis a los partidos políticos y potenció las posiciones liberales en un grado inédito.

Otro aspecto crucial para entender el proceso de subjetivación política contemporánea es la inestabilidad monetaria. La crítica generalizada a la inflación y el respaldo a la dolarización como una salida a la crisis representan una demanda juvenil de previsibilidad y futuro. Según estos jóvenes, así como el Estado dice estar presente pero se revela impotente en aspectos claves de la vida en común, el peso argentino se revela como una moneda fallida. Este sentimiento a menudo los impulsa a refugiarse en monedas extranjeras o activos digitales y allí vuelven a toparse con las intervenciones del Estado para regular el mercado de divisas, lo que refuerza su percepción del Estado como obstáculo.

Hasta aquí, hemos descrito experiencias de vida de contingentes cada vez más amplios de jóvenes de sectores populares de la Argentina. Sus trayectorias los llevan a identificar al Estado como una traba para su desarrollo personal y a los políticos como una élite perversamente privilegiada por ese aparato que a ellos solo les trae fracasos y frustraciones. Y en ese contexto se encuentran con distintas vertientes de la derecha que, como se analizará en el próximo apartado, circulan cada vez más por el mundo digital.

Las derechas en el mundo digital

Las propuestas transformadoras, ya sean reformistas o revolucionarias, suelen basarse en un optimismo sobre el futuro. La izquierda ha perdido la capacidad de soñar ante un mundo que empeora y limita sus propuestas a la defensa del statu quo o a la disputa cultural (Galliano, 2020). Mientras tanto, sectores de la derecha cuestionan las ideas de la izquierda, a veces tildándolas de conservadoras, e insisten en que los rebeldes son ellos, oponiéndose a los discursos oficiales difundidos por los medios mainstream, las escuelas y las universidades. Stefanoni (2021) ha destacado la diversidad de las ideologías nucleadas bajo los distintos términos que designan a las derechas. Lo que todas tienen en común es la promoción de la “batalla cultural” y la adopción de rasgos provocadores y antisistema.

Este fenómeno no es del todo nuevo. Siempre hubo ideólogos, think tanks, intelectuales públicos y artistas que contribuyeron a divulgar las “verdades” de diferentes corrientes de derecha (Mirowski y Plehwe, 2009; Mouffe y Turner, 1981; Maly, 2020; Nagle, 2017; Forti, 2021).[15] Lo que sí es novedoso es que las nuevas tecnologías y la alta conectividad han otorgado a estos discursos una capilaridad inédita y una conexión sin precedentes con diversas comunidades a lo largo y a lo ancho del planeta. La digitalización y las redes sociales han democratizado la capacidad de intervención pública, permitiendo que personas ajenas a los espacios clásicos de difusión del conocimiento, como las universidades o el periodismo, intervengan de manera contundente como difusores de tropos asociados a determinadas ideologías.

En los pliegues de los dispositivos de lo “políticamente correcto” empezaron a circular corrientes de pensamiento que cuestionan la supuesta hegemonía de la corrección política. Las formas institucionalizadas del decir fueron erosionadas, de manera lenta pero tenaz, por diversos canales que buscaban una renovación hegemónica. Supremacistas blancos, aceleracionistas, libertarios y neoconservadores compartieron espacios en redes sociales y foros donde se enfrentaron, discutieron, se insultaron y ocasionalmente coincidieron frente a un enemigo común: “la izquierda”, “el progresismo”, “el comunismo” y/o “el marxismo cultural”.

Angela Nagle (2017) analiza la formación de una “contrarrevolución digital sin líderes” en 4chan, un foro fundado en 2003 que se convirtió en un movimiento digital autónomo en defensa de la “incorrección política”. Su objetivo era ofrecer la “pastilla roja”, una metáfora tomada de la película Matrix, donde el protagonista debe elegir entre una pastilla roja que revela la verdad y alienta a la

rebelión y una pastilla azul que implica aceptar la mentira y la esclavitud. La “cultura del anonimato”, según Nagle, permitió que muchos expresaran opiniones que no podían compartir en otros lugares.

El periodista Juan Ruocco (2023) destaca la importancia de los memes en esta forma de confrontación. La arquitectura de los foros fomenta la creatividad memética y genera una competencia darwiniana, porque solo sobreviven los memes más populares, que se instalan y circulan en otras redes. En la Argentina, la galaxia chanera ha ganado influencia con plataformas como Voxed, la misma donde participaba Sabag Montiel, fallido magnicida de Cristina Fernández de Kirchner. El uso de la ironía y el anonimato han contribuido a ampliar lo decible y a gestar una sensibilidad política radicalizada que se difunde desde zonas relegadas de Internet y atraviesa a sectores sociales cada vez más numerosos.

[16] Además de los submundos digitales, las derechas han expandido su presencia en lugares más visibles del espacio público digital. Los influencers con miles de seguidores desempeñan un papel fundamental en la difusión de ciertas ideologías (Maly, 2020). En el caso latinoamericano, Kessler, Vommaro y Paladino (2022) sostienen que las derechas mainstream se vieron condicionadas por el “giro a la izquierda” del inicio del tercer milenio y dejaron al sector más conservador sin representantes en las urnas y con un déficit de legitimidad en el espacio público.

Ante esta situación, algunos influencers emergieron para representar a esos públicos “abandonados”. Estos influencers han desarrollado estrategias que involucran un uso hábil de las redes y plataformas, así como intervenciones offline y creación de productos culturales como libros, canciones y películas. Algunos se vinculan directamente con la estructura política, mientras que otros mantienen relaciones fluidas con redes de alcance internacional. Aunque sus agendas son variadas (algunos se ocupan de temas “económicos”, otros de temas “culturales”), lo que los une es el enemigo común: llámese “marxismo cultural”, “peligro populista” o “chavización”.

De este modo, think tanks, intelectuales, agitadores en redes e influencers trabajan mancomunados en la formación de un bloque contrahegemónico anticorrección política. A partir del acercamiento etnográfico a los seguidores de Agustín Laje y Nicolás Márquez, dos influencers de la derecha argentina, Goldentul y Saferstein (2020) destacan que, aunque son conscientes de sus diferencias (Laje es más cercano a la corriente liberal conservadora y Márquez a la nacionalista reaccionaria), la virulencia discursiva contra sus adversarios

políticos va acompañada de un llamado a la tolerancia entre las diferentes corrientes ideológicas que confluyen en la derecha política. A propósito de esta convergencia, Stefanoni (2021) señala las afinidades electivas entre conservadores y libertarios, resaltando la oposición a la “mentira igualitaria”, el desprecio por lo “políticamente correcto”, la suspicacia hacia los políticos, la incomodidad con la democracia y el rechazo hacia los “guerreros de la justicia social”. También observa una “división de tareas” entre figuras como Milei y Laje, ya que el primero aborda la perspectiva “económica” contra el keynesianismo y el segundo la perspectiva “cultural” contra la ideología de género y las interpretaciones de la historia argentina reciente. En virtud de esta diversidad, corrientes ideológicas aparentemente contradictorias pero unidas por un enemigo común configuran una máquina de guerra rizomática que busca conquistar a la sociedad civil antes de lanzarse a la contienda electoral (Saferstein, 2023).

Estos actores adaptan discursos de redes internacionales a realidades locales, desplegando un eficiente dispositivo de difusión de ideologías y sensibilidades políticas de derecha. En el próximo apartado nos enfocaremos en un conjunto punk del conurbano bonaerense, al que entendemos como un caso específico en el que estas corrientes transnacionales son apropiadas, significadas y puestas en circulación en el contexto argentino.

Una Bandita Indie de La Plata: la derecha punk

En un cuarto casi por completo a oscuras, un joven traza con aerosol sobre la pared las palabras “Punk Rock”. Brillan el cigarrillo y la piel pálida entre pósteres de animé japonés. La música estridente se mezcla con escenas del barrio: paredes grafiteadas, baloncesto, un adolescente con un gato. La gota de clonazepam cae en la boca del cantante de Una Bandita Indie. Un tipo tatuado grita: “¡No estar muertos es un milagro!”. Invita a comer asado, fumar porro y abrazar a los familiares. El tema “Otro guacho como yo” evoca la nostalgia de la adolescencia con videojuegos, skate, “falopa” y alcohol. El guitarrista toca frenético, el rock hace temblar. El cantante, con ojos endemoniados, celebra sobrevivir a la “experiencia neoliberal”.

Una Bandita Indie de La Plata se dio a conocer en 2017 con su primer álbum, *Irónica existencia*. En sus letras se anunciaba el sarcasmo que distingue a la banda hasta hoy, aunque entonces la ironía primaba sobre los insultos. Por ejemplo, en “Tengo un aborto y un perro”, la banda asume la voz del progresismo para burlarse –con un tono que recuerda el de la cultura chanera– de la trivialidad de sus demandas: “A la mierda la familia tradicional y el machismo heteropatriarcal, a la mierda la homofobia y discriminación, a la mierda el fascismo y el clasismo bro [...] no me obliguen a parir, ni me metan presiones, soy dueña de mi cuerpo y decido qué hacer”. En ese momento, la banda estaba enfocada en los problemas de coyuntura. En ese tema, por ejemplo, alude de manera explícita a la demanda por la despenalización del aborto que convocaba a diversos sectores de la izquierda y del progresismo.

Su segundo disco, *4 en 1*, también de 2017, incluye un tema que es una celebración del capitalismo, tópico recurrente en sus letras hasta hoy. Un joven con el corazón roto le cuenta a la mujer que lo abandonó que logra sobreponerse a su desdicha gracias al consumo. La tónica de las letras del segundo disco mezcla la ironía con la confrontación explícita y los insultos. En “Zurdo panfletero” se describe así a los adversarios políticos de la banda: “Son unos panfleteros, hijos de remil putas, dicen ‘somos pobres’ mientras toman frula”. El señalamiento de las impropiedades del progresismo o de la izquierda es una constante en su discografía, aunque poco a poco esas críticas se fueron articulando con mayor virulencia, en paralelo con el ascenso de la “derecha de la derecha” en el espacio público digital y offline.

El primer hit de la banda, que marcó su tono punk definitivo, es “Javier Milei, el último punk”. Lanzado a inicios de 2018, anuncia que Milei es su “líder” y su “gran referente”. De manera visionaria, el estribillo reza “Javier Milei, futuro presidente, Javier Milei, el último punk”. La canción mezcla expresiones del economista con un lenguaje silvestre: “A la mierda los malditos empresarios”, “basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal”, “siempre en contra de la presión tributaria”, “siempre en contra del estatismo abusador”. El hecho de que haya sido publicada en 2018 pone de manifiesto que el mileísmo precedió a Milei, es decir, hay un pueblo que se gestó desde abajo y pedía un líder que lo representara. En ese sentido debe entenderse que las identidades no surgen solo a fuerza de interpelaciones sino cuando ciertas narrativas se encuentran y engarzan con su estructura de acogida y digestión.

Una de las características de Una Bandita Indie... es su vínculo con el

“intelectualismo”. Si bien por un lado rechazan a los intelectuales y divulgadores que asocian a la izquierda, por el otro se aprecia en sus letras una apropiación parcial de las grandes vertientes del liberalismo y asimismo cierta familiaridad con los autores que rechazan. Así, en “Fuckultad zurda”, el grupo propone una suerte de revolución epistémica en concordancia con la hipótesis de Stefanoni (2021). Contra un docente universitario que “va de disruptivo, se cree muy transgresor”, la banda rechaza las miradas de actores que representan la hegemonía del progresismo:

Freud era merquero

Foucault era un depravado

Marx era más vago

que el gordo Baradel

O sea todo piola

con que sean enfermos

pero no era necesario

tenerlos que leer

En “Fuckultad zurda: 2da Parte”, continúan con la crítica narrando las desventuras de un joven que sufrió adoctrinamiento izquierdista en todas las instituciones educativas, desde el jardín de infantes hasta la universidad. Mencionan a diferentes personalidades que influyen en su forma de pensar, entre otros Joaquín Bochaca, el historiador español negacionista del holocausto nazi. Luego distinguen a sus referentes de los del progresismo:

Prefiero a Aldo Rico

que a Nico del Caño
antes que Vicky Donda
a Vicky Villarruel
antes que un comunista
me quedo con Laje
antes que un keynesiano
yo me quedo con Milei
antes que un zurdito
me quedo con Videla
antes que un piquetero
me quedo con Pinochet
antes que un progre
me quedo con Donald Trump
y antes que con Lacan
con la francesa de Le Pen

El antiintelectualismo de Una Bandita Indie de La Plata surge de una cierta familiaridad con el conocimiento académico, que les permite una apropiación parcial de eso que identifican con la izquierda y con el progresismo para luego rechazarlo. Mencionan en sus letras a autores como Marx, Foucault y Lacan para descalificarlos o burlarse de las ideologías políticas que, según entienden ellos, están a favor del Estado. Esta “crítica de la crítica izquierdista” surge de una apropiación, también sui géneris, de ciertas afirmaciones de intelectuales o influencers de derecha (desde Hayek hasta Agustín Laje), a cuyas ideas llegan quizás leyéndolos, pero también a través de las redes sociales y de productos

culturales que no son libros. Además, tal como sucedió en los Estados Unidos con algunos bloggers tras el triunfo de Trump, el éxito de Una Bandita Indie... parece incentivado por el ascenso de figuras como Victoria Villarruel, Agustín Laje y Nicolás Márquez en espacios offline. En la medida en que la banda ganó suscriptores y cantidad de reproducciones, comenzó a tener relación con otros difusores de ideologías de derecha. Varios de sus videos comienzan con saludos de influencers o intelectuales de derecha, lo cual indica su carácter de prosumidores: son receptores, pero también divulgadores de mediano rango de esas ideologías y sensibilidades.

Por otro lado, es destacable la reivindicación explícita de referentes de las dictaduras latinoamericanas. En sus letras abundan críticas al sistema de representación democrático en tanto que ellos se reivindican skin heads y lucen como tales, tienen un tema dedicado a Jorge Rafael Videla, etc. No obstante, hacen esfuerzos por distanciarse de los líderes de los fascismos del siglo pasado y se burlan de los intentos progresistas de asociarlos a eso. La misma ambigüedad se observa respecto al eje izquierda-derecha. En muchas de sus letras buscan salirse de esa cartografía política, conforme a lo observado por Forti (2021) respecto de las extremas derechas contemporáneas “rojipardas”. En este sentido, es posible pensar a la banda como parte de la expresión cultural de lo que Rosanvallon llama “contrademocracia”, el “entrecruzamiento de prácticas, de puestas a prueba, de contrapoderes sociales informales y también de instituciones, destinados a compensar la erosión de la confianza mediante la organización de la desconfianza” (2007: 24). Una desconfianza cuyo objeto principal es la democracia liberal y que constituye un síntoma más del astillamiento del “Pacto del Nunca Más” (los capítulos de Borovinsky, Plot y Slipak, y de Franco ahondan en ambos aspectos).

La identificación política de Una Bandita Indie... se constituye en oposición al progresismo, y algunos tropos de la izquierda aparecen con mayor frecuencia en sus canciones. Uno de ellos, conforme a lo observado por Torricella en este libro, es el feminismo. Sus letras expresan un sexismo que surge de la creencia en el carácter natural de los sexos y acusan a la empresa de “deconstrucción” de pretender subvertir el orden natural (y divino, ya que en ocasiones también se reivindican cristianos):

Generación idiota

se burlan de los patriotas

del concepto de familia

no tienen alma ni ser

Pero, además, su antifeminismo radica en que, para ellos, el feminismo es una ideología que atenta contra las costumbres de los sectores populares:

Muy linda teoría

todo muy marxista

te piropea un obrero

y vos lo escrachás

tus problemas son esnobistas

de zurdo burgués

primermundista

En efecto, Una Bandita Indie de La Plata considera que el feminismo y el progresismo en general no son más que una mímica de rebeldía que, en verdad, está al servicio del Nuevo Orden Mundial que ataca los valores occidentales:

Generación idiota

que se creen la rebeldía

y son rameradas adiestradas

por el nuevo orden mundial

La verdadera rebeldía es, a sus ojos, la que representan ellos. Su antiprogresismo reposa en una cosmología política conspirativa que identifica un Nuevo Orden Mundial que amenaza los valores tradicionales de Occidente. Y su antifeminismo también puede leerse como una revancha simbólica contra lo que se ha dado en llamar “la casta”, el Nuevo Orden Mundial y sus esbirros. En “Chetita”, de 2019, le cantan a una mujer blanca de la “aristocracia”:

sos de la aristocracia

tenés un perrito francés

no es que yo sea marxista,

pero sos blanca y lo sabés bien

Y acto seguido, con su habitual tono de “incorrección política”, hacen descripciones obscenas del cuerpo de la mujer. Se trata de un cuestionamiento no corporativo a las jerarquías sociales y, en particular, económicas (O’Donnell, 2017).

Este carácter “conservador”, decíamos, asume la forma de una reivindicación de cierta idiosincrasia nacional y popular y de ídolos icónicos como Maradona o Ricardo Iorio. Para la banda, lo nacional/popular está representado en la fórmula “100% blanco y villero”, título de uno de sus hits. Se trata de un etnonacionalismo plebeyo que descansa en una idea de “etnia argentina”, que también se vería amenazada por el Nuevo Orden Mundial. La esencia argentina, para ellos, no es totalmente europea pero tampoco totalmente latinoamericana: “Es algo mucho más propio, es algo mucho más folk”. Y esa verdadera identidad nacional “blanca y villera” se encuentra en los barrios, en el modo de vida humilde y resiliente de los obreros contra el cual atenta la agenda progresista impulsada por los centros del poder mundial. Así, ellos aparecen como defensores de una identidad y una ética nacionales amenazadas. El nacionalismo

es rebelde, ya que se opone a los objetivos de las élites mundiales en mancomunidad con actores nacionales. Como expresan en una canción del álbum que lanzaron en agosto de 2023:

En el barrio

odiamos a los caretas

políticos de mierda

de derecha o de izquierda

putos antifascistas

basura ecologista

odiamos a tu mundo

de rebelde burgués

Se trata, parafraseando a Thompson (1979), de un “conservadurismo rebelde”, pero no adverso a las leyes del mercado, sino a lo que se entiende como una nueva empresa de colonización de las prácticas y mentes de los sujetos: el progresismo. Por otro lado, este etnonacionalismo plebeyo no reivindica de manera explícita la superioridad de lo “100% blanco y villero”. Una Bandita Indie..., a tono con distintas vertientes de las derechas contemporáneas, se embandera con “el derecho a la diferencia”, esto es, a la no mixtura entre diferentes etnias.

Por último, la condensación de antiintelectualismo, populismo etnonacionalista y cosmología política conspiracionista se expresa en lo que llamamos “masculinismo de mercado”. La experiencia del mercado genera una moralidad específica en el contexto de la crítica al Estado y a la política (véase el capítulo de Caggiano en este volumen, y Semán y Welschinger, 2023). El “masculinismo de mercado” puede interpretarse como una vertiente específica, popular, de esa construcción de moralidad. La evaluación positiva de la masculinidad es una

forma de afirmar el valor de saber sobrevivir a las leyes naturales que rigen el mundo y que son también las leyes del mercado. Pedir el amparo del Estado, de movimientos sociales o de quien sea es no bancársela, ser “puto”, cómplice de la –tomando prestada la expresión de Caggiano– “apropiación del plus de esfuerzo de los individuos”. También lo es decidir dejar el país:

Yo no soy como esos trolos

que siempre dicen me voy

yo me quedo hasta que arda

total amo el calor

Así, Una Bandita Indie... se apropia del Do it yourself que fue emblema de la escena punk británica para señalar la autonomía, no ya como aspiración, sino como imperativo (Sadin, 2022). El masculinismo aparece como una “cultura del aguante” a favor del libremercado. Se trata no solo de la elección de la desigualdad (Dubet, 2015), sino de una ética de resistencia ante ella. Sin embargo, no es un llamado a la pasividad; por el contrario, las jerarquías son cuestionadas constantemente, pero no de manera corporativa. Sus letras, en resumen, expresan un nuevo régimen de desigualdad meritocrático (Dubet, 2023) y una economía moral acorde: la desigualdad tiene que ser resistida, tolerada, soportada estoicamente. Esto último coexiste con cierto darwinismo: ellos no desconocen que el mundo por el que bregan implicaría la adaptación o la desaparición de los “putos”; todo sea para recuperar los valores de Occidente. No obstante, como ya señalamos, no se debe suponer que esta defensa a ultranza del libremercado sea homóloga a una reivindicación de los privilegiados. Es un liberalismo popular, plebeyo, de barrio.

Conclusión

Si el rock chabón narró la crisis de los años noventa para los sectores populares, grupos como Una Bandita Indie de La Plata encarnan la vivencia de la crisis contemporánea. A fines del segundo milenio, el rock chabón constituía una reivindicación

del mundo que quedaba atrás en el marco de una reestructuración social políticamente comandada y su apego a los “buenos viejos tiempos” tenía valor político de resistencia que, antes que declamarse o proyectarse como tal, se actualizaba en la veneración de un tiempo que el resto de la sociedad comenzaba a denostar (Semán, 2007: 245).

Hoy, por el contrario, contingentes de trabajadores precarizados, informales, desafiados, expresan su descontento de un modo asumido, doctrinario. Esto es producto de una relación con recursos técnicos y simbólicos que permiten la expresividad de una generación y al mismo tiempo la sustraen a radares diseñados para otras capturas, que hoy operan en el vacío.

Una Bandita Indie de La Plata y sus seguidores ilustran cómo individuos de origen popular, en un contexto tecnológico y musical específico, pueden contribuir a conformar una subjetividad de derecha, opuesta a la tradición populista de izquierda. Esto se explica por la contradicción que afecta a los sectores populares, que perciben cómo la falta de solución a problemas estructurales intentó ser compensada con una agenda que para ellos resulta poco importante o al menos de menor relevancia. El problema no es la oferta de derechos en sí, sino que se la presente como compensación, una suerte de asunción tácita de la persistencia de los problemas de fondo. Todo esto en el marco de una crítica generalizada de la economía, de la política y fundamentalmente del Estado, que se aceleró con la pandemia.

Los componentes contrademocráticos –en el sentido de expresiones censoras por parte de la sociedad civil para juzgar el accionar de la sociedad política ampliada– no son novedosos en la música popular. La novedad radica, quizá, en su amplia difusión, como sucede con los raperos en el transporte público. En lugar de reflejar nostalgia por tiempos preneoliberales, se alinean con ideologías que el “rock chabón” despreciaba. Esto no se debe solo a operaciones de

ideologización exitosas de los sectores dominantes; los sujetos no son receptáculos pasivos de discursos externos. Para que un discurso sea aceptado debe hacer sentido, debe tener algún grado de afinidad con la experiencia de los sujetos. La condición de recepción de este tipo de ideologías es lo que llamamos la “experiencia neoliberal”.

Por último, los vínculos de Una Bandita Indie de La Plata con divulgadores, intelectuales y políticos de extrema derecha sugieren ciertos rasgos estructurales de estas nuevas expresiones políticas. Sus conexiones con Milei y personas del círculo mileísta expresan, por ejemplo, su permeabilidad hacia los grupúsculos neonazis (Forti, 2021). El futuro revelará en qué medida estos partidos responden a la ventana de Overton, cuánto pueden influirla y, en última instancia, si la presencia de Milei en el poder impulsará o no la proliferación de grupos similares y su mayor visibilidad en el espacio público, o si la traición a la radicalidad prometida durante la campaña hará que estos grupos que hoy apoyan al nuevo gobierno mañana se le vuelvan en contra.

Bibliografía

Dubet, F. (2015), ¿Por qué preferimos la desigualdad?, Buenos Aires, Siglo XXI.

— (2023), El nuevo régimen de las desigualdades solitarias, Buenos Aires, Siglo XXI.

Ferro, U., P. Semán y N. Welschinger (2024), “Generación pandémica: lazos personales, laborales y políticos en las nuevas juventudes”, *Cuestiones de Sociología*, 29, p. e162.

Forti, S. (2021), *Extrema derecha 2.0*, Madrid, Siglo XXI.

Gago, V. (2014), *La razón neoliberal*, Buenos Aires, Tinta Limón.

Goldentul, A. y E. Saferstein (2020), “Los jóvenes lectores de la derecha argentina”, en *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, 112, pp. 113-131.

Kessler, G., G. Vommaro y M. Palomino (2021), “Antipopulistas reaccionarios en el espacio publico digital”, *Estudios Sociológicos*, 40(120).

Maly, I. (2020), “Metapolitical New Right Influencers: The Case of Brittany Pettibone”, *Social Sciences*, 9(7), pp. 1-22.

Mirowski, P. y D. Plehwe (eds.) (2009), *The Road from Mont Pèlerin. The Making of the Neoliberal thought Collective*, Harvard, Harvard Univerity Press.

Mouffe, C. y G. Turner (1981), “Democracia y nueva derecha”, *Revista mexicana de Sociología*, 43, pp.1829-1846.

Nagle, A. (2017), *Kill All Normies*, Nueva York, Zero Books.

Nehring, D. y A. Röcke (2023), “Self-Optimisation: Conceptual Discursive and Historical Perspectives”, *Current Sociology*, p. 001139212211465.

O'Donnell, G. (2017), “¿Y a mí qué mierda me importa? Notas sobre sociabilidad y política en la Argentina y Brasil”, en G. O'Donnell, Contrapuntos. Ensayos sobre autoritarismo y democratización, Buenos Aires, Prometeo.

Rocha, C. (2015), “Direitas em rede: think tanks de direita na América Latina”, en K. Velasco y Cruz (ed.), Direita Volver! O retorno da direita e o ciclo político brasileiro, San Pablo, Perseu Abramo.

Rosanvallon, P. (2007), La contrademocracia, Buenos Aires, Manantial.

Ruocco, J. (2023), ¿La democracia en peligro?, Buenos Aires, Paidós.

Sadin, E. (2022), La era del individuo tirano, Buenos Aires, Caja Negra.

Saferstein, E. (2023), “Entre libros y redes. La batalla cultural de las derechas radicalizadas”, en P. Semán (coord.), Está entre nosotros, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 123-162.

Semán, P. (2007), “Vida, apogeo y tormentos del ‘rock chabón’”, UAM-X México, pp. 241-255.

Semán, P. y N. Welschinger (2023), “Juventudes mejoristas y liberalismo de masas”, en P. Semán (coord.), Está entre nosotros, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 162-202.

Stefanoni, P. (2021), ¿La rebeldía se volvió de derecha?, Buenos Aires, Siglo XXI.

Thompson, E. (1979), “La economía ‘moral’ de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII”, en Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Barcelona, Crítica.

Vila, P. (1996), “Identidades narrativas y música. Una primera propuesta para entender sus relaciones”, TRANS. Revista Transcultural de Música, 2.

■

[\[15\] Para un desarrollo más amplio de las transformaciones de las derechas tras la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial, véase Forti \(2021\), en particular el cap. III.](#)

[\[16\] El éxito de candidatos como Donald Trump, cuya campaña contó con el respaldo entusiasta de estos foros, facilitó el surgimiento de algunos de sus “publicistas” en estos mundos subterráneos como competidores relativamente importantes de los medios de comunicación convencionales.](#)

4. La extrema derecha y los dilemas de la batalla cultural

Moral, individualismo y sentido de pertenencia

Sergio Caggiano

En los últimos años, el ascenso de las derechas extremas en el mundo ha ido de la mano de la creciente importancia que le han dado a la batalla cultural. Esta batalla adopta formas regionales y nacionales específicas y habilita posiciones heterogéneas en cuanto a sus objetivos y temas candentes, desde las creencias religiosas hasta el nacionalismo, pasando por la diversidad sexual, entre otros. El horizonte común que atacan estas derechas es lo que consideran un mainstream global igualitarista, marcado por la agenda de derechos, el feminismo, el antirracismo, el indigenismo y otros movimientos emancipatorios.

Los quiebres democráticos en la historia estuvieron en general precedidos por períodos de incertidumbre económica que generaron intensas batallas culturales (Evans, 2006). En contextos críticos la actividad cultural –es decir, el trabajo permanente de dar sentido a la vida social– se vuelve objeto de disputa. En lo que va del siglo XXI, la economía global ha estado escandida por crisis cada vez más frecuentes y la argentina arrastra años de alta inflación que componen un cuadro de inseguridad y desconcierto propicio para poner en discusión los valores que sustentan la vida común. Están dadas las condiciones para batallas culturales que pueden llegar a poner en juego los principios democráticos.

La bibliografía sobre las derechas contemporáneas ha tratado la hipótesis del “contragolpe cultural” (cultural backlash), según la cual buena parte del crecimiento de las derechas en distintos lugares del mundo se derivaría del hecho

de poner en el centro de la discusión pública valores, ideas y derechos de orden “cultural” del mencionado mainstream igualitarista. La operación no solo conseguiría poner en jaque esos derechos, sino que permitiría disimular avanzadas del capital concentrado sobre los intereses de sectores trabajadores y desposeídos (VV.AA., 2019). En buena medida, discutir los tópicos culturales sería una suerte de coartada para no hablar de los económicos. Citando a uno de los pensadores del contragolpe, Thomas Frank dice que “la premisa básica del movimiento es que la cultura pesa más que la economía como asunto de interés público, que ‘los valores importan más’” (Frank, 2008: 18).

El presente capítulo revisa discursos recientes (2021-2023) de la extrema derecha argentina en torno a la batalla cultural y ofrece líneas interpretativas que ayudan a entender el fenómeno en el contexto político local. Se concentra en intervenciones públicas de Javier Milei, líder del partido La Libertad Avanza (LLA) y candidato presidencial que resultaría electo en noviembre de 2023, y de Patricia Bullrich, dirigente de Propuesta Republicana (PRO) y candidata a presidente por Juntos por el Cambio (JxC), así como en intervenciones públicas y libros de Agustín Laje, uno de los teóricos más relevantes de la “nueva derecha” a nivel local y regional.

En el mapa de las diversas expresiones de la extrema derecha contemporánea en el mundo, la argentina se ubica entre las que “apuestan por un programa marcadamente neo o ultraliberal” (Forti, 2021: 79) y, a diferencia de lo que suele subrayarse del cultural backlash, su ala política habla claramente de economía. Este es el corazón de su batalla cultural, una batalla por los valores morales que estructuran la producción, la distribución y el consumo en el mercado y que configuran una sensibilidad económica neoliberal que pone al individuo en el centro.

Esto ha tenido alcances políticos innegables, empezando por el triunfo electoral en las presidenciales de 2023. La exaltación del individuo, de su esfuerzo y sus preferencias, de su búsqueda de libertad contra una maquinaria estatal percibida como ineficaz y entorpecedora permitió una multitudinaria agregación de voluntades. Al mismo tiempo, en las bases sobre las que se sostienen sus logros y potencialidades parecen anidar tensiones que podrían debilitarla. Desde las mismas filas de la extrema derecha local advierten que esta estrategia podría no ser suficiente para construir una identificación colectiva que dé sustento al proyecto en el largo plazo.

El extremo individualismo de esta extrema derecha, que invita a desentenderse del otro (cuando no a suprimirlo), tiene claros rasgos de lo que se conoce como individualismo autoritario. La pregunta acerca de un sentimiento de pertenencia colectiva se vuelve fundamental, entonces, no solo para calibrar sus probables derroteros, sino también las posibilidades de convivencia democrática futura.

La batalla cultural por la economía

La distinción entre la batalla económica y la batalla cultural suele presentarse de manera rígida. Steven Forti refiere, por ejemplo, que el apoyo electoral de parte de las clases trabajadoras a Donald Trump en los Estados Unidos o a Marine Le Pen en Francia fue atribuido principalmente a causas económicas, sobre todo aquellas ligadas a la globalización. Bornschier y Kriesi, en cambio, subrayan las causas culturales, como el antiuniversalismo. “Son los perdedores de la modernización cultural y no económica”, apuntan, “quienes apoyan a la extrema derecha” (en Forti, 2021: 195).

Interpretaciones de este tipo mantienen separadas áreas de la vida que el materialismo cultural enseñó hace tiempo a mirar articuladamente. Las actividades humanas no pueden ser parceladas en áreas observables, cerradas, aisladas sustantiva u ontológicamente: cultura, economía, política, etc. Es necesario entender que estos campos son indisolubles, más allá de su relevancia relativa en la historia. Siempre estamos ante el proceso social total (Williams, 2000).

Desde este enfoque, el espacio de las batallas culturales no es solamente el de los sistemas significantes especializados (esto es, el arte o los medios de comunicación), sino también el de la construcción de sentido en esos otros ámbitos que acostumbramos a identificar como economía, política, etc. La batalla cultural es, entonces, parte constitutiva de cualquier batalla económica, en la medida en que es una lucha por el significado que tendrán las prácticas de producción, distribución y consumo, la legitimidad o ilegitimidad de las desigualdades o las dinámicas de valorización.

En una entrevista televisiva conjunta de mayo de 2023,[17] Agustín Laje

Arrigoni, uno de los principales ideólogos de la derecha vernácula, con reconocimiento e incidencia internacional, y el entonces candidato presidencial Javier Milei coincidieron en que la batalla cultural dada por la izquierda muchas veces velaba la que debía ser la batalla de fondo contra la pobreza. En referencia al lenguaje inclusivo por parte de lxs jóvenes, Milei amonestó: “Fijate en las cosas en que están y el país se está prendiendo fuego”, y Laje complementó: “Más de trescientos niños menores de cinco años se murieron de hambre en el país [el año anterior], y ¿cuál es la revolución de los jóvenes? La estupidez del supuesto lenguaje inclusivo”.

La extrema derecha argentina da una batalla cultural por la economía. Y en esta puja por el sentido común se vuelve urgente la definición de los asuntos económicos y de la atención que recibirán. De ahí que, junto al lenguaje inclusivo, los entrevistados definan como “estupideces” a “la redistribución de la riqueza” y “la justicia social”. A diferencia de lo que sucede en otros países, donde la introducción de tópicos “culturales” distraería de las discusiones económicas, aquí la batalla cultural no opera como coartada y tematiza directamente el factor económico.

La economía moral del mercado

Una de las formas que toma la batalla cultural por la economía es presentar los problemas económicos como consecuencias de faltas morales. En septiembre de 2023, en la novena edición del Latam Economic Forum, Javier Milei dio una conferencia sobre la dolarización de la economía argentina o, como él mismo tradujo el concepto, la eliminación del Banco Central.[18]

El candidato presentó allí lo que denomina los cuatro “fundamentos” de su propuesta: uno moral, uno técnico, uno instrumental y uno político. El primero está por “sobre todas las cosas”. “Para mí robar está mal”, declaró, interrogando si en el auditorio alguien pensaba lo contrario. Especificó que la emisión monetaria es un robo, un mecanismo de financiamiento para “los políticos ladrones”, y que “el Estado es una organización criminal, cuya característica es que tiene el monopolio de la fuerza”. Los “fundamentos” técnicos e instrumentales expuestos fueron, en rigor, unas pocas declaraciones de principios

neoliberales acerca del dinero, la tasa de interés, el ahorro y la inversión. El fundamento moral volvió reiteradamente a lo largo de la exposición: la emisión monetaria es “una estafa”, etc. Hacia el final, el presunto “fundamento” político fue nuevamente que “los políticos roban”. En síntesis, el argumento moral abrió, sostuvo y cerró la alocución. Unos días después, en una entrevista televisiva,[19] enfatizó que él y su partido vendrían a “acabar con el curro de la política” con “una revolución moral”.

Pero es en su perspectiva acerca de la justicia social, presentada como el peor de los males, donde se advierte con mayor claridad cómo opera la explicación de la economía en clave cultural, moral y religiosa: “La justicia social es (tiene como origen) la envidia, el odio, el resentimiento” y “originalmente la envidia era un pecado capital”. La justicia social, entonces, “es un robo y va contra los mandamientos”, es “una aberración”. Los Estados, encargados de ponerla en práctica, son “una invención de El Maligno”. [20]

También para Patricia Bullrich la batalla cultural pone en la mira los resortes de la economía y, en primer lugar, el Estado de bienestar. Para ella, aliada con Milei tras ser derrotada en la primera vuelta electoral de octubre de 2023, una deformación propia de un país cada vez más pobre es tener “un Estado enorme y una sociedad chiquita”. La batalla cultural debe darse a favor de “la cultura del trabajo, del progreso personal, el orden público, el respeto por lo que cada uno ha ganado en su vida, el respeto por la casa de cada vecino, que no venga nadie a intrusársela...”. Hay que generar, de acuerdo con la dirigente, un “cambio cultural” que termine con “la cultura de la pobreza” que el Estado de bienestar sostendría con los planes y programas sociales.[21]

La verdad y el deseo

Desde mediados del siglo XX diferentes tradiciones de izquierda, el antirracismo, el feminismo y el anticolonialismo impugnaron sustancialismos y objetivismos de distinto orden, muchas veces en términos de libertad. Se refutó que los rasgos biológicos pudieran explicar y justificar desigualdades, que ciertos trazos físicos fundaran clasificaciones sociales y legitimaran o deslegitimaran conductas. Las críticas apuntaron al pensamiento conservador y

de derecha, así como a las corrientes tradicionales de la propia izquierda. Representantes de las extremas derechas contemporáneas han estudiado y comprendido este proceso de impugnación, que es parte de una discusión general sobre el estatuto de la verdad.

Sin contradicciones aparentes, los actores que niegan la existencia del virus causante del covid-19 o sus efectos en la salud, el calentamiento global o la perpetuación de genocidios se permiten, al mismo tiempo, apelar a “la verdad” para poner en entredicho aquellos hechos (virus, calentamiento o genocidios), que pasan a ser presentados como falsas verdades, y echan mano de categorías que la propia izquierda cinceló para calificar a esas “falsas verdades” como “relatos” o “construcciones”.

Por esta línea llegan a sus mayores desvelos en relación con los procesos de identificación social: la autopercepción y la autoadscripción. La nueva derecha defiende la verdad de manera clásica, como adecuación de las palabras y las cosas, como dice Laje. La verdad supone que las personas acuerdan en que existe algo exterior a ellas a lo que pueden referirse. Pero en el mundo contemporáneo, subraya el ensayista, se ha llegado al punto en que “La verdad no existe en torno a ese acuerdo [sino que] está dentro de cada quien. [...] El mundo de la posverdad es una privatización de la verdad, la verdad está dentro de mí”. [22]

Ante la tensión entre la verdad objetiva, producto de un acuerdo social y de la adecuación de las palabras a las cosas, y la verdad subjetiva, privatizada, la nueva derecha opera un doble movimiento. Por un lado, ofrece anclajes a una deriva que puede resultar perturbadora en campos como la identificación sexual, de género (véase el capítulo de Torricella), étnica o racial. El mensaje sería “no tendrás que hacerte cargo de autopercibirte ni tendrás que aceptar la autopercepción de los demás porque la verdad existe y las adscripciones deben ajustarse a ella”. Por otro lado, promete abrir un camino de realización individual que será simplemente el resultado de que cada uno actúe según su deseo en el mercado. Allí sí todos podrán hacer lo que de veras quieren hacer: emprender, maximizar ganancias, reducir costos y consumir. La consigna parece ser, entonces, “autopercibámonos en el mercado”. Cada persona podrá ser una “empresa para sí mismo”, como ha dicho Foucault (2006) en referencia a Schultz (1961). El mercado se ordenará según la confluencia de deseos individuales, que se presumen originales y diáfanos.

Los impulsos individuales están en el corazón de la propuesta económica y política de Milei y LLA. En su conferencia del Latam Economic Forum el candidato explica que el Banco Central no tiene ninguna razón para existir porque la cantidad de dinero dentro de una economía debería estar determinada por los individuos. La demanda de dinero es, argumenta, espejo del “sendero de consumo elegido por cada uno de los individuos” a lo largo de su vida, sendero que se construye en función de parámetros profundos dados por las preferencias, la tecnología y las dotaciones. Si los impulsos individuales no pueden realizarse y converger en un proceso de cooperación social es porque interceden los políticos. Apoyado en Hayek, su autor de cabecera, el conferencista lanza una pregunta: “¿Un político sabe la preferencia de cada uno de ustedes y de cada uno de los que va a llegar a este mundo sobre la situación de los bienes presentes y futuros?”. Como no es posible responder positivamente a la pregunta formulada de este modo, resulta que los políticos deberían abstenerse de intervenir.[23] Los impulsos y preferencias individuales deberían y podrían equilibrarse naturalmente en el mercado (la cita de autoridad aquí es, previsiblemente, Adam Smith).

Patricia Bullrich también trabaja sobre la articulación de la verdad, el individuo, el deseo y la economía. En su presentación en la Escuela Nacional de Dirigentes de 2021, a los disvalores que atribuye al kirchnerismo, como el desprecio a la educación y el trabajo, le opone “decir la verdad”. Señala que hay que dar “una verdadera batalla cultural” para “ganar con nuestras verdades”: la meritocracia, el progreso personal, la propiedad privada, la libertad versus el control, la cultura del trabajo versus la cultura asistencial. “Como le digo a los jóvenes –advierde–, tenemos que sacarlas (las verdades) del placard y no esconder lo que nosotros pensamos”.[24] La piroeta retórica es tan relevante como el contenido que enuncia. La apropiación de la metáfora del placard produce un desplazamiento de la politización del deseo sexual a la mercantilización del deseo económico. La verdad que hay que sacar del placard es la valorización del capital individual y la competencia en el mercado. El deseo individual podrá proyectarse y realizarse en la economía neoliberal.

La batalla cultural por la economía, en resumen, tiene dos trincheras principales: la moralización de la economía y la articulación de la verdad y el deseo en el mercado. Por un lado, se procura instalar una justificación moral para la radicalización del proyecto neoliberal. Los políticos y la política están en la mira porque, en última instancia, es el aparato de Estado mismo el que se busca reducir a su mínima expresión. “Los políticos roban” es el primer paso de un

argumento mayor contra el Estado: tanto la cobertura social como los programas sociales y la garantía de derechos sindicales son robos. La justicia social es un robo que, además, deriva de un pecado, la envidia.

La otra trinchera es la formación de sensibilidades económicas neoliberales. Que cada individuo sea lo que quiera (y pueda) en el campo de la economía desregulada, en virtud del juego de la oferta y la demanda. Los valores son los impulsos y preferencias individuales, que son presentados como autoevidentes. La subjetividad neoliberal se despliega en un mercado ideal. Para la extrema derecha argentina no hay fuerzas sociales que moldean los deseos. Cada quien y su esfuerzo en el mercado para obtener renta por sus capitales individuales; cada quien y sus preferencias en el mercado para obtener satisfacción en el consumo. Dos trincheras y una misma batalla cultural para instalar un sentido común sobre la realización individual neoliberal.

Una batalla cultural en singular

Aunque los dirigentes de la extrema derecha no refieren estrictamente a clases sociales, proponen una clasificación social. Javier Milei popularizó el término “casta”, como categoría moral, para rechazar a los políticos, que serían por definición delincuentes y pecadores, y se situó por fuera del grupo.

¿Quién queda del otro lado?, ¿quiénes conforman el sector social al que el discurso de la derecha construye positivamente, su prodestinatario, que comparte ideas y valores, y su paradestinatario, a quien quiere seducir (Verón, 1987)? Las víctimas de la casta –según Milei– o del kirchnerismo –según Bullrich– son sujetos individuales. Por eso en la citada defensa de Bullrich de las libertades individuales, la dirigente insiste en lo que “cada uno ha ganado” o en “la casa de cada vecino”. Milei, por su parte, encuentra una figura sintética en el “pagador de impuestos argentino”, [25] a quien declara defender. El “nosotros” al que le habla la derecha resulta de la agregación de individuos independientes, autónomos, cuya libertad se sostiene en la propiedad y en la contribución impositiva.

El Estado –encarnación y herramienta de la casta política– es presentado

directamente como expropiador de la riqueza producida por el individuo pagador de impuestos. “Andá al Viejo Testamento –invita Milei– y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado: te va a sacar a tus hijos, te va a sacar a tus hijas, te va a sacar tus mejores campos, te va a sacar tus burros, y te va a esclavizar, te va a hacer un esclavo” (cursivas mías).[26]

Por vía de los impuestos, la casta o el Estado se apropian de un plus de esfuerzo de los individuos. La derecha lanza una interpelación a quienes asumen que dependen de su propio esfuerzo, desde profesionales de altos ingresos integrados al mercado global de servicios o finanzas hasta trabajadores informales de plataformas en línea de delivery o traslados, pasando por profesionales liberales tradicionales, y puede extenderse incluso a sectores que perciben beneficios del Estado de bienestar. Cuando la cobertura estatal se encuentra naturalizada, se ve debilitada por crisis económicas o se percibe como una maquinaria difícil de descifrar, ineficiente o insuficiente, la experiencia del Estado aparece asociada exclusivamente al control, la regulación y el tributo. En estos contextos es posible sentir que esa maquinaria, que obstruye el disfrute de nuestro esfuerzo personal, se sostiene, como han dicho y repetido los medios masivos hegemónicos durante años, “con la mía” o “con la tuya”.

De la apropiación del plus de esfuerzo por parte del Estado también participan, desde este punto de vista, quienes se benefician indirectamente de ella: los que piden, los que reclaman y los ñoquis. El perfil del nosotros individual de la derecha adquiere sus rasgos en contraposición con esos grupos o colectivos. El individuo que se las arregla solo contrasta con quienes son sindicados como débiles, haraganes o violentos. Los que piden cortan las calles y entorpecen la libre circulación. Los que reclaman “tiran piedras”. Los ñoquis se aprovechan de un puesto laboral en el Estado sin contraprestación. Tanto en referencia a sus presuntas acciones como en la simple descalificación (los que se creen vivos, los pícaros, los manipulados que son llevados de las narices, los inútiles, etc.), son grupos definidos moralmente.

No sorprende que la única categoría de adscripción plural que utiliza la derecha sea moral: “gente de bien” o “argentinos de bien”. Cuando se hace referencia a “los que trabajan” no es en términos funcionales, sino en contraste moral con los que roban o dependen del Estado. De manera similar se utiliza “vecinos”. Son categorías vagas y abarcadoras que, en principio, no refieren a características sustantivas ni exigen más credenciales previas que vivir del esfuerzo propio. Para pertenecer a ellas no haría falta tener un color de piel particular, vivir en un

barrio determinado, hablar de cierta forma, disponer de capital o ingresos.

Hay, sin embargo, indicaciones claras acerca de quiénes son los débiles, haraganes y violentos, esa alteridad de la derecha radical argentina que permite caracterizar mejor a su nosotros individual. Desde muchos meses antes de las elecciones de 2023 se señaló a los piqueteros (manifestantes) y planeros (beneficiarios de planes sociales), que extorsionan a los gobiernos; a los trabajadores sindicalizados, que no quieren trabajar y afectan la productividad; a los indígenas (comúnmente el pueblo mapuche), que inventan motivos para reclamar; a los inmigrantes de la región, que se abusan de los bienes y servicios nacionales. Fueron sindicatos como ñoquis del Estado principalmente trabajadores de la educación y la ciencia y de áreas ligadas a género y diversidad, quienes tendrían a su cargo el adoctrinamiento ideológico de “nuestros niños y jóvenes”.

Otras indicaciones se desprenden de la apelación a referencias históricas, un aspecto clave en la construcción de identidades sociopolíticas. La extrema derecha argentina comparte con derechas contemporáneas e históricas de otros países la remisión a un pasado supuestamente grandioso que se proponen revivificar (Elias, 2009; Forti, 2021). Bullrich y Mauricio Macri han referido numerosas veces a un pasado glorioso, fechado algo indefinidamente en un momento anterior al peronismo. Milei, como en otros asuntos, se ha permitido ser más audaz. El líder de LLA suele prometer una Argentina que “en treinta y cinco años va a volver a ser potencia” y, en algunas ocasiones, aunque sin mucha precisión, ha sugerido en qué período histórico el país lo habría sido. En la entrevista televisiva ya citada de 2021 evocó, como en otras oportunidades, a Juan Bautista Alberdi, cuyas ideas de libertad llama a seguir. Estas ideas, que inspiraron la primera Constitución Nacional (1853) y que, subraya Milei, se pusieron efectivamente en marcha años después, ayudaron a que “en treinta y cinco años pas[e]mos de ser un país de bárbaros a ser el país más rico del mundo”.^[27] El final de esa edad dorada está claro: Milei suele indicar que la Argentina abrazó por primera vez el populismo en 1916, con la llegada de Yrigoyen a la presidencia. La debacle habría comenzado, entonces, con el primer gobierno democrático, resultado de las primeras elecciones con voto masculino secreto y obligatorio.

¿Qué espacio temporal abarcan los treinta y cinco años del presunto apogeo?, ¿1880-1915?, ¿1865-1900? En cualquier caso, es un período en el que suceden transformaciones demográficas, administrativas, políticas y culturales

trascendentales (Caggiano, 2023): la llamada “Conquista del Desierto”, es decir, el avance militar sobre territorios indígenas, que incluyó asesinatos y desplazamientos forzados masivos; la disminución en términos absolutos y relativos de la población negra, dados los altos índices de mortalidad y bajos de fertilidad; alta mortalidad de varones en guerras y suspensión de ingresos al país tras la abolición de la trata y el llamamiento a la inmigración europea de 1876, con su notable consumación e impacto demográfico en los inicios del siglo XX. Es el período en el que se institucionalizó el Estado-nación moderno y se consagró una narrativa oficial acerca del origen blanco y europeo de su población. Estos datos dejan más claro qué significa haber dejado de ser “un país de bárbaros”.

La extrema derecha argentina hilvana una alteridad contemporánea e histórica en la que incluye heterogéneos sectores que no se ajustarían a los parámetros de la civilización y la modernidad deseadas: bárbaros, negros, indios, bolitas, piqueteros, villeros, planeros y ñoquis del Estado. El hilo que opera la aglutinación es moral. El discurso de la derecha trata cuestiones de clase, etnicidad y raza en términos de debilidad, haraganería y violencia.

Como contraparte, el sujeto al que le habla la derecha sería un individuo que se ha forjado a sí mismo en base a su esfuerzo. Frases hechas de uso cotidiano dan cuenta de las cuerdas que ese discurso busca tocar: “No le debo nada a nadie”, “nadie me lleva de las narices”. El pagador de impuestos argentino lleva las riendas de su vida y elige su adhesión política como elige sus consumos. No quiere ser robado por los políticos, adoctrinado por el Estado o abusado por los débiles o por los violentos. El sujeto al que se dirige la derecha puede, eventualmente, agregarse en categorías sociales como “gente de bien”. La clave de adscripción moral e individual deja las puertas abiertas para quienquiera que busque desmarcarse de aquellas categorías rechazadas. Se promueve por la negativa la agregación de individuos decentes.

La extrema derecha se monta sobre un proceso de individualización que, a su vez, empuja y ahonda, postulándolo como un horizonte político deseable. Entroniza el esfuerzo personal y la propiedad de uno mismo, rasgos característicos de un “individualismo autoritario” (Viotti, 2020) no exento de crueldad (véase el capítulo de Ipar). Su contracara son, a veces, colectivos sociales marcados en términos morales y en apenas velados términos clasistas y etnoraciales y, a veces, la sola idea de la pertenencia colectiva.

Ataduras y pertenencias

La moralización de la economía y la subjetivación neoliberal configuran una sensibilidad económica que conecta con una forma extendida de vivir los logros individuales como resultado exclusivo del esfuerzo propio. Pero la batalla cultural no puede reducirse al sentido de la economía, a pesar de los ingentes esfuerzos de extender la lógica económica (costo-beneficio, maximización de ganancias, formación y valorización de capital) a todas las áreas de la vida. La producción y reproducción social no puede confundirse con la producción económica (Williams, 2000) y las elecciones políticas no se derivan automáticamente de las posiciones en el sistema económico. De ahí la relevancia de los procesos de construcción de identidades y sentimientos de pertenencia.

El mismo Laje ha llamado la atención sobre este punto con preocupación. Cabal ideólogo de la nueva derecha y buen lector de Gramsci, más cercano al polo conservador que al neoliberal (Kessler, Vommaro y Paladino, 2022), Laje advierte críticamente las limitaciones de la derecha para construir identidades socioculturales sólidas que puedan ser el correlato de posiciones políticas colectivas. Entre las distintas expresiones de derecha, dedica especial atención a las dificultades del libertarismo o liberalismo de derechas. Para esta corriente – dice– el campo cultural queda reducido a “su registro moral” (Laje, 2022: 456). El economicismo constitutivo del libertarismo “lleva a concebir la batalla cultural tan solo como una disputa intelectual por las valoraciones sociales de los sistemas económicos” (Laje, 2022: 459).

“Al libertario –sostiene Laje– se le hace difícil concebir que exista algo llamado ‘identidad colectiva’ [...] porque su economicismo a veces va de la mano de un individualismo metodológico, ontológico y moral que a duras penas serviría para pensar políticamente algo tan colectivo como un ‘nosotros’” (Laje, 2022: 463). La figura del individuo decente y esforzado que se guía por sus preferencias personalísimas en el supermercado de la vida podría no bastar para amalgamar una pertenencia común y una identificación compartida duradera.

El “ellos” de la derecha extrema argentina no tiene como contracara, en efecto, un “nosotros” colectivo asentado. Enfrentado a “ellos” (los que piden, los que

tiran piedras... haraganes, avivados, violentos... negros, cabezas, planeros), el pagador de impuestos reivindica su logro individual. Cansado de la expropiación y regulación asfixiante del Estado, puede sumarse de a uno a otros pagadores de impuestos.

El discurso de esta corriente no excluye solamente a grupos tachados por sus rasgos morales (y por sus rasgos etnoraciales y de clase). De manera complementaria, excluye también posibles colectivos de identificación para sus propios adherentes (Verón, 1987). Esto sucedió, por ejemplo, cuando Milei criticó con vehemencia a la Iglesia católica en la figura del papa, muy popular en el país, y lo acusó de ser “el representante del Maligno en la Tierra” y de “impulsa[r] el comunismo”. [28]

Más significativo aún es que, fuera de la referencia al supuesto pasado grandioso, la extrema derecha argentina no recurre a apelaciones nacionalistas o patrióticas, como han hecho otras expresiones de derecha a lo largo del siglo XX en la Argentina o lo que va del XXI en el mundo. De hecho, las referencias de sus dirigentes a temas de gran adhesión popular, como el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas, han ido más bien en dirección contraria. La declaración de Milei, ya en funciones como diputado nacional, según la cual se sentía “muy identificado [...] con Margaret Thatcher” [29] y otras semejantes generaron críticas de excombatientes, periodistas, dirigentes políticos y sociales. Asimismo, las reacciones que produjo el exabrupto de Bullrich acerca de la pertinencia de entregar las Malvinas como pago por vacunas para tratar el covid-19 la obligaron a retractarse en sus redes sociales. [30]

La derecha promete libertad en la desatadura. Desamarra los lazos que obstaculizarían la expresión plena de las preferencias y las voluntades individuales. Hasta el sentimiento de pertenencia más básico de los Estados modernos, la nacionalidad, es puesto en entredicho. Los candidatos y candidatas de este espacio, como muchos periodistas de medios hegemónicos, han insistido en una broma que devino lugar común: “la única salida para los problemas de la Argentina está en Ezeiza”, y en ocasiones Milei se preguntó si “los argentinos” eran “una suerte de subhumanos”. [31] El discurso va del desdén a la “autodenigración nacional” y genera “el caldo de cultivo perfecto para ejercicios de distanciamiento subjetivo respecto de la comunidad y de todo sentido de lo colectivo que exacerban la intolerancia frente al otro y despejan el camino al individualismo autoritario” (Adamovsky, 2023: 105).

Como correlato, tanto Milei como Bullrich han cargado las tintas sobre los adversarios, con ataques verbales virulentos a quienes llegaron a definir como “enemigos”. [32] Se trata de una enfática concentración en el contradestinatario (aquel a quien el enunciador se opone) en detrimento de la apelación al pro o al paradestinatario (Verón, 1987).

La hipérbole del antagonismo toma tres formas. La primera es el trato ultrajante hacia los políticos de otros partidos. Milei ha hecho de ello casi un estilo. Vale como ejemplo una entrevista en la que, en el breve lapso de un minuto, se refirió a cuatro dirigentes políticos de otros espacios calificándolos respectivamente de “imbécil”, “parásito”, “abortero hijo de puta”, “estúpido”, “con déficit de coeficiente intelectual”, “inútiles”, “inservibles que no sirven para nada”, “pelotudo”, “tuerto”, “bipolar”. [33] La segunda forma es la permanente utilización, tanto por parte de Milei como de Bullrich, de términos del orden del aniquilamiento para referir a los oponentes: “exterminar”, “desaparecer”, “terminar con ellos para siempre”, “destruirlos para que no vuelvan más”. La tercera es la performance de la fuerza y la violencia. Los candidatos complementaron su discurso con objetos y vestimentas acordes. Bullrich se ha ataviado con indumentaria militar varias veces durante su carrera política y Milei ha llevado esta tendencia a la exasperación con gritos, gruñidos, rugidos y la motosierra en alto ante sus seguidores.

Interpelar al individuo y cifrar la realización personal en el despliegue del esfuerzo propio y de las propias preferencias marida bien con desdeñar posibles colectivos de identificación y exaltar hasta el paroxismo el enfrentamiento con los “enemigos”. Desasir, desunir, desligar... La extrema derecha se ha construido y ha logrado éxito electoral en la absolutización de una libertad negativa simple. Esto puede tener efectos de coyuntura cruciales, como ganar una elección presidencial. Pero también podría generar “identidades políticas debilitadas, perdidas, sin guía” (Laje, 2022: 466).

De ahí una inquietud sobre el porvenir: ¿podrá la extrema derecha argentina construir desde el poder político un sentimiento colectivo más allá de la oposición y el desmarque?, ¿apostará por una identificación nacional, religiosa o etnorracial que dé consistencia y durabilidad a su proyecto?, ¿podrá considerar, como solicita Laje, “el pathos de lo político, en virtud del cual las identidades colectivas se amarran y se mantienen de pie”? (Laje, 2022: 462). En la citada entrevista televisiva a Milei y Laje de mayo de 2023, a propósito de la batalla cultural, quien sería más tarde presidente de la Argentina le preguntó al teórico:

“¿Aprendí bien, no?”. Ambos rieron, se dieron la mano y la entrevista derivó hacia otros temas. El interrogante da cuenta de la inspiración y acaso del asesoramiento, pero también de la tensión y la duda acerca del efectivo aprendizaje.

La inquietud sobre el modo en que la derecha en el gobierno podría intentar construir un “nosotros” que consolide la sumatoria de individuos abre una segunda pregunta clave acerca del vínculo que propondrá entre este “nosotros” y su alteridad. Estamos ante un enigma fundamental sobre el futuro de la democracia en la Argentina.

Bibliografía

Adamovsky, E. (2023), *Del antiperonismo al individualismo autoritario. Ensayos e intervenciones (2015-2023)*, San Martín, Unsam Edita.

Caggiano, S. (2023), “Racismo a la argentina: imaginarios en tensión en una sociedad blanca llena de negros”, *Tabula Rasa*, 47, pp. 135-159.

Elias, N. (2009), *Los alemanes*, Buenos Aires, Nueva Trilce.

Evans, R. J. (2006), *La llegada del Tercer Reich*, Barcelona, Península.

Forti, S. (2021), *Extrema derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla*, Madrid, Siglo XXI.

Foucault, M. (2006), Seguridad, territorio, población, Buenos Aires, FCE.

Frank, T. (2008), ¿Qué pasa con Kansas? Cómo los ultraconservadores conquistaron el corazón de los Estados Unidos, Madrid, Acuarela y A. Machado.

Kessler, G., G. Vommaro y M. Paladino (2022), “Antipopulistas reaccionarios en el espacio público digital”, Estudios Sociológicos de El Colegio de México, 40(120), pp. 651-692.

Laje, A. (2022), La batalla cultural. Reflexiones críticas para una nueva derecha, México, HarperCollins.

Schultz, T. W. (1961), “Investment in Human Capital”, The American Economic Review, 51(1), pp. 1-17.

Verón, E. (1987), “La palabra adversativa”, en El discurso político. Lenguajes y acontecimientos, Buenos Aires, Hachette.

Viotti, N. (2020), “El individualismo autoritario”, 7 Ensayos. Revista latinoamericana de Sociología, Política y Cultura, 1, pp. 101-114.

VV.AA. (2019), “A Backlash against Liberalism? What the Weimar Republic Can Teach Us about Today’s Politics”, International Journal for History, Culture and Modernity, 7(1), pp. 1-17.

Williams, R. (2000), *Marxismo y literatura*, Barcelona, Península.

■

[17] [Viviana, La Nación+, LN+, 3 de mayo de 2023, <www.youtube.com/watch?v=B3L26A8aCGU>](https://www.youtube.com/watch?v=B3L26A8aCGU).

[18] [Infobae, 7 de septiembre de 2023, <www.youtube.com/watch?v=f_QVwuTbCxQ>](https://www.youtube.com/watch?v=f_QVwuTbCxQ).

[19] [La Cruel Verdad, América 24 \(A24\), 14 de septiembre de 2023, <www.youtube.com/watch?v=kA8JSoR1HIs>](https://www.youtube.com/watch?v=kA8JSoR1HIs).

[20] [Nada Personal, Canal 9 \(El nueve\), 10 de noviembre de 2020, <www.youtube.com/watch?v=vYQfxvscxrs&t=907s>](https://www.youtube.com/watch?v=vYQfxvscxrs&t=907s).

[21] [Nuestros Valores, Escuela Nacional de Dirigentes PRO, 13 de abril de 2021, <www.youtube.com/watch?v=WTw6Cx7jyJk>](https://www.youtube.com/watch?v=WTw6Cx7jyJk).

[22] [Tu papel en la batalla cultural, Newmedia, Universidad Francisco Marroquín, 6 de marzo de 2023, <www.youtube.com/watch?v=WfzOuLLogTmM>](https://www.youtube.com/watch?v=WfzOuLLogTmM).

[23] [Infobae, 7 de septiembre de 2023, <www.youtube.com/watch?v=f_QVwuTbCxQ>](https://www.youtube.com/watch?v=f_QVwuTbCxQ).

[24] [Nuestros valores, cit.](#)

[25] [Las cosas claras, LN+, 26 de junio de 2021, <www.youtube.com/watch?v=rWxx0NQUmns&t=599s>](https://www.youtube.com/watch?v=rWxx0NQUmns&t=599s).

[26] [Nada Personal, Canal 9 \(El nueve\), 10 de octubre de 2020, <www.youtube.com/watch?v=vYQfxvscxrs&t=907s>](https://www.youtube.com/watch?v=vYQfxvscxrs&t=907s).

[27]

Las cosas claras, cit.

[28] [Nada Personal, Canal 9 \(El nueve\), 10 de octubre de 2020,](https://www.youtube.com/watch?v=vYQfxvscxrs&t=907s)

[vYQfxvscxrs&t=907s](https://www.youtube.com/watch?v=vYQfxvscxrs&t=907s)>.

[29] [“Javier Milei: “Yo me siento muy identificado, en términos históricos, básicamente con Churchill, con Reagan y con Margaret Thatcher”, La Nación, 19 de junio de 2022, <www.lanacion.com.ar/politica/una-alusion-de-javier-milei-a-margaret-thatcher-genero-revuelo-en-las-redes-sociales-nid18062022>.](https://www.lanacion.com.ar/politica/una-alusion-de-javier-milei-a-margaret-thatcher-genero-revuelo-en-las-redes-sociales-nid18062022)

[30] [“Patricia Bullrich dijo que se podrían ‘haber dado’ las Islas Malvinas a cambio de vacunas y debió disculparse”, Clarín, 27 de abril de 2021, <www.clarin.com/politica/patricia-bullrich-dijo-podrian-dado-islas-malvinas-cambio-vacunas-debio-disculparse_0_zBJqSgxMX.html>.](https://www.clarin.com/politica/patricia-bullrich-dijo-podrian-dado-islas-malvinas-cambio-vacunas-debio-disculparse_0_zBJqSgxMX.html)

[31] [Las cosas claras, LN+, 24 de julio de 2021, <www.youtube.com/watch?v=GZU0sA1pEzU>.](https://www.youtube.com/watch?v=GZU0sA1pEzU)

[32] [“Javier Milei: “A Sergio Massa lo percibo como un enemigo”, 8 de noviembre de 2023, <www.infobae.com/politica/2023/11/08/javier-milei-a-sergio-massa-lo-percibo-como-un-enemigo>.](https://www.infobae.com/politica/2023/11/08/javier-milei-a-sergio-massa-lo-percibo-como-un-enemigo)

[33] [“Javier Milei: “La batalla cultural no puede llegar a buen puerto sin una contraparte política”, Break Point, 11 de enero de 2021, <www.youtube.com/watch?v=r1cKv8ckPbI>.](https://www.youtube.com/watch?v=r1cKv8ckPbI)

5. Derecha en movimiento

Dinámicas de la conflictividad en la Argentina del siglo XXI

Julián Rebón, Agustina Súnico

Introducción

Patricia Bullrich y Javier Milei se saludan estrechando sus manos ante las cámaras de televisión y de los teléfonos celulares. Los rodea una multitud de manifestantes que corean “¡Viva la Patria!”. El escenario de este encuentro es una movilización cuya reivindicación aglutinadora es el rechazo al denominado “Vacunatorio VIP”, en febrero de 2021, segundo año de la pandemia de covid-19. Bullrich, una figura de larga trayectoria, proviene de un partido consolidado del sistema político; Milei, con una notoriedad pública mucho más reciente, es el líder de una fuerza emergente.

La confluencia de ambos expresó un proceso de radicalización de las derechas y su legitimación pública, que adquirió potencia y visibilidad en el marco del ciclo de movilización antigubernamental durante la pandemia. Dos años después, ambos ocuparon las principales candidaturas presidenciales de las fuerzas opositoras al entonces oficialismo, Unión por la Patria. Y ambos advirtieron la necesidad de volver a las calles, en el caso de ganar la presidencia, para imponer su programa de gobierno. En lo que concierne a Bullrich, esto formó parte incluso de su primer spot de campaña: “Fuerza, porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse, más que en la teoría económica, en la calle. Ya vimos

con qué agresividad se resiste al cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada”.

En este capítulo abordaremos las dinámicas de conflictividad social en el proceso de radicalización y ascenso de las derechas. Luego de trazar un contexto histórico y global, indagaremos el lugar que ocupa la movilización en sus repertorios de acción.

Radicalización de las derechas y crisis democráticas en oleadas

Hacia fines del siglo XX, la democracia liberal tendía a ser hegemónica en el mundo por primera vez en la historia. Sin embargo, sería difícil afirmar que se trató del siglo de la democracia. Por el contrario, la “era de los extremos” –como la caracterizó Eric Hobsbawm– estuvo marcada por confrontaciones sistémicas en las que la democracia alternó y compitió con otras formas políticas.

La radicalización de las derechas desempeñó un papel destacado en distintas oleadas de crisis de las democracias. El ascenso del fascismo/nazismo en el período de entreguerras es una expresión paradigmática. Ambos parten de escenarios de crisis, con alta politización, movilización y polarización de las sociedades (Franzosi, 2013) y presencia de actores antisistema en espectros opuestos del arco político, incluidas las expresiones político-militares. Ante los avances reales o potenciales de la clase trabajadora y las fuerzas de izquierda, se produce la reacción de las clases dominantes y del Estado. Los fascismos apelaron a un nacionalismo beligerante de tipo social-nativista que prometía un cambio de estructuras y un nuevo orden corporativo como alternativa al liberalismo y el comunismo. Su dinámica de desarrollo adoptó repertorios típicos de los movimientos sociales, combinados con la violencia política y la competencia electoral. En los casos de Italia y Alemania, arribaron al gobierno “institucionalmente” mediante nombramientos por las autoridades constituidas, y desde allí promovieron el colapso de la democracia.

En el Cono Sur de América Latina, los años sesenta y setenta fueron testigos de otra ola de crisis de la democracia, desarrollada mediante formas rupturistas vía golpes de Estado protagonizados por las Fuerzas Armadas con diversa

participación civil. El golpe en Brasil de 1964, el de 1973 en Chile o el de 1976 en la Argentina son ejemplos señeros. En el contexto de la Guerra Fría y la radicalización hacia la izquierda en América Latina luego de la Revolución Cubana, encontramos experiencias de gobiernos reformistas y procesos de movilización y radicalización en los sectores medios y populares, que incluyeron la presencia de organizaciones armadas. Ante situaciones de crisis, la parálisis política de los gobiernos institucionales fue resuelta con golpes de Estado que emprendieron procesos de reestructuración societal, así como de represión y exterminio de la disidencia política. Su saldo fue la interrupción de las tendencias previas al empoderamiento y la radicalización de las clases subalternas. El colapso de la democracia fue una respuesta generalizada a la amenaza de cambio producto de la prolongación de las luchas populares y las experiencias de gobiernos reformistas.

Una similitud entre la oleada fascista y las dictaduras latinoamericanas es el empoderamiento de los sectores populares, aunque no se encontraban en su momento más alto de protagonismo en el espacio público. Las fisuras en este campo alimentaron el avance de las derechas, que incluso desplegaron procesos selectivos de exterminio desde el Estado o desde instancias paramilitares. No obstante, en ningún caso es posible sentenciar que las fuerzas populares estaban derrotadas estratégicamente ni desarmadas en su capacidad de lucha. Solo con el acceso al gobierno y el empleo de la fuerza del aparato del Estado las correlaciones de fuerza cambiaron en lo estructural. El colapso de la democracia fue entonces, también, el derrumbe de la organización popular.

En el siglo XXI encontramos otra ola de radicalización en las derechas. Fuerzas de este signo llegan al gobierno vía elecciones y toman medidas que ponen en crisis el funcionamiento democrático sin terminar en el colapso pleno. Estos procesos son heterogéneos y sus características se nutren de los contextos de origen. Van desde aquellos que emergen como respuesta a gobiernos progresistas y cambios en las relaciones de género, como en Brasil (Bringel, 2017), hasta los que son producto de crisis de la hegemonía neoliberal poscomunista, como en Hungría y Polonia; de cambios demográficos y políticos, como en los Estados Unidos; de la crisis económica y de la secularización, como en Turquía (McCoy, Rahman y Somer, 2018); o de la crisis del consenso de posguerra, como en El Salvador, por las expectativas incumplidas de inclusión social y fin de la violencia.

Más allá del contenido autoritario-conservador en el eje de polarización que

define como antagonista al establishment o la “casta”, estas fuerzas no responden a los mismos clivajes. El papel que ocupan las dinámicas de conflictividad social también difiere, pues no están signadas necesariamente por un ciclo ascendente de organización, movilización y radicalización de los sectores populares. Lo que prima, más bien, es una cierta debilidad organizativa de estos sectores. La radicalización no se da hacia ambos “extremos”, sino solo hacia la derecha del espectro político. Antes que una nueva era de los extremos, parece la era de un extremo: el derecho. En algunos casos, y así lo ejemplifican las tomas de instituciones políticas en Brasil y los Estados Unidos como expresión de desconocimiento de los resultados electorales, la acción directa se incorporó al repertorio luego de atravesar intensos ciclos de protesta. A diferencia del fascismo, el carácter movimientista no se destaca en todos los casos. Tampoco hay usos significativos de la violencia política colectiva como en experiencias del pasado. En ocasiones, aparecen eventos de este tipo, como en los Estados Unidos, pero con niveles organizativos muy desagregados y solo a la derecha del espectro político. A continuación, abordaremos el rol de la movilización en el reciente ascenso de la extrema derecha en la Argentina.

La polarización en las calles

Arriba y a la derecha: la protesta antikirchnerista

No vuelven más, no vuelven más.

Cántico en la “Marcha por la Democracia” (2017), en confrontación con el kirchnerismo y su proclama “Vamos a volver”

La acción colectiva y la protesta ocupan un lugar destacado en la historia de nuestro país. Tanto es así, que el estallido social de 2001 marcó, en términos políticos, el inicio del siglo XXI argentino. El período emergente se caracterizó por la presencia masiva, heterogénea y con significativo impacto político de la

protesta social.

En la Argentina reciente cobra progresiva notoriedad el desarrollo de un campo “antipopulista” en la protesta, situado más “arriba” –en su composición social– y más a la “derecha” –en su posicionamiento político– que las formas predominantes de acción colectiva. Se trata de un conjunto de acciones en rechazo a medidas de gobiernos percibidos como populistas y autoritarios, o “kirchneristas” en términos de categoría nativa. Si bien la movilización antipopulista cuenta con antecedentes, recién en este período se desarrolla como componente recurrente y masivo de la protesta y, en su seno, convergen distintas tradiciones de las derechas autóctonas (Semán, 2021; Morresi, Saferstein y Vicente, 2021).

La configuración de este campo puede rastrearse en un conjunto de protestas contra el ciclo político de gobierno conformado por los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (CFK) entre 2003 y 2015, quienes impulsaron una agenda reformista de orientación nacional-popular y crítica de la herencia neoliberal que fue estructurando, en sus sucesivas confrontaciones con sectores económicos y mediáticos, un proceso de polarización. El retroceso político e institucional de sectores de las clases dominantes condujo a la movilización de masas para defender intereses que percibían amenazados.

El “conflicto del campo”, ocurrido en 2008, politizó, movilizó y polarizó a la sociedad como ningún otro desde el inicio del siglo. Los propietarios rurales vivieron el aumento de la alícuota a la exportación de granos como una planificada confiscación de la ganancia. Las principales entidades corporativas del sector se unificaron en la denominada “Mesa de Enlace” y configuraron un movimiento social cuya principal acción colectiva se centró en la no comercialización de granos ni carnes y los controles de las rutas a través de “cortes”. El conflicto, que excedió el ámbito agropecuario, activó la oposición social al gobierno y contó con el respaldo de partidos de oposición: el PRO, la Coalición Cívica, sectores del radicalismo e incluso de izquierda.

Cada fuerza dividió transversalmente la pirámide social. Mientras “el campo” tuvo su base social en las capas medias y altas, el gobierno basó su movilización en los trabajadores organizados gremialmente y los pobres de las periferias urbanas. Los cacerolazos en respaldo al campo frente a los bombos del peronismo fueron el símbolo de la disputa. En un país tradicionalmente urbano, la lucha contra las retenciones agrarias alineó al conjunto de la población y

conformó una dualidad de poder que paralizó y desabasteció a las principales ciudades, con lo que se logró la derogación de la medida (Antón y otros, 2011).

El segundo gran momento de este tipo de movilización es el ciclo de cacerolazos iniciado en 2012, luego de la reelección de CFK con más del 54% de los votos en 2011. Sus expresiones más masivas fueron el 13 de septiembre y el 8 de noviembre de 2012, y el 18 de abril de 2013. Las convocatorias eran lanzadas en redes sociales por grupos antikirchneristas, autodefinidos como “apartidarios”, y replicadas por los medios de comunicación opositores. La estructura de movilización presentó un carácter individualizado y de pequeños grupos informales, sin presencia pública de colectivos organizados. Se presentó como “espontánea y ciudadana” y reivindicó la autonomía de la participación frente al “choripán” y los “micros”, entendidos como mecanismos de activación de los sectores populares. Sin embargo, en el transcurso del ciclo emergió la presencia abierta de grupos organizados y partidarios, entre ellos el PRO.

En esta ocasión no hubo un reclamo específico articulador sino un abanico de demandas, entre ellas el rechazo al cambio de la Constitución que habilitaría una nueva reelección presidencial, la inflación, las cadenas nacionales de CFK, los controles que limitaban la compra de divisas y la corrupción. Esta diversidad fue articulada por su antagonismo al gobierno nacional –y a la fuerza política que lo constituía– percibido como populista, corrupto y antirrepublicano, en una cadena equivalencial negativa que unificaba a los agraviados.

A pesar de su masividad, las movilizaciones no lograron trascender el núcleo duro de la oposición social al gobierno centrado en las capas medias-altas de la población (Gamallo, 2020). Tampoco conformaron un movimiento social en un sentido pleno, dada la ausencia de núcleos organizativos públicos. Su rol central fue mantener movilizados a los sectores antagonistas al gobierno, desgastar su triunfo electoral y obstaculizar la posible consolidación de un proceso hegemónico dada la evidente debilidad de la oposición política.

Un tercer momento radica en la continuidad de este tipo de movilizaciones durante el ciclo de Cambiemos. El gobierno de Mauricio Macri, con una agenda promercado y una base social polar a la del kirchnerismo, promovió cambios que fueron resistidos masivamente desde las calles por diversos sectores. Cuando la iniciativa parecía hegemónica por la oposición, en marzo de 2017 surgió desde las redes sociales y con difusión en los medios de comunicación la convocatoria a una movilización en “Defensa de la democracia”. Esta se materializó el 1º de

abril y se centró en la oposición al kirchnerismo y a las movilizaciones populares, y en apoyo al gobierno macrista. Los cánticos de “No vuelven más” – en alusión al kirchnerismo– y “Los chicos a la escuela” –contra los paros docentes– clarifican el contenido de la acción. Esta adquirió el carácter de una contramarcha, que visibilizó que las capas más acomodadas de la sociedad desarrollaron durante esos años una cultura de acción colectiva con sus propias dinámicas y valores: “sin colectivos ni choripán”, en palabras del presidente Macri.

En suma, durante esos años se desarrolló un campo antipopulista de acción colectiva opositor al ciclo kirchnerista, como parte de un proceso de polarización política en un país con alta predisposición a la protesta. Esta se consolidó como un mecanismo modular que permitía expresar la polarización y el péndulo político-social del país. Mientras se enfrentaba a un gobierno nacional popular orientado hacia la izquierda, la dinámica de oposición fue cimentando el proceso de movilización hacia la derecha, aunque en su origen tuviera una composición más plural. La relevancia de estas protestas es negativa antes que positiva, pues su rol principal es la búsqueda del veto fáctico de las acciones de gobierno.

La emergencia de este campo mostró con nitidez que la cultura de la protesta no es monopolio de ningún sector. Es más, sectores que en otros momentos habían apelado a la vía militar comprendieron la relevancia de la política de las calles, su capacidad de veto y su potencia como soporte cuando lograron acceder democráticamente al gobierno.

Sin embargo, no todas las movilizaciones sociopolíticas ubicadas a la derecha del espectro político se reducen al clivaje “antipopulista” y “antikirchnerista”. A continuación analizaremos, por su relevancia, el movimiento antiabortista.

El contramovimiento celeste

La familia es un regalo de Dios, marchamos por la vida, a las dos vidas hay que salvar.

Consigna cantada en la Marcha por la Vida (2018)

El otro eje de la protesta y la polarización sociopolítica es el contramovimiento conservador, surgido en el marco de las luchas en torno a la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En un intenso ciclo corto de acción colectiva entre 2018, cuando se habilitó su tratamiento parlamentario, y 2020, cuando se aprobó, esas luchas representan uno de los procesos de movilización más masivos de la Argentina reciente.

La habilitación del tratamiento del proyecto y las movilizaciones en su apoyo representaron una amenaza para los sectores antiabortistas, que se activaron a partir de repertorios semejantes. La polarización se expandió en las calles mediante diversos formatos de acción colectiva, que se canalizaron en un ciclo de movimiento-contramovimiento: la activación de los “celestes” (contra la IVE) frente al avance del movimiento “verde” (en apoyo).[34] En el sector antiabortista, esta lógica se observó en sus tácticas de lucha, que se articularon en respuesta a las acciones del bando antagonista aunque con menos masividad. También construyó una estética contrapuesta al verde mediante el color celeste de la bandera nacional y con iconos referidos al derecho a la vida desde el momento de la concepción y a valores religiosos. Realizaron misas en espacios públicos, ecografías de “niños por nacer” y muñecos gigantes que representaban a fetos como vidas en peligro. Una imagen ilustrativa de la dinámica movimiento-contramovimiento emerge durante el tratamiento del proyecto de ley en junio de 2018, cuando grandes multitudes se acercaron al Congreso y fueron separadas con vallas por la policía para evitar enfrentamientos.

Tras la aprobación de la IVE en 2021, la oposición prosiguió pero perdió impulso en las calles, disgregándose en eventos esporádicos y de menor asistencia. Paradójicamente, este fue también el punto de mayor movilización del feminismo.

El contramovimiento “celeste” asumió un carácter conservador, pero distintivo de las protestas antikirchneristas. Su activación es más acotada temporalmente y respecto al marco de demandas. Se focaliza en el aborto y algunas cuestiones de género y derechos sexuales.[35] Su elemento articulador es una concepción menos secularizada del mundo, anclada en visiones prescriptivas sobre la sexualidad y la familia. Sus estructuras de movilización se vinculan con instituciones e iglesias cristianas, y se busca la visibilización de esta característica identitaria, que asume un carácter más colectivo que en las

movilizaciones antikirchneristas.

Las bases movilizadas presentan una composición sociodemográfica heterogénea en cuanto a sus posiciones de clase, género y edad (Rebón y Gamallo, 2021). En términos de clivajes políticos, no se encuentran mayoritariamente alineadas con el antikirchnerismo. Y cabe mencionar que, en el marco de la movilización, surgieron partidos y candidatos desde la derecha que plantearon el tema como eje de campaña.

El movimiento contra la IVE y las movilizaciones antikirchneristas expresan procesos de reacción frente al cambio social: el primero en las relaciones de género y el potente movimiento feminista; el segundo ante los avances reformistas del ciclo de gobierno kirchnerista y los movimientos populares con los que esa fuerza política se vincula. Por eso no es de extrañar que ambos componentes se articulen de manera diversa en las personificaciones de la radicalización de las derechas, que asumen un nuevo impulso durante la pandemia, como veremos a continuación.

La pandemia como oportunidad

#Caravana Por La Libertad.

Hashtag utilizado para convocar a las marchas “Por la Libertad” en pandemia

La pandemia representó una crisis general, producto de las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno de Alberto Fernández y la crisis económico-social preexistente heredada del gobierno de Mauricio Macri. A diferencia de otras crisis, el hecho de que la circulación y la actividad en el espacio público estuvieran limitadas acotó la protesta. Sin embargo, con el correr del tiempo, esto devino en una oportunidad para reactivar la movilización antipopulista, la radicalización de su agenda y la ampliación de su composición social.

Los cacerolazos, dado que no requieren desplazarse en el espacio público, fueron

los primeros emergentes masivos de oposición social al gobierno. Luego, se combinaron con caravanas de autos, jornadas nacionales de movilización y banderazos que, en el contexto de las restricciones sanitarias, representaban formas de desobediencia civil.

Las temáticas de las protestas variaron con el tiempo y la sumatoria de actores movilizados. Los primeros reclamos exigían la reducción de los sueldos de los políticos y se oponían a una supuesta masiva liberación de presos; luego se retomó parte de la agenda clásica del antipopulismo, como los pedidos de justicia y contra la corrupción y la oposición a las políticas económicas. Destaca el rechazo al intento de nacionalización de Vicentin, una agroexportadora en cesación de pagos, al que se calificó de “amenaza comunista”.

La oposición a las medidas de restricción impulsadas por el gobierno nacional fue el eje que adquirió protagonismo, en la medida en que sus efectos colaterales impactaban y disminuía el alto consenso social inicial. Este eje de protesta estableció un diálogo con sectores de trabajadores autónomos y pequeños propietarios que cuestionaban las limitaciones laborales. También destaca la incorporación de jóvenes –elemento poco presente en etapas anteriores de la movilización antipopulista– que padecían la restricción de sus actividades sociales y laborales. El menor riesgo de morbilidad y mortalidad por covid de este rango etario “rejuveneció” la composición de la protesta durante la pandemia (Rebón y Troncoso, 2022).

Más tarde, el retorno a la presencialidad en las escuelas surge como reclamo de distintos sectores civiles y de la política en el intento de articular el malestar social. La campaña de vacunación será también objeto de controversia al nuclear temas que van desde el negacionismo, la falta de vacunas o su origen nacional, y los casos de discrecionalidad en la aplicación, conocidos como “Vacunatorio Vip”. Luego, el repudio a la violación de la cuarentena que hiciera el presidente Fernández en una fiesta privada en la residencia oficial de Olivos impulsará la agenda de movilización y fungirá como impugnación moral de la autoridad del Estado y su política sanitaria. El saludo entre Bullrich y Milei narrado al inicio del capítulo expresa la aglutinación de estas demandas y actores. El encuentro se produjo durante una protesta contra el “Vacunatorio Vip” y lo coordinó un referente de “Gimnasios Unidos”, organización creada para reclamar contra el cierre de espacios destinados a la actividad física.

A pesar de ser el período en el cual se aprobó la IVE, lo cual provocó que se

reactivaran las movilizaciones en contra, esta demanda no se inscribe en las marchas opositoras al gobierno nacional y sus medidas. Si bien militantes de algunas organizaciones de derecha nutrirán ambos componentes, estos transitarán vías separadas.

En continuidad con la cultura antipopulista de acción colectiva, estas acciones se presentan como ciudadanas y apolíticas. Sin embargo, con el transcurrir de las protestas, contarán con la participación abierta de la oposición política y partidaria contra el gobierno. Referentes de Juntos por el Cambio, la mayoría sin función de gobierno, radicalizarán su discurso hasta ganar relevancia en la coalición. También otros grupos –situados a la derecha de la principal fuerza de oposición, muchos de ellos críticos del gobierno de Macri– comenzarán a tomar protagonismo en la activación de protestas.

La virtualización de la vida social, potenciada por la pandemia, contribuyó a que las redes se constituyeran como un canal propicio para expresar disconformidades de manera individual o colectiva. El espacio virtual emergió como territorio fértil para las agresiones verbales, el fortalecimiento del propio punto de vista y la confluencia de actores más radicalizados. También disminuyó los costos organizativos de las acciones presenciales, al facilitar su difusión. Esto a su vez posibilitó la traslación del malestar social al espacio público, como en los cacerolazos. El carácter disruptivo de los modos de intervención, junto a la afinidad política de los principales grupos de medios del país, aseguraron una fuerte repercusión pública.

La gestión de la pandemia por parte de un gobierno progresista constituyó una oportunidad para activar las movilizaciones de las derechas, ancladas principalmente en las clases altas y medias altas, y para ampliarlas a sectores indignados de otras extracciones sociales, de modo que las protestas adoptaran un carácter más transversal. Ante las restricciones a la circulación, la desobediencia civil fue la manera de activar en el espacio público. Esto les permitió aumentar su visibilidad, radicalizar posiciones y extender su base de adhesión y legitimidad social. La centralidad de la política pública durante la pandemia, el Estado como garante de la seguridad sanitaria, fue el disparador para que estos sectores percibieran esta institución como una amenaza a la libertad individual. El término “Infectadura”, acuñado en los reclamos, representa al Estado como estructurador, y no como reparador de las privaciones: de solución a problema.

En términos de movilización, la base social del gobierno estaba en las antípodas, dado que procuraba respetar las medidas de aislamiento dispuestas por el gobierno. El 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, se organizó un acto virtual que colapsó por problemas organizativos y derivó en una espontánea caravana de automóviles. Con el relajamiento de las restricciones se realizaron algunas movilizaciones nacionales en apoyo a las medidas del gobierno, pero fueron más esporádicas, lo cual produjo un retroceso en la “ocupación de las calles”. El resultado fue la movilización de las derechas y la relativa desmovilización de las fuerzas afines al gobierno, en un contexto de pérdidas, incertidumbre y retroceso social.

En el curso de las protestas aquí reseñadas, se corrió el umbral de lo que se podía hacer y decir en público. El efecto del ala más radical fue también una radicalización de la principal fuerza de oposición, al tiempo que muchos sectores asumieron públicamente discursos en sintonía (Morresi, Safersterin y Vicente, 2021). La arena de discusión pública comenzó a incorporar una nueva agenda, más extrema. La activación de estos actores no se da en un contexto de debilidad de la oposición política. Juntos por el Cambio aparece unificado desde el inicio y se fortalece a partir de las elecciones parlamentarias de medio término en 2021, cuando desplaza del primer lugar a la coalición en el gobierno, debilitada por la crisis. También en esos comicios emergen con fortaleza electoral los sectores de extrema derecha, autodenominados libertarios, con un discurso indignado que dialoga con las movilizaciones reaccionarias combinando neoliberalismo extremo, antikirchnerismo, conservadurismo y oposición a la agenda de género.

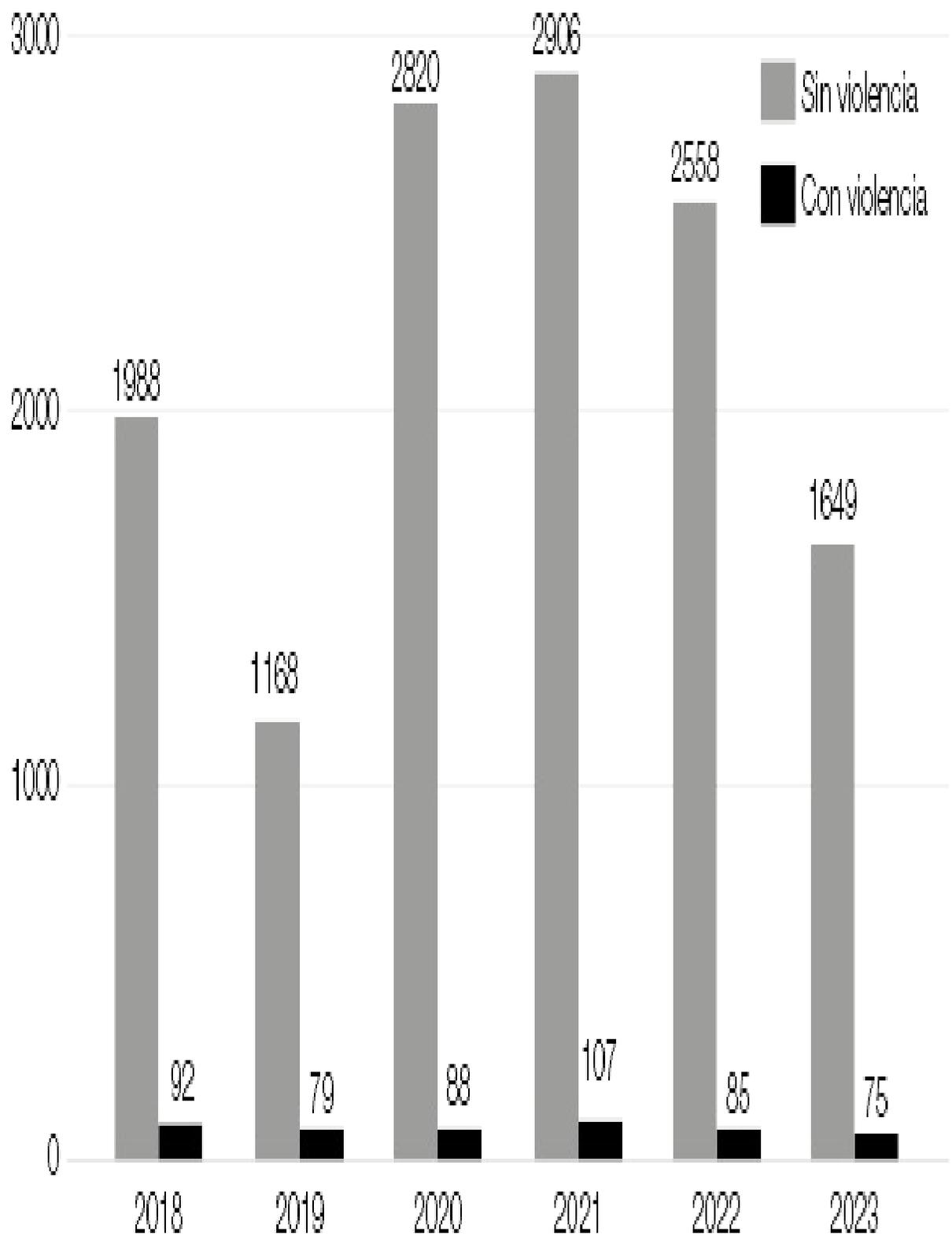
La expresión más notoria de esta confluencia de agendas y sectores conservadores y de derecha es La Libertad Avanza (LLA), creado en 2021 para la competencia electoral legislativa. Esta fuerza política, estructurada en torno a la figura de Javier Milei, aglutina distintos partidos y organizaciones, algunas emergentes de las movilizaciones durante la pandemia. En su cierre de campaña en Parque Lezama, congregó cerca de 25.000 personas y alcanzó a ser la tercera fuerza más votada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A partir de mediados de 2021, con la –exitosa– canalización electoral del malestar y el relajamiento de las restricciones, la movilización de derecha tenderá a disminuir en su masividad, aunque mantendrá algunas jornadas nacionales de protesta en fechas patrias. No obstante, varios grupos –algunos emergentes de esa etapa, como Revolución Federal– continuarán realizando acciones no multitudinarias pero notorias por su carácter disruptivo. “La calle es

nuestra, es hora de hacer algo” será uno de sus lemas. Surgen formas de violencia simbólica y en ocasiones física, como colocar frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de funcionarios y figuras vinculadas al oficialismo, agresiones físicas a reporteros, escraches a funcionarios y ataques a locales y edificios públicos. Como ejemplo de violencia simbólica destaca una guillotina de madera con un cartel y una antorcha encendida, cuyo fuego ocupa el lugar del sol en el logo del frente peronista, con la inscripción: “PRESOS, MUERTOS O EXILIADOS”. Las amenazas a la fuerza política en el gobierno, en especial a la vicepresidenta (CFK), se volvieron cada vez más nítidas.

En el contexto de la acusación del fiscal Diego Luciani a CFK por corrupción en la causa “Vialidad Nacional”, estos grupos se movilizaron reiteradamente a la residencia de la vicepresidenta. En respuesta, se organizaron movilizaciones oficialistas y una vigilia de militantes en su domicilio. Un grupo perteneciente al ecosistema de espacios de extrema derecha activos en las movilizaciones materializó las amenazas propagadas en público y atentó contra la vida de CFK el 1º de septiembre de 2022. El atacante gatilló dos veces una pistola a pocos centímetros de su cabeza, pero las balas no salieron debido a fallas en el arma. Si se trató de un pequeño grupo de extrema derecha o si tiene otro tipo de ramificaciones políticas es aún objeto de controversia política y judicial.

Gráfico 5.1. Cantidad de protestas sociales por año en las que hubo hechos de violencia (Argentina, 2018-agosto de 2023)



Fuente: Elaboración propia a partir de base Aclad.[36]

Tras el atentado, hubo una multitudinaria marcha de las bases del gobierno y un repudio multipartidario. Sin embargo, el pronunciamiento no fue unánime ya que dos figuras políticas, participantes destacadas en el ciclo de movilizaciones, no hicieron público su rechazo: Patricia Bullrich y Javier Milei.

Por último, si bien las acciones de violencia de estos grupos destacan por su radicalidad y notoriedad y, en particular, por su indudable relevancia –el atentado contra una de las principales figuras políticas del país–, de todos modos no representan una característica predominante o en marcado crecimiento en el campo de la protesta social en nuestro país. Los datos disponibles muestran que estos eventos no alteran cuantitativamente la característica muy minoritaria que tiene la violencia colectiva en la Argentina (véase el gráfico 5.1). Por otra parte, el fallido intento de magnicidio generó un proceso de relativa desmovilización y retroceso de la acción directa en el espacio público de estos grupos. Sin embargo, esto no quiere decir que no se haya abierto un ámbito para la expresión de formas más radicalizadas en la arena pública.

Reflexiones finales

En las páginas precedentes hemos reseñado el proceso de acumulación de fuerzas de las derechas extremas en el campo de la protesta social en la Argentina reciente. Este ascenso se desarrolla en el marco de la reacción a procesos de igualación promovidos desde el Estado nacional y la sociedad civil y se nutre de las crisis económicas recurrentes en la Argentina, como asimismo de las promesas incumplidas de los proyectos que polarizaron a izquierda y derecha mientras disputaban la construcción de un nuevo horizonte de futuro. En su seno confluyen diversos actores, demandas y prácticas que cimentaron las movilizaciones reaccionarias y conservadoras, articuladas por un discurso sustentado en la indignación y el hartazgo ante la persistencia de distintas

privaciones. Esta emergencia no supone la derrota de las fuerzas populares, pero se desarrolla al mismo tiempo que estas se debilitan, y propone una radicalización de la agenda de las derechas ante el fracaso –desde su perspectiva– de la moderación mostrada durante el gobierno de Macri. La radicalización se alimenta también del contexto internacional, en el que emergen diferentes fuerzas de este tipo.

La movilización reaccionaria y la violencia política han estado presentes en la historia de los ascensos de las derechas extremas en el mundo, aunque han tenido diferente relevancia en cada caso, y cabe recordar que las experiencias contemporáneas son las que registran menor incidencia de estos fenómenos. En la sociedad argentina, con una amplia cultura de acción colectiva, la movilización ha sido significativa, en diferentes momentos, para la acumulación de poder de las derechas extremas. Sin embargo, es difícil concluir que estas, en sus principales expresiones, estén configuradas por formas movimientistas semejantes a los fascismos de entreguerras. Antes bien, parecen apelar a la movilización según conveniencias tácticas. Tampoco podemos afirmar que la violencia política sea un elemento distintivo de su accionar: los episodios violentos más habituales han sido de baja escala y el más significativo, el intento de magnicidio contra CFK, fue un acontecimiento puntual. Después, disminuyó la violencia y la movilización disruptiva en todas sus formas. En otras palabras, no estamos ante una tendencia consolidada de aumento de la violencia política nutrida por la derecha del espectro político.

Sin embargo, los ejemplos abordados nos advierten que, una vez en el gobierno, la movilización puede ser una herramienta de las derechas para consolidar el poder o enfrentar adversarios, dada la preexistencia de una cultura en este campo. La radicalización de los discursos de odio, junto a los antecedentes de violencia registrados, podrían habilitar y promover en un futuro acciones violentas en mayor escala sobre grupos opositores y sectores estigmatizados. Si las tendencias en esta última dirección se consolidaran, entraríamos en un proceso de descomposición de la pacificación de la política, uno de los mayores logros del período democrático iniciado en 1983.

El encuentro narrado en la introducción de este capítulo tiene su corolario tras las elecciones presidenciales de primera vuelta, con la entrada de Javier Milei al balotaje. El abrazo con Patricia Bullrich se reitera esta vez en un estudio de televisión, sellando el apoyo de esta última a su candidatura. Este también se replicó en el espacio virtual, con la imagen compartida por el libertario de un

león estrechando en sus brazos a un pato, símbolos que identifican a cada figura. Posteriormente, Bullrich se uniría al gabinete del ya electo presidente Milei. Hoy en el palacio, en la búsqueda de realizar el poder acumulado, los une aquello que defendieron ayer en las calles. Procuran derrotar a las fuerzas populares y reestructurar la sociedad y la democracia argentina en un tiempo histórico en el cual el “todo o nada” se escribe con la mano derecha de la historia.

Bibliografía

Antón, G. y otros (2011), “Una década en disputa. Apuntes sobre las luchas sociales en la Argentina”, en Rebón, J. y Modonesi, M. (eds.), Una década en movimiento: luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI, Buenos Aires, Clacso - Prometeo, pp. 19-44.

Bringel, B. (2017), “Crisis política y polarización en Brasil: de las protestas de 2013 al golpe de 2016”, en B. Bringel y G. Pleyers (eds.), Protesta e indignación global. Los movimientos sociales en el nuevo orden mundial, Buenos Aires, Clacso, pp. 141-154.

Franzosi, R. (2013), “The Rise of Italian Fascism (1919-1922): Changing Social Relations in Revolutionary Periods”, Nueva York, Emory University and The Italian Academy for Advanced Studies in America of Columbia University.

Gamallo, L. (2020), “La acción colectiva en Argentina: Actores, demandas y formas de lucha desde el retorno democrático”, Perfiles Latinoamericanos, Ciudad de México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 28(55), pp. 83-108, <[dx.doi.org/10.18504/PL2855-004-2020](https://doi.org/10.18504/PL2855-004-2020)>.

McCoy, J., T. Rahman y M. Somer (2018), “Polarization and the Global Crisis of Democracy: Common Patterns, Dynamics, and Pernicious Consequences for Democratic Polities”, *American Behavioral Scientist*, 62(1), pp. 16-42, <doi.org/10.1177/0002764218759576>.

Morresi, S., E. Saferstein y M. Vicente (2021), “Ganar la calle. Repertorios, memorias y convergencias de las manifestaciones derechistas argentinas”, *Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria*, 8, pp. 134-151.

Rebón, J. y L. Gamallo (2021), “Las bases sociales de la protesta en torno al aborto en la Argentina reciente”, *Sociedad y Religión*, 1(56), pp. 65-65, <ark:/s18537081/4q772a47m>.

Rebón, J. y F. Troncoso (2022), “La estructura social en la protesta durante la crisis del covid-19”, en *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia, vol 1: Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*, Buenos Aires, Imago Mundi, pp. 185-204.

Semán, E. (2021), *Breve historia del antipopulismo. Los intentos por domesticar a la Argentina plebeya, de 1810 a Macri*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Tarrow, S. y D. S. Meyer (2019), “Challenges of the anti-Trump movement”, *Partecipazione e Conflitto*, 11(3), pp. 614-645, <10.1285/i20356609v11i3p614>.

■

[\[34\] Para un análisis detallado de la dinámica de la movilización, véase Rebón y Gamallo \(2021\).](#)

[\[35\] Sobre los aspectos culturales en torno a la reacción al género, véase el capítulo de Torricella.](#)

[\[36\] Armed Conflict Location & Event Data Project es un proyecto de recopilación, análisis y mapeo de eventos de protesta y violencia política registrados en la prensa. Véase <\[acleddata.com\]\(http://acleddata.com\)>.](#)

6. La reacción cultural y la cuestión de género

Andrea Torricella

En la actualidad asistimos a un ataque a la igualdad de género y al feminismo, y a un fortalecimiento de movimientos con ideología excluyente en materia de género y sexualidad. En la última década, en distintos países del mundo, se han consolidado gobiernos que pueden ser identificados ya sea como de extrema derecha, populistas de derecha, neoconservadores, o democracias iliberales. Donald Trump en los Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, Viktor Orbán en Hungría, Giorgia Meloni en Italia, entre otros, y más recientemente Javier Milei en la Argentina.

Si bien los sectores conservadores siempre han manifestado una preocupación por las cuestiones de género, los movimientos y gobiernos de extrema derecha que se han conformado en los últimos diez años tienen una novedad: la cuestión de género se ha convertido en una estrategia central. Por un lado, son movimientos e ideologías que se configuran como reacción a la creciente democratización en materia de género y sexualidad, al aumento de los derechos sexuales y reproductivos y a la mayor igualdad sexogenérica, algo que algunos especialistas denominan “backlash” o “reacción” (Faludi, 2006), “politización reactiva del género” (Vaggione, 2022) o “contraofensiva” (Gago, 2019). Por otro lado, las cuestiones de género se han convertido en un aglutinante para estos movimientos, compuestos por actores políticos y sociales que en épocas anteriores tenían menos en común y hoy han logrado articularse a partir de su oposición a estas políticas y transformaciones sociales. Muchos investigadores sostienen que la oposición al género se ha convertido en un clivaje político y electoral que forma parte del proceso de erosión de las democracias y posibilita restarles legitimidad a las agendas de justicia social en general (Brioli, Campos Machado y Vaggione, 2020).

Es cierto que existe una gran heterogeneidad en las nuevas derechas. Aun así, en

base a las investigaciones existentes, se pueden identificar dimensiones comunes o patrones antigénero que también se observan en el caso argentino en mayor o menor medida. Podríamos decir que las extremas derechas tienen algunos parecidos de familia en las formas en que se manifiesta su reacción cultural al género. Se despliegan en cada contexto de una forma particular, pero tienen parentescos y comparten algunas características (Wittgenstein, 1999).

El camino hacia el poder de Javier Milei se enmarca en estos procesos a escala transnacional, pero también tiene sus particularidades. Podríamos decir que si bien el ataque al género no es central en sus primeras medidas de gobierno, ha sido un tópico importante en el proceso que posibilitó la consolidación de una opción/oposición de derecha radical (véanse los capítulos de Caggiano, Vommaro, y Rebón y Súnico). ¿Cuáles son las dimensiones o patrones antigénero de las nuevas derechas a escala transnacional y cuáles son las especificidades que se observan en el caso local?

La embestida contra el género

Una de las características de las derechas extremas a nivel transnacional es la utilización del concepto “ideología de género” para identificar una amplia gama de políticas en torno a la igualdad, los derechos sexuales y reproductivos, la no discriminación, la educación sexual y su transversalización en las distintas áreas del Estado. La historia de la expresión “ideología de género” se remonta a los años noventa, en el contexto de los avances en materia de derechos reproductivos e igualdad de género promovidos por las Conferencias Internacionales sobre Población en Beijing y El Cairo. Ambas conferencias favorecieron importantes transformaciones jurídicas e institucionales en las décadas siguientes, y exigieron la intervención estatal para garantizarlas (Viveros Vigoya, 2017). La noción se fortaleció en la primera década de los 2000 en el Vaticano y ha jugado un papel muy importante como “amenaza” y “enemigo a combatir” en distintos escenarios donde las derechas emergieron y crecieron a partir de movilizaciones populares (Vaggione, 2022).

En 2015, durante una gran reunión en Polonia contra la educación sexual, manifestaciones callejeras asemejaron las políticas de género propuestas desde la

Unión Europea con el virus del Ébola que se esparcía desde Bruselas (Korolczuk y Graff, 2018). En reiteradas oportunidades el Vaticano denunció que en Europa, América, Asia y África se viven auténticas formas de colonización ideológica, entre ellas “la ideología de género” que les enseña a los niños y las niñas que pueden elegir sobre su sexo. Desde 2016, en distintos países de América Latina se produjeron masivas protestas callejeras contra la “ideología de género”. En 2018, la campaña electoral de Jair Bolsonaro en Brasil incluyó de manera explícita la lucha contra la “ideología de género”. También en la Argentina, luego de las grandes movilizaciones en torno a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2018, las propuestas para modificar la ley de Educación Sexual Integral (ESI) de 2006 e incorporar la categoría “género” fueron resistidas con movilizaciones callejeras que reclamaban la exclusividad de la autoridad de los padres para decidir sobre la educación de las infancias y denunciaban las políticas de género como deformaciones ideológicas.

Si bien las cuestiones religiosas tienen una gran centralidad en la articulación de las derechas extremas, la oposición a la ideología de género se ha convertido en un fenómeno político secular que trasciende la dicotomía religioso/no religioso (Vaggione, 2022). Funciona como un pegamento simbólico ya que posee la capacidad de reunir a actores heterogéneos: partidarios, religiosos, académicos y activistas (Kováts y Põim, 2015). La utilización de esta noción por parte de las nuevas derechas les posibilita generar un clima de pánico moral (Miskolici y Campana, 2017).

En líneas generales, las ideas que se enmarcan tras la noción de “ideología de género” sostienen, por un lado, que las cuestiones del cuerpo sexuado, la sexualidad y el deseo son atributos determinados biológicamente y por eso cualquier interpretación cultural sobre ellos comporta arbitrariedad, falsedad y distorsión. Otra premisa es que tanto las demandas feministas como las del movimiento LGBTIQ+ se enmarcan en la tradición neomarxista que, en lugar de abolir las clases, se propone abolir las diferencias de género. Esta imposición sería parte de una conspiración ideológica global, totalitaria y neocolonial que ingresa junto con la agenda de los derechos humanos y la justicia social (Morán Faúndes, 2019). En este entramado, las infancias son los principales objetivos a colonizar y por lo tanto deben ser protegidas; las familias deben volver a asumir su papel como las principales autoridades sobre la forma de educar y a la vez limitar los alcances de la autoridad estatal (Brioli, 2020). Se produce una politización del miedo y las ansiedades sociales al plantear que la libertad religiosa, de conciencia y de los progenitores sobre sus hijos e hijas se ve

amenazada. Por último, la lucha contra la “ideología de género” se partidiza y pasa a integrar la propuesta programática de partidos y candidatos y a la vez se legitima al ser instalada en los medios de comunicación y la arena electoral (Vaggione, 2022).

El escenario argentino es significativo porque ha sido una usina de pensamiento en torno a la “ideología de género”, desde el influyente texto del abogado cordobés Jorge Scala al caso más reciente del politólogo e influencer Agustín Laje. Paradójicamente, las fuertes movilizaciones de 2018 en torno a la IVE dieron un empuje a las agendas antigénero, que se consolidaron a través de espacios políticos locales. La Libertad Avanza (LLA) nuclea sectores y actores heterogéneos que han manifestado discursos explícitamente antigénero y antifeminista y proponen excluir las políticas igualitarias de la agenda del Estado. Como veremos a continuación, la estrategia retórica que se inició en el campo transnacional como oposición a la implantación del concepto de género en tanto distorsión de la naturaleza humana fue utilizada en el contexto local para convertir en amenaza a todas las políticas vinculadas a la igualdad de género y, al mismo tiempo, invalidar un espectro más amplio de políticas redistributivas y de justicia social.

Misoginia y antifeminismo, dos formas de favorecer las jerarquías de género

Las derechas extremas se caracterizan por favorecer liderazgos masculinos o bien porque sus simpatizantes son en gran proporción varones. Muchos de sus seguidores sienten su masculinidad amenazada por los cambios en las jerarquías entre varones y mujeres, por el empoderamiento de estas y la fluidez en las identidades de género que han promovido los activismos y las leyes en materia de diversidad sexual.

Líderes como Donald Trump en los Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil tienen discursos misóginos y encabezan procesos políticos y simbólicos que buscan dismantelar la participación femenina en política, minar su presencia en la esfera pública en general y caricaturizar al feminismo como un fenómeno pasajero. En ambos casos, los líderes han sostenido expresiones agresivas y

despectivas contra políticas opositoras como Hillary Clinton o Dilma Rousseff y reivindican la virilidad blanca en clave heterosexual y nacionalista. Frente a sus antagonistas, los candidatos de derecha se presentan como el retorno del hombre fuerte y patriarcal (Roth, 2020).

En un contexto donde los medios de comunicación tienen gran relevancia en las campañas electorales y las redes sociales se han convertido en esferas públicas digitales, estos comentarios abiertamente sexistas también pueden interpretarse como estrategias de choque para causar escándalos (Roth, 2020). La incorrección política y la provocación con temas emocionales y polarizantes como el género y la sexualidad les permiten mantenerse visibles en todo momento. Sus seguidores también pueden interpretar las declaraciones sexistas como gestos de extrema honestidad frente a una élite que se sostiene sobre la base de mentiras e hipocresías (Roth, 2020). Este es el caso de Javier Milei, quien en sintonía con líderes como Trump y Bolsonaro ha afirmado que no tiene por qué avergonzarse de tener pene, ser blanco, rubio y de ojos celestes. Sin embargo, Milei, a diferencia de estos últimos, está acompañado por liderazgos femeninos a los que tiene en alta estima. El caso más paradigmático es el de su hermana, Karina Milei, a quien se refiere como “el Jefe” y le adjudica la estrategia política que lo consagró presidente. Otras mujeres, como la vicepresidenta Victoria Villarruel o la canciller Diana Mondino, son figuras con fuerte protagonismo en el espacio de LLA, pero cuya principal característica es su discurso contra el feminismo masivo y contra las políticas de diversidad.

Estas figuras se relacionan más con liderazgos femeninos del estilo de Marine Le Pen en Francia o Giorgia Meloni en Italia. Meloni no solo es la principal líder de la ultraderecha italiana sino que es también la primera mujer que ha logrado ocupar el cargo de primer ministro en ese país. “¡Yo soy Giorgia! Soy mujer. Soy madre. Soy italiana. Soy cristiana. ¡No me lo quitarás!”. Así se define. Firme contra el aborto, se opuso tanto dentro como fuera del parlamento a las políticas de ampliación de derechos a la diversidad sexual. Sostiene que la Unión Europea, con sus políticas de igualdad, descuida el bienestar de las familias y de la infancia. Meloni se opone al feminismo porque lo considera un movimiento en contra de la derecha y no a favor de las mujeres (De Giorgi, Cavalieri y Feo, 2023). Por ello puede decirse que, para las nuevas derechas, el género es a la vez trivial y pivote, es decir, “trivotal”: trivial porque no está en el núcleo de las ideologías de derecha y pivote porque es una relación social central que se instrumentaliza para enfatizar la ideología de derecha (Spierings, 2020). En este sentido, Meloni privilegia los “derechos de las mujeres” en contraposición a la

igualdad de género.

Estos discursos, en lugar de ser misóginos, son antifeministas ya que defienden las nociones de género binarias y los roles sociales tradicionales. Se oponen a la diversidad sexogenérica de las familias y niegan la existencia de la desigualdad de género como un problema social que afecta la vida de las mujeres. Por el contrario, lo abordan desde una perspectiva individualista y meritocrática cuyo ejemplo más preclaro es la exitosa carrera política y profesional de las mujeres que lo enuncian. Junto con la crítica al feminismo, la oposición al género ha sido una estrategia para oponerse al gender mainstreaming, es decir a la transversalización de las políticas de género en la política pública en general.

Restricción de los derechos sexuales y (no) reproductivos y posturas familiaristas

En junio de 2022, en una entrevista televisiva, luego de que Javier Milei argumentara a favor de la venta de órganos, una periodista le preguntó por qué estaba en contra de la legalización del aborto si el cuerpo era la primera propiedad de la persona. Apelando a argumentos supuestamente científicos en torno al inicio de la vida en el momento de la concepción, la respuesta de Milei hizo énfasis en la disparidad de fuerzas y el abuso que cometía un adulto sobre otro “ser humano en evolución”. Más allá de los argumentos y la discusión en sí, la extrema derecha en la Argentina se ha nutrido de representantes políticos del activismo celeste y ha hecho del combate contra la interrupción voluntaria del embarazo una contundente bandera de campaña.

La última década fue testigo de grandes movilizaciones feministas en distintos países que sirvieron para dar apoyo transnacional a la demanda por el aborto en un campo más amplio de agendas políticas democráticas, en particular en América Latina, donde la lucha por el aborto se articuló con los derechos humanos (Vacarezza y Sutton, 2021). En este escenario de movilización fueron adquiriendo volumen electoral grupos conservadores que también utilizaron los canales que ofrece la democracia para oponerse a ellos.

Con la agenda antiaborto se produjo tanto un proceso de partidización en función

de un enemigo poderoso que tiene un plan global (el feminismo como el neomarxismo contemporáneo), como la subjetivación política y emocional de un “nosotros” amenazado (Hochschild, 2014; Vaggione y Morán Faúndes, 2021). La derecha utilizó instrumentalmente la causa contra el aborto como un tema polarizante que permite legitimar una amplitud de medidas que no se relacionan exclusivamente con cuestiones reproductivas. Junto con las propuestas antiaborto y de restricción de los derechos reproductivos, se promueven otras medidas económicas, como la reducción de impuestos sobre la riqueza o el desmantelamiento de áreas del Estado que garantizan derechos relacionados con la salud, el cuidado o la educación.

Sin embargo, no todos los escenarios de ascenso de la derecha extrema implican un proyecto de retirada del Estado en un sentido neoliberal. Como alternativa a la promoción de la igualdad de género y sexualidad en todas las áreas del Estado (gender mainstreaming), en algunos casos las nuevas derechas proponen la transversalización de la perspectiva de familias, disputando así el marco de sentido de los derechos humanos. El familiarismo es un tipo de política que pone en el centro a la familia tradicional como fundamento de la sociedad y subsume los derechos reproductivos individuales a la demanda normativa de reproducción de la nación (Butler, 2019). En uno de sus discursos parlamentarios, Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, propuso incluir la promoción de la natalidad en cada decisión de gobierno (Félix, 2015) y promover a la vez la familia tradicional heterosexual, la complementariedad de los roles, la protección de la vida desde la concepción, el derecho de los padres para criar según sus propios intereses y el rechazo de la ideología de género (Grzebalska y Andrea Peto, 2017).

Para el caso local, la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se fundamentó en su supuesta ineficacia ante la problemática de la violencia hacia las mujeres, en que construía privilegios al promover políticas de discriminación positiva y en que la desigualdad de género ya no existe. Por eso, los temas de violencia, niñez y familia son las formas en que el nuevo gobierno identifica los problemas que afectan las vidas de las mujeres en la actualidad y quedan subsumidos en el área de Capital Humano.

División sexual del trabajo y privatización de la familia

En reiteradas oportunidades durante la campaña electoral, Javier Milei negó la existencia de la brecha salarial entre varones y mujeres y sostuvo que estas últimas ya no sufren desigualdades en el mercado de trabajo. Como han demostrado numerosos estudios, las desigualdades que se observan en la actualidad se relacionan mucho más con las desigualdades existentes en las tareas de cuidado en el ámbito doméstico y menos con cuestiones legales en condiciones de trabajo formal. En el caso del trabajo informal, se profundizan. En ambos casos, las políticas públicas en materia de igualdad son fundamentales para revertir esas situaciones. La negación del problema por parte del ahora presidente argentino le permite desacreditar muchas políticas de género implementadas en las últimas décadas y, al mismo tiempo, desprestigiar la institucionalidad del feminismo en áreas centrales del gobierno.

En el discurso de las nuevas extremas derechas, “la ideología de género” y los cambios sociales vinculados a una mayor democratización en ese aspecto implican una amenaza para la familia como pilar de la sociedad. Sin embargo, esta apreciación no solo tiene fundamentos morales o ideológicos, sino fuertes raíces económicas. Si las políticas de bienestar en clave de igualdad de género producen altos costos para los Estados que deben garantizarlas, las medidas neoliberales de retirada del Estado producen consecuencias que, si no pueden ser paliadas por la sociedad civil (familias, organizaciones sociales u ONG), también implican un riesgo político y económico para estos gobiernos. Por lo tanto, la defensa de la familia heteropatriarcal tiene un fundamento estratégico para los sectores de derecha como única garante de la reproducción social: ellos postulan la familia privada como la fuente principal de seguridad económica y la mejor alternativa integral al Estado de bienestar (Butler, 2019).

La familia altruista y la responsabilidad familiar se convierten en garantía natural en un orden de libre mercado en el que el Estado se ha retirado de todas esas responsabilidades (Cooper, 2020). Las medidas de recorte del presupuesto estatal propician que los cuidados recaigan únicamente sobre las familias, donde las mujeres son las responsables. El trabajo no remunerado de las mujeres compensa el déficit en términos de provisión de servicios por parte del Estado y de la oferta de empleos de buena calidad (Esquivel, Faur, Jelin, 2012: 32).

A partir de estas premisas, algunos de los exponentes de las nuevas derechas sí se preocupan por los derechos de las mujeres. Algunas políticas implementadas

por Giorgia Meloni en Italia se focalizan en conciliar el trabajo productivo con el reproductivo, es decir, en las madres trabajadoras con responsabilidades de cuidado. En términos simbólicos, Meloni sostiene una perspectiva tradicional de la familia como sitio primario de transmisión cultural, heterosexual, fundada a partir del matrimonio y con roles de género tradicionales y complementarios (De Giorgi, Cavalieri y Feo, 2023). Lo mismo sucede en Polonia y Hungría, donde la defensa de la familia heteronormativa es la única forma que tienen los sectores con menores recursos de oponerse a las fuerzas devastadoras del mercado. En el caso argentino, la propuesta del nuevo gobierno de unificar las áreas del Estado vinculadas a familia, trabajo, educación y seguridad social en un único ministerio denominado “Capital Humano” –en términos de la Escuela de Chicago– es un buen ejemplo de la lógica con que las nuevas derechas recurren a la familia normativa como el mejor sustituto del Estado de bienestar. Son las familias quienes mejoran el capital humano a partir de sus inversiones en salud, educación y habilidades sociales. Javier Milei ha dicho en varias oportunidades que este ministerio va a subsidiar la demanda a través de vouchers o vales, en lugar de subsidiar la oferta, para garantizar que las familias con menos recursos accedan a los servicios privatizados. Esta propuesta, simulacro del mercado privado y la elección del consumidor, invisibiliza el desmantelamiento de áreas del Estado sensibles para la reproducción de la vida (Cooper, 2020).

En síntesis, si la agenda de la “ideología de género” ha contribuido a desdibujar algunas discusiones sobre redistribución, la defensa de la familia heteronormativa se convierte en una aliada estratégica de las políticas de desmantelamiento del Estado.

Heteronormatividad, binarismo y biologización de las identidades de género

En 2012 y 2013 hubo numerosas protestas callejeras en distintas ciudades de Francia contra el “matrimonio gay”. Luego de ese pico de manifestaciones, la “teoría de género” se convirtió en un arma política para desestabilizar a la izquierda francesa y un tema importante para las masas (Brustier, 2015). En Hungría, la nueva Constitución de 2011 definió restrictivamente el matrimonio y la familia como la unión entre hombre y mujer y excluyó a la orientación sexual

de la lista de motivos de discriminación protegidos por el texto constitucional (Félix, 2015). En Brasil, durante la campaña política que llevó a la presidencia a Jair Bolsonaro, se atacó el programa de educación sexual contra la homofobia implementado por el candidato opositor (ministro de Educación en el gobierno de Dilma Rousseff). Durante esa campaña, el programa “Escuelas sin homofobia” recibió el mote despectivo de “kit gay” que “incentivaba la homosexualidad y la promiscuidad y convertía a las infancias en víctimas de pedófilos” (Arbuet y Cáceres Soforza, 2019). Una vez en el poder, con el argumento de la reducción del déficit, Bolsonaro unificó ministerios y fundió el anterior Ministerio de Derechos Humanos en otro denominado Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Este cambio redefinió el sentido de la política de derechos humanos en el marco de la familia heterosexual, excluyendo de su alcance a la población LGTBIQ+ (Nogueira Cunha, 2020).

Tal como sucedió con el aborto, las protestas contra el matrimonio igualitario y la filiación en familias homoparentales se apoyaron en campañas que exacerbaban el temor colectivo en torno a asuntos relacionados con la sexualidad. La oposición a las parejas del mismo sexo y a la diversidad en la filiación fue el argumento que excluyó al feminismo y el movimiento LGTBIQ+ de los espacios de definición de las políticas públicas que buscan abordar las desigualdades estructurales de género. Otra consecuencia relevante de estos procesos de pánico moral y sexual fue el aumento de la violencia y la vulnerabilidad de las minorías sexuales, estigmatizadas y a menudo utilizadas como chivos expiatorios para desviar la atención de otros conflictos y malestares sociales.

En el caso argentino, con el ascenso de Javier Milei, no se observan estas campañas de pánico moral contra la homosexualidad como ha sucedido en otros escenarios. Quizás porque las conquistas sociales como el matrimonio igualitario tienen más de una década de vigencia. Sin embargo, algunos representantes del espacio político que hoy preside el país han declarado que, si bien no están en contra de la homosexualidad o la diversidad de identidades de género en tanto asuntos de la vida privada, se oponen de manera explícita a que el Estado deba reconocerlas en materia legal y económica. En una entrevista con Jaime Bailly realizada en 2023, cuando se le preguntó sobre la homosexualidad, Milei se valió de una reducción al absurdo al comparar las relaciones homosexuales con aquellas entre un hombre y un elefante y sostuvo que, siempre que ambas partes consintieran, él no tenía nada que objetar. Algo similar afirmó su canciller, la economista Diana Mondino, cuando sostuvo que la discriminación que pudiera

sufrir una persona gay era la misma que padecería una persona que eligiera dejar de bañarse y tener piojos. En estas dos declaraciones se observa que la orientación sexual es entendida como una opción individual y que, por lo tanto, el Estado debería ser indiferente. Se desconocen los patrones de desigualdad heteronormativa y la discriminación que históricamente han condicionado la organización de la sociedad y, por ende, se desacreditan todas las políticas antidiscriminación. La eliminación de espacios institucionales destinados a promover políticas de igualdad como el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) plantea preguntas importantes sobre qué implicancias tendrán estas desregulaciones sobre el aumento de la violencia cotidiana contra las minorías sexogenéricas.

Nacionalismo, feminacionalismo y homonacionalismo

La construcción de los otros como inferiores en términos morales también es parte de las posturas nacionalistas y nativistas de las nuevas derechas extremas. Estas actitudes no solo se dirigen a grupos externos, sino que también pueden afectar a una porción de la sociedad, a la que señalan como los verdaderos representantes de la nación (“los argentinos de bien”, véanse los capítulos de Caggiano e Ipar). En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni, además de implementar políticas antiinmigratorias, manifiesta su preocupación por la baja de natalidad en las familias italianas y su “reemplazo étnico” por otras poblaciones. Se propone coartar el acceso a la ciudadanía de las infancias nacidas en suelo italiano cuyos progenitores sean extranjeros. En reiteradas oportunidades, la referente de la ultraderecha francesa Marine Le Pen manifestó su intención de restringir las políticas de acceso a la ciudadanía para los migrantes y prohibir el uso del velo islámico en cualquier espacio público.

En el escenario actual, las políticas nacionalistas se articulan con las políticas sexuales y de género. Por un lado, la lucha contra la “ideología de género”, entendida como una imposición cultural del Norte o de las élites occidentalizadas, es una de las formas en las que se articularon ambas políticas. Incluso en países sin historia colonial, los sectores de extrema derecha se apropiaron de discursos anticoloniales que fueron patrimonio de la izquierda desde los años sesenta como un significativo poderoso de una humillación que

debe ser resistida (Korolczuk y Graff, 2018). El éxito de las posturas nacionalistas también se explica por la posibilidad de sentirse simbólicamente superior en un contexto de crisis económica que a su vez produce una crisis simbólica de la masculinidad. Donald Trump defendió sus proyectos de limitar y endurecer penas contra la inmigración ilegal mexicana con el argumento de que los migrantes mexicanos son violadores, narcotraficantes y delincuentes (Roth, 2020).

La articulación entre nacionalismo y cuestiones de género también puede producirse desde marcos anti-islam, donde las políticas de mujeres y de la población LGBTIQ+ legitiman medidas severas por considerar que esas poblaciones representan una amenaza. Se denomina “feminacionalismo” al uso de los temas de mujeres o feministas a favor de la diversidad para sostener campañas antimusulmanas, antiinmigratorias y xenófobas y promover políticas de defensa. Se caracteriza a los hombres musulmanes, o a los no blancos, como peligrosos y opresores de las mujeres y se enfatiza la necesidad de rescatar a esas mujeres musulmanas y migrantes legitimando el aumento de penas, la persecución y la violencia. También se denomina “homonacionalismo” al fenómeno por el cual, en nombre del bienestar de las minorías sexuales (los países islámicos son homofóbicos), se legitima la discriminación y violencia hacia grupos migrantes u otras poblaciones culturalmente diferentes. Se promueve el cercenamiento de derechos y las intervenciones militares sobre sociedades que no respetan los derechos de las mujeres y las diversidades en los mismos términos que el Occidente capitalista (Puar, 2017). Paradójicamente, desde lo discursivo se defiende la libertad y la emancipación de las mujeres, pero al mismo tiempo se sostiene un conservadurismo de género que consolida la imagen de que las mujeres occidentales ya estarían emancipadas (Dietze, 2020). Este procedimiento permite modernizar los modelos de género de la derecha, que pueden exhibir entre sus filas a lideresas representativas de esa emancipación, situar la violencia sexual como un asunto externo y minimizar el hecho de que la propia sociedad es desigual, sexista y violenta.

Antiintelectualismo y oposición a los estudios de género

En el marco de una lógica discursiva de construcción de enemigos (internos o

externos), las nuevas derechas se oponen a una vertiente particular del feminismo y el movimiento GLTTBIQ+: su rama académica, llamada estudios de género y estudios queer. El gobierno de Viktor Orbán en Hungría prohibió los estudios de género por considerarlos una ideología neomarxista occidental y no una ciencia. Ese argumento le permitió cancelar los programas de estudios y, al mismo tiempo, encontrar cierto consenso para expulsar universidades financiadas por la Unión Europea y privatizar las universidades públicas.

La devaluación del campo de la investigación sobre género y sexualidades ha sido una tendencia también en la Argentina. En sintonía con las críticas a la “ideología de género”, se ha promovido la visión de estas investigaciones como una suerte de “seudociencia”, etiquetándola como una moda o incluso asociándola peyorativamente con corrientes de pensamiento como el neomarxismo. También se minimizó la importancia de estas investigaciones, por considerarlas improductivas o irrelevantes para la sociedad. Durante los debates presidenciales de la campaña electoral 2023, tanto el candidato a presidente como la candidata a vice por LLA se refirieron a la inutilidad de este campo de investigación como paroxismo del despilfarro económico de un Estado que invierte en ciencia. Esta desvalorización explícita en la retórica política sirvió para justificar decisiones concretas, como el desfinanciamiento de áreas de investigación y la propuesta de que la ciencia útil debe ser aquella que se relacione con el ámbito productivo y empresarial, en tanto las áreas de investigación críticas para comprender y abordar las problemáticas de la desigualdad son desestimadas.

Reflexiones finales

Atender a las reacciones contra los procesos de democratización en materia de género y sexualidades en los distintos escenarios de ascenso de las extremas derechas no implica minimizar el hecho de que estos procesos cobran fuerza en contextos de gran fragilidad e incertidumbre económica. Por el contrario, se apoyan en malestares y sensaciones emocionales de pérdida de bienestar y privilegios y aumento de la vulnerabilidad (Butler, 2019). Podríamos decir que es la pérdida de las estructuras básicas de bienestar social lo que produce una creciente y más acentuada sensación de precariedad y temor en algunas

poblaciones, pero los discursos públicos más audibles sostienen que son la ideología de género y los avances de las minorías los que destruyen la familia, las infancias, la sociedad, etcétera.

El ataque al género –si bien no siempre este es el “enemigo máximo a combatir” para las extremas derechas (en el caso argentino la crisis económica, la inflación y la corrupción se posicionan como los principales)– es una estrategia central que utilizan para construir hegemonía cultural, erosionar procesos democráticos y promover mayor desigualdad social y autoritarismo.

Tampoco hay que subestimar el hecho de que las derechas extremas cobran fuerza en contextos de grandes transformaciones en materia de género y sexualidades. Como diría el refranero popular: “Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”. En la Argentina en particular, los avances en materia de igualdad de género han sido muy significativos y en el último tiempo adquirieron un grado de institucionalización notable con respecto al contexto internacional. Analizar las formas en que estos cambios fueron resistidos y desmantelados en otros escenarios nos ayuda a caracterizar los tiempos y las conflictividades que se avecinan en nuestro país. La reacción cultural al género, aunque no sea el eje central de los discursos públicos, puede convertirse en metáfora del fracaso democrático y aceptación colectiva de un orden social desigual (en el que las diferencias se legitiman como producto del esfuerzo o el mérito individual). Una pregunta que queda abierta es hasta qué punto la nueva legitimidad de los discursos antigénero en el ámbito público se relacionará con el aumento de la violencia y la discriminación hacia las feministas y las minorías sexogenéricas en los próximos años.

Por último, aunque no fue parte de nuestro análisis, cabe recordar que las extremas derechas también fueron objeto de resistencias populares, como sucedió en Brasil o en los Estados Unidos con las manifestaciones feministas y las derrotas electorales de Bolsonaro y Trump cuando buscaron la reelección presidencial. Sabemos que las extremas derechas no son resabios del pasado ni experiencias por completo singulares y extraordinarias. Son actores sociales que se enmarcan en las conflictividades sociales del presente. Sin embargo, así como las experiencias de ascenso e institucionalización pueden enseñarnos algo sobre lo que hoy ocurre en la Argentina, también podemos observar con menos pesimismo el rol de los feminismos movilizados para resistir y revertir estos mismos procesos de desdemocratización.

Bibliografía

Arbuet Osuna, C. y S. Cáceres Soforza (2019), “¿Microfascismos? Sexualidades, fake news y nuevas derechas (Trump-Bolsonaro)”, *Revista Sociedad*, 39, pp. 114-129.

Biroli, F. (2020), “Gênero, ‘valores familiares’ e democracia”, en F. Biroli, M. das Dores Campos Machado y J. M. Vaggione, *Gênero, neoconservadorismo e democracia: disputas e retrocessos na América Latina*, San Pablo, Boitempo.

Biroli, F., M. D. Campos Machado y J. M. Vaggione (2020), *Gênero, neoconservadorismo e democracia: disputas e retrocessos na América Latina*, San Pablo, Boitempo.

Brustier, G. (2015), “France” en Kováts y M. Põim (eds.), *Gender as Symbolic Glue. The Position and Role of Conservative and Far Right Parties in the Anti-gender Mobilizations in Europe*, Friedrich Ebert Stiftung.

Butler, J. (2019), “What Threat? The Campaign against ‘Gender Ideology’”, *Glocalism: Journal of Culture, Politics and Innovation*, 3.

Cooper, M. (2020), *Los valores de la familia. Entre el neoliberalismo y el nuevo social-conservadurismo*, Madrid, Traficantes de Sueños.

De Giorgi, E., A. Cavalieri y F. Feo (2023), “From Opposition Leader to Prime Minister: Giorgia Meloni and Women’s Issues in the Italian Radical Right”, *Politics and Governance*, 11(1), pp. 108-118.

Dietze, G. (2020), “Why Are Women Attracted to Right-Wing Populism? Sexual Exceptionalism, Emancipation Fatigue, and New Maternalism”, en G. Dietze y J. Roth (eds.), *Right-Wing Populism and Gender. European Perspectives and beyond*, Bielefeld, Transcript.

Esquivel, V., E. Faur y E. Jelin (2012), *Las lógicas del cuidado infantil. Entre las familias, el Estado y el mercado*, Buenos Aires, IDES.

Faludi, S. (2006), *Backlash: The Undeclared War against American Women*, Nueva York, Three Rivers Press [ed. cast.: *Reacción: la guerra no declarada contra la mujer moderna*, Barcelona, Anagrama, 1993].

Félix, A. (2015), “Hungary”, en E. Kováts y M. Põim (eds.), *Gender as Symbolic Glue. The Position and Role of Conservative and Far Right Parties in the Anti-gender Mobilizations in Europe*, Friedrich Ebert Stiftung.

Gago, V. (2019), “Cartografiar la contraofensiva: el espectro del feminismo”, *Nueva Sociedad*, 282, pp. 15-28.

Grzebalska, W. y A. Petó (2017), “The Gendered Modus Operandi of the Illiberal Transformation in Hungary and Poland”, *Women’s Studies International Forum*.

Hochschild, A. R. (2014), *Extraños en su propia tierra. Réquiem por la derecha estadounidense*, Madrid, Capitán Swing.

Korolczuk, E. y A. Graff (2018), “Gender as ‘Ebola from Brussels’: The Anticolonial Frame and the Rise of Illiberal Populism”, *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 43(4), pp. 797-821.

Kováts, E. y M. Põim (eds.) (2015), *Gender as Symbolic Glue. The Position and Role of Conservative and Far Right Parties in the Anti-gender Mobilizations in Europe*, Friedrich Ebert Stiftung.

Miskolci, R. y M. Campana (2017), “‘Ideologia de gênero’: notas para a genealogia de um pânico moral contemporâneo”, *Sociedade e Estado*, 32(3), pp. 725-748.

Morán Faúndes, J. M. (2019), “The Geopolitics of Moral Panic: The Influence of Argentinian Neo-conservatism in the Genesis of the Discourse of ‘Gender Ideology’”, *International Sociology*, 34(4), pp. 402-417.

Nogueira Cunha, L. L. (2020), “La antipolítica de género en el gobierno de Bolsonaro y sus dinámicas de violencia”, *REB. Revista de Estudios Brasileños*, 14(7), pp. 49-61.

Puar, J. (2017), *Ensamblajes terroristas. El homonacionalismo en tiempos queer*, Barcelona, Bellaterra.

Roth, J. (2020), ¿Puede el feminismo vencer al populismo? Avances populistas de derecha y contestaciones interseccionales en las Américas, Bielefeld, Kipu-Center for InterAmerican Studies.

Spierings, N. (2020), “Why Gender and Sexuality Are both Trivial and Pivotal in Populist Radical Right Politics”, en G. Dietze y J. Roth (eds.), Right-Wing Populism and Gender. European Perspectives and Beyond, Bielefeld, Transcript.

Vacarezza N. L. y Sutton, B. (eds.) (2021), Abortion and Democracy. Contentious Body Politics in Argentina, Chile and Uruguay, Nueva York, Routledge.

Vaggione, J. M. y Morán Faúndes, J. M. (2021), “Neoconservative incursions into party politics. The cases of Argentina and Chile”, en Vacarezza N. L. y Sutton, B. (eds.) (2021), Abortion and Democracy. Contentious Body Politics in Argentina, Chile and Uruguay, Nueva York, Routledge.

Vaggione, J. M. (2022), “El entramado neoconservador en América Latina. La instrumentalización de la ideología de género en las democracias contemporáneas”, Las Torres de Lucca, 11(1), pp. 51-64.

Viveros Vigoya, M. (2017), “Hacer y deshacer la ideología del género”, Sexualidad, Salud y Sociedad. Revista Latinoamericana, 27, pp. 118-127.

Wittgenstein, L. (1999), Investigaciones filosóficas, Madrid, Altaya.

7. Milei y los horizontes de lo político

Crisis de régimen y anhelo de clausura de la incertidumbre democrática

Tomás Borovinsky, Martín Plot, Daniela Slipak

A lo largo de las últimas décadas, el mundo vivió grandes transformaciones políticas, culturales y económicas, y la Argentina no fue la excepción. De la mano de las reflexiones de distintos autores y autoras del pensamiento político contemporáneo, buscamos interrogarnos por las condiciones que hoy erosionan la democracia en nuestro país, a cuarenta años de su institución. Para empezar, indicaremos el origen lefortiano de nuestro vocabulario conceptual. Esta definición vendrá acompañada por una mirada específica sobre la experiencia de las sociedades contemporáneas: la democracia como forma de sociedad se erige sobre la disolución de las referencias de certeza y las jerarquías sociales que dominaron la vida política occidental durante el antiguo régimen. Esta disolución dio lugar a sociedades abiertas al permanente cuestionamiento de los arreglos y las distribuciones de poder, como asimismo a la aceptación del carácter contingente de las hegemonías culturales o los conflictos sociales. Sin embargo, esta apertura a la incertidumbre demostró ser un arma de doble filo: cuando las sociedades entran en crisis económicas profundas o se sumergen en el terror de una guerra, pueden llegar a rechazarla. Esta es la amenaza, a la vez paradójica y estructural, que sufren nuestras democracias.

La experiencia recién descripta estuvo en el origen de los totalitarismos de la primera mitad del siglo XX, pero también en versiones menos puras de esa forma de sociedad, como las dictaduras latinoamericanas de los años setenta. A continuación, indagaremos sobre las condiciones en las que esta tensión entre

acogimiento y rechazo de la incertidumbre se ha dado en la sociedad argentina reciente, para poner el foco en el surgimiento de una derecha radical de nuevo tipo a nivel global y sus liderazgos, y concluir con una sección sobre las características que llevaron a Javier Milei al poder y sus implicancias para la democracia. Al respecto, veremos que la cuestión es doblemente compleja, ya que debe considerarse tanto el régimen político específico nacido de la fundación democrática de 1983 así como los rasgos de la forma de sociedad democrática en general, que los horizontes epistémico y teológico que acompañan el triunfo de Milei parecen amenazar.

Definiciones preliminares

Nuestro abordaje se apoya en las reflexiones del filósofo Claude Lefort, quien propone la noción de “forma de sociedad” para indicar que toda configuración social presenta una articulación diferente de lo simbólico y formas contrastantes de lo político. Dos mutaciones simbólicas dominan la historia de Occidente de los últimos siglos: la revolución democrática y el advenimiento del totalitarismo. La revolución democrática transformó una sociedad en la que el poder estaba “encarnado” y donde la ley, el poder y el saber se superponían bajo las viejas monarquías del antiguo régimen. A través de aquella, “los dos cuerpos del rey” – el simbólico y el real (Lefort, 2004: 52)– dieron paso a la desencarnación del poder, es decir, a la emergencia del poder como un lugar vacío, solo detentado de manera contingente. La monarquía teológico-política veía el reino como una unidad orgánica y mística, y el cuerpo del rey hacía las veces de cabeza del cuerpo social y representación de la unidad del reino en tanto exteriormente constituida. La mutación democrática destruyó el cuerpo del rey y decapitó el cuerpo social, y de este modo eliminó la corporalidad de la sociedad. De allí que, por ejemplo, el pueblo ya no remita a un absoluto. Su identidad, por el contrario, se cuestiona y reformula constantemente.

La segunda mutación, el advenimiento del totalitarismo, no restituye la figura de los dos cuerpos del rey, puesto que el líder/partido totalitario no dice representar a un referente externo al cuerpo social sino a la sociedad misma, entendida como Pueblo-Uno. El fenómeno totalitario reunifica las esferas del poder, la ley y el saber, y reincorpora el poder en un “órgano”: el partido, en tanto cabeza del

cuerpo político. De este modo, el totalitarismo niega todo principio de división interna y por eso no constituye un retorno al antiguo régimen sino una posibilidad más de la secularización moderna (Borovinsky, 2016). Como dijo Hannah Arendt, “estoy perfectamente segura de que toda esta catástrofe totalitaria no hubiese ocurrido si la gente hubiera seguido creyendo en Dios o en el infierno” (1979: 313).

¿Pero en qué condiciones se produce esta segunda mutación, la que hace que las democracias puedan colapsar? Lefort las define de este modo:

En una sociedad [como la democrática] en donde lo adquirido jamás lleva el sello de la legitimidad plena; en la que la diferencia de estatus deja de ser irrefutable; en la que el derecho se muestra relativo al discurso que lo enuncia; en la que el poder se ejerce en función del conflicto, [siempre] queda abierta la posibilidad de una desregulación de la lógica democrática. Cuando crece la inseguridad de los individuos, como consecuencia de una crisis económica o de los destrozos de una guerra; cuando el conflicto entre las clases y los grupos se agudiza y no encuentra ya una resolución simbólica en la esfera política; cuando el poder parece caer en el plano de lo real y aparece como alguna cosa particular al servicio de los intereses y apetitos de vulgares ambiciosos; para decirlo brevemente: cuando se muestra dentro de la sociedad y al mismo tiempo esta aparece fragmentada, entonces se desarrolla el fantasma del Pueblo-Uno, la búsqueda de una identidad sustancial, de un cuerpo social soldado a su cabeza, de un poder encantador, de un Estado libre de división” (traducción modificada; 50).

Lefort propuso esta descripción para el período de entreguerras en Alemania y para la Unión Soviética, pero apunta a una identificación de las condiciones generales ante las cuales la incertidumbre propia de la democracia puede volverse intolerable para una sociedad. Para Lefort, la amenaza es siempre la encarnación del poder en un individuo o un grupo social que pone en escena la clausura de la conflictividad democrática y la pluralidad de opiniones y proyectos. Pero esta amenaza no solo no terminó con el fin de los totalitarismos nazi y soviético, sino que está siempre presente. Esto lo llevó, en 2000, a escribir:

Las aventuras totalitarias nos han enseñado la atracción que ejercía la dominación de la burocracia, ejercida de arriba hacia abajo, en un régimen que pretendía borrar todo signo de conflicto [...] En el presente es la expansión del mercado, que se supone autorregulado, a escala planetaria la que lanza un desafío al poder democrático” (2004: 35).

Por tanto, dos son los elementos del planteo lefortiano que resultan claves para la interpretación de la situación argentina actual. Por un lado, las condiciones generales que potencialmente conducen al colapso de las democracias: una situación de crisis económica, bélica o de otro orden que vuelva intolerable la incertidumbre democrática y conjugue un anhelo de unidad plena. Por otro, su observación más reciente acerca de que el sueño de un mercado global autorregulado podría ofrecer esa unidad.

La revolución democrática argentina

De acuerdo con esta perspectiva, creemos que la recuperación democrática de 1983 no puede entenderse del mismo modo que las ocurridas en 1946, 1958, 1963 y 1973. Sostenemos que en 1983 se produjo el advenimiento de una forma de sociedad que concluyó el ciclo iniciado en 1930. Durante aquel ciclo, las Fuerzas Armadas habían funcionado como un árbitro que, ya sea gobernando explícitamente o tutelando los gobiernos constitucionales, había tenido el control decisorio de última instancia del escenario político. Podría decirse que, si bien no se trataba de una forma de sociedad teológico-política o totalitaria, el poder permanecía sujeto a la decisión final de la corporación militar: su cuerpo encarnaba la voluntad que terminaba por dirimir los conflictos políticos en cada coyuntura. En paralelo, la violación y suspensión de derechos y garantías ciudadanas era recurrente. En su lugar, como indica Marina Franco en este volumen, durante el período se sucedieron formas de violencia política y de represión estatal o paraestatal. Por último, el ciclo, signado por una fuerte inestabilidad política e institucional –que alternó gobiernos de facto y gobiernos

constitucionales– desembocó en una dictadura militar que orquestó un plan sistemático de secuestros, torturas y detenciones-desapariciones y sembró el terror en la ciudadanía.

El régimen inaugurado en 1983 supuso un cambio decisivo. No solo porque a partir de entonces se sucedieron, sin irrupción militar, gobiernos votados por la ciudadanía, sino, fundamentalmente, porque la forma de sociedad configurada desconectó su dinámica y su devenir de la voluntad de un actor en particular y se abrió, no sin tensiones y ambigüedades, a transitar un conflicto permanente entre fuerzas políticas democráticas. Ese conflicto se desplegó, más allá de los avances y retrocesos de estos cuarenta años, construyendo y sosteniendo los derechos humanos como horizonte y suelo común del nuevo régimen. Esto implicó desterrar la violencia como forma de intervención política y como forma de gestión estatal de las disputas. Por tanto, al rechazar las distintas e inconmensurables violencias políticas y estatales del período anterior, la sociedad argentina se expuso a una deriva incierta; es decir, a la incertidumbre que es el rasgo constitutivo de la dinámica democrática. Advino así una nueva forma de sociedad que entrelazó dimensiones e instituciones antes vistas como antagónicas –los anhelos de una democracia social y la construcción de un culto secular por la democracia política como única forma legítima de dirimir los conflictos sociales– y que liberó a la sociedad argentina de la vieja tutela de las Fuerzas Armadas.

Ahora bien, ¿qué sucedió con esa forma de sociedad en las décadas siguientes y cuál es su situación actual? Vivimos cuarenta años de un régimen democrático políticamente exitoso, que amplió libertades y derechos civiles de manera continua pero estuvo atravesado por fracasos económicos. Además, desde hace al menos quince años asistimos a una polarización política extrema, que radicaliza los conflictos y confunde a los adversarios con enemigos. Al mismo tiempo, florecen miradas que reivindican la violencia física o simbólica como manera de gestionar el vínculo con los adversarios u otros ciudadanos de la comunidad política. A su vez, la búsqueda por perpetuarse en el poder más allá de lo establecido por el régimen institucional vigente ha sido un tema recurrente desde 1983. En los años noventa, esta búsqueda fue uno de los motores de la reforma constitucional de 1994 impulsada por el entonces presidente Carlos Menem. Luego, el deseo de una rereelección fue uno de los factores que más dañó su segundo mandato y que, como efecto colateral, contribuyó a la implosión de la convertibilidad en diciembre de 2001. En tiempos de Cristina Fernández de Kirchner, el sueño de una rereelección y una reforma

constitucional marcó parte de la agenda política y contribuyó a incubar una situación de polarización social y crisis económica. Por último, la oligarquización de las élites políticas, económicas y culturales asoma en el horizonte de la percepción social como algo intolerable. Todo esto, sumado a la pobreza creciente y a la ausencia de discursos o proyectos políticos que ofrezcan alternativas promisorias de una revitalización del proyecto democrático igualitario, hace que la versión local de la ola global de emergencia de nuevos liderazgos de derecha extrema se profile con características explosivas.

Nuevos liderazgos en la era de la reacción

El surgimiento de las nuevas derechas radicales tiene parecidos de familia en distintas latitudes: un sistema político osificado, una desigualdad social creciente con una movilidad social decreciente, y la instalación de una corrección política discursiva que encorseta en exceso los límites de lo decible y lo indecible. Todos estos elementos hacen sinergia y crean una nueva máquina de resonancia (Connolly, 2017) que erosiona, amenaza o simplemente puede acabar con el régimen político existente (Plot, 2023). Al respecto, en distintos países emergieron liderazgos semejantes, con figuras transgresoras montadas sobre el resentimiento de los perjudicados por la creciente desigualdad. De allí que sea útil analizar en un mismo *Zeitgeist* eventos que van desde la llegada de Trump al poder (2016), el Brexit (2016), los chalecos amarillos franceses (2018) y el triunfo de Bolsonaro en Brasil (2018) hasta el posterior debilitamiento de gran parte de los gobiernos que administraron la pandemia del covid-19. En este marco de descontento general y anhelo de clausura de la incertidumbre democrática, irrumpe la reacción de las nuevas derechas globales. Asistimos globalmente a modelos políticos que buscan reducir la comunidad de pertenencia nacional y relegar a sectores importantes de la población por fuera de sus fronteras. Esta redefinición, además, se asienta sobre la incerteza acerca de quiénes pertenecerían legítimamente. Sin embargo, para pensar esta irrupción es necesario referir a ciertas especificidades locales. Como ya hemos señalado en otros textos (Borovinsky, 2023), mientras que en los casos de Trump o el Brexit en Europa se produce una reacción a un consenso centrista y desregulado asfixiante, en la Argentina asistimos a un “tsunami de ira pública” que reacciona a la incertidumbre de una vida económica experimentada como anomia –esto

también se discute, con más detalle, en el capítulo de Pablo Semán y Ulises Ferro en este volumen.

En efecto, si bien la promesa de democracia política de la nueva forma de sociedad instaurada en 1983 ha sido ampliamente cumplida, aquella relativa a la democracia social ha sido a todas luces defraudada. La sociedad argentina es hoy comparativamente más desigual y menos próspera que la de cuarenta años atrás. Para agravar la situación, hoy no existen actores políticos capaces de ofrecer un proyecto viable que entrelace democracia social y democracia política. Por esta situación es que Javier Milei pudo, durante la campaña electoral, articular la frase “la justicia social, esa aberración”, conjugando una respuesta precisa a las dimensiones recién mencionadas: el sistema político osificado, la creciente desigualdad social, la decreciente movilidad social y, sobre todo, los límites de lo decible y lo indecible característicos del régimen vigente.

Ahora bien, ¿el triunfo de Milei erosiona o amenaza terminalmente a la democracia como forma de sociedad? Para responder esa pregunta, quisiéramos retomar nuestra interpretación sobre Lefort. Su pensamiento de lo político supone interrogar las formas de coexistencia colectiva. En particular, reflexiona sobre el antiguo régimen, la democracia y el totalitarismo. Desde su mirada, aunque pueden rastrearse algunos grises, los pasajes hacia la segunda y el tercero son producto de una mutación simbólica que inaugura formas de sociedad mutuamente excluyentes, cuyos modos de vida y experiencia resultan incompatibles entre sí. Sin embargo, tal como hemos hecho en otros trabajos (Plot, 2014; Slipak, 2018), proponemos pensar los regímenes lefortianos como horizontes o manchas que conviven y compiten en coyunturas específicas. Aunque alguno de estos horizontes resulte predominante, eso no impide que los actores presenten elementos provenientes de horizontes políticos alternativos. Por ejemplo, creemos posible y productivo interrogar cómo, en el marco de una sociedad democrática, aparecen aspiraciones a un absoluto, anhelos de corporizar la comunidad política, intentos de sustancializar el pueblo y deseos de desterrar el conflicto político desde una posición de saber, sin que nada de esto implique necesariamente una mutación que cristalice en otra forma de sociedad.

Para que esto ocurra, uno de esos horizontes –por caso el totalitario o, como hemos propuesto en otros trabajos, el epistémico (Plot, 2014)– debe convertirse en hegemónico, algo que no se logra solo con un triunfo electoral, sino que resulta de reformas institucionales, políticas, culturales y sociales de largo aliento. Durante estas cuatro décadas ninguna fuerza política introdujo una

transformación del régimen democrático de esta envergadura. Pero el hecho de que no haya ocurrido no quiere decir que no sea posible. Desde nuestra perspectiva, la respuesta a la pregunta por la democracia que se abre con el triunfo de Javier Milei dependerá de la forma de sociedad desplegada y de su éxito en la introducción de cambios duraderos en el imaginario político.

La amenaza actual al régimen político nacido en 1983

Hasta este punto hemos desplegado tres argumentos entrelazados. En primer lugar, la democracia no es solo un tipo de gobierno: es una forma de sociedad. En ella se generaliza la incertidumbre como consecuencia de la disolución de las referencias de certeza propias del antiguo régimen y de la aparición de un nuevo estatus del poder, convertido ahora en un lugar vacío. Este doble movimiento – donde ya nadie goza de posiciones sociales, políticas y culturales fijas, y donde el poder ya no pertenece a nadie de modo definitivo– genera una sociedad abierta a su permanente autotransformación. Pero estas condiciones características de la democracia son también, precisamente, aquello que amenaza su permanencia. Bajo ciertas circunstancias, esa incertidumbre, esa ausencia de referencias de certeza, ese poder vaciado cuyo ejercicio nadie tiene garantizado, pasan a vivirse como algo intolerable que genera una demanda de orden. Esta demanda se da en ausencia –mayormente, sobre todo en las sociedades occidentales– de un modelo teológico-político como el del antiguo régimen. Es allí donde aparecen las ideologías para ocupar un lugar central, ya que ofrecen certezas y verdades indubitables en situaciones de crisis, guerra o hiperinflación, y de este modo se convierten en la principal amenaza a la democracia. Estas ideologías proponen un orden que promete la estabilización definitiva –la adecuación de la sociedad a lo que esta debe ser, según su verdad epistémica– y la eliminación de la incertidumbre acerca del orden presente y su devenir futuro.

En segundo lugar, propusimos un uso dinámico de las categorías lefortianas para interrogar cómo coexisten horizontes democráticos, teológico-políticos y epistémicos en las diversas coyunturas, más allá de que alguno predomine sobre el resto. Este desplazamiento conceptual de formas de sociedad aparentemente cristalizadas y mutuamente excluyentes a horizontes que coexisten y compiten entre sí permite abarcar los grises y las ambigüedades de la experiencia política.

Allí muchas veces conviven representaciones, dinámicas y aspiraciones provenientes de distintos modos de vida en común, más allá de la sedimentación de alguno en particular.

En tercer lugar, sugerimos que la Argentina se convirtió en una forma de sociedad democrática en el sentido lefortiano solo a partir de 1983 (Plot, 2020). Si bien la imaginación democrática ya había aparecido de múltiples maneras y se había visto expresada en distintos acontecimientos y procesos políticos, la persistencia de un rol de ultima ratio política de las Fuerzas Armadas en particular, y de la violencia estatal y política en general, hizo que la sociedad argentina nunca fuese plenamente democrática antes de 1983. Durante la mayor parte del siglo XX la sociedad argentina consolidó una forma híbrida de sociedad, entrelazando elementos teológico-políticos, democráticos y epistémicos, encarnados en las Fuerzas Armadas, la Iglesia y las principales fuerzas políticas. A este régimen híbrido le puso fin el advenimiento de la democracia en 1983.

La alianza entre el alfonsinismo y la renovación peronista fue la base fundamental de sustentación de una sociedad que abrazó la pluralidad y la incertidumbre democrática durante los años ochenta. Con la política de derechos humanos del oficialismo radical, y con la oposición leal e institucional del peronismo renovador, se afirmó una configuración que sentó las bases de cuarenta años de democracia ininterrumpida. Pero, como ya dijimos, esta alianza entre un nuevo radicalismo y un nuevo peronismo no solo se basó en la política de derechos humanos y la exclusión de las Fuerzas Armadas –y de las violencias políticas y estatales– como actor político de ultima ratio. Esta nueva alianza también hizo de la justicia social una bandera que, aun fundamentalmente asociada al peronismo en el ciclo anterior, era un anhelo compartido por las dos principales fuerzas políticas nacionales. Es este último componente del nuevo régimen el que se ve crecientemente frustrado desde hace más de diez años. Hoy la sociedad argentina es más pobre, más desigual y más inestable económicamente que durante el régimen anterior.

Luego de la crisis hiperinflacionaria de 1989 y la entrega anticipada del poder por parte de Alfonsín, Menem encaró un proceso de reformas que por momentos pusieron al borde del abismo los pilares fundamentales del régimen nacido en 1983 al proponerse eliminar la incertidumbre en nombre de la economía de mercado, como temía Lefort en el texto de cambio de milenio ya citado. Lo más significativo del menemismo estribó en su aspiración a clausurar los conflictos y

debates mediante la idea de un mercado autorregulado y un imaginario tecnocrático entendido como verdad última para disciplinar los reclamos y construir el orden comunitario. De todas maneras, con la implosión de la convertibilidad en 2001 y la llegada de una nueva fuerza política –el kirchnerismo temprano o transversal (Plot, 2017)– la pluralidad y las disputas entre actores volvieron a cobrar protagonismo. La indeterminación del escenario político del período terminó por abortar el modelo menemista, que no pudo reformar a largo plazo la sociedad nacida en 1983. En efecto, el menemismo y su continuidad en política económica durante el gobierno de la Alianza colapsaron por su propio intento de clausura y cierre de la incertidumbre democrática a partir de soluciones técnicas.

Pero el menemismo y la convertibilidad no fueron el único intento fallido, pero importante, de transformar la sociedad durante estos últimos cuarenta años. Luego de unos primeros años de transversalidad y pluralismo, fundamentalmente vinculados a esa restauración del espíritu del régimen nacido en 1983, el kirchnerismo se inscribió poco a poco en un imaginario que implicaba, de la mano de lógicas jacobinas (Aboy Carlés, 2018), la transformación de aspectos centrales de la vida política argentina. El comienzo de esa deriva puede localizarse en la fallida resolución 125, un intento por apropiarse de una porción mayor de la renta agropecuaria, que terminó en derrota parlamentaria en 2009. A partir de allí, el kirchnerismo aspiró a producir una reforma de la sociedad sostenida en la idea de corporizar la comunidad en un liderazgo particular y quitar legitimidad a la escena de conflictos en el seno de su propia fuerza y con el resto de los actores políticos. Como consecuencia de este proceso, la polarización reemplazó a la tendencia hacia el pluralismo y el arco abierto por la resolución 125 concluyó con el triunfo de Sergio Massa (fundador del Frente Renovador, en disidencia con el partido gobernante) en las elecciones legislativas de 2013. La principal bandera de Massa fue impedir una reforma constitucional que habilitaría la reelección presidencial indefinida, objetivo nunca reconocido abiertamente pero tampoco negado de manera explícita por Cristina Fernández de Kirchner. A partir de ese momento, el kirchnerismo, derrotado políticamente, no logró comprender la incompatibilidad estructural entre la celebración de un liderazgo permanente y la naturaleza renovadora del régimen vigente (Plot, 2021). Esta incompatibilidad fue reduciendo paulatinamente el número de sus adherentes hasta llegar a las circunstancias actuales, en que pasó a ser un actor secundario en el proceso electoral de 2023. Lo que quedó en evidencia es que los anhelos de liderazgo permanente no son efectivos en una sociedad de incertidumbre y mutación.

Algo parecido le ocurrió a la coalición Cambiemos, que buscó juntar una diversidad de tradiciones históricamente contrapuestas entre sí detrás de un proyecto político unificado en el antikirchnerismo. A principios del siglo XXI, dada su oposición común al kirchnerismo, la coalición Cambiemos puso en suspenso el tradicional enfrentamiento entre liberal-conservadores y radicales que databa de finales del siglo XIX. También albergó tendencias que la hicieron aspirar a clausurar la incertidumbre: encontró en el imaginario tecnocrático un espacio de resolución y determinación de los conflictos y debates sobre el pasado, el presente y el futuro. La unidad del mercado autorregulado denunciada por Lefort fue planteada como una narrativa epistémica que debía clausurar con eficacia la indeterminación social y política argentina. Pero, como en los casos anteriores –el menemismo y el kirchnerismo–, este intento fue absorbido por el régimen y abandonó su pretensión revolucionaria. A diferencia de Menem, Macri no logró ni una sola reforma estructural y fracasó en sus propios términos (“pobreza cero”, “unir a los argentinos”, “bajar rápidamente la inflación”, etc.). A excepción del endeudamiento final, las acciones políticas del macrismo no incidieron profundamente en la vida del régimen nacido en 1983. Pero el cocktail entre una deuda demasiado grande en relación con una baja productividad general, un gasto público mayor al sustentable y poco eficiente, y una presión impositiva inadecuada generó una inviabilidad presupuestaria que puso en jaque a la democracia social redistributiva. El despliegue de un modelo y una hoja de ruta contradictorios y deterministas voló por los aires ante la incertidumbre del plano internacional y la sociedad civil argentina.

Así, en 2018 la oposición aceleró su unificación frente al líder del PRO, Mauricio Macri. La evidencia de que Cristina Fernández de Kirchner era incapaz de obtener una mayoría electoral en las elecciones de 2019 contribuyó a la aglutinación del panperonismo y otros aliados, antes divorciados. Estos actores se reagruparon con una retórica y guiños simbólicos que buscaban conectar al primer kirchnerismo con el inicio de la democracia nacida en 1983: reivindicaron el régimen fundado por Alfonsín y restaurado por Néstor Kirchner en los años del kirchnerismo pluralista y transversal. Sin embargo, la incapacidad de esta coalición de mantenerse cohesionada en el marco de la llegada de la pandemia global, que en un principio catapultó al entonces presidente Alberto Fernández como gran “piloto de tormentas”, terminó por generar sus propias condiciones de deterioro y aceleró tendencias que tanto Juntos por el Cambio como el incipiente movimiento libertario encabezado por Javier Milei comenzaron a expresar en el terreno electoral. En síntesis, la incapacidad de asumir el liderazgo por parte de Alberto Fernández, así como la

obcecación del kirchernismo tardío con la figura de CFK como líder incuestionable, hicieron que el gobierno llegase a 2023 presentando como candidato presidencial a un ministro de una economía en crisis, Sergio Massa. Al igual que el gobierno de Macri, este nuevo fracaso político contribuye a explicar el tsunami libertario liderado por Javier Milei.

El 2023 se encontró atravesado por el agotamiento de un régimen democrático que hizo de la incertidumbre económica algo por completo intolerable y por la irrupción de Milei como un líder que enuncia soluciones críticas del régimen nacido en 1983 (de su entrelazamiento entre la promesa de democracia social y la afirmación del “Nunca Más” como rechazo a las violencias precedentes). El presidente electo surge, entonces, de las cenizas de las tres últimas gestiones fracasadas. Es de esas desesperanzas que nace la nueva esperanza liberal-libertaria. El persistente deterioro de las condiciones de vida de la población, la oligarquización del sistema político y la incertidumbre social generalizada alimentan el rechazo por lo que el mileísmo llama “casta”.

Podría decirse que, entre todos los presidentes mencionados, Javier Milei es el más “intelectual” –interviene en la esfera pública citando autores y papers– y el que más se posiciona desde un lugar de saber –un saber plagado de contradicciones, por supuesto–, pero también es el que más explícitamente tensiona la incertidumbre democrática lefortiana. Su propuesta no es compatible con la disolución de los referentes últimos ni con la indeterminación sobre lo legítimo y lo ilegítimo en la vida colectiva. Lo que Milei introdujo en la vida pública es una promesa epistémica que indica un conocimiento inmanente de las leyes naturales de la economía. Este conocimiento –liberado de las ataduras del Estado, de sus regulaciones y su aspiración redistributiva– pondría fin a la incertidumbre económica pero también, quizás, a la incertidumbre política. Estas ideas parecen ocupar un lugar primordial en la cosmovisión general y la concepción política particular del proyecto del actual presidente.

En efecto, Milei actúa como un teórico, un propagandista y un ideólogo en el poder –una combinación compleja si este último debe permanecer vacío y si quien lo detenta debe aceptar la contingencia de su ejercicio circunstancial. Milei es un economista que se autopercibe anarcocapitalista, lector de Ayn Rand, Friedrich Hayek y Murray Rothbard; es localizable, además, en la constelación paleolibertaria. Siguiendo los postulados de Llewellyn H. Rockwell Jr., este paleolibertarianismo es una rama del universo libertario que sostiene, entre otras cosas, que el “Estado Leviatán” es la fuente institucional del mal, que el

libre mercado sin trabas es un imperativo moral y práctico, que el Estado de bienestar es “robo organizado” y que la ética igualitaria es “moralmente reprobable”. Es difícil reconciliar este tipo de postulados con la experiencia que implica la compleja vida política y social de nuestro país en el marco del régimen nacido en 1983. En este sentido, Milei incorpora el horizonte epistémico sostenido en una verdad a la que la realidad debería amoldarse (Amat, 2023). Sorprendentemente, también encontramos en sus declaraciones elementos que sugieren la persistencia de un sueño teológico-político y la añoranza de absolutos, algo que comparte con los horizontes teológicos (Plot, 2014). Esos espectros son los que asoman en su evocación de las “fuerzas del cielo”, un lema sacado del Libro de los Macabeos, y su idea de predestinación divina. Esta “mezcolanza” (para usar un término de Wittgenstein) resulta preocupante de cara al futuro de la sociedad argentina. En los próximos tiempos veremos cómo evoluciona esta tensión e hibridación entre diversos horizontes de lo político.

En el inicio del gobierno de Milei aparece otro aspecto, común a las experiencias políticas de los últimos años: el modo impreciso o equívoco de interpretar el triunfo propio. En 2011 el nuevo “cristinismo” –y algunos de sus referentes intelectuales, entre otros Damián Selci– sostenía que el pueblo argentino había girado a la izquierda y que era necesario generalizar la militancia mediante la “organización permanente” (Selci, 2020). Sobre esa base, el kirchnerismo tardío pretendió realizar transformaciones estructurales, como la reforma de la justicia u otro tipo de medidas institucionales y económicas que nunca se concretaron. Cuatro años después, algo similar le ocurrió al macrismo. Creyó que la elección de 2015 implicaba un “cambio cultural” de la sociedad argentina. Sin embargo, el gobierno pasó de una victoria electoral de medio término a una crisis cambiaria y política que lo llevó a la derrota de 2019. Años después, la gestión del Frente de Todos también interpretó equivocadamente su triunfo y asumió sin haber acordado un plan de gobierno consistente. El FdT nació de la idea de ampliar la coalición kirchnerista sobre las cenizas del fracaso económico del gobierno de Macri, pero al llegar al poder se dedicó a canibalizarse en internas políticas, con una pandemia de por medio y a costa de la tan prometida “reconstrucción argentina”.

Milei corre el mismo riesgo que sus predecesores. No olvidemos que en la primera vuelta obtuvo el 30% de los votos, por lo que su llegada a la Casa Rosada es más un producto de la contingencia que un destino manifiesto. Es cierto que el anhelo social de una derrota del oficialismo tiñó desde un comienzo

el proceso electoral; de allí que no fuera sorprendente la casi completa transferencia de los votos de Juntos por el Cambio hacia La Libertad Avanza (LLA) en el balotaje. De todas maneras, también es cierto que la desestimación de la contingencia del triunfo y su interpretación como una encarnación del tiempo histórico, o como una revancha de la historia misma, puede atentar contra cualquier despliegue político sin importar su ideología u horizonte. En todo caso se verá si, en ejercicio del poder, Milei cae preso de sus propios límites ideológicos o logra reinventarse.

Palabras finales

A lo largo de este capítulo y a través del vocabulario conceptual de Claude Lefort, sugerimos que estamos ante la amenaza más explícita de reforma revolucionaria de la sociedad de los últimos cuarenta años de democracia. La razón de ser de Menem, la razón de ser de Cristina Fernández de Kirchner y la razón de ser del primer Macri no fueron cambiar el régimen político nacido en 1983; sin embargo, durante su ejercicio del poder, cada uno de ellos coqueteó con hacerlo y fracasó. La razón de ser de Milei y LLA, por el contrario, parece ser desde un comienzo la transformación del régimen vigente –la única versión de democracia lefortiana que conoce nuestro país–. En palabras de la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, la democracia es una “gangrena” que ya lleva cuarenta años. En esa misma línea va el presidente Milei cuando afirma que “llevamos cien años de decadencia”, retrotrayéndose al comienzo del voto masculino universal que llevó a Hipólito Yrigoyen al poder. Este movimiento que busca reconfigurar la sociedad tiene, por otra parte, más viabilidad que los anteriores. Esto se debe a que las condiciones de generalización de la incertidumbre ya mencionadas –inflación persistente y creciente, crisis económica sin solución, aumento de la pobreza y la desigualdad, oligarquización de las élites culturales y políticas– han puesto en crisis al paradigma democrático (Plot, 2023). La democracia nacida en 1983 se desarticula socialmente. El régimen mantiene vitalidad política y paz social –como lo mostró, incluso y paradójicamente, el proceso electoral de 2023– pero ha ingresado en una profunda crisis económica, social y cultural. El discurso público abiertamente antirrégimen, que en otro contexto no sería audible, comienza a serlo gracias a esta crisis. Los que hablan diferente empiezan a ser escuchados y amenazan

abiertamente a la democracia o, al menos, a la forma de democracia que perduró durante cuarenta años en nuestro país: un régimen que hizo de la política del “Nunca Más” y de la promesa de democracia social sus dos componentes fundacionales.

Bibliografía

Aboy Carlés, G. (2018), Conversación con Alejandro Galliano, Ponele, 2018, <www.ponele.info/debates/mini-entrevista-gerardo-aboy-carles>.

Amat, D. (2023), “Las modestas proposiciones de Javier Milei”, Bordes, Jose C. Paz.

Arendt, H. (1979), “On Hannah Arendt”, en M. A. Hill (ed.), *The Recovery of the Public World*, Nueva York, St. Martin’s Press.

Borovinsky, T. (2016), “The Jewish Question, Secularization and the Nation-state crisis in Hannah Arendt: For a Politics of Plurality”, *Politics and Religion*, 10(2), pp. 191-205.

— (2023), “Tsunamis de ira pública”, Panamá, julio, <panamarevista.com/tsunamis-de-ira-publica>.

Connolly, W. (2017), *Aspirational Fascism. The Struggle for Multifaceted Democracy under Trumpism*, Minnesota University Press.

Fernández, L. D. (2023), Utopía y mercado. Pasado, presente y futuro de las ideas libertarias, Buenos Aires, Interferencias.

González, J. L. (2023), El Loco. La vida desocnocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, Buenos Aires, Planeta.

Lefort, C. (2004), La incertidumbre democrática, Barcelona, Anthropos.

Plot, M. (2014), The Aesthetico-Political. The Question of Democracy in Merleau-Ponty, Arendt, and Rancière, Nueva York, Bloomsbury.

— (2017), “03-11-19: Apuntes para una periodización del nuevo siglo político argentino”, Anfibia.

— (2020), “La democracia dualista como forma política: Bruce Ackerman y la cuestión del régimen político en la Argentina y los Estados Unidos”, en G. Caetano y F. Mayorga (coords.), Giros políticos y desafíos democráticos en América Latina, Buenos Aires, Clacso.

— (2021), “El pato rengo como forma política”, Unidad Sociológica, 21.

— (2023), “Poetas vigorosos”, El Dipló, Buenos Aires, septiembre.

Selci, D. (2020), *La organización permanente*, Buenos Aires, Cuarenta Ríos.

Slipak, D. (2018), “El pueblo de la revolución. Las organizaciones armadas argentinas en los años setenta”, *Cadernos de Ética e Filosofía Política*, 1(32), pp. 75-86.

8. De la posconvertibilidad a la pospandemia

La economía política y la derechización de la agenda económica

Leandro Sowter

Desde el “Rodrigazo” de 1975 en adelante, la Argentina ha tenido severas dificultades para mantener un crecimiento económico sostenible, macroeconómicamente equilibrado y con algún nivel mínimo de distribución progresiva del ingreso. En la visión del ciudadano común, la complejidad de la trayectoria económica escapa a toda explicación y suele ser atribuida a uno u otro gobierno, al Estado o simplemente a “los políticos”. Sin embargo, detrás de cada crisis se encuentra la evolución de la propia estructura económica, cuya dinámica elude simplificaciones y reduccionismos. En cualquier caso, la experiencia histórica muestra que las crisis económicas profundas y sostenidas suelen habilitar reacciones extremas que prometen soluciones radicales para resolver los problemas de forma inmediata. Por ello, la comprensión de la dinámica histórica y estructural en la que se inserta la actual coyuntura no solo es un ejercicio de honestidad intelectual sino además necesario a fin de mejorar la calidad del debate democrático, o al menos de poner sobre la mesa qué es lo que está en discusión.

En primer lugar, es necesario partir de la base de que un país económicamente dependiente como la Argentina presenta una dinámica de crecimiento caracterizada por ciclos de crecimiento-crisis derivados de su estructura económica-productiva desequilibrada.[37] Esto implica, por un lado, que las posibilidades de expansión económica dependen de la afluencia de divisas y que las perspectivas de una distribución progresiva del ingreso están supeditadas a

un tipo de cambio bajo. Por otro lado, significa que la política económica solo puede tener cierta autonomía en períodos acotados, que por lo general se dan en el marco de crisis político-institucionales que permiten ampliar los márgenes de acción del Poder Ejecutivo frente al resto de los actores sociales. Sin embargo, esta eventualidad no es suficiente. Resulta necesario que quien ocupa la presidencia tenga la voluntad de ejercer esa autonomía (Acuña, 1994; Evans, 1996).

En segundo lugar, dado este cuadro, se comprende que la política económica solo puede modificar parcialmente los ciclos de crecimiento y sus características; por ejemplo, su duración relativa, si es con inclusión social o no, con crecimiento industrial o con desindustrialización. En este sentido, cabe señalar que no se puede comprender la dinámica económica actual sin antes tener en cuenta la estructura económica que quedó planteada desde 1976 y se consolidó en los años noventa (Basualdo, 2006). Del cuadro que componen estas transformaciones se deriva que el Estado y la política económica de los gobiernos tienen un margen muy estrecho para promover la inclusión social en los períodos de crecimiento o bien para morigerar y distribuir de forma equitativa los costos en los períodos de crisis.

En este contexto, no sorprende que la economía esté en el centro de la discusión de las alternativas políticas. El debate resulta particularmente relevante por dos razones. Por un lado, porque se han puesto en cuestión algunas características del “pacto democrático”, al menos tal como se dio desde 1983 (véase el capítulo de Vommaro). Por otro lado, desde hace unos años se verifica un avance sostenido en la radicalización del discurso económico liberal-conservador de derecha, con posturas extremas de capitalismo de libre mercado o directamente “anarcocapitalistas”, que proponen una retirada total del Estado en la economía (véase el capítulo de Ferro y Semán).

La relación entre democracia, economía y extrema derecha tampoco admite simplificaciones. La bibliografía especializada muestra que la crisis económica juega un rol importante para explicar el surgimiento y la competitividad electoral de movimientos de extrema derecha que pueden poner en crisis a la democracia (véase el capítulo de Franco y Lvovich). Sin embargo, la relación no es automática. Adam Przeworski (2022) muestra que, si bien los regímenes democráticos consolidados no caen a causa de una crisis económica de corto plazo, los procesos de estancamiento o recesión de largo plazo, con sus secuelas de caída en los ingresos e incremento de la desigualdad, configuran un cuadro de

amenaza seria a la democracia, sobre todo bajo condiciones políticas de fuerte polarización.

El presente capítulo aborda la evolución económica argentina entre 2003 y 2023 a fin de poner de relieve el orden histórico de los problemas actuales. Por un lado, se estudian dos dimensiones principales: la dinámica estructural de la economía, y dentro de ella, el rol de la política económica. Por otro lado, se pone el foco en el crecimiento económico y la distribución del ingreso, variables que la bibliografía especializada considera fundamentales para dar cuenta del anclaje que pueden tener los discursos económicos de las fuerzas políticas de extrema derecha.[38]

De “la peor crisis de la historia” al crecimiento a “tasas chinas”, 2003-2011

Los parámetros bajo los que se reordenó la economía después del estallido social de diciembre de 2001 no fueron planificados, sino que surgieron tras una profunda crisis política, institucional, social y económica. Luego de la salida de la convertibilidad y la pesificación asimétrica comenzó un proceso de fuerte expansión.[39] Entre 2003 y 2011 el PBI creció un 60% (6% anual) mientras que el PBI per cápita, una medida más fiel al crecimiento pues tiene en cuenta el aumento de la población, lo hizo un 46,5%. Si bien se expandieron todos los sectores, la novedad fue el gran desempeño que mostró la industria, que creció a un promedio de 8% anual. Esto quedó también reflejado en la cantidad de empresas industriales, cuyo número se expandió un 37% y los ocupados formales un 34%. La inversión en los distintos sectores (industria, agro, minería, servicios) se multiplicó por cuatro (Ghibaudo y Raccanello, 2021).

Los nuevos parámetros de crecimiento combinaron un tipo de cambio alto y estable. La devaluación de enero de 2002 fue del 263%, pero la inflación solo marcó 26% ese año, para luego ubicarse en un promedio de 10,5% anual entre 2003 y 2007 y de 21,5% entre 2008 y 2011. En la medida en que la suba de precios quedó por debajo de la devaluación, la ganancia de competitividad-precio de la economía frente al exterior fue muy importante y permitió quebrar la apreciación cambiaria de la convertibilidad, que tanto daño había generado en

el tejido productivo.

Visto en perspectiva histórica, este ciclo de expansión presenta algunas novedades que implicaron un quiebre respecto de la dinámica económica que operaba desde 1976. En primer lugar, fue un tipo de crecimiento que se combinó con un sector externo sólido, marcado por los superávits gemelos (de cuenta corriente y fiscal) y reforzado por la cuenta capital positiva, dada la renegociación y quita de deuda externa.[40] En segundo lugar, el sector industrial tuvo un gran desempeño: el PBI sectorial creció 62% entre 2003 y 2011 (por encima del PBI global) y así constituyó uno de los períodos de crecimiento industrial más prolongados de la historia. En tercer lugar, desde 2003 la dinámica económica expansiva implicó una reactivación del mercado laboral, aumento del salario real, ampliación de la participación asalariada en el producto nacional y reducción de la desigualdad de ingresos, lo cual también quebró la tendencia vigente en materia sociolaboral.

En este contexto económico favorable, el gobierno de Néstor Kirchner aplicó una serie de políticas que permitieron reforzar el impulso al crecimiento, en particular en las actividades industriales, y posibilitar una distribución sostenida del ingreso. Luego de la renuncia de Menem a participar en la segunda vuelta, Kirchner fue ungido presidente con el 21,65% de los votos. La orientación de la política económica estuvo enmarcada en un proyecto político que tuvo como norte la distribución progresiva del ingreso. El objetivo de “justicia social” predominó por sobre otros, como por ejemplo la modificación de la estructura económica vigente, signada por la primarización de la producción, la centralidad del sector financiero, el predominio de los grandes grupos económicos y la extranjerización de la economía. Los principales instrumentos utilizados para distribuir la renta agraria fueron las retenciones a las exportaciones agropecuarias, el financiamiento dirigido, los subsidios al sector urbano y la promoción del consumo doméstico (Ghibaudo y Raccanello, 2021).

La orientación distributiva en favor del sector asalariado estuvo presente desde un comienzo y persistió a lo largo de los tres gobiernos kirchneristas, desde 2003 hasta 2015, y se implementó principalmente a través de la regulación del mercado de trabajo, la reconstrucción de la institucionalidad laboral y las transferencias sociales directas. Así, se expandió la política seguida por el presidente interino Eduardo Duhalde (2002-2003) de otorgar sumas fijas no remunerativas, a lo cual se sumó la reimplantación del Salario Mínimo Vital y Móvil, que ejerció un efecto de guía y de empuje para la fijación de las

remuneraciones en el sector informal. La Ley de Ordenamiento Laboral de 2004 reinstauró los convenios colectivos de trabajo y el principio de ultraactividad, además de modificar el período de prueba, hasta ese entonces indefinido, a un máximo de tres meses no prorrogables.[41]

A partir de 2003 hubo una relación positiva entre crecimiento y ocupación y una mejora sostenida en todos los índices sociolaborales, lo cual quebró la tendencia de los años noventa (Beccaria y Maurizio, 2017). La tasa de desempleo, que a fines de 2002 tocó el 19,7%, comenzó a bajar de forma pausada pero sostenida: en 2007 llegó al 8,5% y en 2011, luego de la crisis internacional, terminó con 10,5%. De 2002 a 2014 fue el período más dinámico en la tasa de ocupación, con un crecimiento anual de 2,6% en la cantidad neta de puestos de trabajo, mientras que entre 1991 y 1998 ese crecimiento había sido de 1,4%. A la vez, si bien la precarización laboral bajó, permaneció en niveles altos: del 43,5 al 36,9% entre 2002 y 2011. En cuanto a los salarios reales, crecieron a un ritmo del 5,8% anual y entre 2003 y 2011 acumularon una mejora del 68,8% (Minprod, 2022). La pobreza pasó del 65,5% en 2002 al 28% en 2011, lo cual muestra la persistencia de la pobreza estructural. El coeficiente de desigualdad Gini también bajó de 0,533 en 2002 a 0,432 en 2011.[42]

En las elecciones presidenciales de 2007 se impuso Cristina Fernández de Kirchner en primera vuelta con más del 45,28% de los votos. Al año siguiente las condiciones internacionales sufrieron un cambio drástico que supuso nuevos desafíos a la gestión económica. En septiembre de 2008 quebró uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, el Lehman Brothers, lo cual derivó en la llamada Gran Recesión, la mayor crisis económica desde la Gran Depresión de la década de 1930. Sus efectos financieros no afectaron a la Argentina debido a su sólida posición externa y su bajo nivel de endeudamiento, pero sí generaron una caída en el volumen del comercio internacional y en los precios. El PBI argentino se contrajo un 6% y el desempleo, por primera vez en alza desde 2003, alcanzó el 11,5% en 2009.

La respuesta del gobierno fue un conjunto de políticas anticíclicas, orientadas a amortiguar el impacto sobre la economía real dentro de un enfoque gradual: ajustes en el tipo de cambio y alza moderada de la tasa de interés, combinados con expansión fiscal y crediticia. Con el fin de sostener el empleo se aplicaron subsidios a través del recientemente creado Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (Repro) y se implementó la Asignación Universal por Hijo (AUH).[43] Como la crisis había generado una baja en el valor de las

cotizaciones en las que las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) invertían los fondos, y en la medida en que el Estado seguía siendo el último responsable por los mismos, se decidió su estatización.

La novedad es que fue la primera vez que una crisis internacional no derivó en una crisis de balanza de pagos y sus ya conocidas consecuencias de devaluación, inflación, recesión y redistribución regresiva del ingreso. A pesar del contexto adverso, el PBI se expandió un 10,4% en 2010 y un 6,2% en 2011, los salarios reales siguieron creciendo a una tasa cercana al 6% anual y la desocupación retomó su curva descendente: 10,5% en 2011 y 9,6% en 2012.

Del auge al estancamiento, del estancamiento a la recesión: la economía entre 2011 y 2018

El 2011 marcó un quiebre en el comportamiento de las principales variables económicas y el inicio de un período de estancamiento. En rigor, desde 2008 había comenzado una desaceleración. La acumulación de tensiones y desajustes macroeconómicos, sumada a la falta de un enfoque claro para resolverlos, llevó a un progresivo deterioro de la actividad y de los indicadores sociales dentro de un contexto económico internacional que presentaba crecientes restricciones. A partir de 2007 la inflación comenzó a acelerarse y alcanzó un promedio de 24% anual hasta 2015. En combinación con un tipo de cambio planchado, generó un proceso de apreciación frente al dólar, lo cual comenzó a revertir los parámetros que habían permitido el despegue económico desde 2003. El resultado de este combo de inflación y apreciación cambiaria fue un círculo vicioso signado por la fuga de capitales, importaciones que superaron las exportaciones y dieron lugar a un déficit en el balance comercial, caída de reservas internacionales, aumento del déficit fiscal, empeoramiento de las expectativas y caída en la tasa de inversión. Hacia fines de 2011 la expectativa de devaluación aceleró la fuga de capitales, que llegó a 20 000 millones de dólares.

Esta deriva pone de relieve los límites de un modelo que busca crecimiento con distribución sin modificar la matriz productiva. A pesar de la expansión industrial y la moderada reversión del proceso de desindustrialización, no hubo en esos años una estrategia planificada para superar una estructura económica

marcada por un sector industrial divisa-dependiente.

En 2011 Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta en primera vuelta con el 54,11% de los votos en un contexto de elevadas expectativas respecto de la continuidad del modelo de crecimiento económico con inclusión social. Aunque el frente económico era sólido, la acumulación de desajustes y distorsiones requería un abordaje claro y preciso. Sin embargo, en la práctica, el gobierno aplicó medidas que tuvieron efectos contradictorios y solo implementó ajustes puntuales ante situaciones críticas (Kulfas, 2019). En 2011-2012, frente a la fuga de divisas, se impusieron controles y restricciones en el mercado cambiario, lo cual dio lugar al dólar paralelo y a una brecha cambiaria que en 2013 llegó al 60%. Se aplicaron regulaciones a las importaciones a través de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones (DJAI), y las tarifas de servicios públicos siguieron congeladas, lo cual obligó a incrementar los subsidios, que llegaron a representar hasta el 3% del PBI. A pesar de estos esfuerzos por contener la presión sobre el tipo de cambio, en enero de 2014 hubo una devaluación del 20%. La inflación marcó un 39,5% ese año, aunque bajó al 29,3% en 2015, con lo cual continuó la apreciación cambiaria (Fundación Norte y Sur, 2019).

El gobierno entendía que su mandato consistía principalmente en la distribución del ingreso y la inclusión social, por lo que sus políticas se orientaron en ese sentido. Si bien la actividad económica y los salarios reales continuaron creciendo, ahora lo hicieron sobre la base de una fuerte demanda de divisas. Por lo tanto, el desempeño económico pasó a depender de la disponibilidad de las reservas internacionales del Banco Central. Esto puso en primer plano la persistencia de la restricción externa, es decir, la principal limitante estructural del crecimiento económico vigente desde 1930.[44]

A pesar del deterioro progresivo de la situación económica, las variables sociolaborales continuaron con el mismo comportamiento e incluso mejoraron en algunos casos hasta 2015. La explicación de esta divergencia radica en las políticas implementadas. En esos años se aumentó el gasto en seguridad social y en subsidios a las tarifas de servicios públicos, se introdujeron nuevos planes de inclusión previsional, el plan “Progresar” para estudiantes, un aumento de pensiones no contributivas y un nuevo plan de viviendas “Procrear”, entre otros. Desde fines de 2011 y hasta 2015 el estimador mensual de actividad económica cayó un 0,6% pero los salarios reales del sector formal, si bien moderaron su trayectoria ascendente, se expandieron un 5,1% (Minprod, 2022). De todas formas, a partir de 2012 comenzó un período de estancamiento en el empleo

privado y en el salario mínimo, que impactó sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad. La desocupación se estabilizó en torno al 10% entre 2011 y 2015 y la pobreza quedó alrededor del 27%, aunque con la devaluación de enero de 2014 subió al 32,4% para terminar en 2015 con el 30,1%. La indigencia permaneció sin cambios, aunque sin poder perforar el piso del 5,5% registrado en 2013.

En diciembre de 2015 Mauricio Macri asumió la presidencia en segunda vuelta con el 51,3% de los votos. La alianza con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica implicó que, por primera vez en la historia, un partido de derecha llegara al poder (véase el capítulo de Ferro y Semán). Bajo el lema de “preservar lo ganado”, el nuevo gobierno obtuvo su legitimidad con la promesa de resolver los desafíos macroeconómicos pendientes: déficit comercial, apreciación y brecha cambiaria, déficit fiscal, negociación con holdouts y una inflación creciente y reprimida por una serie de regulaciones y controles que habían logrado evitar un deterioro en el frente social pero necesitaban ser resueltos. Si bien el panorama era complejo, se trataba de una economía con una de las deudas más bajas del mundo (52,5% sobre el PBI) a fines de 2015 y un mercado interno dinámico y relativamente amplio en términos históricos.

La orientación de la política económica estuvo encuadrada en el proyecto de “inserción inteligente en el mundo” o “plan Australia”, que implicaba una especialización en la explotación y exportación de recursos naturales y de servicios. Puesto que los males económicos se atribuían a la ineficiencia en la asignación de recursos, se consideraba necesario reestructurar y redimensionar el sector industrial. En consonancia con este diagnóstico, hubo un cambio radical en la orientación de la política económica, que se plasmó en la apertura comercial unilateral, la baja de retenciones a las exportaciones y la desregulación progresiva del comercio exterior y liberación del sector financiero, que quedó rehabilitado para ingresar o sacar capitales en el corto plazo. En la misma línea, se unificó y liberó el tipo de cambio, lo que implicó una devaluación del 40%, y se autorizaron fuertes aumentos en los precios de las tarifas de servicios públicos con un importante impacto en los sectores sociales más vulnerables.

Como consecuencia se produjo en un primer momento una contracción de la actividad económica y una inflación del 38,3% al término de 2016. A fines de ese año se estabilizó el tipo de cambio y se desaceleró la inflación, lo cual llevó a una mejora de las expectativas empresarias. El año 2017 fue de recuperación de la inversión, crecimiento del producto y baja de la inflación, que se ubicó en

el 26,8%.

Pero la combinación de apertura comercial y apreciación cambiaria, tal como había ocurrido con Martínez de Hoz y con la convertibilidad de Menem, llevó a un fuerte crecimiento de las importaciones y del déficit comercial, que en 2017 alcanzó una magnitud que no se verificaba desde 1998. Se tomó deuda para financiar el déficit fiscal y comercial y se subió la tasa de interés para alentar la entrada de capital financiero de corto plazo, lo cual a su vez impactó en la apreciación del tipo de cambio y provocó un aumento en el costo de financiamiento para las empresas. En un escenario marcado por la fuga de capitales y los intentos por refinanciar y reperfilar la deuda, se generó una corrida cambiaria que implicó una nueva devaluación de casi el 100% en 2018.

En este marco, el gobierno decidió pedir un préstamo de 57.000 millones de dólares al FMI que, además de reintroducir la intervención del organismo en la política económica, constituyó, en términos absolutos, el préstamo más grande en la historia del propio organismo internacional. Si bien el objetivo era recuperar la confianza y retomar el crecimiento de 2017, lo que ocurrió fue una aceleración en la fuga de capitales, ahora financiados con los dólares del préstamo. La reacción oficial fue un mayor ajuste fiscal, recorte de la obra pública, retorno de las retenciones a las exportaciones, subas de la tasa de interés y, finalmente, una vuelta a los controles cambiarios. Según cálculos del Banco Central, la corrida contra el peso generó una fuga de capitales de más de 86.000 millones de dólares entre 2016 y 2019 (BCRA, 2020).

Los resultados de esta experiencia de gobierno arrojan un 53,8% de inflación y una caída del 7,2% del PBI per cápita para 2019. En el sector industrial se verifica un desplome del 13,5% y una baja de su participación en el producto global, que pasó del 17,4 al 15,6% en el período 2016-2019. Esto se reflejó en el cierre de más de 4500 empresas industriales (un 8,2% del total) y la pérdida de 144.000 puestos de trabajo en el sector formal, es decir el 11,5% de la nómina total de empleos industriales.

Los indicadores sociales muestran un marcado proceso de deterioro. La pobreza quebró la trayectoria descendente que se había verificado entre 2003 y 2013 y que había llegado al piso de 27,4% ese último año. Si bien en 2017 bajó al 25,7%, en 2019 alcanzó el 35,5%. La desocupación volvió a crecer y en 2019 llegó al 9,8%. Los salarios reales del sector privado registrado cayeron casi 20 puntos entre 2015 y 2019, y los del sector privado no registrado lo hicieron en 24

puntos. En concordancia con estos datos, el índice Gini pasó de 0,415 en 2015 – el valor más bajo de todo el período estudiado– a 0,439 en 2019, lo cual indica que también hubo un deterioro en la distribución del ingreso.

Oscilaciones económicas y deterioro social: el crecimiento y la distribución entre 2019 y 2023

En diciembre de 2019 asumió la presidencia Alberto Fernández, quien se había impuesto en primera vuelta con el 48,24% de los votos gracias a una alianza entre el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa. En un marco de deterioro del tejido productivo y social, y con el frente financiero sumamente frágil y atezado por los vencimientos de la deuda externa, el nuevo gobierno se propuso reactivar la economía y retornar al ciclo virtuoso de crecimiento con distribución del ingreso del período 2003-2015. En la medida en que el mandato consistía en la recuperación del empleo, del salario y del consumo, el objetivo ordenador de la política fue renegociar la deuda externa y estabilizar la economía sin caer en recetas recesivas ni en una distribución negativa del ingreso.

Sin embargo, los planes y la orientación económica pensados originalmente tuvieron que ser reformulados en función de urgencias de corto plazo que plantearon un escenario muy complejo. En marzo de 2020 hubo que enfrentar la pandemia del covid-19; en febrero de 2022, cuando lo peor de la crisis sanitaria se había superado, estalló la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania, que generó efectos mundiales; y, entre fines de 2020 y 2023, se dio una de las sequías más largas y profundas de los últimos sesenta años, lo cual llevó a perder alrededor del 25% de los ingresos de divisas por exportaciones. La combinación de estos factores implicó una fuerte presión inflacionaria.

Estos acontecimientos golpearon a una Argentina ya sumida en una profunda crisis económica desde 2018 y que, por lo tanto, disponía de muy pocos recursos para generar políticas contracíclicas. A pesar de ello, entre 2021 y 2023 la economía marcó una trayectoria de recuperación, aunque se agravaron las distorsiones macroeconómicas, en particular la inflación, la brecha cambiaria y los precios relativos.

Frente a la pandemia, el gobierno aplicó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), que solo habilitaba un conjunto limitado de actividades esenciales. La consecuencia fue una caída inmediata de la actividad económica. El año 2020 arrojó una contracción del 9,9% del PBI y del 10,48% del PBI per cápita. La novedad estuvo dada por la industria, que mostró una rápida recuperación. A fines de 2020 el empleo industrial superaba los niveles prepandemia y el producto sectorial terminó el año con un crecimiento del 0,4%, a contramano del conjunto de la economía. El desempleo alcanzó al 13,1% de la población y la pobreza se disparó al 42% en 2020, pese a la implementación de políticas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), ambas orientadas a paliar los efectos del ASPO sobre los ingresos y que representaron un 2% del PBI.

Desde fines de 2020 comenzó una sostenida recuperación de la actividad, que se extiende hasta el segundo trimestre de 2022 y que a partir de entonces presenta oscilaciones a la baja. Los indicadores sociales muestran una profundización del deterioro y una ampliación de las brechas entre las distintas categorías de ingresos. Más allá de la diferencia en el contexto internacional y en las políticas económicas aplicadas por los gobiernos de Macri y de Fernández, la declinación sociolaboral y de las condiciones de vida desde 2018 ha sido continua. El cuadro general que emerge hacia 2023 es el de un proceso de precarización, empobrecimiento y crecimiento de la desigualdad. En primer lugar, se expande el empleo precario dentro del total de ocupados: entre 2016 y 2023 el sector informal pasó del 44,5 al 47,6%, mientras que los empleados registrados, que gozan de derechos laborales, pasaron del 50,8 a 47,2% en 2022.

En segundo lugar, como producto de la inflación, se verifica una declinación general de los ingresos. Entre 2016 y 2019 el salario real se contrajo un 20%, pero mientras el sector privado cayó 15 puntos y el público casi 18 puntos, el sector informal presentó una caída de casi 24 puntos. Hacia 2023 los salarios siguieron perdiendo su valor adquisitivo, pero el empleo informal lo sufrió en mayor medida: para el segundo trimestre el índice marca una pérdida del 42% desde 2016. El empleo privado registrado pierde el 16,5% y el sector público el 18,3%.

Si bien todos los salarios bajan, desde la salida de la pandemia se registra una tendencia de mayor deterioro en el sector informal. En cuanto a la desigualdad, el coeficiente Gini muestra una trayectoria creciente hasta 2019, cuando llega a 0,439, luego baja a 0,413 en 2022, pero marca 0,417 en el segundo trimestre de

2023.

Más allá de las oscilaciones, la tendencia muestra que desde 2014 en adelante se produjo una caída general de los ingresos, un aumento de la brecha remunerativa entre los sectores y un incremento de la exclusión sociolaboral. Este proceso se agravó a partir de la crisis sanitaria de 2020 y sufrió un fuerte deterioro con la aceleración inflacionaria desde el segundo semestre de 2023. El índice de precios al consumidor (IPC) subió el 50,9% en 2021, el 94,8% en 2022 y el 160,9% entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023. En este último año casi la mitad de la población económicamente activa tuvo un empleo precario, sin goce de derechos laborales, y su ingreso cayó aún más.

En suma, el ciclo de estancamiento y crisis de la economía argentina desde 2014, agravado por la pandemia, generó un cuadro dramático de precarización, empobrecimiento y empeoramiento en la distribución del ingreso, con una pronunciada brecha entre el sector formal e informal. En este sentido, la gestión de la economía en el período 2019-2023 termina con un balance ambivalente, pues si bien es cierto que la actividad económica y el empleo lograron recuperar su tendencia expansiva, en particular en el sector industrial, las tensiones macroeconómicas se agravaron por falta de un plan coherente y efectivo de estabilización, lo cual resultó en una aceleración inflacionaria que deterioró los salarios reales y la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Reflexiones finales

El análisis de los datos de crecimiento y distribución del ingreso entre 2003 y 2023 muestra tres períodos bien diferenciados: uno de fuerte crecimiento entre 2003 y 2011, con una prolongación en la distribución progresiva del ingreso hasta 2015; otro de estancamiento económico entre 2012 y 2017, pero con un franco deterioro en la distribución a partir de 2016; para terminar en el período 2018-2023 con oscilaciones en el crecimiento –aunque con una recuperación desde 2021– y un fuerte deterioro en la distribución del ingreso y en todos los indicadores sociales, producto de una creciente inflación.

A pesar de los cambios en los patrones de crecimiento y distribución observados

entre 2003 y 2011, la dinámica general de la economía no transformó sus bases estructurales tal como fueron refundadas a partir de 1976 y consolidadas desde 1991. Si bien es cierto que desde 2003 bajó la pobreza, aumentó el empleo, se recuperaron los salarios reales, disminuyó la desigualdad en los ingresos y mejoraron los indicadores de bienestar social, estas mejoras no alcanzaron a compensar el proceso de deterioro acumulado a través de las crisis económicas de 1981, 1989 y 2001. Cada uno de estos episodios generó nuevos pobres que, pese a la estabilización y el crecimiento, luego no pudieron ser incorporados al mercado de trabajo. La base de este proceso en términos estructurales está dada por el comportamiento de la balanza de pagos, es decir, por la mayor o menor disponibilidad de divisas que marcan la posibilidad de que un gobierno pueda distribuir el ingreso desde el sector agropecuario hacia el sector urbano y asalariado.

En cualquier caso, es entendible que, a ojos de la población, la recuperación democrática iniciada en 1983 ha dejado, cuarenta años después, una gran deuda en términos socioeconómicos. A pesar del proceso de recuperación que se operó a partir de 2003, casi un tercio de la población nunca logró salir de la situación de pobreza y precariedad. En consecuencia, el deterioro intergeneracional ha sido sostenido y ha impedido el ejercicio de una ciudadanía plena, que lógicamente debe incluir la participación económica. Hacia 2012, cuando se agotó el impulso dado a la economía por el tipo de cambio alto y estable y cambiaron las condiciones internacionales que habían permitido una gran acumulación de reservas, la política económica quedó con pocos instrumentos para sostener el modelo de crecimiento con inclusión social.

A partir de entonces se acumuló una serie de desajustes macroeconómicos —la inflación fue el más visible— que, al no ser atendidos, terminaron por configurar un cuadro social cada vez más frágil. Desde 2018 se genera una situación más compleja puesto que las políticas aplicadas, lejos de resolver los problemas heredados, agravaron la inflación y la fuga de divisas, cubiertas ahora con endeudamiento externo. La autonomía para poder gobernar la economía quedó limitada y la situación sociolaboral sufrió un fuerte declive entre 2020 y 2023. A pesar de que la política económica procuró compensar la caída de los ingresos y la política industrial permitió la reactivación del sector, la dinámica inflacionaria generó un sostenido desplome de los salarios reales, sobre todo en los estratos marginales de bajos ingresos, por lo que la distribución también empeoró.

Ahora bien, entre los hechos económicos y las realidades políticas median las

interpretaciones. La subjetividad que interviene en la percepción de la situación económica y la propia vivencia individual resulta fundamental. La cuestión de por qué la necesidad de un cambio asumió una “salida” por derecha escapa a los objetivos de este trabajo.[45] Lo cierto es que el discurso público y la agenda económica se derechizaron, quizá como nunca antes en nuestra historia. De todas formas, es preciso insistir en que, mientras no se aborden los problemas estructurales de una economía desequilibrada con un sector industrial poco integrado y divisa-dependiente, toda solución está condenada a ser transitoria y a seguir administrando (o reprimiendo) la enorme deuda social acumulada.

Fuentes

BCRA (2020), “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, Banco Central de la República Argentina, <www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Informe-Mercado-cambios-deuda-%20formacion-de-activos%20externo-%202015-2019.pdf>.

Cepalstat, Bases de datos y publicaciones estadísticas, <statistics.cepal.org/portal/cepalstat/perfil-nacional.html?theme=2&country=arg&lang=es>.

Fundación Norte y Sur (2019): “Precios, salarios y ocupaciones”, series estadísticas, <dossiglos.fundacionnorteysur.org.ar/series/precios-salarios-y-ocupaci%C3%B3n>.

Indec, Índice de Precios al Consumidor, informes varios sobre desocupación y pobreza, 2001-2023.

Minprod (2022), “Dinámica salarial en los sectores productivos: de la convertibilidad al covid-19 (1996-2021)”, Centro de Estudios para la Producción XXI, Ministerio de Desarrollo Productivo.

Bibliografía

Acuña, C. (1994), “El análisis de la burguesía como actor político”, *Realidad Económica*, 128, pp. 46-77.

Basualdo, E. (2006), *Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Beccaria, L. y R. Maurizio (2017), “Mercado de trabajo y desigualdad en la Argentina. Un balance de las últimas tres décadas”, *Revista Sociedad*, 37, pp. 15-41.

Diamand, M. (1973), *Doctrinas económicas, desarrollo e independencia: economía para las estructuras productivas desequilibradas: caso argentino*, Buenos Aires, Paidós.

Evans, P. (1996), “El Estado como problema y como solución”, *Desarrollo Económico*, 35(140), enero-marzo, pp. 529-562.

Ghibaud, F. y M. Raccanello (2021), “Crecimiento y reindustrialización acotada (2002-2015)”, en M. Rougier (coord.), *La industria argentina en su tercer siglo. Una historia multidisciplinar (1810-2020)*, Buenos Aires, Ministerio

de Desarrollo Productivo.

Kulfas, M. (2019), Los tres kirchnerismos. Una historia de la economía argentina 2003-2015, Buenos Aires, Siglo XXI.

Przeworski, A. (2022), Las crisis de la democracia. ¿A dónde pueden llevarnos el desgaste institucional y la polarización?, Buenos Aires, Siglo XXI.

■

[37] Marcelo Diamand (1973) logró una de las definiciones más precisas y aceptadas acerca de la estructura económica argentina, a la que califica de “desequilibrada” y en donde conviven un sector agropecuario con un nivel competitivo de productividad internacional, que produce el grueso de las divisas, y un sector industrial que (todavía) no logra su pleno desarrollo, es decir que tiene una productividad por debajo de la media internacional y demanda divisas para sostener su nivel de actividad.

[38] Con respecto a los datos utilizados, salvo que se indique lo contrario, son todos []datos de fuentes oficiales, del Indec, del Minprod y del Banco Central principalmente (detallados al final de este capítulo). En 2016 el Indec corrigió las estadísticas del período 2007-2015 en que estuvo intervenido. Eventualmente se utilizan datos de Fundación Norte y Sur (2019), de Cepalstat y del Observatorio de la Deuda Social.

[39] La pesificación asimétrica consistió en que a los deudores del sistema financiero se les reconoció 1 peso por dólar, mientras que los depositantes con acreencias en moneda extranjera fueron pesificados a 1,40 por dólar. Esto implicó una suerte de seguro de cambio, equivalente a una estatización de la deuda, que benefició a las grandes empresas, entre ellas, y quizá la principal, el Grupo Clarín.

[40] La renegociación de la deuda externa en 2005 redujo su monto en un 66%. El porcentaje de deuda sobre el PBI cayó del 139,6% en 2003 al 64,5% en 2005 y al 33,2% en 2013. A fines de 2005 el gobierno canceló en un solo pago los casi

10.000 millones de dólares adeudados al Fondo Monetario Internacional (FMI) y dio por finalizada la intervención del organismo en la economía argentina luego de cuarenta y nueve años.

[41] El principio de ultraactividad significa que un Convenio Colectivo de Trabajo mantiene su vigencia hasta tanto no sea reemplazado por otro.

[42] El coeficiente Gini es un indicador de la desigualdad de ingresos, siendo 1 un caso de desigualdad absoluta, en el que un individuo se apropia del 100% de los ingresos, y 0 un caso de igualdad absoluta en el que los ingresos son exactamente iguales para todos los individuos.

[43] La AUH entró en vigencia en octubre de 2009 y consiste en un beneficio monetario por cada hijo menor de 18 años y cada hijo con discapacidad destinado a desocupados o trabajadores informales que perciben ingresos por debajo del salario mínimo. A partir de mayo de 2011 la AUH amplió el universo de beneficiarios con la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que complementó la protección social a mujeres embarazadas que se encuentren en las doce o más semanas de gestación.

[44] En el frente externo, el gobierno se propuso retomar relaciones con el mundo financiero para fortalecer las reservas y llegar al final del mandato sin nuevos sobresaltos cambiarios. Se aceleró la resolución de los diferendos con Repsol por la estatización de YPF, y también con el Ciadi y el Club de París, con el objetivo de acceder a los mercados privados de crédito dada la baja tasa de interés internacional. Esta estrategia quedó truncada a partir del fallo del juez Griesa –y su ratificación por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 2014– que obligaba a nuestro país a pagar el total de la deuda a los fondos buitres. Dado que esto ponía en riesgo la reestructuración de 2005 y 2011 con el resto de los acreedores, el gobierno decidió sostener el statu quo hasta el fin de su mandato. Para ello, negoció con China un swap que permitió fortalecer las reservas sin romper los contratos con los acreedores que habían aceptado el canje.

[45] Al respecto, véanse el capítulo de Ferro y Semán, el de Rebón y Súnico, y el de Borovinsky, Plot y Slipak.

9. El final del “pacto del Nunca Más”, nuestro mito contemporáneo

Marina Franco

En 1983, la sociedad argentina reconstituyó su vida política en torno a la democracia como horizonte colectivo. Para amplios sectores sociales, la democracia devino el modelo legítimo y con ello se afirmó un proyecto de convivencia política, rechazo de la violencia y la represión, plena vigencia de los derechos humanos y una nueva insistencia en la democracia entendida también como derechos sociales y económicos. Ese gran cambio, con toda su carga épica pero también sus bases reales, es lo que suele llamarse “el pacto del Nunca Más”, erigido como nuestro símbolo refundacional. Ese nuevo arreglo social y político para la vida en común, como mito y como realidad, hoy parece estar por completo astillado.

¿Cómo fue posible la reconstitución de un horizonte democrático en 1983?
¿Cómo y por qué ese ciclo parece estar agotado cuarenta años después?

El cierre de un siglo XX argentino

Con la transición de 1983 se cerraron definitivamente varios procesos que caracterizaron una gran parte del siglo XX argentino. En primer lugar, se terminó el ciclo de inestabilidad institucional iniciado en 1930 que dio origen a la sucesión de golpes de Estado y la alternancia entre gobiernos de facto y constitucionales. Esta dinámica estructuró la vida política durante cincuenta años entre dictaduras y gobiernos constitucionales de origen espurio (como la década de 1930) o que excluyeron electoralmente a la principal fuerza popular y

estuvieron jaqueados por las Fuerzas Armadas y otros actores civiles (como en los años cincuenta y sesenta). Ese ciclo de inestabilidad, en especial entre 1955 y 1983, fue definido como “empate hegemónico”, por la imposibilidad de cualquier fuerza de establecer un proyecto político duradero y la presencia de oposiciones políticas que optaban por quebrar el orden institucional para imponerse (Portantiero, 1977).

Esta inestabilidad transformó a las Fuerzas Armadas en un actor político capaz de instaurar su propio orden, de dirimir conflictos y ser convocado por las fuerzas civiles –del más diverso tenor– para establecer proyectos alternativos. El pretorianismo militar, su importancia para incidir y decidir el juego político, su capacidad de responder a otras convocatorias y también de autonomizarse en el uso del poder autoritario y represivo son claves para entender el siglo XX argentino. Este rasgo también quedó desarticulado por las condiciones en que terminó la última dictadura y se produjo la transición de 1983.

En segundo lugar, esa transición cerró un ciclo de cuestionamientos liberal-conservadores al sistema democrático como tal, a la ampliación de la ciudadanía política, social y económica, y a la participación popular. Estos cuestionamientos se activaron con la llegada del radicalismo yrigoyenista al poder en 1916 y fueron precedidos por los debates y tensiones en torno a la reforma del sistema político en 1912, que estableció el voto universal masculino, secreto y obligatorio. Desde entonces, las fuerzas conservadoras vieron a la democracia como un sistema “demagógico” e incapaz de mantener el orden social, que consideraban amenazado por las nuevas demandas populares y obreras. Para estos sectores, la imposibilidad de la democracia de garantizar el orden quedaba a la vista en lo que leyeron como las “sublevaciones populares” de la “Semana Trágica” en 1919 o de la Patagonia en 1921-1922. En definitiva, para esta mirada la democracia terminaba dando espacio, o siendo rehén, de la irrupción de las masas en la escena pública, tal como sería visto luego el peronismo en los años cuarenta. Estos argumentos, sin ser los únicos, formaron parte de la vocación golpista de las derechas argentinas durante todo el siglo XX. Esto también concluyó en 1983 cuando esas derechas aceptaron las reglas del juego democrático.

La transición cerró, además, un tercer proceso clave que se inició mucho antes de 1930: el uso de la violencia estatal como forma de gobierno e instrumento de gestión del conflicto político o social. Aunque suele pensarse que ese ciclo comenzó en 1955, con el derrocamiento del peronismo y el inicio de la Guerra

Fría, la violencia estatal represiva fue un rasgo recurrente en períodos constitucionales y omnipresente en los momentos dictatoriales a lo largo de todo el siglo. Sin duda, podríamos retrotraernos al proceso de organización nacional y el sojuzgamiento indígena en las campañas militares del siglo XIX. Luego, cuando emergió la Argentina moderna, con una pujante actividad agroexportadora y una inmigración masiva, la represión fue una respuesta frecuente a las demandas de los sectores obreros y pobres, como también un instrumento de control de los conflictos intraélites durante décadas. Desde los años treinta la violencia política y represiva creció en espirales ascendentes hasta transformarse en una forma de gobernar, incluso, como ya sugerí, en períodos constitucionales devenidos en verdaderos estados de excepción, como fueron la presidencia de Frondizi (1958-1962) o el tercer peronismo (1973-1976). Esto no significa que la historia del siglo XX se reduzca a la violencia represiva, dado que ese mismo ciclo está atravesado por procesos significativos de democratización e inclusión social. En todo caso, se trata de advertir que la represión fue utilizada de manera recurrente como la forma de gestión del conflicto político.

En contraste con ello, a partir de 1983 se inició una nueva época en cuanto a los parámetros admisibles del uso de la violencia estatal y la intervención de las fuerzas de seguridad en el control del orden interno. Esto no excluyó el recurso a la represión, pero su uso ha sido esporádico y muy cuestionado, como sucedió en la crisis de 2001. De la misma manera, después de 1983 la violencia política quedó deslegitimada como instrumento del juego político, también al calor de transformaciones del mundo occidental.

En síntesis, la inestabilidad institucional, los cuestionamientos a la democracia como sistema político y a la presencia de las masas en la vida política, y la omnipresencia de la violencia política y represiva se fueron disolviendo después de la última dictadura. Desde entonces la vida política y social argentina siguió jalonada por crisis de diverso tenor y otras formas de la violencia institucional, pero la democracia se afirmó como regla de juego y como aspiración de forma de vida en común.

¿Por qué estos cambios fueron posibles en 1983? ¿Qué datos, procesos y actores confluyeron en ese momento para dar inicio a un nuevo ciclo histórico?

Bajo el signo del “Nunca Más”, las condiciones para un nuevo orden

En los años ochenta, con distinto pulso y velocidad, se iniciaron procesos de transición política en todos los países del Cono Sur que habían atravesado dictaduras signadas por la ideología de la “seguridad nacional”. En Brasil, Uruguay y Chile estas transiciones estuvieron limitadas por la continuidad de la presencia militar en el juego político. Esto condicionó el régimen democrático entrante así como las posibilidades de investigación y juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos. Fue el caso de Chile, con una Constitución autoritaria sancionada en 1980 con mecanismos de cerrojo para bloquear los intentos de reforma. Fue el caso de Uruguay, donde partidos y Fuerzas Armadas acordaron secretamente las condiciones de la transición, incluyendo la no revisión de los delitos militares. En Brasil, la amnistía aprobada en 1979 sigue en vigencia e impide cualquier investigación penal de lo sucedido.

En contraste, la transición argentina tuvo extraordinarios logros: generó, en el largo plazo, un contexto de aceptación del régimen democrático sin condicionamientos por parte de los actores políticos y un proceso de investigación y justicia temprano y ejemplar que afirmó el valor de la democracia sobre nuevas bases éticas. Esto suele ser evocado con épica y hace de nuestra cultura de los derechos humanos y nuestro “pacto del Nunca Más” orgullos nacionales. Seguramente, esa épica también ayudó a reconciliarnos con los horrores del pasado que nuestra misma sociedad dejó suceder ante sus ojos. Sin embargo, con menos idealización, la transición argentina no se asentó sobre ningún pacto concreto, sino sobre las condiciones contingentes que se dieron a la salida de la dictadura y en particular sobre los límites estructurales del capitalismo reconfigurado en ese lapso.

Es probable que tres datos claves expliquen esa contingencia y la diferencia con lo sucedido en otros países de la región y en otras transiciones argentinas previas que no lograron un orden duradero. Estos son: 1) el derrumbe dictatorial y la debilidad de las Fuerzas Armadas para imponer condiciones en el proceso de salida del poder en 1983; 2) el impacto y la dimensión de los crímenes militares en el marco de un fuerte movimiento por los derechos humanos y un presidente electo que, aun en una considerable soledad, sostuvo la necesidad de investigar y juzgar; 3) un cambio en las relaciones de fuerza y las estrategias de los actores

que ocuparon la escena política posdictatorial aceptando el juego democrático.

Estos elementos pueden analizarse con más detalle si miramos las condiciones generadas por la propia dictadura y la paradoja de sus éxitos y fracasos. En primer lugar, revisemos brevemente los fracasos del régimen.[46] La dictadura se terminó en 1983 por el derrumbe del poder militar que la generó y la sostuvo, derrumbe que no alcanzó de la misma manera a los actores civiles de la alianza de poder –que casi no vieron afectados su imagen pública o su peso político–. Ese derrumbe se materializó especialmente en el fracaso económico que hundió a la sociedad en una brutal crisis económica muy visible desde 1981. Altísimos índices de inflación, destrucción productiva, informalidad laboral y endeudamiento externo fueron los datos macroeconómicos que tuvieron como correlato un profundo impacto social. Por entonces comenzó a hablarse de “hambre” en los reclamos sociales y en referencia a la situación de los sectores populares (Adair, 2023). Ese impacto se trasladó masivamente a un malestar social antimilitar y antidictatorial que tomaría forma rápidamente en esos años, bastante antes de la guerra de Malvinas. El peso de este escenario económico-social es clave para entender el derrumbe del régimen militar y, más ampliamente, la deslegitimación de los regímenes políticos cuando no pueden garantizar la reproducción social básica.

El fracaso dictatorial en generar crecimiento y estabilidad económica y financiera fue acompañado de otra imposibilidad: las Fuerzas Armadas y sus aliados nunca lograron articular un proyecto político que les permitiera mantenerse en el poder y competir en el terreno electoral a través de un partido autoritario, como era su intención original. En contraste, la institución militar se hundió rápidamente en sus propios conflictos internos y de este modo bloqueó toda posibilidad de proyección política en el futuro (Canelo, 2008).

A este escenario se sumó la derrota en la guerra de Malvinas, que no fue el inicio de la transición sino parte de ella, dado que la decisión militar de invadir las islas se inscribe en el intento de controlar un proceso político de apertura que ya estaba en marcha. Hacia 1981 la debilidad del gobierno era evidente pero aún no terminal; sin embargo, al año siguiente, la veloz derrota bélica generó la sensación social de haber estado bajo un “engaño” y produjo un salto cualitativo en el hartazgo social con las Fuerzas Armadas.

Después de Malvinas, la pérdida de poder del gobierno se disparó de manera explosiva e irremontable. La transición ya no tenía vuelta atrás. En 1983, casi

solas en el poder, las Fuerzas Armadas se estaban hundiendo en una debilidad política y una crisis interna que las dejaba sin capacidad de presión ni intervención. Esto impidió que pudieran negociar alguna forma de control sobre el nuevo gobierno o algún acuerdo de impunidad para los crímenes cometidos – acuerdo al que los partidos políticos se habían mostrado vagamente dispuestos hasta inicios de ese año–.

Sin embargo, el ánimo antidictatorial generalizado no significó una condena masiva de la represión o una rápida comunión con la causa de los derechos humanos. Hacia el final de la dictadura, las organizaciones que reclamaban por los desaparecidos comenzaron a tener mayor visibilidad y escucha, en la misma proporción en que la erosión de la legitimidad de la dictadura hacía audibles las denuncias. Así empezó a instalarse la idea de que debía darse alguna respuesta al “problema de los desaparecidos” y los “excesos” de la represión, posición que se fue afirmando durante 1983 debido a la negativa militar a dar información y luego, en septiembre, por la actitud provocadora de decretar una autoamnistía pocos días antes de las elecciones.

Si bien estos fracasos explican por qué las Fuerzas Armadas se retiraron del poder sin ninguna capacidad de presión, no es posible ignorar el otro término de la paradoja: los “éxitos” de la dictadura, igualmente claves para entender las características de la transición. En efecto, la cara inversa del fracaso fueron los logros en el proyecto económico y represivo. A pesar del desastre puesto en evidencia por la crisis económica y social, las políticas implementadas desde 1977 cambiaron de manera permanente las condiciones de la estructura productiva y del régimen de acumulación. Las políticas neoliberales y en favor de los grandes capitales lograron destruir las bases del modelo económico previo de una industria nacional orientada al mercado interno y la sustitución de importaciones con niveles aceptables de redistribución del ingreso. Las reformas introducidas abrieron la puerta a un modelo de acumulación basado en el capital financiero internacional, la especulación y la concentración económica, con un sistema cada vez más dependiente del endeudamiento externo (Basualdo, 2010; Castellani, 2021). A tono con cambios mundiales más amplios, la nueva estructura económica y financiera sentó las bases y los límites de la democracia posterior.

Por otra parte, la represión dictatorial logró desarticular la protesta social y las impugnaciones al orden de los más diversos sectores sociales y políticos de eso que se llamó la “nueva izquierda” de los años sesenta y setenta. Ese

disciplinamiento sobre sectores populares, obreros, sindicales, profesionales, artistas, estudiantes, religiosos, entre tantos otros, fue mucho más vasto que el aniquilamiento de los grupos de la militancia revolucionaria que fueron los blancos más visibles. Los años setenta dejaron una sociedad atravesada por la desconfianza, la sospecha y la indiferencia por la suerte de los otros.

En el largo plazo, este “éxito” en la represión terminó siendo parte del fracaso más estrepitoso del régimen y el motivo de su mayor condena social. Sin llegar a ser nunca una variable definitoria del derrumbe militar, la cuestión represiva solo comenzó a tener más peso en el último año de la dictadura, cuando se potenció al calor de los otros fracasos. En especial, porque en ese contexto de derrumbe y de crítica acérrima al gobierno también los antiguos aliados de las Fuerzas Armadas comenzaron a dar espacio al “problema de los desaparecidos” y a reclamar que se resolviera antes del cambio de gobierno. Así, se hizo evidente que las “secuelas de la represión” comenzaban a ser una cuestión importante que no se podía obviar sin costo político. Aun en este paisaje, la movilización en favor de los derechos humanos, como fenómeno social relevante, apenas comenzaba a crecer. Su expansión real fue posterior, al calor de la progresiva legitimidad adquirida por las organizaciones de derechos humanos y del conocimiento generado por la investigación de la Conadep en 1984 y el Juicio a las Juntas en 1985. Recordar este origen es necesario para no considerar los derechos humanos como un valor social “natural”, inamovible o unánime, ni siquiera en las décadas siguientes a la transición.

Como parte de esta relación paradójica entre éxitos y fracasos, se produjo un cambio crucial: los sectores civiles –la Iglesia Católica, los grandes medios de prensa, las altas jerarquías del Poder Judicial y las élites intelectuales conservadoras y nacionalistas– que habían sostenido e impulsado el proyecto golpista y dictatorial (con matices en cada caso) lo fueron abandonando. Durante los dos últimos años de la dictadura, las Fuerzas Armadas quedaron públicamente casi solas debido a sus fracasos económicos, políticos y bélicos, y luego también por los costos políticos de la represión. O tal vez las dejaron solas porque para esos sectores la tarea estaba cumplida, tanto por la represión como por las transformaciones estructurales en la economía y los efectos del disciplinamiento social. Sin embargo, esta defección pública de los aliados civiles no alcanzó a la totalidad de los grandes sectores empresariales, que apoyaron al régimen y la “lucha antisubversiva” hasta último momento. Desde entonces y a lo largo de las décadas siguientes se produjo otro proceso aún más crucial: las derechas –en sus dos vertientes, liberal-conservadora y nacionalista-

reaccionaria— abandonaron las salidas golpistas o autoritarias. Puede decirse que aceptaron y aprendieron el juego democrático y comenzaron a construir bases sociales de apoyo y proyección en ese ámbito.

A este escenario local hay que agregar un dato importante pero no siempre resaltado: el cambio en las condiciones de la geopolítica mundial de aquel momento, cuando los grandes intereses de Occidente dejaron de incentivar salidas golpistas y el recurso a las fuerzas militares en América Latina para respaldar soluciones democráticas y liberales de diverso cuño. Ese nuevo contexto también explica el viraje de las derechas argentinas y los sectores golpistas de antaño hacia la incorporación al juego democrático —como muestra Vommaro en su capítulo—. El cambio también se produjo en las fuerzas de izquierda occidentales: una vez perdida la esperanza emancipadora de la revolución socialista en versión soviética o cubana, se afirmaron las virtudes de la democracia liberal como sistema. La democracia emergió como un aprendizaje de convivencia política para las izquierdas revolucionarias del mundo occidental, tanto las del eurocomunismo de los años ochenta como las latinoamericanas que habían experimentado la represión y el exilio.

Estos escenarios confluyentes explican que el cambio de 1983 fuera duradero y el inicio de un nuevo ciclo histórico —o de una nueva forma de sociedad, como señalan Borovinsky, Plot y Slipak en este volumen—. Sin embargo, en 1983 nada de esto era evidente ni había certezas sobre la estabilidad del nuevo régimen. En todo caso, el contexto le dio potencia al discurso del candidato radical Raúl Alfonsín, que apelaba a la democracia como ética y como refundación de la vida política y como horizonte de derechos sociales y económicos. En su posición contraria a un pacto de impunidad, Alfonsín no tenía un gran respaldo inicial ni siquiera en el seno de su partido, y en el espacio inestable e incierto de la transición los riesgos de iniciar un proceso de justicia eran enormes. Sin embargo, el vertiginoso “descubrimiento” de lo sucedido durante la represión, la presión social creciente empujada por las organizaciones de derechos humanos y el consenso partidario y político generaron las condiciones para que la investigación y la justicia fueran posibles y legítimas.

A pesar del profundo desgarramiento social, de las incertidumbres políticas y de las limitaciones, en ese magma tomó forma un profundo deseo colectivo de reconstrucción social en torno a la promesa de la democracia como forma y como sustancia. Las políticas de investigación y justicia sobre los crímenes de lesa humanidad, como objetivos éticos de reparación y reconstrucción del lazo

social acompañados por el apoyo popular, tuvieron un rol fundamental. Desde entonces, esa figuración colectiva que llamamos “pacto del Nunca Más” comenzó a ser evocada y reafirmada como el símbolo fundacional de nuestro presente histórico: democracia, legalidad, no violencia, derechos humanos, y también la promesa de una concepción más sustantiva de la democracia como bienestar e inclusión social.

Cuarenta años de democracia: legados potentes y promesas incumplidas

Desde 1983 y con el correr de los años, el nuevo orden que solemos evocar como “pacto democrático” –aunque tal cosa nunca existió– se sostuvo en datos precisos: la desarticulación del poder militar como actor del juego político, el fin de la injerencia de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, la deslegitimación del recurso a la violencia política y represiva, la legitimidad del discurso de los derechos humanos –a pesar de los cambiantes ciclos políticos sobre el tema– y, como ya dijimos, la aceptación del juego de la democracia liberal por todos los actores del arco político, en especial las derechas autoritarias de antaño. La potencia simbólica de ese “pacto democrático” se sostuvo en la promesa de ampliación de derechos sociales y económicos. Con la democracia “se come, se cura, se educa”, prometió Alfonsín, anudando allí democracia formal y real, unas reglas del juego político y una forma de vida en común.

Sin embargo, lejos de cualquier escena idílica, el nuevo ciclo histórico estuvo atravesado por la incertidumbre propia de la vida democrática. Aunque esto se manifestó en crisis políticas y económicas de extrema gravedad, ninguna puso en jaque la ficción fundante del “pacto del Nunca Más”, que parecía organizar el imaginario político para la vida en común. Veamos algunas escenas de estas décadas recientes. La selección puede resultar arbitraria, pero no es ociosa a los fines de lo que me interesa proponer en términos de los grandes consensos públicos legibles en cada momento.

Entre 1986 y 1990, sucesivos levantamientos militares implicaron amenazas ciertas a la estabilidad institucional en pleno proceso de transición y juzgamiento de los delitos militares. El más importante ocurrió durante la Semana Santa de

1987, con la sedición militar “carapintada” liderada por Aldo Rico en demanda de amnistía por las violaciones a los derechos humanos. El episodio se recuerda por la triste frase de Alfonsín –“Felices Pascuas [...] la casa está en orden”– y porque su salida política fueron las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida”. Sin embargo, el dato novedoso fue la enorme movilización social y de todo el arco partidario en defensa del régimen democrático y en apoyo al gobierno: el proyecto refundador en torno a la democracia había calado hondo.

Desde luego, esto no significó la desaparición de las opciones antidemocráticas, como queda demostrado por otros levantamientos militares posteriores y, años más tarde, por la llegada al poder por elección popular de antiguas figuras centrales del proyecto dictatorial, como Antonio Bussi, gobernador electo de la provincia de Tucumán (1995-1999), y el excomisario Luis Patti, elegido intendente de la localidad bonaerense de Escobar (1995-2003).

En diciembre de 2001, la Argentina volvió a zozobrar en aguas profundas. El reclamo fue “que se vayan todos”: los grupos y referentes políticos que, a los ojos populares, habían capturado los hilos del poder estatal. “Ellos”, pero no el sistema, no las reglas de juego, no el “pacto democrático”. Aunque la movilización surgió de un reclamo de las clases medias desposeídas de sus ahorros, la potencia del encuentro colectivo volvió a recrear la escena democrática y solidaria como forma de vida y como construcción en común, plasmada en las asambleas populares, las fábricas recuperadas o los clubes de trueque. Ese 2001 contuvo, además, otro hecho trascendente: fue el primer estado de sitio de nuestra historia desafiado masivamente. A lo largo de todo el siglo, las medidas de ese tipo habían sido uno de los grandes instrumentos y emblemas de la violencia estatal, tanto en regímenes democráticos como dictatoriales. Pero en 2001, con la experiencia de la dictadura y ante un gobierno ya sin credibilidad ni capacidad de control, la medida resultó intolerable y hasta ridícula, y la respuesta social fue desconocer la prohibición y salir a la calle. Aunque la represión fue salvaje, esa parte tan deseada del “pacto del Nunca Más” que reclamaba “no a la violencia del Estado” seguía muy viva.

Sin embargo, ese mismo escenario de la crisis de 2001 fue también el punto de clivaje para la progresiva activación de sectores de las derechas que empezaban a “ganar la calle”, aunque esto no fue evidente entonces (Morresi, Saferstein y Vicente, 2021). Muy lentamente, esos grupos comenzaban a interpretar mejor la decepción y el hastío que asomaban en algunos sectores. Durante el ciclo kirchnerista, con sus mejoras materiales y su fuerte andamiaje simbólico, se

invisibilizó esta cuestión por un tiempo, pero desde 2008 cobró nitidez a partir del conflicto con los sectores agropecuarios.

En 2015, la eclosión del movimiento “Ni Una Menos” contra la violencia de género y luego a favor de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo mostró cuán hondo habían calado las luchas por los derechos humanos. Esa movilización de mujeres, a contrapelo de las voluntades políticas de la mayoría del arco partidario, se nutrió de una larga historia de feminismos y una cultura de la movilización social que atraviesa todo el siglo XX argentino, y también de una historia más corta heredera del movimiento por los derechos humanos. La “revolución de las mujeres” condensó esos aprendizajes en la búsqueda de nuevos derechos. No obstante, hay un dato que no puede obviarse: en esa misma escena comenzaron a tejerse profundas reacciones de varones y mujeres que sintieron que el feminismo amenazaba su orden social deseado.

En 2017, bajo otra escena y otra coyuntura, la potencia simbólica del “Nunca Más” volvió a hacerse visible, acrecentada por años de procesos de justicia bajo los gobiernos kirchneristas y por un renovado conocimiento de lo sucedido bajo el terrorismo de Estado. Entonces resultó un escándalo la posibilidad de que algunos responsables de la represión fueran liberados por la decisión de la Corte Suprema de otorgar el beneficio del “2x1”. Una vez más, la reacción popular fue salir a la calle y reafirmar la gravedad de los crímenes de lesa humanidad. El “Nunca Más” seguía vigente.

Tan solo dos meses después, la desaparición de Santiago Maldonado, en el marco de los conflictos indígenas y la represión de las fuerzas de seguridad en la provincia de Chubut, dio lugar a una intensa movilización popular que reactivó viejos miedos e hizo evidente el rechazo social a la violencia asociada al terrorismo de Estado. Sin embargo, también fue un momento de eclosión de innumerables discursos de matriz conservadora y nacionalista que cuestionaron los derechos de los pueblos originarios y revivieron las figuras más autoritarias del enemigo interno en torno al pueblo mapuche y sus organizaciones colectivas. De manera más amplia, lo sucedido dejó a la vista la violencia y el odio étnico y de clase recrudecidos del que son víctimas numerosos sectores de la población – desde las y los “pibes pobres” hasta los pueblos indígenas y las organizaciones sociales de trabajadores informales o desocupados–. Ese odio, lejos de ser una novedad, tiene una historia que se remonta a todo el siglo XX, por pensar solo en el Estado-nación contemporáneo.

En 2022 se produjo otra escena crucial: el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. El episodio hizo clamar a amplios sectores por la vigencia de ese “Nunca Más”, ahora entendido como “no a la violencia política”. Pero no todos los líderes partidarios repudiaron el hecho y la tentativa de magnicidio dejó a la vista profundos odios en los sectores altos, medios y populares, acicateados por movimientos y líderes de derecha cada vez más virulentos y reactivos. A su vez, esa violencia también se inscribe en una larga tradición de conflictividad en torno a identidades políticas excluyentes, que ha surcado buena parte de la vida política argentina (Aboy Carlés, 2003). Aunque su foco más visible sea el conflicto peronismo-antiperonismo, no es el único ni tampoco se inició allí.

Un año después, en septiembre de 2023, la entonces candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, invocó en un acto oficial en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la memoria de las víctimas del terrorismo. Al mismo tiempo, el candidato a presidente, Javier Milei, afirmó que lo sucedido en los años setenta fue una guerra. Ambos discursos no son nuevos y, sobre todo, se inscriben en una estela creciente de argumentos revisionistas sobre la violencia represiva del Estado que empezó a crecer mucho antes, hacia 2015, de la mano de la expansión de la centroderecha. La campaña electoral estuvo atravesada por amenazas y proclamas intimidatorias a dirigentes, sectores y espacios vinculados al progresismo intelectual y político. La simbología más recurrente fue la imagen del Falcon verde, directamente asociado a la represión. La fórmula Milei-Villarruel, en la que confluían el neoliberalismo de shock y la reivindicación de la violencia más brutal de nuestra historia, ganó las elecciones presidenciales el 19 de noviembre de 2023.

El final del “pacto del Nunca Más”

En los últimos años, y de manera precipitada después de la pandemia, el escenario ha cambiado de manera sustancial, dejando a la vista la fragilidad de los arreglos constitutivos de la trama de la convivencia política desde 1983. Esto no supone una mirada edulcorada sobre los cuarenta años previos. Los imaginarios y las prácticas autoritarias y violentas nunca desaparecieron: estuvieron presentes antes de la dictadura y persistieron luego. En parte porque

la conflictividad es inherente a la vida política y en parte porque lo que llamamos “pacto democrático” se constituyó sobre una ilusión proyectiva cuya potencia dependía de sus logros. En todo caso, los niveles de conflictividad aceptables y la potencia de la ilusión refundante regularon el juego político y social de manera más o menos eficiente durante varias décadas, incluso ante incertidumbres extremas como la crisis de 2001. Pero eso parece haber llegado a su fin.

La crisis económica, la inflación, la pobreza y la desigualdad no son novedades de los últimos años. Esos factores ya estaban presentes en 1983, en 2001 y también en 2015 y 2019, por citar momentos turbulentos en las percepciones sociales sobre la economía. A finales de 2023 los índices de pobreza alcanzaron el 49,5% de la población, un declive casi imposible de explicar en un país que no ha sufrido conflictos armados o catástrofes naturales (Kessler y Assusa, 2021). Esas urgencias parecen haberse transformado en la certeza social de que la Argentina es una espiral sin salida. No es difícil entender el sentimiento de fracaso de aquella promesa constituida al calor de la ilusión democrática: con ella no se come ni se cura ni se educa. Cualquier reivindicación progresista del Estado y de los derechos más básicos a la salud o la educación públicas choca con la experiencia cotidiana de la población más desfavorecida.

A esas condiciones socioeconómicas asfixiantes y acumuladas se agrega la experiencia social de la violencia cotidiana que sufren poblaciones vulnerables, racializadas y de jóvenes, ya sea por parte del Estado o por obra del delito común o del narcotráfico. Y a ello se suma el espectáculo de antagonismos políticos cada vez más virulentos instalados en el centro del escenario como un espectáculo participativo que convoca a la eliminación del enemigo sin tapujos, como sucedió en la campaña electoral de 2023.

Estas constataciones sociales se alimentan de y son alimentadas por otro proceso global mucho más vasto y complejo de asir: el cambio en las subjetividades contemporáneas. Las mutaciones del capitalismo, sus lógicas neoliberales y la experiencia de la pandemia han nutrido nuevas maneras de estar y ser en el mundo: subjetividades individualistas basadas en la celebración de la capacidad de sobrevivencia individual. En la Argentina, sin ser una novedad, ello es también resultado de las maneras en que se ha logrado sobrevivir y resignificar los sufrimientos materiales, como muestran Semán y Ferro en este volumen. En todo caso, esa experiencia sostenida de pérdida de bienestar, asentada sobre las herencias de la dictadura y los neoliberalismos posteriores, ha facilitado la

emergencia de “individualismos autoritarios” (Adamovsky, 2023). Hoy, ese proceso parece llegar a su extremo en la explosión de odios contra los más diversos sectores sociales y políticos. Los arreglos sociales para la vida en común se astillan cuando los derechos de unos son percibidos como privilegios o amenazas a la libertad de otros, cuando el individualismo extremo se torna crueldad y desprecio por la vida ajena, como plantea Ipar en su capítulo. Aquello que parecía haber sido una apuesta por una vida en común hace cuarenta años hoy se resquebraja ante nuestros ojos. Pero sigue siendo importante recordar que muchas de estas novedades, locales y globales, encuentran sus ecos en conflictos y representaciones muy sedimentadas en nuestra historia previa y estamos asistiendo a un proceso tan novedoso como explicable.

En este contexto, la salida punitivista y las soluciones represivas con la intervención de las fuerzas de seguridad, que proponen las derechas y extremas derechas, encuentran apoyo y entusiasmo social porque prometen orden para un país que se percibe desbocado. Es allí donde los discursos revisionistas sobre el terrorismo de Estado cobran todo su sentido: no porque hablen de “la subversión” o relativicen el número de desaparecidos, sino porque al hacerlo hablan del presente y del futuro, legitimando formas de ejercicio del poder y de la autoridad que creíamos terminadas y modelos de orden que creíamos superados. En el deseo social de orden, punición y eliminación es donde el ideal del “pacto democrático” muestra toda su fractura social (o tal vez solo deja a la vista nuestra ilusión previa de su existencia).

En este marco, los discursos atados a los parámetros del mito fundacional de la transición, o a sus derivas progresistas formuladas en el lenguaje de los derechos, ya no funcionan, justamente porque no logran hablar de la experiencia social de amplias capas de la población, y mucho menos para las jóvenes generaciones empobrecidas y enojadas. Invocar el “Nunca Más” o la democracia ya no alcanza para contener la rabia de quienes se constituyeron bajo la vivencia de la desafiliación social, la pobreza y la violencia crecientes en cuarenta años de democracia. Y esa rabia se encontró durante años, empezando por el sistema escolar, con discursos progresistas que construían un mito allí donde los datos de la realidad indicaban lo contrario. Y esos datos adversos fueron interpretados mejor por el discurso revanchista de una extrema derecha popular.

En 1983 emergió de la dictadura una sociedad dañada, que a partir de condiciones trágicas logró articular acuerdos virtuosos, eso que dimos en llamar el “pacto del Nunca Más”. De la tragedia y la destrucción surgió una promesa de

reparación de la trama societal y política. Hoy, a cuarenta años de 1983, ese ciclo posdictatorial y sus consensos refundacionales se están agotando. Todos y cada uno de los fundamentos están cuestionados: la exclusión social de grandes capas de población llevó al poder a quien promete eliminar derechos sociales y económicos; la violencia y la represión sobre las protestas sociales está en el horizonte de las prácticas de Estado admitidas por el nuevo gobierno electo en 2023; la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior es una posibilidad bien concreta; la violencia política instalada horizontalmente en la vida social se demuestra en los hostigamientos de los activistas de derecha a todo el espectro del discurso “progresista”; el astillamiento del discurso de los derechos humanos y la democracia quedó a la vista en su imposibilidad de limitar el ascenso de la extrema derecha y su discurso prodictatorial. Finalmente, esa extrema derecha ha llegado al poder de la mano del juego democrático, pero cabe recordar que esas reglas y prácticas pueden quebrarse desde adentro, y con apoyo popular, como tantas veces sucedió en el pasado.

Todos los datos indican que el ciclo histórico abierto con la transición democrática de 1983 ha llegado a su fin, como forma indiscutiblemente legítima del juego político y como proyecto colectivo. Y con ello, también, la fuerza de nuestra ficción fundante del “Nunca Más”, porque los símbolos existen mientras creemos en ellos.

La incertidumbre propia de la vida en común nos dirá cuáles son las escenas del futuro.

Buenos Aires, diciembre de 2023

Bibliografía

Aboy Carlés, G. (2003), Las dos fronteras de la democracia argentina: la reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem, Rosario, Homo Sapiens.

Adair, J. (2023), 1983. Un proyecto inconcluso, Buenos Aires, FCE.

Adamovsky, E. (2023), Del antiperonismo al individualismo autoritario: ensayos e intervenciones (2015-2023), Buenos Aires, Unsam.

Basualdo, E. (2010), Estudios de historia económica argentina, Buenos Aires, Siglo XXI.

Canelo, P. (2008), El proceso en su laberinto, Buenos Aires, Prometeo.

Castellani, A. (2021), “La consolidación de la ‘patria contratista’ durante la última dictadura cívico-militar”, en M. Schorr (comp.), El viejo y nuevo poder económico en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI.

Franco, M. (2018), El final del silencio, Buenos Aires, FCE.

— (2023), 1983. Transición, democracia e incertidumbre, Los Polvorines, UNGS.

Kessler, G. y G. Assusa (2021), Pobreza, desigualdad y exclusión social, Buenos Aires, Foro Universitario del Futuro, Argentina Futura.

Morresi, S., E. Saferstein y M. Vicente (2021), “Ganar la calle. Repertorios,

memorias y convergencias de las manifestaciones derechistas argentinas”, Clepsidra, 8(15), pp. 134-151.

Portantiero, J. C. (1977), “Economía y política en la crisis argentina: 1958-1973”, Revista Mexicana de Sociología, 39(2), pp. 531-565.

■

[\[46\] El proceso de transición aquí sintetizado puede verse con más detalle en Franco \(2018, 2023\).](#)

10. Las derechas radicales y las políticas de la crueldad

Ezequiel Ipar

Dilemas de la democracia

La consolidación de la derecha radical en la vida política argentina –como hemos visto en los capítulos anteriores de este libro– es producto de una compleja trama de causas históricas, crisis en los sistemas sociales y estrategias político-culturales. Sus efectos en el futuro inmediato son muy difíciles de prever. Pero hay una cuestión en la que convergen los análisis, me refiero al problema de la fragilización de la democracia. La irrupción de la derecha radical que catapultó a Javier Milei a la presidencia es un síntoma de debilidades en el funcionamiento de la democracia y reconfiguraciones ideológicas a nivel local (Ipar, Chávez Molina y Catanzaro, 2014) y global (Norris e Inglehart, 2019). Pero su irrupción también señala la posibilidad de que se consolide un proyecto político capaz de erosionar los principios de la democracia. En este capítulo me detendré en los efectos del crecimiento de las derechas radicales en la democracia, comenzando con una rápida revisión de tres conceptos que intentaron nombrar estos procesos de fragilización.

Empecemos por Colin Crouch y su concepto de posdemocracia (Crouch, 2004). Concebido en una época que no avizoraba el clima de autoritarismo actual, designa una pendiente de deterioro, un proceso de desdemocratización de sociedades que habían consolidado instituciones y formas de vida democráticas. El pasaje hacia la posdemocracia no implica una interrupción abrupta en manos de otro tipo de régimen político, como las dictaduras o los regímenes totalitarios, sino un debilitamiento lento pero continuo en la forma de organizar y ejercer el

poder político. La imagen de este proceso sería la de una parábola, una figura que no vuelve al punto de partida anterior (en la metáfora política este punto sería el régimen previo a la consolidación de la democracia) pero muestra un declive hacia valores ubicados en el mismo nivel de ese punto de partida.

Crouch encuentra el núcleo del debilitamiento del lado del *kratos*, esto es, en la pérdida de capacidades del poder político para influir sobre las diversas esferas de la sociedad. Las posdemocracias son básicamente democracias debilitadas en su capacidad para percibir demandas, trabajar contradicciones sociales y articular respuestas para resolver problemas de interés público. Esta impotencia relativa proviene de su creciente incapacidad para poner límites y orientar en un sentido compatible con el bienestar general a las grandes corporaciones que dominan la nueva fase de la globalización capitalista. Si pensamos la democracia como un cuerpo que intenta autogobernarse, posdemocráticos son aquellos cuerpos políticos que han perdido sensibilidad, debilitados en su facultad de pensar autónomamente alternativas para gestionar soluciones y muy limitados en su reacción ante poderes externos.

En términos funcionales, esta erosión se pone en marcha a través del poder de lobby de las grandes empresas sobre el aparato estatal y las instancias de deliberación y decisión del gobierno. Lo interesante del concepto de posdemocracia es que conecta estos síntomas con las transformaciones sufridas por el poder económico que impacta sobre el Estado. Según Crouch, las corporaciones globales ya no obtienen poder a través de mercados abiertos, sino que crean circuitos económicos especiales inmunes a la competencia, las diferencias culturales y la participación democrática. Esa inmunización hace posible un nuevo tipo de relación con las poblaciones, que vincula a proveedores oligopólicos eficientes con usuarios cautivos de un sistema dirigido, con pocas regulaciones estatales y alternativas de mercado. Por esta vía, la posdemocracia coincide con un nuevo modelo de ciudadanía, que pasa del ciudadano-cliente al ciudadano-usuario, quien participa en la vida pública a través de aceleradas demandas de eficiencia pero se aleja del trabajoso proceso de formación de opinión, deliberación y decisión de la comunidad.

Otra idea que permite pensar el debilitamiento de las democracias contemporáneas es el concepto de democracia iliberal (Sajó, Uitz y Holmes, 2022), que no pone el foco en la pérdida de sensibilidad para intervenir en los problemas públicos, sino que señala un deterioro en el sistema de derechos fundamentales que hacen posible la vida democrática (Habermas, 2005: 147 y

ss.). Existen muchas razones que justifican por qué las democracias modernas requieren un conjunto de derechos subjetivos. Nadie podría contribuir con una opinión en un debate, organizar una asociación política o participar en elecciones consideradas libres si no tuviera garantizados derechos básicos sobre la privacidad de su vida, su domicilio y sus comunicaciones, la posibilidad de asociarse con otros sin temor a ser sancionado y la libertad para expresarse en público sin controles externos ilegítimos. Las libertades políticas de las democracias modernas están fuertemente entrelazadas con las libertades civiles y con el conjunto de los derechos humanos.

El concepto de democracia iliberal refiere a un régimen político que permite la libertad de comercio y somete el gobierno a elecciones libres, pero al precio de destruir los derechos civiles y los derechos humanos de la población. En su despliegue efectivo, las democracias iliberales implican legalizar o regularizar la discriminación y afectar derechos fundamentales de individuos que pertenecen a grupos históricamente vulnerables, que en muchos casos accedieron tardíamente a la igualdad jurídica plena. Puede tratarse de mujeres, migrantes, minorías étnicas o religiosas, diversidades sexuales confrontadas con una movilización estratégica del poder político que pretende despojarlas de derechos adquiridos y exponerlas ante el conjunto de la sociedad como grupos inferiores en términos de estatus social. En este sentido, una democracia iliberal es una democracia electoral vaciada de igualdad en la protección de los derechos fundamentales que garantizan razonablemente la participación de todos los ciudadanos en la vida democrática.

Un último diagnóstico al que quiero referirme es el de Levitsky y Ziblatt (2018), quienes retoman un tema clásico: ¿cómo mueren las democracias desde dentro? Preocupados por las transformaciones políticas que llevaron a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, lo interesante de su planteo consiste en centrarse en las reglas implícitas de la política. Si entendemos la democracia como algo más que el cumplimiento formal de los principios constitucionales y mandatos legales, veremos que su supervivencia también depende de una cultura política aceptada y recreada por quienes participan en la vida pública. Levitsky y Ziblatt apuntan fundamentalmente hacia dos aspectos de esa cultura: la tolerancia mutua y la contención en el ejercicio de la autoridad política.

En el primer aspecto, la regla implícita establece que no se puede tratar a los adversarios políticos como enemigos o como encarnaciones de un riesgo existencial para la nación (Levitsky y Ziblatt, 2018: 91-93). La democracia es

incompatible con la gramática de la guerra y con la semántica del exterminio tan difundida en la política contemporánea. La tolerancia mutua surge del principio democrático que exige respeto a la pluralidad de concepciones del mundo razonables que los ciudadanos usan para participar en la formación de la voluntad común. Pero la tolerancia también es una condición pragmática indispensable para la negociación y los acuerdos políticos que garantizan el funcionamiento de los Estados democráticos. Resulta evidente que la retórica excluyente y los estilos de movilización política agresiva de las derechas radicales rompen con esta regla no escrita.

El segundo aspecto es la contención en el ejercicio del poder político. El juego democrático requiere que los partidos políticos hagan un uso prudente del poder que les asignan las normas legales, como condición para la subsistencia de salvaguardas entre los actores políticos y como garantía de la vigencia de los contrapesos entre los diferentes poderes públicos. Esta regla tácita de la democracia estipula que debe evitarse el abuso de medidas de excepción, la delegación de facultades, la manipulación de la justicia, el uso arbitrario de medidas ejecutivas y la politización de los organismos de control. Cuando la contención desaparece y se ingresa en un terreno donde cualquier uso de los instrumentos legales es válido, la dinámica de la política cae fácilmente en el bloqueo o el autoritarismo.

Lo que por arriba es intolerancia y falta de contención en el ejercicio de facultades constitucionales no deja de tener efectos de fragilización de la vida democrática por abajo, en la relación entre los poderes públicos y la ciudadanía y en las relaciones horizontales de la sociedad civil. A medida que la cultura política se deteriora y se rompen los puentes, la estrategia de la polarización excluyente se traslada hacia abajo como autorización de la discriminación y el autoritarismo social. En los Estados Unidos esto se puso de manifiesto con la operación ideológica que comenzó por denunciar a Obama como alguien que no era un “verdadero americano” (“no es cristiano, es un socialista, un comunista que ocupa la Casa Blanca y finge ser un estadounidense”) y luego desconoció a sus simpatizantes, descriptos como personas que no eran “americanos de verdad” (Levitsky y Ziblatt, 2018: 138 y ss.).

En la Argentina existe una construcción análoga, sedimentada en la cultura política a través de la representación de los “argentinos de bien”, [47] y que ahora opera intensamente en la alianza entre la derecha y la derecha radical que gobernará el país hasta 2027. En todos los casos, al imponer de manera arbitraria

las cartas de ciudadanía de la población, estas construcciones ideológicas refuerzan la polarización excluyente, la discriminación y la violencia horizontal en la sociedad civil. En términos institucionales, cuando estas distinciones son utilizadas por autoridades públicas se rompe el vínculo de la comunidad política ligada exclusivamente por obligaciones surgidas de los principios de justicia y la Constitución. Por esta vía, los dirigentes políticos y los poderes del Estado comienzan a exigir a los ciudadanos compromisos ético-políticos incompatibles con una democracia pluralista.

Los análisis que acabamos de bosquejar muestran el aspecto negativo del proceso político que atraviesan muchas democracias contemporáneas: pérdida de sensibilidad del sistema político frente a los problemas sociales urgentes, deterioro de las capacidades estatales para hacer cumplir decisiones democráticas, afectación de derechos y garantías individuales, crecimiento de la intolerancia y falta de prudencia política que inducen procesos de autoritarismo social. Incluso se podría conjeturar que existe una dinámica de retroalimentación entre estos fenómenos. Pero además estas transformaciones tienen un reverso. Este proceso no solo conlleva pérdida y deterioro: también hay algo que se afirma, se vislumbra el resultado de algo buscado, una estrategia que consigue adhesión en amplios sectores de la población y comienza a legitimar otro tipo de democracia. Intentaré pensar ese otro modelo a través de la relación entre crueldad y política.

La crueldad y la política

Como consecuencia de las tragedias del siglo XX y sus devastadores efectos sobre la población civil, entre 1948 y 1987 se sancionaron las principales disposiciones normativas en relación con las prácticas crueles e inhumanas. Con el recuerdo todavía vivo de los campos de exterminio, en ese período se aprobaron la declaración universal de los derechos humanos (1948), el pacto internacional sobre derechos civiles y políticos (1966) y la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984). Cabe destacar, para entender el espíritu de estas normas, que en la declaración de derechos humanos la prohibición de las prácticas crueles (art. 5) viene inmediatamente después de la prohibición de toda forma de esclavitud y

servidumbre (art. 4). Ambas son interpretadas como cosificaciones radicales de los seres humanos, formas extremas de violencia y humillación. Si la esclavitud implica el ejercicio sistemático de una cosificación sin límites, al punto de tratar a los seres humanos como bienes manipulables y enajenables que dependen de una voluntad ajena, las prácticas crueles cosifican al otro para poder tratarlo como objeto de una manipulación sádica, una cosa a la que se le inflige intencionalmente sufrimiento físico o psíquico para extraerle algo contra su voluntad. Cuando se declara la dignidad inalienable de todos los seres humanos, se comienza por prohibir la esclavitud y la crueldad.

Si revisamos la historia, vemos que la deshumanización y la crueldad formaron parte de las herramientas y estrategias de la política con escasos obstáculos legales hasta la posguerra.[48] Lo que pretenden dejar atrás las normas sancionadas después de la Segunda Guerra Mundial es precisamente el derecho a despreciar y hacer sufrir, algo que Freud todavía interpretaba a comienzos del siglo XX como el modo normal en que las naciones canalizaban las pulsiones destructivas de los sujetos (Assoun, 1983). El rechazo a la crueldad en la política contemporánea se apoya en esas normas y en la memoria de la conmoción que provocó el horror absoluto de los crímenes de lesa humanidad en la conciencia moral de la población. En los Estados constitucionales de posguerra, incluidas las democracias posdictatoriales en América Latina, ambos aspectos resultan constitutivos, como lo explica Marina Franco en este mismo volumen cuando analiza la constitución en la sociedad civil del “pacto del Nunca Más” en la Argentina. Esta construcción normativa no solo establece el límite incondicional de aquello que la política y el derecho ya no pueden repetir, sino que traza un camino que expande el alcance de la dignidad de todos los “miembros de la familia humana”. En 2008, por citar un ejemplo, el Comité contra la Tortura de la ONU declaró que los Estados deben prevenir y castigar los actos crueles no cometidos por los gobiernos, entre otros la violación, la violencia doméstica, la mutilación genital femenina y el tráfico de personas.

Recientemente distintas autoras volvieron a pensar esta relación entre vida social, política y prácticas crueles (Segato, 2018; Berlant, 2020; Cuesta y Prestifilippo, 2021). En sus análisis se preguntan por la supervivencia de esas prácticas (violencia de género, trata de personas, explotación sexual o acoso) en los márgenes de nuestra cultura. Son violencias que dejan marcas extrañas, porque se las oculta y al mismo tiempo se las revela a través de la exhibición de sus resultados macabros, como en los casos emblemáticos de los femicidios en Ciudad Juárez. Son temas de los que no se habla en público aunque, sin

embargo, se reconoce su regularidad y se acepta su “normalidad”. Las causas históricas de esta reaparición son variadas e incluyen desde cuestiones económicas y tecnológicas (Ipar, 2019) hasta profundas transformaciones histórico-culturales. Lo más relevante en este punto es eso que podríamos pensar como una nueva actualidad de la relación entre el espacio público, la política y la crueldad.

Para poder explicar el significado social de la crueldad tenemos que entenderla como una práctica que cosifica, humilla y provoca deliberadamente sufrimiento a sus víctimas y, al mismo tiempo, como un discurso que pretende establecer una forma de comunicación perversa. Aunque se trata de formas de violencia ejercidas en la opacidad de las relaciones sociales, las prácticas crueles persiguen una extraña legitimación en los intersticios del espacio público. Contra la prohibición manifiesta que establecen las normas actuales, estas prácticas instituyen un modelo de espacio público alternativo (Habermas, 2022) donde se exhibe que es posible hacer aquello que está prohibido (por las leyes internacionales y los aprendizajes históricos). En su contundencia sanguinaria, [49] las prácticas crueles que ha estudiado minuciosamente Rita Segato llegan al punto de erigirse como un ideal y una ley comunitaria que busca reponer jerarquías perdidas en el proceso de modernización jurídica y cultural.

Cuando la analizamos como formación discursiva, la crueldad se expresa tanto de manera vertical, en las palabras utilizadas para amedrentar y aleccionar a las víctimas, como de manera horizontal, para invitar e incitar a otros a integrar la comunidad de posibles cómplices. El análisis de esta relación horizontal que trama la crueldad es sin dudas el componente más original del planteo de Segato (2013). Ella lee las laceraciones en el cuerpo de las víctimas como una escritura social, un mensaje cifrado que los perpetradores usan no solo para diseminar el terror, sino también para invitar a otros a desinhibirse de las barreras de las normas morales que nos protegen mutuamente como seres vulnerables y destruir en sí mismos el efecto de las pasiones elementales de la vida social, entre ellas la compasión. La crueldad como discurso es una invitación a formar parte de una cofradía de seres humanos inmorales e impiadosos.

Lo que necesitamos analizar ahora es la actualidad del discurso de la crueldad como discurso político. Las derechas radicales activan este tipo de retórica contra una multiplicidad de grupos vulnerables como los migrantes, las diversidades sexuales, los pobres y las clases trabajadoras que ocupan las últimas posiciones en el espacio social. En sus discursos se hace explícita la invitación a

transgredir las normas que protegen derechos universales y a conformar una cofradía de individuos impiadosos: la comunidad de los que tienen la fuerza para impulsar la intolerancia en todos los aspectos de la vida social. Quisiera concluir mostrando cómo estas prácticas y estos discursos crueles pueden inscribirse dentro del funcionamiento del Estado democrático y someterlo a una profunda transformación.

Las derechas radicales y la dinámica estructural de las democracias crueles

En el período de crecimiento del Tea Party en los Estados Unidos, Paul Krugman publicó una serie de artículos que intentaban explicar un enigma para la teoría económica y su racionalidad utilitarista. Su pregunta era tan sencilla como provocadora: ¿por qué, en plena crisis generada por la especulación de los grandes bancos con derivados financieros, quienes se oponen a la expansión del déficit público no dicen nada sobre los auxilios estatales al sistema financiero y se centran, en cambio, en el ataque a las políticas de universalización de la asistencia médica o de auxilio a los pobres para el pago de las hipotecas? Krugman explica esta aparente irracionalidad económica, que traslada la responsabilidad de la crisis del sistema financiero a “la pereza de los que no quieren trabajar y eligen vivir de los subsidios estatales”, a partir de algo que denomina “ideología de hacer sufrir a los pobres” (Krugman, 2014). Esta ideología se había vuelto dominante en el seno del partido republicano mucho antes de la consagración electoral de Trump. Según su lectura, no era la convicción sobre la racionalidad de las políticas de austeridad la que decidía cómo se planificaba la política fiscal, sino que lo que expresaban las propuestas de eliminar los programas sociales era un deseo apenas velado de dañar a los pobres. Los republicanos habían sabido expresar esos deseos en la arena política y se empeñaban en conseguir legitimidad social a través de esas prácticas crueles. Culpar y castigar a los pobres por su pobreza, a las mujeres por la violencia de género, a los grupos discriminados por su discriminación es solo la puerta de entrada para la política de la crueldad en el siglo XXI.

La teoría económica ortodoxa ha incluido desde siempre la ideología sacrificial de la redención del pecado del gasto público a través de los programas de

consolidación fiscal. En los años sesenta Raúl Prebisch ya advertía contra las narrativas que proponían “expiar por la contracción económica el mal de la inflación” (Prebisch, 1963: 128). La revolución neoconservadora de los años ochenta continúa por esa senda. Ambos proyectos confían en la capacidad disciplinadora de la modernización económica y su apuesta consiste en acelerar las reformas para que estas empujen los restos culturales y políticos de una sociedad desorganizada. En la Argentina se hizo célebre la expresión que usó el expresidente Carlos Menem para legitimar democráticamente programas de ajuste ortodoxo: “El país necesita cirugía mayor sin anestesia”. Evidentemente, este enunciado alude al sufrimiento provocado por las decisiones políticas. Pero la metáfora del cirujano construye la imagen de un dolor no intencional, aplicado por un experto que usa su racionalidad técnica para remediar enfermedades económicas. El texto de esta justificación reconoce que se trata de un tratamiento doloroso, pero garantiza un resultado benéfico para el conjunto de la población. En esta forma de legitimar el neoliberalismo, a diferencia de lo que sucedió con las dictaduras cívico-militares, no cobra protagonismo una ideología de la crueldad.

La metáfora que popularizó Javier Milei durante su campaña electoral exhibe alegóricamente la diferencia de la nueva política de las derechas radicales. Ahora ya no se trata de un cirujano que opera sine ira et studio, sino de un economista iracundo que amenaza con una motosierra a las víctimas del ajuste fiscal. La precisión del bisturí es reemplazada por la brutalidad de la motosierra. En este sentido, la organización política y la legitimación ideológica de las derechas radicales revela una alianza con clases dirigentes capitalistas que ya no confían en los automatismos de la modernización económica ortodoxa. Para reparar la propia crisis de la economía neoliberal global arremeten con un tipo de batalla cultural[50] que busca normalizar prácticas y discursos crueles que permanecían en los márgenes de la cultura. Y lo hacen forzando su inscripción dentro del espacio donde se forman las opiniones y se toman las decisiones en el Estado democrático. Por esto mismo, la democracia cruel es un régimen político relativamente diferente de las democracias neoliberales, por más que encontremos allí algunas de sus causas más representativas (Ipar, 2018).

En el lento declive hacia las formas crueles de democracia cambia fundamentalmente el significado del sacrificio y la exclusión que promueven las decisiones políticas del neoconservadurismo: dejan de ser anunciados como consecuencias no buscadas de un tratamiento racional y se transforman en un castigo deliberadamente infligido. Bajo el prisma de esta orientación ideológica,

los recortes presupuestarios y la exclusión que provocan sus políticas públicas buscan sostener esa particular comunicación horizontal de los discursos crueles que exhiben la humillación de otros seres humanos como medio para construir comunidades e identidades (Cuesta y Prestifilippo, 2021). Del mismo modo, el dolor que infligen al cuerpo social ya no se justifica como un efecto no deseado; ahora se lo legitima desde el poder atribuyéndoles características culturales negativas a quienes lo padecen. Esta legitimidad oscura se despliega en las burbujas de la esfera pública informal de la comunicación digital (Habermas, 2022; Ipar y otros, 2023), pero atraviesa también los medios de comunicación mainstream (Mondon, 2022). En un contexto de múltiples crisis, los partidos de derecha radical han usado este tipo de estrategias de legitimación para presentar a las políticas que promueven la justicia social y los derechos humanos como responsables de los malestares subjetivos que genera la crisis, y han logrado con relativa eficacia despertar adhesión hacia posiciones ideológicas autoritarias.[51] La fase política que comienza en la Argentina con la presidencia de Milei es el resultado de esta transformación y de este asedio sobre las democracias que vemos desplegado a nivel global.

Para terminar, quisiera proponer las cuatro condiciones básicas para reconocer una democracia cruel: a) redireccionamiento discriminatorio de las políticas públicas; b) deterioro de los derechos individuales orientado por motivaciones ideológicas; c) transformación en el modelo de ciudadanía, que comienza a alentar –directa o indirectamente– la idealización de prácticas y discursos crueles; d) desgaste de la cultura política democrática asediada por la polarización excluyente y la oficialización de los discursos de odio.

Vimos que el concepto de posdemocracia servía para diagnosticar ciertas impotencias del Estado democrático. En las democracias crueles esa impotencia se vuelve explícitamente selectiva. La incapacidad del Estado ya no toma la forma de una fría indiferencia burocrática que no percibe o no puede responder a los padecimientos de las clases subalternas rezagadas en la fase actual del capitalismo global. Ahora la pérdida de las capacidades estatales se organiza para obtener legitimación política por medio del sufrimiento que esa retirada del Estado produce en determinados individuos o grupos sociales. Los discursos publicitarios de los partidos de derecha radical son explícitos en sus propuestas para suprimir las políticas de protección contra la violencia de género, la asistencia a migrantes o el sostenimiento de las necesidades básicas de los pobres. Estos recortes no están pensados para reducir el déficit fiscal (ya que representan una proporción marginal de este), sino para ofrecerle a una parte de

la ciudadanía culpables ideales y necesarios a los que se pueda transformar en enemigos de la sociedad.[52] Si bien se encuentran entrecruzados, la finalidad ideológica (la ilusión de la comunidad excluyente de los fuertes) se impone por sobre el objetivo económico particular (reducir el déficit fiscal mediante el recorte del gasto público).

Lo relevante para entender el funcionamiento de esta selectividad político-ideológica es el lugar que estos discursos asignan al “derecho a despreciar al otro”. Existen distintas doctrinas conservadoras adecuadas para esta operación ideológica, que se opone a los desarrollos de la cultura jurídica occidental de los últimos setenta años. Una doctrina que ha cobrado especial relevancia en el caso argentino es el libertarianismo conservador, que inspira por distintas vías al flamante presidente Javier Milei. En la versión estadounidense de Hans Hoppe esta posición se expresa con claridad:

Los libertarios contraculturales no supieron ver que la restauración de la propiedad privada y del laissez-faire exige un drástico incremento de la “discriminación” social y la pronta eliminación de todos o casi todos los experimentos multiculturales e igualitaristas de formas de vida alternativas. [...] [Si esto no sucede,] la consecuencia de la erosión de los derechos de propiedad privada en el Estado socialdemócrata es la integración forzosa. La integración forzosa es ubicua. Los estadounidenses tienen que aceptar, aunque no quieran, a los inmigrantes. Los profesores no pueden deshacerse de los malos estudiantes o de los de conducta desviada o enferma; los empresarios tienen que cargar con trabajadores improductivos o sin preparación; los propietarios de tierras se ven obligados a vivir con pésimos arrendadores [...] Por el contrario, una sociedad que restaurase plenamente la facultad dominical de exclusión de la propiedad privada sería profundamente desigualitaria, intolerante y discriminatoria (Hoppe, 2023: 366-369).

A partir de una radicalización de la idea de propiedad privada, entendida como un “derecho” anterior a la ley, contrario al Estado constitucional y obviamente a la democracia, el libertarianismo conservador vuelve a justificar la discriminación, la exclusión y la agresividad (“holgazanes, vagabundos, homosexuales, consumidores de drogas, judíos, musulmanes, alemanes o zulúes

serán expulsados a patadas como invasores”, Hoppe, 2023: 369). En este tipo de doctrinas políticas se llama “integración forzosa” a todas las obligaciones normativas que surgen de los pactos en materia de derechos humanos. Este choque frontal contra la idea de igual dignidad de todos los seres humanos hace colapsar la estructura jurídica de las democracias liberales, que trabajosamente intentaron integrar derechos en conflicto siguiendo el principio de la búsqueda de la mayor libertad posible para todos. El crecimiento de prácticas iliberales dentro de las democracias contemporáneas tiene como punto de partida, más allá de cuáles sean las demandas canalizadas a través de estas ideologías, el restablecimiento en el plano político del “derecho a despreciar a los otros”. Frente a las teorías que demuestran que no puede existir realmente la participación democrática si no se garantizan condiciones materiales y formas básicas de integración social para todos, en las democracias crueles se interviene promoviendo la intolerancia y la quita de los derechos que hacen posible la participación democrática de los grupos socialmente desfavorecidos.

La ideología abstracta que busca fabricar legitimidad social haciendo sufrir a grupos vulnerables y restringiendo selectivamente derechos civiles suele proponer como protagonista de este “derecho a despreciar a los otros” a la figura subjetiva del propietario, el nativo o el sujeto que se autopercibe superior en términos raciales. Lo cierto es que cuando se despliega como ideología concreta se ensaña sistemáticamente contra las mismas subjetividades: los migrantes, los jóvenes, los homosexuales, los trabajadores no calificados, las mujeres que cuestionan el orden patriarcal. La crítica neoconservadora de los años ochenta ya había identificado a estos grupos sociales como parte de las causas del estancamiento económico (los concebía como inadaptados o incapaces para la “ética pura del trabajo”), pero confiaba en las reformas económicas y la lucha contra los sindicatos para realinear los desempeños laborales con los requerimientos sistémicos. Las estrategias políticas de las derechas radicales repiten ese diagnóstico neoconservador, pero lo llevan a la práctica mediante una ideología cruel, destructiva en el presente y oscura hacia el futuro. Esta ideología es la que organiza, cuando estos partidos llegan al poder, las prácticas iliberales de las democracias.

El redireccionamiento discriminatorio de las políticas públicas y el ataque selectivo a los derechos individuales inducen cambios en los modelos de ciudadanía. En las democracias que padecen estos influjos se acentúan los mecanismos de sospecha generalizada hacia la ciudadanía social y se fomenta la persecución de todos aquellos que fueron tomados en cuenta por el lado

igualador del Estado de bienestar. En este declive de la democracia, el ciudadano moralmente comprometido no solo es reemplazado por las figuras subjetivas del cliente, el competidor y el usuario, sino que se lo confina al lugar de ciudadano celador, que debe escrutar y castigar por cuenta propia los excesos en las demandas de justicia social de los otros. Bajo este modelo, para estar integrado en el sistema político se debe suscribir el pacto de vigilancia sobre las ayudas materiales y los reconocimientos simbólicos que reciben de modo compensatorio los grupos sociales más débiles.

El modelo de ciudadano celador recuerda a la figura del “microdéspota” sobre la que reflexionó Guillermo O’Donnell (1983) cuando analizó la circulación social del autoritarismo en la época de la dictadura. Si bien existen importantes diferencias por el contexto político e institucional al que se refiere, el microdespotismo aludía a una relación horizontal dentro de la sociedad civil, que reforzaba y recreaba el gobierno autoritario en la vida cotidiana de las instituciones no gubernamentales. La metáfora que usaba O’Donnell en ese texto era la de una sociedad que se “patrullaba a sí misma”, incluso más allá de lo que exigían las disposiciones del gobierno militar. Esa dinámica surgía del miedo al desorden y erigía posiciones de autoridad arbitrarias, prejuiciosas y acrílicas en la capilaridad de la vida social. El ciudadano celador que inducen los discursos crueles de las derechas radicales contemporáneas funciona de la misma manera, pero se dirige principalmente hacia el principio de igualdad. En este caso el temor proviene de lo que se presenta como excesos en la igualación y la reacción pretende levantar en la sociedad civil nuevos muros simbólicos en las relaciones entre las personas.

El punto final de la parábola de las democracias sobre las que avanzan las derechas radicales aún no está escrito. Los contenidos ideológicos de estos partidos políticos apuntan en una dirección inquietante, pero todavía están en pie contrapesos institucionales y espacios públicos que sirven para la oposición de los grupos afectados. Queda por ver hasta dónde se extenderán el modelo de ciudadano celador, las prácticas iliberales dentro del Estado constitucional y la tolerancia al uso discriminatorio de las políticas públicas. A pesar de las promesas mitológicas en nombre de la necesidad de restituir un orden perdido, las estrategias de estas formaciones de derecha ponen a los ciudadanos ante una democracia alterada y sometida a la conmoción de luchas permanentes, sin un horizonte que permita abordar los problemas reales que están en el origen de su malestar. Allí donde ya no alcance la retórica que ofrece como sola virtud la exclusión, la discriminación y la política de dejar a los otros con las manos

vacías, puede agotarse rápidamente ese estilo de movilización y de ejercicio del poder que amenaza la cultura política de nuestras sociedades. La crítica de la ideología de la crueldad puede resultar crucial para las luchas democráticas que busquen ofrecer una alternativa.

Bibliografía

Assoun, P. L. (1983), “Freud aux prises avec l’idéal”, *Nouvelle Revue de Psychanalyse*, 27, pp. 105-112.

Berlant, L. (2020), *El optimismo cruel*, Buenos Aires, Caja Negra.

Crouch, C. (2004), *Posdemocracia*, Madrid, Taurus.

Cuesta, M. y A. L. Prestifilippo (2021), “Retóricas de la crueldad. Mitos y razones de la desigualdad social”, *Revista Pilquen. Sección Ciencias Sociales*, 24, pp. 47-60.

Habermas, J. (2005), *Facticidad y validez*, Madrid, Trotta.

— (2022), “Reflections and Hypotheses on a Further Structural Transformation of the Political Public Sphere”, *Theory, Culture & Society*, 39(4), pp. 145-171.

Hoppe, H. (2023), “Conservadurismo y libertarismo”, en L. D. Fernández

(comp.), Utopía y mercado: pasado, presente y futuro de las ideas libertarias, Buenos Aires, Adriana Hidalgo.

Ipar, E. (2018), “Neoliberalismo y neoautoritarismo”, *Política y Sociedad*, 55(3), pp. 825-849.

— (2019), “Discursos de odio y mercados de la crueldad”, *Calibán, Revista de La Federación Latinoamericana de Psicoanálisis*, 17(2).

Ipar, E., E. Chávez Molina y G. Catanzaro (2014), “Dilemas de la democracia (y el capitalismo) en Argentina: transformaciones sociales y reconfiguraciones ideológicas”, *Realidad Económica*, 285-286, pp. 33-56.

Ipar, E. y otros (2023), *Discursos de odio, una alarma para la vida democrática*, Buenos Aires, Unsam Edita.

Krugman, P. (2014), “Enemies of the poor”, *New York Times*, 13 de marzo.

Levitsky, S. y D. Ziblatt (2018), *Cómo mueren las democracias*, Buenos Aires, Ariel.

Mondon, A. (2022), “Populism, Public Opinion, and the Mainstreaming of the Far Right: The ‘Immigration Issue’ and the Construction of a Reactionary People”, *Politics*, 43(4), 23 de junio.

Norris, P. y R. Inglehart (2019), *Cultural Backlash. Trump, Brexit and Authoritarian Populism*, Nueva York, Cambridge University Press.

O'Donnell, G. (1983), "Democracia en la Argentina: micro y macro", *Documentos de Trabajo*, 2, Kellogg Institute.

Prebisch, R. (1963), *Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano*, Ciudad de México, FCE.

Sajó, A., R. Uitz y S. Holmes (2022), *Routledge Handbook of Illiberalism*, Nueva York, Routledge.

Segato, R. (2013), *La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez*, Buenos Aires, Tinta Limón.

— (2018), *Contra-pedagogías de la crueldad*, Buenos Aires, Prometeo.

▪

[\[47\] Véase, en este volumen, el análisis de Sergio Caggiano sobre esta representación ideológica a propósito de la trama cultural y sus implicancias políticas.](#)

[\[48\] Recordemos que, en la modernidad, la esclavitud, los campos de concentración o las prácticas de segregación racial se realizaron siempre a través de normas legales. Los antecedentes más próximos de prácticas discriminatorias en instancias legales son el rechazo a la "propuesta de la igualdad racial" en la Sociedad de las Naciones \(1919\) y las leyes de Núremberg que sancionaron los nazis en 1935.](#)

[49] La raíz indoeuropea de la palabra crueldad designa “la carne cruda”, “la carne sangrante”. En latín crudus significa “sangrante” y crudelis designa a “aquel que se regocija en la sangre”, “aquel que es áspero, sangriento y despiadado”.

[50] Véase la excelente reconstrucción de Caggiano, en este volumen, sobre la importancia de este concepto para analizar la dinámica política de las derechas radicales.

[51] Véanse los trabajos del Laboratorio de estudios sobre democracia y autoritarismo de la Unsam (<www.unsam.edu.ar/leda>). Comparando los resultados de un estudio sobre prejuicios sociales que realizamos en 2020 y repetimos en 2023, que incluye un análisis de la adhesión a discursos racistas, discriminatorios hacia el colectivo LGTTB+ y xenófobos, observamos un incremento significativo en las posiciones que los aprueban, que pasan de un 26,2% en 2020 al 34,9% en 2023. Cuando analizamos la relación con las posiciones políticas, vemos que la función de los discursos de odio en la articulación de los votantes de la derecha radical es muy significativa. Entre los votantes de Milei en las elecciones de octubre de 2023 la aprobación hacia esos discursos de odio llegaba al 50,9%, mientras que entre los votantes de Bullrich era del 36,1% y en los de Massa del 20,1%. En el mismo sentido, la aprobación de la pena de muerte en los votantes de Milei era del 63,7%, en los de Bullrich del 50,9% y en los de Massa del 35,5%.

[52] Véase el detallado análisis de Andrea Torricella en este libro sobre el papel que cumplen las posiciones “antifeministas” en la construcción política y la legitimación de las derechas radicales.

Epílogo

“Inundar la zona de mierda”

Alejandro Grimson

En 2018, el jefe de estrategia de Donald Trump, Steve Bannon, pronunció esta frase: “Flood the zone with shit”. En su brutal contundencia, la expresión permite leer el desquicio de una época de la política estadounidense y mundial. Bannon explicó así el objetivo de la fábrica de desinformación: “Los demócratas no importan. La verdadera oposición son los medios de comunicación. Y el modo de lidiar con ellos es inundar la zona de mierda”.

Quizás los lectores hayan conocido una época en que la política consistía en “persuadir”, “convencer”, sintonizar sus propuestas con la sociedad. Los líderes de la ultraderecha de masas consideran que se trata de otra cosa: canalizar el muy legítimo descontento social desafiando los límites de la democracia y estresar diariamente a la población hasta que todos estemos fuera de quicio. Esto es clave, porque impide pensar estratégicamente.

Como Steve Bannon se convirtió en uno de los líderes de la Internacional de la derecha extrema y allí ofrece lecciones a presidentes o futuros presidentes de cualquier continente, la “zona” se ha ampliado al mundo. Obviamente, las tecnologías de la comunicación permiten esparcir las inmundicias de manera inédita en la historia. Interpretar al nuevo Poder, que grita “¡libertad!” pero solo quiere libertad para sus exponentes directos y para el Capital, exige leer cartográficamente la ubicación y los desplazamientos de los excrementos comunicacionales.

El gobierno argentino pertenece a una especie política bien definida: la nueva

derecha extrema, que llegó a varias presidencias y a todos los parlamentos de Europa y América. Recapitulemos algunos de sus rasgos procurando mantener a raya el psicologismo y priorizando el análisis político.

En casi todos los países de América y Europa pasaron una de estas dos cosas: o el tradicional partido de derecha se convirtió en uno de derecha extrema o surgió una nueva fuerza de extrema derecha. La Argentina es una excepción: pasaron las dos cosas. Surgió una nueva fuerza de derecha extrema y el PRO –fuerza de centroderecha democrática surgida en 2005– se alió al gobierno que asumió en 2023. Trump impuso su liderazgo porque redujo drásticamente el poder tradicional que tenían gobernadores o legisladores del Partido Republicano. Javier Milei solo se va a asociar al PRO si logra subordinarlo.

Estas nuevas fuerzas se basan en una intensa polarización y buscan remodelar el sistema político a su favor. No pueden aceptar grandes consensos, porque su razón de ser es anti statu quo. Acordar, dialogar o negociar implicaría ir en contra de su identidad y sus intereses. Adam Przeworski alertó hace años que la polarización produce un parto de extremismo y una crisis de la democracia.

En América Latina tienen un programa económico neoliberal radicalizado, que puede aceptar una cuota de políticas sociales con transferencias monetarias a los sectores más desprotegidos combinada con todo el conservadurismo cultural que la sociedad les permita. La lucha cultural la conciben como guerra, con enemigos a doblegar. Solo hay ganadores y perdedores. Así, se pone en marcha una narrativa complotista y paranoica que ve un enemigo en cualquiera que se atreva a expresar una disidencia.

“La versión neoliberal de una visión maniquea del mundo es la división entre trabajadores y perezosos”, afirma Natascha Strobl en *La nueva derecha* (2022). Los líderes de extrema derecha buscan no cumplir con las reglas de la política, bajo la premisa de que es mejor ser mal educado o políticamente incorrecto que parte del establishment.

Trump fue un caso extremo de ruptura de reglas formales e informales. Captaba el significado de lo noticiable y despreciaba las consecuencias de esas rupturas, de ahí que Steven Levitsky y Daniel Ziblatt lo llamaran “rompedor serial de normas”.

Ante estas situaciones muchas veces sus adversarios apelan a la moral y la

decencia. Pero en el ambiente que se genera, las mentiras no tienen costos para quienes las difunden. Porque lamentablemente la polarización ha destruido el espacio común, moral y perceptivo.

Los líderes de la ultraderecha construyen para sí mismos el lugar del “salvador” y, a la vez, de la “víctima” de las conspiraciones de la vieja política y los medios. Vieja política es todo aquello que no se convierte en ministro, asesor, diputado o aliado del gobierno de extrema derecha. Políticos con medio siglo de trayectoria o treinta años de gestión pública, excandidatos presidenciales derrotados, exgobernadores pueden ser “nuevos” con la adecuada cobertura mediática. Otros, ante la amenaza del castigo o la lapidación en el espacio público digital, se vuelven súbitamente colaborativos. Ejército de carpetazos.

En varios países de Europa, cuando el Poder Ejecutivo viola las leyes, los jueces actúan de inmediato. Por eso los gobiernos de extrema derecha suelen enfrentar al Poder Judicial. En otras regiones, lo hacen cuando fueron derrotados. Y allí donde no tienen mayorías holgadas, se enfrentan al Poder Legislativo. Detestan la división de poderes, hablan pestes del trabajo parlamentario.

Borran las etapas clásicas de la política, como la fase electoral y la fase de gobierno, porque para estos líderes la resolución de problemas reales está en un segundo plano y, una vez en la gestión, siguen actuando como si estuvieran en campaña electoral. Mejorar en las encuestas es la prioridad del día a día. Mejorar los ingresos... seguramente puede esperar.

Y esto a su vez se asocia a la nueva “industria del escándalo”. Strobl dice: “Mantener la escalada, producir nuevos escándalos, agigantar las banalidades y lanzar historias para distraer, todo esto forma parte de una estrategia a la que se dirigía el dictum de Steve Bannon”.

En esta estrategia confluyen tres instrumentos, de la mano de las nuevas formas de comunicación: la posverdad, las fake news y las teorías del complot. El diccionario de Oxford definió la posverdad como esa condición por la cual “los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las referencias a emociones y a creencias personales”. Las coordenadas básicas del debate público quedan erosionadas.

Estos instrumentos buscan varias cosas: generar un estado de ansiedad sin precedentes, pero también crear una realidad paralela. Buscan que sus electores,

o la mayoría de ellos, habiten mentalmente una “realidad” que sea inmune a los datos, a los argumentos y a los hechos.

Hay tres temas en los que existen importantes diferencias entre estas fuerzas (Forti, 2022): la economía (en el Norte la mayoría de ellas no son neoliberales), los valores (en Francia se aproximan al feminismo contra los musulmanes) y la geopolítica. Además de lo que ya señalamos, lo que tienen en común es, siguiendo a Forti, que “no niegan formalmente la democracia en sí, sino que critican la democracia liberal tachándola de no democrática, es decir, como algo desconectado de la voluntad del pueblo”. Hoy no es frecuente que haya un golpe de Estado que destruya esos sistemas en un día, sino que “los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla” (Levitsky y Zibblat, 2018). Y ojo que no siempre tienen éxito: Trump, Bolsonaro y otros perdieron las elecciones. Pero conservan decenas de millones de militantes convencidos.

Hace casi un siglo atrás la información se definió como lo inverso de la probabilidad. No es noticia que no llueve en el Sahara, no es noticia que la derecha extrema insulta y estigmatiza. ¿Qué medios de comunicación van a repetir cada uno de los insultos que el gobierno realice contra los que piensen distinto o contra los opositores? Así solo se ayuda a “llenar la zona de mierda”. La contribución al debate público es generar información (lo inverso de la probabilidad) y análisis plural.

El hiperestrés[53]

La estrategia es que las provocaciones contra los diversos sectores de la oposición, tanto de la política como de los movimientos sociales, sean permanentes. Es necesario mantenerlos en un estado de agitación constante, en un hiperestrés, por distintos motivos:

La oposición ya ha sido categorizada como enemiga y su indignación confirma

el lugar predefinido.

Aumenta la polarización, que es también incomunicación entre las partes.

Al interior de la oposición surgen sectores que consideran que la mejor manera de ser consecuentes consiste en exagerar los planes o medidas del gobierno. Recogen la tradición catastrofista.

Esto genera una desinformación por exageración que es muy beneficiosa para el gobierno, ya que le permite mostrarse después como moderado. La podemos llamar “izquierdismo informativo”, apelando a una paráfrasis de lo que Lenin denominaba “enfermedad infantil del izquierdismo” (en su cuestionamiento a las estrategias de los comunistas en ciertos países).

Funciona así. Por la quita de subsidios, aumenta el precio del transporte público. Esperan protestas aisladas. Por la misma razón, sube la tarifa de luz entre un 185 y un 300%. Aguardan algunas decenas de cortes de calles. Detendrán la paritaria en un sector y lo empujarán a su huelga sectorial. Van por cada movimiento social, por cada sindicato, por cada gobernación. Irán por algunas universidades. Necesitan que la sociedad esté fuera de quicio. Que no pueda pensar estratégicamente: quieren largas huelgas para replicar la estrategia de Thatcher, no gigantescas movilizaciones de sus votantes. Que el día a día esté colmado de comentarios y lamentaciones por la última medida, la última imposición, la incapacidad de resistencia. Una televisión con canales 24x7 centrados en Milei y sus controversias, Twitter o X y el resto de las redes, girando sobre lo mismo. Una sociedad mileicéntrica es su triunfo.

Si a esto sumamos grandes fiestas por la baja de la inflación con salarios pulverizados, una reducción drástica del poder de compra y una total incertidumbre sobre precios elementales de la vida cotidiana, ya tenemos a la sociedad estresada. Una sociedad que aguarda cada día las noticias, los anuncios, las declaraciones, el devenir de la guerra. Una sociedad que cree que se acerca el

fin del mundo. Se hace muy difícil, si no imposible, en un contexto crítico tan agudo poder identificar la inexorable temporalidad de todos los fenómenos políticos y los errores que habría que evitar para no fortalecer la estrategia hegemónica.

La misma discrecionalidad de quienes son los beneficiarios de una libertad para pocos se aplica a la nueva consigna “no hay plata”. Es gracioso: cuando no haya plata, no habrá política ni Estado. Hay plata para aviones de combates que no existen, pero no para las escuelas que sí existen. El Poder Ejecutivo decide para qué hay plata. No es así según la Constitución nacional. Como la plata es política, el presupuesto lo debe aprobar el Congreso nacional, donde la ciudadanía decidió que las fuerzas de la Libertad Avanza tengan pocos legisladores. Ningún gobernador y un presidente. Pero el Poder Ejecutivo “prorrogó” el presupuesto 2023 y, simplemente, está haciendo lo que le viene en gana con la plata. Realmente, es libre. Se está liberando de la Constitución.

Muchos analistas lúcidos se han preguntado por qué el presidente no se dedica exclusivamente a la economía. Es decir, por qué confronta con la educación pública, un espacio de consenso en el que incluso sus propios votantes se sintieron interpelados y participaron de la marcha en defensa del presupuesto universitario. Por qué necesita destituir el salón de las mujeres y diversidades, de los pueblos originarios, para inaugurar un salón de héroes varones, negando la historia argentina más elemental, haciendo “adoctrinamiento” machista con dinero público. Por qué tanta batalla cultural con lo desafiante que es la batalla económica. Dos pistas para pensar las razones por las que sigue a otros presidentes de la internacional reaccionaria en este ímpetu de abarcarlo todo. Primero, hay temas “culturales” que son temas presupuestarios y, a la vez, modelos de desarrollo. Un país sin ciencia, sin tecnología, sin universidades públicas, sin libertad de cátedra ha sido soñado por la derecha en muchos momentos de nuestra historia. El ahorro con el estrangulamiento a las universidades y a la ciencia permite comprar aviones, quizás mañana bombas, y planificar la gran fiesta: bajar impuestos a los grandes capitales.

La otra cuestión hace a la convivencia social, a lo que supimos conseguir de democracia como forma de vida. Hay quien cree que enseñar la Constitución, la división de poderes, los pactos internacionales de derechos humanos, los derechos jurídicos de las mujeres y los pueblos originarios, la tasa de pobreza o la historia de las organizaciones sociales, todo eso sería “adoctrinar”. No es sencillo saber si lo dicen por completa ignorancia de qué se enseña en las

mejores universidades del mundo o por un autoritarismo feroz. Hay quien cree que las ampliaciones de derechos civiles, la total libertad de identificación y de expresión, un mayor poder para grupos históricamente discriminados van contra los valores conservadores que defendía Hayek, junto a Pinochet y Thatcher. Y tienen razón. La pregunta política es si para imponer una sociedad sin protección social, educación y salud públicas, hace falta domesticar culturalmente a toda esa multiplicidad de voces diversas y disidentes. Así parece.

Llegados hasta acá, lo que sí sabemos es que Milei no cree en el gradualismo. Sin embargo, la relación de fuerzas y las limitaciones políticas propias de cualquier gobierno le imponen no hacer todo el primer día ni comprarse todos los conflictos. Como hizo con la CGT, a veces avanza y retrocede. Pero también es cierto que surgen momentos en la historia donde ya no queda tiempo para retroceder.

Nadie puede negar que ha habido una distribución generosa de insultos a periodistas y líderes opositores. En el reino del individualismo cada uno está contra el insulto a sí mismo, pero nunca contra el método y menos si se aplica a alguien que piensa diferente. Las personas que han estudiado mucho y seriamente poseen una cierta conciencia de las dimensiones de lo que desconocen. Solo quien ha estudiado una única disciplina puede creer que es sencillo trasladar su esfuerzo a cualquier territorio. ¿Quién aconseja convertir a la Argentina en un adalid de la defensa del interés de otros países hasta límites absurdos? ¿Quién aconseja parar toda la obra pública sin distinciones, ni análisis, ni estudio? La ignorancia combinada con un enorme entusiasmo es una fábrica de desquicio. De acciones y políticas que sacan de quicio a la sociedad.

Los sentimientos negativos (como el resentimiento, la ira y el odio) generan más unificación que los positivos. Ser ingenieros del caos (Da Empoli, 2020) es identificar “todos los días un tema que domine el debate colectivo desencadenando la animadversión de un grupo contra otro” (Pagni, 2024). Si el objetivo de diversos actores políticos es lograr una gobernanza de la afectividad (Shoshan, 2017), esto puede hacerse para aplacar sentimientos que contribuyen a cruzar la línea de la legalidad o bien para escalar grados de polarización afectiva que pueden erosionar las bases de la democracia. Gestionar emociones no es juego de niños y no tiene garantías de éxito: cuántas veces en la historia dar rienda suelta a la ira terminó en masacres racistas, religiosas o políticas. No hay que jugar con fuego.

Aquella frase de Hamlet que citamos al inicio de la introducción del libro (“The time is out of joint”) es polisémica y admite varias traducciones. Una de ellas es “El presente está desquiciado”. En un análisis brillante, Eduardo Rinesi explica que esta idea de un tiempo extraviado, trastornado, delirante, loco, un mundo patas para arriba o “cabeza abajo”, atraviesa toda la obra de Shakespeare. Y nos deja una joya. En una traducción que enfatiza la dimensión moral de la frase original, el filósofo Jacques Derrida prefiere esta formulación: “El mundo ha sido deshonrado”. En ciertas circunstancias, el término “desquiciado” se encuentra cerca de “deshonrado”.

Antes de finalizar, un granito de arena para comprender la dimensión de los desafíos. La inflación no es, como creen los economistas heterodoxos, un problema distributivo. Un índice mensual que, con la botonera de las políticas públicas, se resuelve con una pauta salarial que le empate o le gane. La inflación es un problema multidimensional que desorganiza la vida, destruye la planificación familiar, impide ahorrar y prever, provoca que las personas vayan a varios supermercados para una compra semanal, que no haya precios de referencia. La inflación ya produjo desastres en el mundo. Conociendo la historia, había una obligación ética de evitarla. Pero la negación del problema fue más fuerte. Y ese desmanejo nos trajo hasta aquí.

Nada de lo que estamos diciendo niega las responsabilidades previas de dirigentes, funcionarios o partidos en cada tema que se analice. Lo que estamos mostrando es cómo la ultraderecha utiliza tanto hechos ciertos como inventos completos para denigrar, polarizar y dividir a la sociedad.

Seguimos creyendo en la información y la libre opinión. Así como creemos en la necesidad de un debate entre las fuerzas democráticas por la justicia social, que pueda hacerse de cara a la sociedad y que pueda ofrecer una alternativa económica y política que recoja la experiencia reciente. Los dogmas y los lugares comunes solo fortalecerán el ajuste. Y el ajuste no se podrá enfrentar exitosamente sin ofrecer un camino realista, que se haga cargo de una sociedad que le dijo nunca más a la inflación.

Para que esa heterogeneidad de conflictos y luchas instituya una multitud que abra nuevos horizontes, la tarea de la hora es elaborar un plan y un proyecto económico-social de país que, lejos de la enunciación de lo ya hecho, se concentre en los problemas concretos que la mayoría de la sociedad demanda resolver. Hasta tanto ese punto instituyente sea creado, la atomización, el estrés y

la deshonra serán el pan nuestro de cada día.

Bibliografía

Da Empoli, G. (2020), Los ingenieros del caos, Madrid, Anaya.

Forti, S. (2022), Extrema derecha 2.0. ¿Qué es y cómo combatirla?, Madrid, Siglo XXI.

Levitsky, S. y D. Ziblatt (2018), Cómo mueren las democracias, Barcelona, Ariel.

Pagni, C. (2024), “La elección del enemigo equivocado”, La Nación, 25 de abril.

Przeworski, A. (2022), Las crisis de la democracia. ¿Adónde pueden llevarnos el desgaste institucional y la polarización?, Buenos Aires, Siglo XXI.

Shoshan, N. (2017), El manejo del odio. Nación, afecto y gobernanza de la derecha extrema en Alemania, México, FCE.

Strobl, N. (2022), La nueva derecha. Un análisis del conservadurismo radicalizado, Buenos Aires, Katz.

■

[53] Retomo aquí algunas ideas que comencé a desarrollar en “Una sociedad estresada”, publicado en revista Anfibia, en febrero de 2024.

Acerca de las y los autores

Tomás Borovinsky

Es doctor en Ciencias Sociales (UBA) e investigador del Conicet, especializado en pensamiento contemporáneo. Es profesor de Teoría Política y Social en el Idaes-Unsam, dio clases de Filosofía en la UBA durante diez años y fue profesor invitado en UdeSA y en UTDT. Publicó los libros colectivos Posteridades del hegelianismo (Teseo), Estética, política, dialéctica (Prometeo), Distancias políticas (Miño y Dávila), y en prensa, uno sobre la obra del filósofo Richard Rorty (Katz). Fue cofundador y editor de Panamá Revista y ha colaborado, entre otros, en Le Monde diplomatique, Playboy, Los Inrockuptibles, Nueva Sociedad y La Nación. Es director editorial del sello Interferencias (Adriana Hidalgo).

Sergio Caggiano

Es doctor en Ciencias Sociales (UNGS), director del Centro de Investigaciones Sociales - Conicet/IDES, Buenos Aires. Es investigador del Conicet y profesor en la Universidad Nacional de La Plata. Ha desarrollado investigaciones sobre migración, interculturalidad y discriminación, cultura visual y hegemonía para el Conicet, la UNLP, desigualdades.net (Universidad Libre e Instituto Iberoamericano, Berlín), Clacso, Claspo (University of Texas, Austin), Unicef, entre otras instituciones, realizando trabajo de campo en ciudades de Argentina, Bolivia y España. Sus últimos libros son Disputas en torno a la tierra y el territorio. Valores, proyectos e imágenes en tensión (2022, con Elizabeth Jelin) y Las migraciones como campo de batallas. Desigualdades, pertenencias y conflictos en torno a la movilidad de las personas (2019).

Ulises Ferro

Es graduado en Antropología (Unsam) y doctorando en Sociología (Unsam).

Además, es técnico en realización audiovisual. Sus investigaciones se vinculan con los estudios sociales de la economía y de la política. Ha escrito sobre las relaciones socioeconómicas de los sin techo de la Ciudad de Buenos Aires y el vínculo de los jóvenes de sectores populares con el Estado. Su investigación doctoral aborda las comunidades de criptomonedas en la Argentina.

Marina Franco

Es investigadora principal del Conicet y profesora titular de la Escuela Idaes-Unsam. Se dedica al estudio de la violencia política y la represión en la historia argentina del siglo XX. Es autora de *El exilio* (2008), *Un enemigo para la Nación* (2012), *El final del silencio* (2018), *1983, Transición, democracia e incertidumbre* (UNGS, 2023) y *Fantasmas rojos. Una historia del anticomunismo en la Argentina* (con Ernesto Bohoslavsky, en prensa). Como coeditora, ha publicado *ESMA. Represión y poder en el centro clandestino más emblemático de la última dictadura argentina* (FCE, 2022), entre otros.

Alejandro Grimson

Es doctor en Antropología por la Universidad de Brasilia. Ha investigado culturas políticas, identidades, movimientos sociales, procesos migratorios, zonas de frontera e interculturalidad. Es autor de *¿Qué es el peronismo?* y de *Mitomanías argentinas*, donde propuso un modo de abordaje crítico del sentido común, *Mitomanías de la educación argentina* (con Emilio Tenti Fanfani) y *Mitomanías de los sexos* (con Eleonor Faur), todos publicados por Siglo XXI. Su libro *Los límites de la cultura* mereció el Premio Iberoamericano que concede la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA). Recibió también el Premio Bernardo Houssay otorgado por el Estado argentino. Ha dictado conferencias y cursos en numerosas universidades del país y del extranjero. Es investigador principal del Conicet y profesor de la Eidaes en la Unsam.

Ezequiel Ipar

Es doctor en Filosofía (Universidad de San Pablo), doctor en Ciencias Sociales

(UBA) y licenciado en Sociología (UBA). Es investigador independiente del Conicet y profesor regular asociado de Teoría Sociológica II en la carrera de Sociología de la UBA. Con Micaela Cuesta y Lucia Wegelin, publicaron el libro Discursos de odio. Una alarma para la vida democrática, y con Gisela Catanzaro, La subjetividad anti-democrática. Elementos para la crítica de las ideologías contemporáneas y Las aventuras del marxismo occidental. Actualmente dirige el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo (LEDA) en la Unsam.

Daniel Lvovich

Es doctor en Historia (UNLP). Es profesor en la Universidad Nacional de General Sarmiento (Buenos Aires) e investigador principal de Conicet. Ha dictado cursos de posgrado en la Argentina, Uruguay, México, Brasil, Francia y España, Se dedica a la investigación sobre la historia política y social del siglo XX. Es autor de Nacionalismo y Antisemitismo en la Argentina (2003), El nacionalismo de derecha en la Argentina. Desde sus orígenes hasta Tacuara (2006), La cambiante memoria de la dictadura militar desde 1984. Discursos públicos, movimientos sociales y legitimidad democrática (2008) y El águila y el haz de flechas. El espionaje de Estados Unidos al falangismo en el Río de La Plata, 1941-1944 (2022).

Martín Plot

Obtuvo su Ph.D. en la New School for Social Research, es magíster por la Unsam y licenciado en Sociología por la UBA. Es investigador independiente del Conicet y profesor regular titular de Teorías de la Democracia en la Escuela Idaes-Unsam. Publicó los libros El kitsch político, La carne de lo social, Indivisible: Democracia y terror en tiempos de Bush y Obama y The Aesthetico-Political. The Question of Democracy in Merleau-Ponty, Arendt, and Rancière.

Julián Rebón

Es doctor en Ciencias Sociales, profesor titular de la Carrera de Sociología y

secretario de Estudios Avanzados en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. También es investigador principal del Conicet en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Ha escrito diversos libros y numerosos artículos, focalizando sus investigaciones en el vínculo entre el cambio y el conflicto social.

Andrea Torricella

Es doctora en Ciencias Sociales y Licenciada en Historia, investigadora del Conicet y docente de la UNMdP. Es integrante del Grupo de Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades (UNMdP) y presidenta de la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género (AAIHMEG). Investiga sobre historia de la familia y género, visualidades y violencia, temáticas sobre las que ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales.

Pablo Semán

Es sociólogo y antropólogo. Sus investigaciones se han centrado en las experiencias religiosas, musicales, literarias y políticas de los sectores populares. Es investigador del Conicet y profesor del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Unsam. Entre sus libros, cabe mencionar *Vivir la fe. Entre el catolicismo y el pentecostalismo*, *la religiosidad de los sectores populares en la Argentina*, y el volumen colectivo *Está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?* (ambos en este sello editorial), *Bajo continuo. Exploraciones descentradas sobre cultura popular y masiva*, *Religiosidad popular. Creencias y vida cotidiana*, así como *Gestionar, mezclar, habitar. Claves de los emprendimientos musicales independientes* (con Guadalupe Gallo) y *Cumbia. Nación, etnia y género en Latinoamérica* (con Pablo Vila).

Daniela Slipak

Es doctora en Estudios Políticos por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (Francia) y la UBA. Es investigadora del Conicet, y profesora de grado

y de posgrado en la Escuela Idaes-Unsam y en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Coordina el Centro de Estudios Sociopolíticos de la Escuela Idaes. Sus temas y áreas de investigación abarcan la violencia política, la historia reciente y la teoría política. Publicó artículos en revistas académicas y es autora, en Siglo XXI, de Las revistas montoneras y Discutir Montoneros desde adentro.

Leandro Sowter

Es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Sociología y licenciado en Relaciones Internacionales y en Ciencias Políticas. Actualmente es profesor adjunto de Historia Económica y Social Argentina en la Facultad de Economía de la UBA, investigador del Centro de Estudios en Historia Económica Argentina y Latinoamericana (Ceheal) y colaborador de H-industria. Revista de historia de la industria y el desarrollo en América Latina. Ha dictado cursos de grado y de posgrado en la Unsam y en la USAL. Sus trabajos tratan sobre las relaciones entre el Estado, los empresarios y los trabajadores en torno a la política económica en la Argentina, temas sobre los cuales ha publicado diversos capítulos de libro y artículos en revistas académicas nacionales y extranjeras.

Agustina Súnico

Es licenciada en Sociología, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctoranda en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. También es docente de la carrera de Sociología y auxiliar e integrante del equipo de investigación sobre Conflicto y Cambio Social en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSOC-UBA). Sus principales temas de investigación se centran en el conflicto social y la acción colectiva, particularmente en torno al ámbito del trabajo y el sindicalismo, sobre lo que ha producido diversas publicaciones.

Gabriel Vommaro

Es doctor en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales, investigador del Conicet y profesor en la Escuela Idaes-Unsam. Entre sus publicaciones se cuentan, en nuestro sello editorial, La larga marcha de

Cambiamos, El clientelismo político. Desde 1950 hasta nuestros días y El sueño intacto de la centroderecha, los dos últimos en coautoría. Recientemente ha coeditado Diminished Parties. Democratic Representation in Contemporary Latin America. Investiga los orígenes, el desarrollo organizativo y el arraigo social del partido Propuesta Republicana desde hace años. Parte de los resultados de este trabajo fueron publicados en Mundo PRO: anatomía de un partido fabricado para ganar, realizado en coautoría. Se trata de un libro pionero sobre esa fuerza, éxito de ventas y texto de referencia en el debate universitario.